MARX
200 AÑOS



SOCIALISTAS-MILITARES: EL LABERINTO BOLIVIANO DE LA EXPERIMENTACIÓN SOCIAL (1936-1939)

Andrey Schelchkov

SOCIALISTAS-MILITARES: EL LABERINTO BOLIVIANO DE LA EXPERIMENTACIÓN SOCIAL (1936-1939)

Andrey Schelchkov





Schelchkov, Andrey
Socialistas-militares: el laberinto boliviano de la experimentación social (1936-1939) – La Paz : Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2018.
330 p. 24 cm – (Marxismo)
ISBN 978-99974-77-51-4 (versión impresa)
ISBN 978-99974-77-52-1 (versión digital)
1. Bolivia – Desarrollo político y social 2. Bolivia – Militares-socialistas 3. Bolivia – Socialismo de Estado I. Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, ed. II. Título.

Gestión editorial: Claudia Dorado Sánchez
Coordinación académica: Bianca De Marchi Moyano
Cuidado de la edición: Claudia Dorado Sánchez
Lectura de originales: Scarleth Barthelemy Taborga
Diseño y diagramación: Susana Cayoja Mita y Gabriel Sánchez
Apoyo gráfico: Marcos Flores Reynoso
Revisión, cotejo y ajuste de pruebas: Carmiña Salazar Rodríguez
Ilustración de portada: "Sin título" (2018), Susana Cayoja Mita

Centro de Investigaciones Sociales (CIS)
Calle Ayacucho esq. Mercado N° 308
La Paz - Bolivia
+591 (2) 2142000
Casilla N° 7056, Correo Central, La Paz
www.cis.gob.bo

ISBN: 978-99974-77-51-4 (versión impresa)
D.L.: 4-1-562-18 P.O.

Primera edición
500 ejemplares
Impreso en Bolivia



Índice

Presentación

En el marco de las celebraciones de los 200 años del nacimiento de Karl Marx que lleva adelante la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) ha desarrollado una serie de publicaciones con las que se espera contribuir a la comprensión del impacto en nuestro país de la obra de aquel filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista. El propósito ha sido cubrir desde la investigación periodos históricos y perspectivas poco indagados en nuestro medio, dando cuenta con ello de la diversidad de vertientes marxistas bolivianas, de sus adaptaciones particulares y de su participación en el conjunto de posiciones ideológicas que conformaron el pensamiento y la acción política en Bolivia.

La obra *Socialistas-militares: el laberinto boliviano de la experimentación social, 1936-1939* se inscribe en esa iniciativa. Se trata de una investigación propuesta y desarrollada por Andrey Schelchkov, investigador titular del Instituto Universal de la Academia de Ciencias de Rusia, experto en historia latinoamericana y autor de varios libros sobre historia boliviana del siglo XIX a inicios del siglo XX. Su contribución es parte de la producción investigativa del CIS, desde la que se estudian procesos de generación de imaginarios sociales, se exploran las distintas voces que construyeron la historia boliviana de cara a los debates contemporáneos y se discute la dinámica territorial, ideológica y económica plurinacional contemporánea, así como la complejidad de su cotidianidad material, cultural y política.

En ese escenario, en la línea de investigación Geografía e historia, el CIS publicó el 2016 el libro *La historia de las izquierdas bolivianas. Archivos y documentos (1920-1940)* y el 2017 la obra *La palabra "socialismo" en Bolivia. Siglo XIX*; el primero bajo la coordinación de Andrey Schelchkov y Pablo Stefanonni, y el segundo de la autoría de Schelchkov. Se continuó ese año con la publicación del compendio elaborado por Boris Ríos, Héctor Usaeda y Javier Larraín (eds.), *Ejército de Liberación Nacional (ELN). Documentos y escritos 1966-1990*, y de la investigación de Roberto Choque Canqui, *Pablo Zárate Willka y la rebelión indígena*. Todos esos trabajos constituyen un *corpus* de referencia, inusual y fructífero, sobre la discusión política e ideológica desde la historia boliviana.

El estudio que se presenta en este volumen, junto con los otros trabajos desarrollados en ocasión del 200 aniversario del nacimiento de Marx, aporta precisamente al entendimiento de las diversas formas de organización política que fueron forjando discursos y prácticas a lo largo de la historia de Bolivia. En el periodo analizado, pos Guerra del Chaco y pre Revolución Nacional, Schelchkov explora un escenario de efervescencia de ideas y de formación política, con desenlaces violentos y contradictorios en los que las ideas y las concepciones marxistas circularon y se dispersaron. El autor describe las tendencias ideológicas inbricadas en el proyecto denominado "socialismo de Estado" y, desde esa mirada, permite comprender cómo en su discusión interactuaron las organizaciones y los intelectuales que luego llegaron a disputar el escenario político estatal del nacionalismo de la segunda mitad del siglo XX.

Este nuevo título de la colección del CIS es una contribución relevante no solo para la reflexión marxista, sino principalmente para la historiografía boliviana que, a partir de una revisión sistemática de diversas fuentes de archivo, se propone discutir la formación histórica del país. En ese sentido, se suma al propósito del CIS de profundizar en perspectivas y en estrategias analíticas múltiples que posibiliten un mejor conocimiento y una mejor comprensión del contexto nacional y de sus procesos de transformación política e ideológica en el tiempo.

Siglas y acrónimos

ABNB	Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia
AHGE-SRE	Archivo Histórico Genaro Estrada-Secretaría de Relaciones Exteriores de México
ALP	Archivo de La Paz
AMIN-RREE	Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores
ANPOS	Asambleas Nacionales Permanentes de las Organizaciones Sindicales
APRA	Alianza Popular Revolucionaria Americana
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CROP	Confederación de Repúblicas Obreras del Pacífico
CSLA	Confederación Sindical Latinoamericana
CSTB	Confederación Sindical de los Trabajadores de Bolivia
CTB	Confederación de Trabajadores de Bolivia
ECLA	The Economic Commission for Latin America (CEPAL en español)
FOL	Federación Obrera Local
FOT	Federación Obrera del Trabajo
FRUS	Foreign Relations of United States
ISR	Internacional Sindical Roja (Profintern)
LEC	Legión de Ex Combatientes del Chaco
LML	León M. Loza
PCC	Partido Comunista Clandestino
POSE	Partido Obrero del Socialismo de Estado
PR	Presidencia de la República

RGASPI	Archivo Estatal Ruso de Historia Político-Social (Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv sotsial'no-politicheskoi istorii)
URSS	Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
YPFB	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Prólogo

Pablo Stefanoni*

La historia boliviana de la primera mitad del siglo XX presenta muchos vericuetos, pliegues y matices que desafían a los historiadores a seguir indagando sobre un periodo a menudo subsumido en lo que se conoce como "pre-52", en referencia a la Revolución Nacional del 9 de abril de 1952. La evolución de los personajes, los alineamientos y las rupturas, las nociones en juego, los espacios de sociabilidad, la recepción de las ideas y las redes políticas e intelectuales transnacionales son algunas de las entradas a esos años que tuvieron en el socialismo-militar una de las emergencias políticas más expresivas del fantasma antiliberal que recorría el mundo, la región y Bolivia.

Este libro contiene, precisamente, la reconstrucción de esa experiencia desde un amplio acervo documental y analítico. Como en otras ocasiones, Andrey Schelchkov combina material de diversos archivos internacionales para recomponer los espacios de circulación de ideas que no es posible acotar a espacios nacionales. En este caso, resultan clave los aportes documentales obtenidos en Rusia, México, Argentina o Chile, países sobre cuya historia el autor escribió en otros trabajos. Es de ese modo que Schelchkov logra construir itinerarios político-intelectuales de figuras como Tristán Marof[1] –seudónimo de Gustavo Adolfo Navarro– o Roberto Hinojosa, "exiliados románticos" que pasaron gran parte de sus años juveniles en el

* Pablo Stefanoni es periodista, economista y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y miembro del Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes. Escribió varios artículos y libros sobre la historia y el presente de Bolivia, entre ellos *La revolución de Evo Morales. De la coca al palacio* (2006), en coautoría con Hervé Do Alto; *Debatir Bolivia. Perspectivas de un proceso de descolonización* (2010), con Maristella Svampa y Bruno Fornillo; y *Los inconformistas del Centenario. Intelectuales, socialismo y nación de una Bolivia en crisis* (1925-1939) (2015). Actualmente se desempeña como jefe de redacción de la revista *Nueva Sociedad*, de la Fundación Friedrich Ebert. Fue director de *Le Monde Diplomatique* (edición boliviana) y miembro del consejo editorial del semanario Pulso (La Paz).

1 Tristán Marof fue escritor, político y revolucionario.

exterior, tejiendo redes y conjeturando escenarios para una Bolivia diferente. Asimismo, el esfuerzo de Schelchkov está basado en un largo trabajo de revisión de archivo en Bolivia, el cual, combinado con las obras de época, permite construir una visión integral del periodo del socialismo-militar, que no se limita a las acciones de gobierno, sino que apuesta a una comprensión más amplia del fenómeno como un intento de transformación de Bolivia tras la crisis de la Guerra del Chaco (1932-1935).

Como escribió el filósofo argentino Jorge Dotti, "leer textos ajenos genera inevitablemente respuestas autóctonas; más aún: receptar y concretizar discursos que se generan en otros ámbitos es siempre un gesto original".[2] Así como todo autor precedente es inevitablemente contemporáneo a la lectura que de él se hace, así también toda idea receptada es necesariamente tan local como la comprensión y el uso –argumentativo, retórico y/o político– que de ella se ensaya. El libro de Schelchkov permite ver esas respuestas autóctonas, esos climas de época más universales, como el de la crisis del liberalismo y el ascenso del fascismo y el nazismo en Europa o del nacionalismo de izquierda con Lázaro Cárdenas en México, procesos de los cuales el socialismo-militar tomó ideas y formas de enfrentar los problemas de su época, al mismo tiempo que aborda problemas de historia económica, política y social.

El régimen socialista-militar boliviano, liderado por David Toro y Germán Busch, buscó poner en pie una novedosa alianza político-social en la cual, pese a la hegemonía militar, tuvieron un lugar destacado nuevas figuras del movimiento obrero y de las dispersas izquierdas. En tal sentido, pese a su corta duración y a sus ambigüedades políticas, el proyecto socialista-militar fue fundante de una tradición que se "desplegaría" más tarde y tendría como punto culminante la Revolución Nacional de 1952. En él aparecen y se asientan imaginarios nacionalistas revolucionarios, se ensaya una breve –y muy incipiente– experiencia de "cogobierno" –con el primer ministro obrero y la creación del Ministerio de Trabajo– y, sobre todo, se instala una agenda de grandes temas –reforma agraria, voto universal, Estado social– que quedaría como reserva ideológica para los siguientes años. Sin embargo, pensar el socialismo-militar solo como "precursor" de la Revolución de 1952 no hace justicia a ese periodo complejo y constituido por pliegues superpuestos que no lo hacen fácilmente encasillable en el marco de una fuerte expansión del significante 'socialismo' entre diferentes sensibilidades político-ideológicas y apelaciones a formas antiliberales de gobierno, como la llamada "democracia funcional". Esas reservas de ideas son las que darían lugar a los grandes partidos de la segunda mitad del siglo XX: el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el Partido de

---

2 Dotti, Jorge, *et al.*, "Encuesta sobre el concepto de recepción". En: *Políticas de la Memoria,* número 8/9, 2008: 98.

la Izquierda Boliviana –de cuya juventud nacería el Partido Comunista–, el Partido Obrero Revolucionario y Falange Socialista Boliviana.

El libro de Schelchkov logra, precisamente, reconstruir la levadura del socialismo-militar, captar el ambiente de las décadas de 1920 y 1930, y reponer los hechos que marcan una parte fundamental de la historia política boliviana. De ahí que el lector se encontrará con personajes conocidos y por conocer, "viajará" con varios de ellos a diferentes partes del mundo, compartirá los dilemas y las apuestas de quienes gobernaron, y acompañará críticamente los sueños y las aventuras, a menudo malogradas, de quienes se propusieron cambiar el destino de Bolivia. Si Adolfo Gilly denominó al cardenismo como "una utopía mexicana",[3] Bolivia tuvo en el socialismo-militar su utopía en la década de 1930. No fue la primera ni sería la última, pero resulta sin duda fundamental para entender muchas facetas de la Bolivia del presente.

3 Gilly, Adolfo, *El cardenismo, una utopía mexicana.* México D. F.: Aguilar, León y Cal Editores, 1994.

Introducción

En la historia boliviana, la década de 1930 ocupa un lugar especial. Esos catastróficos años marcaron en la memoria nacional una secuencia de desastres y de horrores: la crisis económica mundial, la Guerra del Chaco, el caos de la posguerra y las esperanzas frustradas por un cambio prometido. Al mismo tiempo, fueron años en los que los principios de justicia, igualdad y dignidad nacional debieron transformar la vida de la sociedad boliviana. El fracaso de tales intentos reformadores cerraron los caminos de una pacífica revolución que condujera a la armonía y a la justicia. Fue cuando parecían justas las palabras –más bien el veredicto– de René Zavaleta Mercado: "[Bolivia] es la patria de la injusticia social y si no fuera por sus masas, sería mejor que no existiera" (1983: 39-40).

Esa década estuvo llena de acontecimientos trágicos. Fue también un periodo muy creativo de búsquedas y de experimentos para establecer nuevas formas de organización socioeconómica. La crisis económica y sus consecuencias dramáticas hicieron inevitables y urgentes las reformas radicales de todas las estructuras económicas y sociales. La mayoría de los políticos pensaba encontrar la salida a la crisis orgánica en una ruptura brusca con toda la experiencia histórica pasada, orientándose hacia ideas antiliberales y a veces antisistémicas, anticapitalistas. El socialismo soviético y el fascismo europeo presentaban otros modelos de desarrollo, que parecían brindar una alternativa al capitalismo de libre mercado hundido en la más profunda crisis. Las experiencias totalitarias ofrecían una receta social para resolver los agudos problemas del momento, prometiendo erradicar la lucha de clases que dividía a la nación e instaurar el desarrollo armónico basado en la prioridad de los intereses del Estado, de la nación, frente al egoísmo individual del demoliberalismo. Esos modelos, a los ojos de muchos bolivianos de la época, parecían muy atractivos

La historia boliviana representa un objeto de análisis de mucho interés para los investigadores latinoamericanistas, dado que en Bolivia muchos procesos –comunes para todos los países del continente– se amoldaban en formas más claras y evidentes, dejando la impresión de ser fenómenos únicos, originales y peculiares. Justamente, los elementos esenciales de esa época

limítrofe entre los periodos formacionales del capitalismo latinoamericano se revelaron en Bolivia con mayor fuerza y dramatismo. En la década de 1930, se había terminado una época relativamente estable de un desarrollo sociopolítico y el país entraba en un tiempo de conmociones sociales y de reformas radicales. En el centro de nuestro análisis están esos años clave para la historia boliviana, años de crisis socioeconómica, ideológica y moral cuando se instauró el régimen del llamado "socialismo de Estado". Los acontecimientos centrales de tal tiempo histórico fueron la Guerra del Chaco y el régimen militar-socialista (1936-1939), hechos que marcaron las principales tendencias del desarrollo social de Bolivia en el siglo XX, incluyendo la Revolución Nacional de 1952.

Esta investigación sobre el socialismo de Estado boliviano se basa en el análisis de varias fuentes documentales del periodo de estudio, sobre todo de los archivos de Bolivia, México y Rusia. En el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), en Sucre, se revisaron los fondos de la Presidencia de la República (PR), que contienen la correspondencia entre la presidencia y los ministerios, el Estado Mayor del Ejército, los partidos políticos, los sindicatos, las empresas y los actores privados.[1] Del Archivo de La Paz (ALP) fueron analizados los documentos epistolares del fondo León M. Loza (LML), donde se guarda la correspondencia de los presidentes José Luis Tejada Sorzano y Germán Busch, así como del escritor y político Alcides Arguedas, además de documentos de la Legión de Ex Combatientes del Chaco (LEC) y de otras agrupaciones políticas.[2] Materiales de gran importancia representaron también los fondos del Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (AMIN RREE) de Bolivia, principalmente la correspondencia con la Presidencia de la República (PR)[3] y con el Ministerio de Gobierno,[4] al igual que los materiales referentes a las relaciones con la Alemania nazi.[5] El autor tuvo la oportunidad de ser uno de los primeros historiadores en consultar los diarios de Alcides Arguedas, recién abiertos para los investigadores en el archivo de Sucre, siendo valiosos para este trabajo los tomos 6, 7 y 8, correspondientes a la etapa cronológica de análisis.[6]

1 ABNB-PR, Sucre, cajas 12-17, 1936-1938.

2 ALP-LML, Miscelánea, cajas 2-11, gavetas 25-27, 1937-1939.

3 AMIN-RREE-PR, 1936-1939.

4 AMIN-RREE-MIN IN, 1936-1939.

5 AMIN-RREE-Alemania, 1937-1941.

6 ABNB, "Diario de Alcides Arguedas", tomos 6-8.

Otra fuente importante, con un ángulo muy diferente –la perspectiva desde afuera–, corresponde a los documentos del Archivo Histórico Genaro Estrada-Secretaría de Relaciones Exteriores (AHGE-SRE) de México. Se trata de un conjunto de informes con muchos pormenores de la vida política y cotidiana, en especial de material que tenía carácter confidencial. De singular interés fueron igualmente los documentos referentes a la expropiación de la compañía Standard Oil, a la guerra civil Española y al movimiento indigenista. Además, el archivo mexicano contiene un *dossier* sobre la prensa boliviana –recolectado por los diplomáticos–, en el que sobresale lo relacionado con los periódicos de izquierda, una rareza inclusive en las bibliotecas bolivianas, entre ellos el nacionalista *La Noche* (1938-1939) o los socialistas izquierdistas *La Jornada* (1937) y *La Crónica* (1937-1938). No faltaron tampoco los diarios locales, como *El Debate* (1937) de La Paz, que permitieron complementar la visión del periodo estudiado. El autor de los informes sobre la situación boliviana para el Gobierno de México fue Alfonso Rosenzweig Díaz, un político mexicano de convicciones marxistas, diplomático atento e inteligente observador y analista, que mantenía vínculos de amistad y de confianza con muchos políticos bolivianos, lo que le permitió tener información confidencial de primera mano.

Un material de enorme interés y en cierta medida único corresponde al de los fondos del Archivo de la Internacional Comunista,[7] preservado en el Archivo Estatal Ruso de Historia Político-Social (Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv sotsial'no-politicheskoi istorii - RGASPI). Ese archivo contiene numerosa documentación relacionada con el movimiento obrero, el movimiento sindical y los grupos de la izquierda marxista en Bolivia.

La prensa boliviana,[8] de diferente orientación política, como otros documentos publicados en aquella época,[9] incluyendo los del Departamento de Estado de Estados Unidos,[10] enriquecieron también este estudio. Asimismo,

7 Komintern por su abreviatura en ruso.

8 *El Diario*, 1935-1939; *La Razón,* 1938; *Última Hora*, 1936-1939; *y La Calle,* 1936-1939.

9 Entre los documentos oficiales publicados por la República de Bolivia figuran: *Redactor de la Convención Nacional de 1938*, tomos 1-3 (1938); *Anuario administrativo de 1937*, volúmenes 1-3 (1937); *Anuario administrativo de 1938* (1938); *Legislación boliviana del trabajo y de la previsión social* (1941); *Censo demográfico 1950* (1973); y *Libro blanco de la Independencia económica de Bolivia* (1952). También destacan las obras: *Programas políticos de Bolivia* (Cornejo, 1949); *Documentos políticos de Bolivia* (Lora, 1970); *Legislación agrario-indigenal* (Bonifaz, 1953); y "Análisis numérico del presupuesto nacional" (Palenque, 1933).

10 "Papers relating to the Foreign Relations of United States" (FRUS), 1935-1942.

numerosas memorias históricas y autobiografías de destacados personajes del periodo estudiado, como Waldo Álvarez,[11] David Toro[12] y Carlos Salazar Mostajo,[13] al igual que del argentino Liborio Justo,[14] de Gustavo Adolfo Otero[15] y de Elías Belmonte,[16] entre otros, complementaron la base de las fuentes de investigación.

Sobre la base de las fuentes documentales analizadas y de los estudios de historiadores que ya investigaron el periodo en cuestión, se establecieron los siguientes objetivos: analizar el desarrollo social y político de la época liberal, estudiar las consecuencias de la crisis de la década de 1930 en la estructura socioeconómica del país y revisar las dimensiones de la crisis del estado oligárquico, incluso en la esfera de la ideología.

Los años de la década de 1930, en Bolivia, fueron pródigos para la creación de nuevas corrientes políticas, de partidos y de grupos que atraían a grandes masas populares. Precisamente, la irrupción de las masas en la política dio inicio a una nueva época en la historia del siglo XX. En esa fase de la historia boliviana, se formaron movimientos sociales y partidos políticos dominantes en los siguientes 50 años de la vida nacional.

En este estudio, se desentraña el curso de la lucha política e ideológica en Bolivia después de la Guerra del Chaco. En la exposición y en el análisis de los acontecimientos y de los procesos sociales durante el régimen militar-socialista, se enfatiza en la formación de nuevos partidos y movimientos políticos, así como en la lucha ideológica y política. Resultan de gran relevancia los temas referidos a la búsqueda y a los experimentos de nuevas formas de organización del Estado y de la sociedad civil: las reformas económicas, las iniciativas en el sector agrario y en la educación, y los cambios en el aparato estatal y en la estructura hegemónica de la sociedad. El análisis de todos esos problemas en conjunto, justamente, es el que posibila revelar el significado histórico del socialismo de Estado en la historia boliviana y latinoamericana.

---

11 *Memorias del primer ministro obrero: historia del movimiento sindical y político boliviano,* 1916-1952 (Álvarez, 1986).

12 *Mi actuación en la Guerra del Chaco* (Toro, 1941).

13 "El socialismo olvidado: el otro trotskismo en Bolivia" (Salazar Mostajo, 1988: 143-160).

14 *Bolivia: la revolución derrotada* (Justo, 1967).

15 Memorias de Gustavo Adolfo Otero (Otero, 1977).

16 *RADEPA: sombras y refulgencias del pasado* (Belmonte, 1994).

1

Bolivia en la década de 1920: la crisis económica mundial y la Guerra del Chaco

A inicios del siglo XX, la riqueza principal de Bolivia y la base de su economía era la minería, concretamente la extracción de estaño. Durante los primeros decenios de ese siglo, especialmente en los años de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la constante demanda de estaño en Europa y en Estados Unidos incentivó el flujo del capital nacional y extranjero a la industria del estaño. Las exportaciones bolivianas crecieron cinco veces de 1900 a 1908. El incremento del consumo de estaño y el alza de los precios a ese metal –desde 28 centavos de dólar por libra en el periodo 1900-1904 hasta 59 centavos de dólar por libra de 1915 a 1919– estimularon su extracción. Por otra parte, su exportación subió de 9.700 toneladas en 1900 a 29.100 toneladas en 1920, para llegar en 1929 al máximo de 47.200 toneladas; es decir, el 24% de toda la producción mundial de estaño. Paralelamente, también creció la extracción de otros minerales, entre ellos la plata, el plomo, el cobre y el tungsteno. La exportación de cobre aumentó entre 1900 y 1919 de 3.035 a 7.714 toneladas; la de tungsteno, de 178 toneladas en 1911 a 1.197 toneladas en 1919; y la de aluminio, de 719 toneladas en 1906 a 23.381 toneladas en 1917 (Peñaloza, 1987: 62-74).

La minería era el sector de la economía con más futuro y más ingresos. El estaño constituía el 70% de todas las exportaciones del país (López Rivas, 1955: 12-49; Abadie-Aicardi, 1966: 27) y aportaba un tercio de los ingresos a las arcas nacionales; en consecuencia, la economía boliviana se formaba como monoexportadora. Los recursos minerales estaban controlados por monopolios locales y extranjeros. Los más importantes eran las compañías de los bolivianos Simón I. Patiño y Carlos Aramayo, así como las empresas norteamericanas V. R. Grace & Co. y Guggenheim Brothers. En la década de 1920, se sumó la compañía de Mauricio Hochschild, que comenzó como un simple intermediario que compraba el mineral a las pequeñas minas. Las grandes minas, como las de Patiño, entregaban el 42% del estaño boliviano, que representaba el 11% de la producción mundial de ese metal.

A comienzos del siglo XX, estaban inscritas 93 sociedades mineras. De ellas, 55 tenían capital local, 16 capital chileno, 15 capital inglés, cuatro capital argentino, una capital belga y una capital alemán (Peñaloza, 1987: 40).

La mayoría de los mineros bolivianos, pequeños y medianos, nunca pudo acceder a tecnología moderna de producción ni formar un sistema de ventas o de procesamiento que permitiera un funcionamiento independientemente de los tres gigantes llamados "barones del estaño" que monopolizaban el mercado del mineral: Patiño, Aramayo y Hochschild. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, en Bolivia existía un número relativamente importante de pequeños mineros, propietarios de 1.150 minas, que no podían competir con aquel monopolio, como tampoco convertirse en una base para la formación de una clase de empresarios en otros sectores de la economía, por su incapacidad de generar ahorro. Por tal motivo, no fue posible la diversificación de la economía ni el crecimiento industrial del país.

Tanto los empresarios como el Gobierno de Bolivia emprendieron intentos de crear fundiciones de estaño, cambiando las exportaciones del mineral. Después de varios intentos fallidos y de proyectos insuficientes para la creación de la metalurgia nacional, todo el mineral fue trasladado a Inglaterra, para su procesamiento final; durante la Primera Guerra Mundial también se lo llevó hacia Estados Unidos. En la década de 1920, Patiño compró la mayoría de las acciones de la fundidora de estaño inglesa William Harvey, de Liverpool, donde se utilizaba el mineral concentrado de Bolivia; de ese modo, no solamente tuvo la mitad de la extracción del estaño del país, sino también el control sobre el procesamiento del mineral boliviano en el extranjero (Almaraz, 1980: 125-128).[17]

En 1924, en la industria minera boliviana, trabajaban 27.340 personas; es decir, el 10% de toda la población económicamente activa (Lofstrom, 1968: 5-8). Sus contemporáneos asumían el alto nivel técnico y la productividad de las minas más importantes. La minería seguía siendo un enclave, pero toda la estructura administrativa del Estado estaba supeditada a sus intereses. La principal tarea del sistema bancario nacional estaba al servicio de los sectores exportadores, garantizando su apoyo financiero y crediticio en el extranjero. Patiño controlaba el Banco Nacional de Bolivia por intermedio del Banco Comercial, de su propiedad (Céspedes, 1956: 36-38). La reforma bancaria de 1928 ordenó las finanzas: fue fundado el Banco Central de Bolivia, que se encargó de la regulación monetaria y de mantener la tasa de cambio del peso boliviano, aspecto de vital importancia para los sectores exportadores. Por otra parte, se fortalecieron las posiciones de capital extranjero, introducido por vía

17 A las fundiciones de Inglaterra llegaba el 84% del estaño boliviano y tanto en los Países Bajos como en Alemania se procesaba el 15% de la producción estañífera, lo que no podía destruir el carácter monopólico del sistema de procesamiento del estaño (Brienen, 1996: 9).

de inversiones directas en la minería y en la industria petrolera, así como mediante préstamos al Estado.

A mediados de esa segunda década, también se produjo la internacionalización formal de las compañías mineras de Patiño y de Aramayo. Cuando en 1923 el gobierno de Bautista Saavedra aumentó en dos veces el impuesto a las compañías mineras nacionales, sin cambiar el régimen tributario para el capital extranjero, Patiño y Aramayo se sustrajeron de la jurisdicción de esa ley de manera original. En 1924, Patiño inscribió su empresa en Delawer (Estados Unidos), con la compra allí de algunas minas abandonadas y vendiendo una parte de las acciones a los ciudadanos norteamericanos. Aramayo, a su vez, convirtió su compañía en una empresa suiza. Los monopolios mineros también dejaron de representar el capital nacional. De esa manera, también *de jure*, el monopolio minero dejó de representar el capital nacional.

A pesar de la rentabilidad de la minería del estaño, los ingresos al fisco por concepto de exportación de ese mineral eran ínfimos en comparación con el valor del mineral exportado: en el periodo 1900-1920, el monto total de los impuestos oscilaba entre el 2% y el 10% (Gómez D'Angelo, 1978). Basta con comparar el monto de los ingresos estatales por la exportación de minerales y el de los ingresos por los impuestos a la importación: en el periodo 1920-1929, los ingresos del fisco por concepto de importación crecieron de 8,8 millones de bolivianos a 21,1 millones de bolivianos al año, en tanto que los impuestos a la exportación del mineral disminuyeron de 6.905.467 bolivianos a 6.809.807 bolivianos (Palenque, 1933: 48-55). La comparación ilustra las condiciones increíblemente ventajosas de las leyes tributarias para la minería. Inclusive los impuestos al consumo aportaban al fisco cifras comparables con los ingresos de la exportación de minerales.[18] Esas proporciones injustas testimonian el saqueo de las riquezas del país por parte de los monopolios foráneos y locales.

El capital extranjero ocupaba una posición monopólica en la industria petrolera. En 1920, con su llegada al poder, Saavedra incentivó la atracción de capital externo a la economía del país, tanto por vía de préstamos al Estado como por medio de inversiones privadas. Bajo su mandato, las compañías norteamericanas alcanzaron el control total sobre las riquezas petroleras bolivianas. En 1922, la Standard Oil compró a Richmond Levering la concesión de un millón de hectáreas por 55 años y monopolizó la extracción de petróleo en Bolivia. Saavedra consideraba que el país debía atraer capital extranjero para los sectores económicos no tradiciona-

18 En 1929, los impuestos a la exportación superaron solo en 800 mil bolivianos el impuesto al consumo (Palenque, 1933).

les, como lo era en ese momento la industria petrolera, e idealizaba una empresa capaz de invertir el capital necesario y de garantizar el transporte de los hidrocarburos. Estaba convencido de que, sin una empresa internacional potente, el país nunca sacaría ningún provecho de su riqueza natural (Mariaca, 1966: 54). La Standard Oil se comprometió a invertir 50 millones de dólares en la extracción de petróleo y a construir una refinería. Perfilaba empezar a vender los derivados de petróleo en el mercado interno en un plazo de dos años. Ninguna de esas condiciones básicas fue cumplida. En 1925, comenzó la explotación de los campos petroleros, pero la extracción del petróleo fue extremamente baja hasta el inicio de la Guerra del Chaco (1932), con un registro de alrededor de 30 mil barriles por año (Klein y Peres-Cajías, 2004: 143).

Los primeros decenios del siglo XX se caracterizaron por el desplazamiento de la economía boliviana al capital inglés, que cedió lugar al norteamericano. Para 1929, en comparación con 1913, las inversiones y el comercio de Estados Unidos y de Inglaterra en Bolivia aumentaron en 470,65% y 15,97%, equivalentes a 133.383.250 y 12.512.000 de dólares, respectivamente (De la Cueva, 1983: 49). Asimismo, se acumuló la deuda externa –desconocida antes de 1908– y para febrero de 1927 las obligaciones de Bolivia ante los acreedores extranjeros alcanzaron los 40 millones de dólares. Casi toda esa suma, con excepción de 600 mil libras esterlinas recibidas de Londres en 1925, había sido prestada por Estados Unidos (Marsh, 1928: 90). El Estado boliviano contrajo deudas para la construcción de ferrocarriles, así como para el financiamiento del aparato estatal. Muchos de los préstamos fueron poco eficientes; por ejemplo, según las condiciones del tristemente célebre "préstamo Nicalaus", solamente en garantía, Bolivia tenía que entregar al acreedor todos los ingresos tributarios y aduaneros. El servicio de la deuda externa, de hecho, se constituyó en un tercio de todo el gasto presupuestario (Palenque, 1933: 80).

A pesar de la hipertrofia de los sectores exportadores, que ocasionó serias pérdidas y deformaciones en la estructura económica, el aumento de la producción minera dio un fuerte impulso al desarrollo de la infraestructura industrial y transportista, lo cual contribuyó al crecimiento de las ciudades. Así, en La Paz, Cochabamba y Oruro, se incrementó la producción artesanal y de la pequeña industria, y aparecieron fábricas de industria ligera y alimentaria. En los dos primeros decenios del siglo XX, la población de las ciudades creció de 1,5 a dos veces, mientras que el total de la población del país aumentó solamente en un tercio. En las ciudades, sobre todo en las pequeñas y en las medianas, prevalecía por entonces la producción artesanal. Hasta la década de 1940, los sectores de artesanos –pequeños productores– y de obreros de fábricas eran aproximadamente iguales (Klein, 1988: 231). En La Paz,

Cochabamba y Oruro, el número de obreros industriales alcanzaba registros relativamente importantes. De igual modo, se registró un crecimiento acelerado de la industria y de la economía de las ciudades, y un progreso inaudito de las comunicaciones y del transporte.

Para el funcionamiento exitoso de la economía orientada al mercado externo, se construyó una red de ferrocarriles que vinculó la costa del Pacífico con los centros mineros. Los ferrocarriles revolucionaron toda la economía de Bolivia. Con ello, más los servicios de toda la infraestructura ferroviaria, muchas ciudades recibieron un potente impulso para su desarrollo. Centros como La Paz y Oruro vivieron, literalmente, un *boom* económico que cambió por completo la estructura social de las ciudades. Los trabajadores de los ferrocarriles, los obreros de la construcción y los técnicos ocupados en los nuevos rubros, entre ellos la electroenergética y el transporte público, empezaron a jugar un rol importante en la vida de la sociedad boliviana. Por ejemplo, Oruro, un importante centro ferroviario y minero, duplicó su población con la aparición de nuevos grupos sociales y profesionales, y se convirtió en la primera ciudad de Bolivia totalmente electrificada, dotada de red telefónica y con calles pavimentadas para el transporte automovilístico (Lorini, 1994: 67). Esos cambios crearon las condiciones para el crecimiento de la pequeña empresa en el área de servicios y el incremento del número de artesanos y de pequeños comerciantes. En esos años, aumentaron numéricamente las capas medias y se produjo un cambio cualitativo a favor de los nuevos grupos profesionales. Esa tendencia fue la que dominó durante las décadas de 1920 y 1930.

Los ferrocarriles también revolucionaron la estructura del mercado interno. La importación a bajo costo de productos alimenticios –14 mil toneladas en 1925– provocó la reorientación del mercado local hacia nuevos productos y modelos.[19] Ese fenómeno aportó momentos positivos: los nuevos productos de menor precio y mayor calidad modificaron la estructura de consumo de la población urbana, y también propiciaron el crecimiento de la industria alimentaria que utilizaba materia prima tanto local como importada. La bonanza del sector de alimentos creó las premisas para el crecimiento de la población urbana y, por otra parte, el ingreso de alimentos a bajo precio desplazó del mercado una parte de los productos agrícolas locales, aunque, naturalmente, productos como la quinua, la coca y la papa no pudieron ser desplazados por aquellos importados. La influencia negativa en la agricultura por el aumento de las importaciones fue insignificante.

La mayor parte de la población vivía en el campo. El 95,11% de la superficie agraria pertenecía a los grandes terratenientes que practicaban

19 Entre los años 1925 y 1929, en Bolivia, los productos alimenticios representaban, en promedio, el 22,3% del volumen total de las importaciones (ECLA, 1951: 17-19).

la explotación extensiva. En esas propiedades, se labraba solamente el 2% de la tierra apta para el cultivo (Kaluzhskaya, 1979: 33-34). Según el censo de población de 1900, las comunidades indígenas seguían conservando fuertes posiciones y en ellas vivía el 32% de la población campesina (McBridge, 1921: 1). En su mayoría, los campesinos eran colonos; es decir, trabajadores de las haciendas (Heydt-Coca,1982: 97-100).

En el Altiplano, predominaban los latifundios con superficies superiores a las mil hectáreas. Por ejemplo, en el departamento de Oruro, el 29% de las haciendas tenía de mil a 2,5 mil hectáreas, el 23% tenía de 2,5 mil a 7,5 mil hectáreas y el 35% tenía más de 6,5 mil hectáreas; solamente el 14% de las haciendas contaba con una superficie de menos de mil hectáreas. En la zona del lago Titicaca, por otra parte, la mayoría de las haciendas tenía menos de 500 hectáreas, pero también existían latifundios de más de mil hectáreas (The Economic Commission for Latin America - ECLA*,* 1951: 59). La mayor parte de la tierra del latifundio permanecía sin cultivar, aunque en el Altiplano, en promedio, se cultivaba solamente el 0,21% de las superficies agrarias y en la zona del lago Titicaca, donde la densidad relativa de la población era alta, se cultivaba del 25% al 30% de la tierra (Carter, 1964: 26).

Muchos latifundios que pertenecían al mismo dueño constaban de varias haciendas. Los latifundios no eran propiamente grandes productores, ya que se basaban en la explotación de la comunidad campesina. Según varios estudios, en la etapa previa a la Reforma Agraria de 1953, las parcelas de los colonos ocupaban del 73% al 86% de las tierras de la hacienda, quedando para el terrateniente solo del 14% al 27% (Carter, 1964: 71; Albó, 1979: 32; Heath, Erasmus y Beuchler, 1969: 176). El sistema de colonato consistía en que los campesinos –colonos o *pongos*– que tenían una pequeña parcela o minifundio servían al dueño como fuerza de trabajo gratuita, debiendo entregarle una parte de su producto en calidad de renta natural. El campesino quedaba privado de libertad económica y personal, como también abrumado por múltiples cargas, entre ellas los servicios personales, el pongueaje y el mitanaje.[20] El carácter parasitario de la gran propiedad agrícola, cuyo atributo invariable era el minifundio, determinó la incapacidad de la propiedad agrícola de transformarse en empresa capitalista.

Casi la totalidad de la población rural de Bolivia estaba constituída por habitantes de habla quechua y aymara. La población hispanoparlante –blancos y mestizos– vivía solamente en las ciudades. La mayoría de los te-

20 La mita –*mit'a,* en quechua– era un sistema de fuerza de trabajo recíproco que en la época incaica se practicaba para el desarrollo de obras públicas y en la Colonia se convirtió en un tributo laboral obligatorio. El pongo era un esclavo indígena, es decir, su trabajo era gratuito y sin ningún tipo de protección del Estado.

rratenientes también habitaba en las ciudades y sus haciendas eran administradas por mayordomos y curacas o caciques[21] de las comunidades indígenas. Además de sus obligaciones ante el hacendado, los indígenas cumplían trabajos obligatorios a favor de los habitantes de los pueblos mestizos aledaños (Albó, 1979: 33-34; Heydt-Coca, 1982: 117).

Los hacendados bolivianos no solamente eran latifundistas aristócratas, descendientes de los conquistadores y de los virreyes de Perú y de La Plata; también eran pequeños terratenientes, dueños de una o de dos pequeñas haciendas, que lograban un ingreso relativamente modesto y vivían en los pueblos y en las pequeñas ciudades. La mayoría de esos terratenientes eran funcionarios, abogados, militares y curas que conformaban la clase media tradicional. Esa dualidad de estatus social fue un rasgo distintivo de la sociedad boliviana. Justamente, las capas medias tradicionales conformaban –y entregaban– el apoyo social masivo a los gobiernos de la oligarquía.

Durante el primer tercio del siglo XX, Bolivia seguía siendo un país de varios rostros, con mundos diferentes por sus características tecnológicas y sociales; es decir, no era un espacio económico íntegro. La minería moderna que se desarrollaba exclusivamente en el marco de los enclaves se oponía a la producción fabril incipiente y raquítica de las ciudades, donde seguía dominando la economía artesanal. Toda la infraestructura financiera del transporte y de la industrial estaba orientada al servicio del sector minero. La economía de enclaves del sector exportador y el sector capitalista de las ciudades, débilmente desarrollado, se ahogaba en el mar de la economía agrícola arcaica. El dominio del latifundio y la presencia de una gran cantidad de vestigios de la sociedad tradicional en el campo condicionaban la estrechez del mercado interno, representando un serio obstáculo para la formación de una economía nacional integral.

La orientación del principal sector de la economía hacia la exportación de minerales, junto con el rezago y el aislamiento de la agricultura, no solamente frenaba el desarrollo de la economía nacional, sino que se constituía en el principal obstáculo para la formación de la nación boliviana, cuestión clave de la vida nacional. La monopolización de la minería solamente empeoró el problema de la dependencia y del atraso del país. La incipiente burguesía boliviana, todavía muy débil, fue desplazada de la importante fuente de acumulación del capital que era la minería; asimismo, estaba limitada en su proyección por el subdesarrollo del mercado interno. El desarrollo de Bolivia como una nación independiente dependía de la capacidad de resolver los problemas socioeconómicos vitales, sobre todo las cuestiones relativas

---

21 Se designaba con este término a los jefes de las comunidades de Antillas. Con la colonia española, fue empleado para las autoridades políticas indígenas.

al agro y a la minería. La formación de una nación moderna dependía de si la sociedad tomaba o no el camino de transformación de las estructuras socioeconómicas obsoletas del país. Tal objetivo consistía en convertir a Bolivia de una noción geográfica a una nación.

1.1. El desarrollo político y social de Bolivia

Desde 1899 hasta 1920, Bolivia estuvo gobernada por el Partido Liberal. Fue una etapa caracterizada por la estabilidad política, el rápido desarrollo de la economía y los serios cambios estructurales de la sociedad. La victoria del Partido Liberal en la guerra civil de 1899, llamada Revolución Federal (Irurozqui, 1994), fue seguida por el triunfo aplastante de la ideología liberal positivista, de los principios liberales de la administración del Estado y del manejo de la economía, aunque, en realidad, el régimen liberal estaba muy lejos de tales principios públicamente declarados. El Partido Liberal estableció, de hecho, un régimen autoritario en el que la libertad de prensa y las elecciones regulares contrastaban con el cohecho y el fraude electoral, las represiones en contra de la oposición y las violaciones a los derechos elementales de la población indígena. Eso sí, se cumplieron escrupulosamente los principios liberales de no intervención del Estado en las relaciones económicas, con lo cual se fortaleció el poder de los monopolios mineros que, naturalmente, supeditaron el aparato estatal en su provecho.

La ideología liberal-positivista, orientada por completo hacia los valores europeos, propagaba la omnipotencia del mercado libre, única herramienta que garantizaba el progreso y el desarrollo. Todo lo que salía del marco del paradigma europeo del desarrollo capitalista, incluido el elemento indígena portador de una tradición arcaica que frenaba el progreso, debía ser implacablemente eliminado y destruido en nombre del progreso y de la civilización. Los liberales construían su sociedad democrática castista y de raza, excluyente de las masas indígenas y mestizas. Desde su punto de vista, la sociedad boliviana representaba un modelo de democracia de castas, pues solamente los blancos privilegiados y algunos mestizos de élite cumplían con el criterio de ciudadano libre, digno para participar en la construcción de la civilización. Así, la mayoría de la población boliviana quedaba excluida de la aplicación de las leyes de la civilización.

El sistema político, en ese contexto, aparecía como bipartidista, aunque los rivales principales eran muy parecidos entre sí; también actuaban otros partidos pequeños, de no muy larga duración. Además del Partido Liberal, existía el Partido Conservador, seguido por el Partido Republicano, que adoptó algunas consignas conservadoras, a pesar de que lo integraba otra composición social.

El auge económico de inicios del siglo XX permitió a los magnates del estaño compartir sus ingresos con la clase media tradicional o, más bien, con su cúspide. Directa o indirectamente, los llamados barones del estaño mantenían un ejército de abogados, funcionarios, periodistas y empleados de los partidos. Una capa comparativamente insignificante pero selecta entró a la vida política boliviana con el nombre de “la rosca”,[22] la cual llegó a constituirse en una parte importante de la clase gobernante, siendo la base del dominio oligárquico. La fórmula principal de funcionamiento de la sociedad civil era la división del poder entre los barones del estaño y la clase media. La rosca, todopoderosa, personificaba esa alianza.

En la década de 1920, el régimen liberal sufrió una crisis causada por las contradicciones entre el gobierno oligárquico, limitado a una casta, y la nueva correlación de fuerzas sociales. El pujante desarrollo económico de comienzos de siglo permitió el crecimiento y el posterior fortalecimiento de la pequeña burguesía –“nuevas capas medias” de la ciudad–, así como el surgimiento significativo de la clase obrera. Igualmente, aumentó el número de ciudadanos con derecho a voto.[23] La oposición aumentaba sus filas de simpatizantes. En 1914, los descontentos por el dominio monopólico de los liberales, sobre todo exconservadores y católicos del Partido Constitucional, llevaron a la creación del Partido Republicano, en el cual, junto con representantes de la pequeña burguesía, artesanos seguidores de Bautista Saavedra –autor de un moderado programa de reformas–, convivía también el facción clerical derechista, integrada por los hacendados revanchistas a la cabeza de Daniel Salamanca. Las consignas de ambas corrientes del Partido Republicano eran las elecciones limpias y honestas, y una política exterior de revancha con miras a recuperar la costa ocupada por Chile durante la Guerra del Pacífico (1879-1883).

El ala clerical derechista de los republicanos, encabezada por los destacados políticos Daniel Salamanca, Abel Iturralde y José María Escalier, atraía principalmente a sus filas a la aristocracia agraria y a la clase media tradicional, descontentas por la omnipotencia de los liberales que les cerraban el paso hacia las palancas del poder. Los puntos de mayor divergencia con el régimen liberal fueron las leyes del matrimonio civil, de la tolerancia religiosa y de toda la política de secularización realizada por los liberales en los primeros decenios del siglo XX. Su programa de elecciones honestas y de política exterior beligerante y revanchista como premisa del fortalecimiento

22 Grupo dominante conformado por unas cuantas familias con poder económico y político.

23 Las leyes bolivianas consideraban como ciudadanos efectivos con derecho al voto a las personas mayores de 21 años que sabían leer y escribir, y que tenían un ingreso anual mínimo de 200 bolivianos.

moral del Estado fue la carta principal esgrimida por Salamanca. Las ideas fijas de autoafirmación de la nación por una guerra victoriosa llevaron fatalmente a Salamanca a desencadenar el futuro conflicto armado con Paraguay: la Guerra del Chaco (1932-1935).

El talentoso periodista y escritor Bautista Saavedra era el líder indiscutible del ala plebeya de los republicanos, el caudillo infalible del pueblo de La Paz. A diferencia de Salamanca –un aristócrata y hacendado de Cochabamba–, Saavedra gozaba de una especial popularidad en La Paz, su ciudad natal, el centro más "burgués" del país; proclamaba un programa de reformas moderadas cuyo resultado sería la redistribución del poder a favor de las capas medias citadinas; y buscaba ampliar la base social del Estado criollo, por la vía de la inclusión de las capas medias, los artesanos y la clase obrera en la vida política.

La crisis económica mundial de posguerra gatilló la activación de la oposición. La crisis económica afectó, en primer lugar, a los pobres de las ciudades. Las huelgas en las minas, en abril de 1918 y en octubre-noviembre de 1919, impusieron un nuevo elemento a la vida política de Bolivia: la cuestión obrera. Las reivindicaciones de los obreros, sobre todo con relación a la jornada laboral de ocho horas y a la exigencia de leyes sociales, quedaron incluidas en el programa de los republicanos saavedristas.

En las turbulencias de la creciente crisis económica y política, el líder del ala reformista del Partido Republicano, Saavedra, poseedor de una gran influencia en los mandos medios y bajos de la oficialidad, se atrevió a dar un golpe de Estado. El 12 de julio de 1920, los republicanos se alzaron en La Paz y Saavedra, a la cabeza de los artesanos paceños que conformaron la Guardia Republicana, derrocó al presidente liberal José Gutiérrez Guerra. El Ejército estaba a favor de los revolucionarios. Inclusive los altos mandos, presionados por la masa de oficiales, respaldaron al nuevo Gobierno.[24]

Saavedra fue, sin duda, uno de los políticos bolivianos más brillantes del siglo XX. Gozaba de la confianza absoluta de los cholos de La Paz. Una vez en el poder, se deshizo de sus incómodos aliados del ala derecha, con sus líderes Salamanca y Escalier, aunque estos últimos actuaban apoyados activamente por las Embajadas de Gran Bretaña y de Estados Unidos.[25] Al pasar a la oposición, los republicanos realizaron su convención en octubre de 1921, en Oruro, donde fue creado el Partido Republicano Genuino.

El Gobierno de Saavedra se apoyaba principalmente en la fuerza del partido, que gozaba de enorme prestigio entre la pequeña y la mediana burguesía urbana, al igual que entre los intelectuales y los estudiantes. En su mayoría, las resoluciones gubernamentales pasaban por el órgano supremo del partido:

---

24 FRUS, 1935: 375.

25 FRUS, 1935: 375-378.

el Comité Republicano. Saavedra echó a andar la Guardia Republicana, formación militarizada integrada por artesanos, obreros, pequeños propietarios y estudiantes. Las decisiones importantes eran tomadas en las convenciones de los republicanos. En ella, junto con la supremacía indiscutible de la opinión del líder, los representantes de las bases, integradas principalmente por artesanos y por las capas medias, tenían la posibilidad de influir en las decisiones de las autoridades. Las convenciones republicanas y la Guardia Republicana fueron las bases de apoyo al Gobierno, así como el instrumento de presión sobre las autoridades, instando a los líderes republicanos a realizar una política reformista destinada a favorecer los intereses de la clase media y a los sectores bajos de la ciudad. Apoyado en la Guardia Republicana, Saavedra desplazó a sus enemigos políticos y, de hecho, estableció un régimen del poder personal.

Los sectores populares de la ciudad, pilares activos del golpe republicano, ayudaron a Saavedra a subir al poder. Los dirigentes obreros republicanos, por su parte, organizaron en septiembre de 1920 un partido obrero, convertido luego en una suerte de sección del partido de turno, que cumplió un rol funcional del grupo de presión política, defendiendo los intereses de los obreros y de los artesanos, y desempeñó el mismo papel que la Guardia Republicana, en representación de las capas medias. Ese partido, denominado Partido Obrero Socialista, conducido por los dirigentes sindicales Ezequiel Salvatierra y José M. Ordóñez, así como por Ricardo Soruco, diputado del Congreso, tenía sus comités en Oruro y en Uyuni (Potosí). El Partido Obrero Socialista acordó un programa en su congreso realizado en Oruro, en 1921, reflejo del radicalismo del ala izquierdista de los republicanos, con una gran influencia sindicalista (Klein, 1971: 70-72). Sin embargo, ese partido desapareció pronto del escenario político, siendo prácticamente la parte integral del republicanismo saavedrista. En ese periodo, el Gobierno todavía no necesitaba un fuerte grupo político reformista que representara a la clase obrera, cuya influencia en la política nacional era insignificante y, además, indirecta.

El movimiento obrero organizado surgió en Bolivia en el primer cuarto del siglo XX. Hacia la década de 1920, en las ciudades y en las minas, funcionaba activamente la anarcosindicalista Federación Obrera;[26] por entonces, se multiplicaron los sindicatos obreros. Los gobiernos republicanos reaccionaban de manera diferente a la actividad de los sindicatos y del movimiento obrero en las ciudades y en los centros mineros. La mayoría de los sindicatos urbanos integraba las centrales progubernamentales y gozaba del apoyo de las autoridades. Como resultado de sus acciones de protesta y de sus reinvidicaciones, los sindicatos urbanos lograban, generalmente, acuerdos o algunos beneficios de parte del Gobierno

26 RGASPI, fondo 495, legajo 79, número 28: 43-44.

y de los patrones. Así sucedió en febrero de 1922, al culminar una exitosa huelga general en La Paz. En la misma década, los sindicalistas bolivianos entraron en contacto con las organizaciones sindicales internacionales y en 1928, por primera vez, los bolivianos asistieron a la VI Conferencia Panamericana.[27] Muchas reivindicaciones de la Federación Obrera de La Paz fueron incluidas en el programa del Partido Republicano. En las ciudades, los conflictos laborales nunca llegaron a un enfrentamiento duro con las autoridades. La legislación laboral de Saavedra se apoyaba en las exigencias de los sindicatos urbanos.

Otra fue la situación en las minas, donde las organizaciones y las movilizaciones obreras eran perseguidas y duramente reprimidas. En 1923, la huelga de los mineros de Uncía (Potosí) fue aniquilada con la fuerza militar; murieron centenares de obreros (Ponce García, Shanley y Cisneros, 1968: 14-16). Las minas de estaño se constituían en el centro neurálgico de la economía boliviana. La situación en ellas estaba en el centro del interés vital de la oligarquía y de la rosca. Mientras que la clase obrera de las ciudades, mayoritariamente ocupada en pequeñas empresas, actuaba frecuentemente como aliada de la pequeña burguesía urbana y podía ser asimilada a la sociedad civil existente, los mineros eran considerados, en su mayoría, como miembros de un estrato social inferior. En el pasado, los mineros eran campesinos (indios) que casi nunca cortaron los lazos con sus comunidades y que hablaban aymara y quechua; tanto para Saavedra como para toda la clase gobernante, estaban fuera de la sociedad civil, fuera de sus leyes y de sus reglas.

La política de represión y de aislamiento de los mineros fue aplicada hasta los críticos años de la década de 1930, momento en el que los despidos masivos en las minas empujaron a miles de cesantes hacia las ciudades. Fue entonces cuando cambió la política obrera general de las autoridades. En la década anterior, toda aquella población del país que habitaba fuera de las ciudades simplemente no existía; empero, eso sí, servía muy bien para pagar, con su sangre, la prosperidad económica de las élites.

El Gobierno de Saavedra, de corte republicano, adquiría más y más los rasgos de una dictadura autoritaria. El presidente urdía planes para conservar el control personal una vez finalizado su ciclo constitucional, después de 1925. También estaba claro el mecanismo de conservación del poder en manos de Saavedra, mediante el Partido Republicano –del cual aún era líder– y con el apoyo, además, de la militarizada Guardia Republicana; con tales instrumentos, esperaba controlar a su sucesor. Había que encontrar un candidato a la presidencia que fuera propicio. Saavedra necesitaba uno

27 RGASPI, fondo 495, legajo 79, número 28: 41.

suficientemente débil y dependiente políticamente de él para convertirlo en una simple marioneta, pero conservando la apariencia del legítimo cambio de gobierno constitucional del país. Se eligió al ministro de Educación José Gabino Villanueva para presidente y a Abdón Saavedra,[28] hermano del jefe de Estado saliente, como candidato a la vicepresidencia.

Las elecciones se realizaron el 2 de mayo de 1925. Tal como se esperaba, triunfó el candidato oficialista. La posesión debía producirse el 6 de agosto de 1925, junto con la celebración del centenario de la independencia de Bolivia. En vísperas de la ceremonia, Villanueva ofreció una entrevista al periódico opositor *La Patria*, de Oruro, informando sobre su propósito de convocar a los dirigentes del Partido Republicano Genuino y del Partido Liberal para conformar el nuevo gabinete de ministros, terminando así con la confrontación política del periodo cesante. Tan inoportuna declaración provocó la ira de Bautista Saavedra, quien sin temor a un escándalo internacional por la presencia en La Paz de numerosas delegaciones extranjeras llegadas a las celebraciones del centenario de la República decidió impedir la posesión de Villanueva. El Congreso anuló los resultados de las elecciones y designó como presidente interino al presidente de las Cámaras, Felipe Guzmán, que llamó a nuevas elecciones para el 1 de diciembre de ese año. Aunque no se pudo evitar el escándalo, la apariencia de la legalidad constitucional quedó plenamente conservada y Bautista Saavedra tuvo la oportunidad de corregir su error en la elección de su sucesor. Esta vez, actuó directamente con el aparato político de su partido.

El nuevo candidato resultó ser uno de los líderes del golpe republicano de 1920, Hernando Siles. Durante su mandato (1925-1930), las relaciones con Saavedra pasaron por una etapa de conflicto y Siles abandonó el partido, pero antes de las elecciones presidenciales nuevamente apareció como partidario del caudillo republicano. Su candidatura fue propuesta por el Consejo del Partido Republicano. El candidato a la vicepresidencia fue nuevamente Abdón Saavedra. En las elecciones, Siles obtuvo 70.612 votos de los 75.549 ciudadanos con derecho a voto y se hizo presidente de Bolivia. Considerando el escándalo creado con el anterior candidato, Bautista Saavedra garantizó su plan obligando a Siles a firmar una declaración con la que se comprometía a designar a los miembros de su gabinete de acuerdo con el partido y su líder, y a no concertar alianzas con los grupos de oposición y sus líderes (Valencia Vega, 1987a: 1660). Su intención era hacer del nuevo presidente una fachada formal de su gobierno autoritario, pero falló por segunda vez. Siles no se

---

28 Abdón Saavedra es una brillante figura política boliviana de la segunda década del siglo XX, olvidada injustamente por una sombra muy fuerte que le hizo su famoso hermano Bautista Saavedra; fue prefecto de La Paz y fundador del periódico *La República*.

convirtió en una herramienta dócil en sus manos. Al contrario, pudo librarse con mucha rapidez de la tutela del expresidente y de su hermano, e invitó a los representantes de la oposición a que lo colaboraran, violando así las condiciones firmadas. Franz Tamayo fue designado asesor de la Cancillería; Demetrio Canelas, embajador en Perú; Simón I. Patiño, embajador en Francia; y Carlos Aramayo, embajador en Inglaterra. Tales nombramientos provocaron la ruptura de relaciones con Saavedra, que se encontraba viajando por Europa. El punto final a esa lucha contra el expresidente fue puesto en marzo de 1926, cuando Abdón Saavedra salió de Bolivia con una visita oficial a los países de la región y, simplemente, no le fue permitido regresar.

La llegada al poder del partido saavedrista dio inicio a reformas moderadas del sistema estatal, creado en la etapa anterior por el Partido Liberal. Los saavedristas introdujeron en la vida política de Bolivia nuevos elementos: junto al autoritarismo republicano empezaron a generarse nuevas instituciones democráticas –las convenciones, la democratización de los comités locales del partido y su mayor apertura–, que se combinaban con los métodos populistas de la movilización de masas. Sin embargo, a pesar de la semejanza entre los programas liberales y republicanos, se evidenció una diferencia absoluta en cuanto a los métodos de ejercer el poder político y de manejar la hegemonía en la sociedad. Al aristocratismo y al carácter cerrado de casta de los liberales, como también de los republicanos genuinos, se oponía una nueva fuerza política apoyada en las nuevas capas sociales urbanas, fortalecidas durante los años del auge económico: la pequeña burguesía, los intelectuales, los empleados y una parte de la clase obrera.

A diferencia de los liberales y de los republicanos genuinos, los saavedristas constituían básicamente un partido de clase media de los grandes centros urbanos. El carácter más democrático del saavedrismo frecuentemente entraba en contradicción con los principios de su política económica heredada, casi por completo, de los liberales. Bautista Saavedra se proponía fortalecer el bloque gobernante, es decir, el poder de la oligarquía, con concesiones a la burguesía local y a las capas medias urbanas, lo cual, objetivamente, correspondía a las tareas de la consolidación nacional. No obstante, la solución no era posible sin realizar reformas básicas.

1.2. El reformismo de Hernando Siles

El sucesor de Bautista Saavedra, Hernando Siles, aplicó una política de reformas paulatinas en las estructuras socioeconómicas del país. Para continuar con la política de creación de la red de caminos, sobre todo de los ferrocarriles –en su mandato se terminaron de construir las vías férreas que unieron Potosí con Sucre, Atocha y Villazón–, su Gobierno tuvo que acudir al financiamiento ex-

terno. A fin de ordenar el gasto público creciente, Siles emprendió reformas de reorganización financiera para modernizar el sistema bancario nacional, dado que la actividad de ese sector carecía de control estatal. Asimismo, para enfrentar la reforma bancaria y tributaria, invitó a Bolivia a un grupo de expertos a la cabeza del norteamericano Edwin Walter Kemmerer, que realizó reformas análogas en Chile, México, Colombia y Filipinas. Siguiendo las recomendaciones de la denominada misión Kemmerer, se llevó a cabo la reforma de la circulación monetaria basada en el sistema norteamericano. La ley de 11 de julio de 1928 creó el Banco Central de Bolivia, con atribuciones especiales y el derecho exclusivo de emisión (Íñiguez, 1982: 57-92).

El Gobierno de Siles tomó algunas medidas de tinte nacionalista. Se expropiaron los ferrocarriles, según el decreto de 29 de junio de 1927, pero a los seis meses, bajo la presión de poderosos intereses económicos, el presidente se vio obligado a abolir la normativa. Siguiendo la lógica del nacionalismo económico, en abril de 1930, Siles emitió una nueva Ley de Corporaciones con la cual todas las compañías extranjeras que operaban en territorio de Bolivia debían inscribirse como nacionales, bolivianas, independientemente de sus oficinas principales, y estar sujetas solamente a la legislación del país. Esa normativa nunca fue cumplida (Lofstrom,1968: 120).

Los principales problemas económicos y políticos de Bolivia seguían siendo las relaciones entre el Estado y los monopolios mineros. A mediados de la década de 1920, los barones del estaño se dieron cuenta de la necesidad de crear un mecanismo de control sobre sus “hermanos menores”, los pequeños y medianos mineros. Por ello, en 1925, fue creada la Asociación de Industriales Mineros de Bolivia, integrada por 47 diferentes compañías. De ese modo, Patiño, Aramayo y Hochschild tenían el control político y económico (*ibid.*: 23). En esos años de auge económico, las capas medias seguían a la rosca y a los barones del estaño, y la burguesía se resignaba ante la omnipotencia de los monopolios.

Siles, continuando la línea de Saavedra, buscaba más independencia del Estado respecto a los barones del estaño, evitando, sin embargo, generar un conflicto directo. El congreso de los industriales mineros, convocado para el 1 de octubre de 1928, se convirtió en una prueba de fuerzas. En ese evento, la Asociación de Industriales Mineros propuso su programa de política económica del Estado, basada en los principios liberales de la no intervención en la vida económica. El proyecto de ley de control estatal sobre las actividades de los monopolios propuesto por el liberal Casto Rojas, cercano al Gobierno, fue rechazado por los delegados. El Gobierno no pudo lograr ni siquiera una solución de compromiso que le permitiera fortalecer su control sobre los exportadores.

Ante la encarnizada resistencia de los monopolios a los moderados planes gubernamentales, Siles retrocedió. El Gobierno no tenía la voluntad política

suficiente ni la fuerza para entrar en conflicto con los barones del estaño. Los monopolios, a su vez, no olvidaron ni perdonaron esa impertinencia de ataque a sus privilegios, según su criterio. Patiño, en primer lugar, empezó a apoyar a los enemigos de Siles. Por la tenaz oposición de los monopolios, no fue posible implementar ninguna de las medidas progresistas preparadas: la expropiación de los ferrocarriles, la creación del Ministerio de Agricultura y Colonización, y el proyecto de ley para una jornada laboral de ocho horas.

Siles trató de desmantelar la máquina del poder autoritario heredada de Saavedra con algunos cambios orientados hacia la democratización de la sociedad. El decreto de 1 de marzo de 1926 prohibía a los militares ocupar los cargos de prefectos y de subprefectos, lo cual, según su punto de vista, debía fortalecer las bases civiles del poder excluyendo la participación del Ejército en la vida política (Díaz Machicao, 1955: 41-42). En mayo de 1927, la Guardia Republicana fue disuelta por los militares, que siempre miraron a este tipo de guardias como una amenaza a sus posiciones. Siles encargó el cumplimiento de esa orden a David Toro, quien gozaba de su especial confianza y justo en aquel momento empezaba la carrera política. Toro se acercó a Siles apoyando activamente sus reformas, de ímpetu nacionalista.

1.3. La formación del Partido Nacionalista

Con el tiempo, Hernando Siles estaba perdiendo el apoyo moral y político de los partidos tradicionales. En vísperas de las elecciones al Congreso, en mayo de 1927, decidió formar su propio partido, desde la convicción de crear uno de la juventud, para la renovación. Para ello, a fines de 1926, se reunió con un grupo de jóvenes intelectuales que profesaban las ideas orteguianas sobre la renovación de la nación, de moda en aquel entonces. Siles supo de la existencia de ese grupo por el líder de los jóvenes *non* conformistas, Enrique Baldivieso, a quien ya conocía. A esa reunión, además del propio Baldivieso, asistieron Humberto Palza, Vicente Leytón, Víctor Alberto Saracho, Fernando Campero Álvarez y otros, en su mayoría militantes o colaboradores de la Sociedad Boliviana Nacionalista[29] entre los años 1921 y 1925. Todos ellos se convertirían luego en las figuras clave del régimen del socialismo de Estado de la década de 1930.

En la misma reunión, realizada en la casa de Saracho, donde se reunió la flor y nata de la juventud intelectual de La Paz, se acordó formar el nuevo partido de apoyo a Siles, el Partido de la Unión Nacional o Partido Nacionalista, popularmente llamado partido silista, por el evidente vínculo

29 Se trataba de una tribuna intelectual de jóvenes *non* conformistas que tuvo una vida efímera (Lorini, 2006: 116-135).

con el presidente y su política. La organización estuvo integrada por aquellos jóvenes que posteriormente jugaron un rol destacado en la historia de Bolivia. Entre los mejores representantes de las élites políticas del siglo XX, tiene sentido mencionar los siguientes nombres, ya que aparecen permanentemente en los relatos de la historia boliviana de la primera mitad de ese siglo: los juristas Manuel Carrasco –hijo de José Carrasco, fundador del Partido Liberal–, Pablo Guillén y Vicente Mendoza López;[30] los industriales Rafael Taborga, Hugo Ernst[31] y Abel Solís; los intelectuales y escritores Carlos Medinaceli,[32] Gustavo Adolfo Otero,[33] Augusto Céspedes,[34] Carlos Montenegro[35] y Humberto Palza;[36] los profesores universitarios Javier Paz Campero[37] y Carlos Salinas Aramayo;[38] y los periodistas Mario Flores[39] y

30 Guillén y Mendoza López fueron destacados estadistas que ocuparon cargos ministeriales en los periodos de gobierno de Toro y de Busch.

31 Ernst fue líder de los socialistas y alcalde de La Paz en el periodo del socialismo de Estado.

32 Medinaceli fue un gran ensayista, periodista y sociólogo; uno de los fundadores del indigenismo de izquierda.

33 Otero fue un célebre escritor y político.

34 Céspedes fue el ideólogo del reformismo nacional boliviano y autor de importantes obras literarias, entre ellas *Sangre de mestizos* (1936) y *El dictador suicida. 40 años de historia de Bolivia* (1956).

35 Montenegro, también periodista y político, fue uno de los ideólogos del nacionalismo revolucionario y líder de la Revolución de 1952-1953.

36 Palza fue fundador de la escuela filosófico-literaria llamada "telurismo".

37 Paz Campero, un destacado estadista, fue integrante del partido saavedrista, abogado del magnate Hochschild y ministro de Trabajo durante el mandato de Toro.

38 Salinas Aramayo, uno de los más brillantes políticos bolivianos, a los 27 años, durante la presidencia de Siles (1926-1930), se convirtió en vicepresidente de la Cámara de Diputados del Congreso. Fue partidario activo de una reforma agraria radical –a veces se inclinaba por apoyar el fascismo–, pero se consideraba un socialista nacional; era cercano a los grupos marxistas. Ocupó varias veces cargos importantes durante el mandato de Busch (1937-1939). Entre 1940 y 1943, fue dirigente del Partido Socialista Unido, que fue aliado de los partidos oligárquicos. Fue fusilado en noviembre de 1944 por orden del presidente Gualberto Villarroel.

39 Flores fue director y propietario del periódico nacionalista de izquierda *La Noche*, y ejerció como ministro en el periodo de gobierno de Busch.

Luis Antezana.[40] Aquella fue una reunión representativa de los "hijos menores" de la élite de La Paz, juventud rebelde que apoyó con entusiasmo el llamado de Siles de convertirse en el partido de las reformas.

Ese partido abiertamente silista estaba compuesto por varios grupos: uno que inicialmente aspiraba a crear un periódico, con Gustavo Adolfo Otero a la cabeza, y tres más, el de Luis Fernando Guachalla, el de Enrique Baldivieso y Humberto Palza, y el de los exliberales Enrique Finot y Rafael Taborga. Sobre los últimos, Otero escribió: "se los llamó Los Maduros, no sé si por la madurez, por su picardía o en su madurez para mandar" (1977: 178).

El 11 de enero de 1927, *El Diario* publicó el programa del partido, en el que se planteaban las exigencias de promulgar un código laboral y una legislación agraria, reorganizar el sistema bancario y financiero, realizar una reforma tributaria, crear un sistema educativo eficiente y reconocer la autonomía universitaria. Presidió el partido Taborga, un industrial minero que representaba a los pequeños y a los medianos empresarios, venidos a menos. Sobre este, el sarcástico Otero dijo: "Rafael Taborga, comerciante en constante quiebra, hombre caballeroso que hace cosas sinvergüenza" (*ibid.*: 179). El nuevo partido proponía establecer el control estatal sobre las actividades de los monopolios mineros para asegurar la sobrevivencia de los pequeños y de los medianos industriales mineros (Frontaura, 1974: 53). Los nacionalistas o silistas constituyeron el primer grupo político que puso énfasis en la necesidad de diversificar la economía. Uno de los líderes del nuevo movimiento, Carlos Salinas Aramayo, sostuvo:

> En Bolivia ocurre un fenómeno curioso: su economía está apoyada sobre la minería, es decir sobre una base de carácter aleatorio. Tanto la riqueza privada como la pública dependen de la industria minera. Dependemos del estaño, la plata o el cobre; por eso la menor fluctuación en sus cotizaciones repercute tan hondamente en todas las industrias extractivas. Ha de terminar alguna vez, y entonces yo me pregunto ¿qué sería de Bolivia cuando se acabe el estaño o baje su precio en los mercados mundiales? Mientras no busquemos una fuente segura para nuestra riqueza, el País seguirá debatiéndose en la misma situación angustiosa de todos los tiempos (Arze Aguirre, 1995: 83).

Los nacionalistas consideraban la diversificación económica como la vía de salida del círculo vicioso de la dependencia del país, relacionada con la oligarquía minera y el capital extranjero. Aquel programa reflejaba los intereses y las inquietudes del sector nacionalista de la burguesía.

---

40 Antezana, también historiador y escritor, fue un destacado líder de Movimiento Nacionalista Revolucionario.

El ala radical juvenil, a la cabeza de Baldivieso, Palza y Céspedes, insistía en un programa de acción más decidido, proponiendo proclamar una suerte de manifiesto antiliberal socialista de "renacimiento nacional". Sin embargo, la mayoría moderada, encabezada por Taborga y apoyada en la opinión del presidente Siles, rechazó todas las propuestas radicales, desechando hasta el nombre propuesto para el partido. En vez de Partido Nacionalista, se llamó Partido de la Unión Nacional, aunque en el lenguaje cotidiano quedó su primer nombre (Céspedes, 1956: 84-85).

El programa del partido incluía la realización de una reforma constitucional, considerando ideas que rechazaban el parlamentarismo tradicional y los fundamentos de la democracia representativa. También proponía permitir a los sindicatos llevar a sus propios representantes al Parlamento. Como ejemplo y base teórica de la reforma, les sirvieron las ideas por entonces en boga sobre la democracia funcional, implementadas en Chile en las reformas impulsadas por el dictador Carlos Ibáñez del Campo y en el constitucionalismo revolucionario mexicano. Ante la resistencia del ala moderada, no se incluyeron en el programa las ideas más radicales sobre la reforma al sistema estatal. El único logro del ala izquierdista fue un punto que reclamaba ensanchar la representación de los sindicatos en el ámbito político. El Partido Nacionalista buscaba alianzas con el movimiento obrero, pretendiendo añadir a los sindicatos al interior de los institutos de la sociedad política. Ese se constituyó en uno de los objetivos estratégicos del ala izquierdista de los nacionalistas, que con el paso del tiempo sería el cimiento para la formación del reformismo nacionalista boliviano.

1.4. El movimiento obrero y sindical

El auge económico de la década de 1920 cambió la estructura social boliviana, con un crecimiento considerable de la clase obrera urbana. Las huelgas, los conflictos o las protestas laborales eran infrecuentes, y el movimiento sindical se fortalecía al incluir nuevos sectores de la clase obrera. Fue una etapa de crecimiento pacífico de los sindicatos, junto con una coyuntura económica favorable y una posición tolerante del periodo silista, que los mantenía como aliados. El Gobierno no impidió la ampliación ni el crecimiento del movimiento sindical. Con frecuencia, los dirigentes de los sindicatos urbanos trataban de encontrar un lenguaje común con los centros mineros y conseguían realizar, regularmente, congresos obreros nacionales.

En 1925, en el segundo congreso nacional de la Federación Obrera del Trabajo (FOT), se formó un fuerte grupo marxista que supo atraer a su lado a la mayoría de los representantes sindicales. En esa instancia, fue creada la Federación Obrera Sindical. En un tercer encuentro de trabajadores

de carácter nacional, realizado en 1927, los comunistas pudieron conservar la dirección del congreso. Por ello, la Internacional Comunista recomendó crear en Bolivia una central sindical única bajo el control de los comunistas. A partir de esos éxitos, a fines de 1927, la Internacional Comunista propuso crear inclusive un partido comunista.[41] En el congreso de ese año, se constituyó la Confederación de Trabajadores de Bolivia (CTB). Los comunistas, liderados por Moisés Álvarez y Carlos Mendoza Mamani, ocuparon los cargos dirigenciales en la nueva confederación, causando sorpresa y descontento en las uniones sindicales de base, en primer lugar de la FOT y de la Federación Obrera Local (FOL). En enero de 1929, volvió a realizarse un congreso obrero nacional; la FOT se negó a participar, causando una profunda crisis en la CTB.

La dirección nacional de la CTB fue siempre cupular, con poca influencia en el movimiento obrero. Después de 1927, es decir, luego de la llamada "usurpación comunista" y de la formación de la Federación Obrera Sindical puramente marxista, la unidad sindical quedó destruida. Aunque para el cargo del presidente del Tercer Congreso Obrero fue elegido el anarquista Rómulo Chumacero, los comunistas no pudieron encontrar el lenguaje común con las otras corrientes políticas del movimiento sindical, sobre todo con los anarquistas y los anarcosindicalistas. Los primeros siguieron controlando la vieja FOL, que conservó su independencia y su fuerza, y los socialistas quedaron en la FOT. En realidad, la escisión política provocada por los comunistas causó la división del movimiento obrero. En cambio, sí se mantuvieron las diferentes federaciones sindicales, pero sin coordinar sus actividades, ni siquiera a nivel de esas alianzas. En cada departamento del país, en las diferentes regiones, dominaba una u otra federación local, que solo integraban formalmente la FOT o la FOL.

Tal situación fue conveniente para el Gobierno de Siles, que prefería controlar las acciones de los sindicatos obreros por medio de las autoridades locales y podía así reaccionar con más eficiencia ante los conflictos locales e impedir la desestabilización de la situación política en otras regiones. El Gobierno pudo establecer relaciones bastante benévolas con las organizaciones obreras. Siles no se planteaba todavía el objetivo de integrar los sindicatos en el sistema político. Su neutralización respondía mejor a las necesidades del momento. En sus primeros años de presidencia, el movimiento estudiantil, dominado por los marxistas, fue un aliado importante de Siles. Sin embargo, sus relaciones se echaron a perder rápidamente después de la disolución de la manifestación de la oposición en La Paz, el 4 de mayo de 1927. Bajo la dirección de los jóvenes marxistas José Antonio Arze y Ricardo Anaya,

41 RGASPI, fondo 495, legajo 79, número 28: 44.

fue formada en 1928, en el Primer Congreso de Estudiantes, la Federación Universitaria de Bolivia. Las reivindicaciones centrales del programa de esa federación fueron la autonomía universitaria, la nacionalización de las minas y del petróleo, y la reforma agraria (Arze, J. A., 1963: IV-V). Se trató de un verdadero programa marxista de reformas radicales.

Arze nació en 1904, en Cochabamba. Se interesó desde muy joven por las ideas socialistas. Escribió para la emblemática revista cochabambina *Arte y Trabajo*, editada por el anarquista Cesáreo Capriles, y la dirigió por algún tiempo, desde mayo de 1921. Algunos de sus artículos los firmaba con el seudónimo León Martel. Ya en sus trabajos tempranos, como en su artículo "Patria burguesa", indagó sobre la contraposición de la burguesía y del proletariado a la escala mundial, rechazando las nociones del patriotismo burgués y declarando su adhesión al internacionalismo y su oposición al capitalismo (Arze, J. R., 1968: 82). Sus artículos lo presentan como un socialista convicto (Stefanoni, 2015: 74-76). En 1919, en una conferencia pública, declaró: "¡Seamos, jóvenes, el faro, el timón y la brújula de nuestros obreros!" (Arze, J. A., 1981: 5). A sus 17 años, fundó una universidad obrera en Cochabamba, donde se dedicó a la difusión de las ideas socialistas modernas; durante seis años, hasta 1927, lideró esa universidad. En 1921, comenzó a editar su propia revista literaria, *El Paladín*, de la que sacó a la luz tres números. Toda su vida consideró la ilustración de la clase obrera como su principal destino. Los bolivianos lo consideran hasta la fecha como uno de los grandes ilustradores del siglo XX (Abecia López, 1986: 44).

En 1923, apreciando las contribuciones de Arze en la educción popular, la municipalidad de Cochabamba lo premió con un viaje a Argentina, Uruguay y Chile para estudiar las experiencias de las escuelas populares. Argentina era por entonces el centro de un poderoso movimiento estudiantil por la reforma universitaria, cuyos objetivos resultaron muy atractivos para el joven boliviano. Lo impactaron también las obras de José Ingenieros, sobre todo los textos que anunciaban el advenimiento de "nuevos tiempos", iniciados por la Revolución rusa. Arze expuso sus impresiones sobre ese viaje en un artículo para *Arte y trabajo*. Dado que la Revolución rusa y la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) llegaron a impresionarlo, aceptó el concepto estaliniano de aquella revolución y de su periodización, siempre orientándose hacia las publicaciones soviéticas oficiales (Arze, J. A., 1980: 79-98). Conservó siempre su confianza y su lealtad hacia los líderes soviéticos, a pesar del ostracismo[42] y del repudio por parte del comunismo internacional.

A los 21 años (1925), Arze se graduó de abogado. Además de su actividad profesional, se consagró a la educación. Por esa época, estuvo a la cabeza

42 Destierro político.

de la biblioteca universitaria en Cochabamba. Reconociendo su prestigio entre los estudiantes, el presidente Hernando Siles lo incluyó en 1927 en la comisión de la reforma universitaria. En 1929, como profesor titular de sociología de la universidad de La Paz, emprendió un trabajo de popularización del marxismo en Bolivia, al que se dedicó el resto de su vida.

Los primeros grupos marxistas influenciados por el movimiento comunista de los países vecinos Argentina y Chile aparecieron en Bolivia en la década de 1920. Fueron pocos los marxistas bolivianos que militaban en los partidos de izquierda llamados socialistas o laborales.[43] Las posiciones más fuertes de los marxistas llegaron a conquistar el movimiento estudiantil. En agosto de 1928, en el primer congreso nacional de ese sector, realizado por iniciativa de José Antonio Arze y de su primo hermano Ricardo Anaya Arze, fue creada la Federación Universitaria de Bolivia, con el primero a la cabeza. La declaración de principios, escrita por ambos, fue un ensayo de interpretación marxista de la realidad boliviana. La prensa llamaba a su grupo "sovietistas", por su admiración a la revolución soviética (Stefanoni, 2015: 66-67).

A finales de 1927, según vimos al inicio de este apartado, los grupos comunistas decidieron conformar un partido y también crearon la CTB, dirigida por los comunistas Álvarez y Mendoza Mamani. A raíz de ello, cuando en 1929 fue convocado el Tercer Congreso Obrero, la FOT se negó a asistir. Ese hecho se constituyó en un fracaso evidente de la tentativa comunista de liderar el sindicalismo boliviano. Sin embargo, ese año, en vísperas del congreso sindical en Montevideo organizado por la Internacional Comunista, la CTB declaró su adhesión a la Internacional Sindical Roja (ISR o Profintern, por su nombre en ruso).

La preparación de aquel congreso enfrentó serios problemas de comunicación con los comunistas y los sindicalistas de Bolivia, Chile y Perú. Los contactos con la CTB, con el grupo comunista de Mendoza Mamani, fueron esporádicos, pero el Buró Sudamericano de la Komintern, en Buenos Aires, no tuvo una idea clara de lo que ocurría en Bolivia. En Moscú, se quejaban por no contar con alguien para enviar al país y arreglar la situación con los grupos comunistas. Mark Khaskin, miembro de la Comisión Latinoamericana del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, comunicó a Moscú que había conseguido enviar un emisario a Bolivia con el

43 En julio de 1927, fue creado el partido obrero, renombrado luego como laborista, que se autoproclamó marxista. El primer grupo comunista en Bolivia fue formado por Moisés Dick Ampuero, que durante el mandato de Saavedra (1921-1925) fue expatriado a Chile, donde ingresó al Partido Comunista y creó un grupo de emigrados bolivianos.

objetivo de convocar la conferencia sindical y elegir a los delegados bolivianos para Montevideo.[44]

La conferencia sindical nacional de la CTB se reunió en Potosí, en enero de 1929. En su agenda decía: "Este Consejo Nacional ha recibido del Comité Pro Congreso Latinoamericano de Montevideo, la invitación para la concurrencia de Bolivia a este próximo Congreso Internacional" (Delgado, 1984: 85). Se trataba de la invitación no solamente a los sindicatos procomunistas, sino a los representantes de diferentes corrientes del sindicalismo. A principios del mismo año, hubo una reunión nacional de los comunistas para elegir su delegación a la conferencia de los partidos comunistas en Buenos Aires.

Los representantes de Bolivia participaron en ambos eventos. Carlos Mendoza Mamani fue elegido como ejecutivo de la Confederación Sindical Latinoamericana (CSLA), creada en mayo de 1929, en Montevideo. En Buenos Aires, en la conferencia de los partidos, participó Alfredo Mendizábal, quien había pertenecido al grupo de los jóvenes comunistas que se adhirieron al partido de Mendoza Mamani. Todos los miembros eran activistas del movimiento estudiantil y de la Federación Universitaria de Bolivia. Su líder indiscutible era José Antonio Arze. Su grupo se convirtió en la parte más activa y numerosa del partido boliviano, en el cual se distinguían dos figuras: el propio Arze, líder de los jóvenes, y Mendoza Mamani, líder de los sindicalistas comunistas. Sin embargo, ambos grupos reconocían la preponderancia intelectual de Arze y su autoridad en el partido. En su libro sobre la historia del movimiento obrero, Guillermo Lora (1969) lo llamó Partido Comunista Clandestino (PCC).

Mendoza Mamani era un abogado vinculado con los sindicatos y con la FOT, y militante en varios grupos y partidos socialistas de la época anterior. En el partido comunista militaron sindicalistas como Waldo Álvarez, futuro primer ministro de Trabajo en el gobierno militar-socialista de David Toro (1936), y Fernando Siñani. Ambos mantenían vínculos con un grupo de jóvenes marxistas y expromotores de la Federación Universitaria de Bolivia, entre ellos José Antonio Arze, José Cuadros Quiroga, Alfredo Mendizábal, Ricardo Anaya y José Aguirre Gainsborg.

En 1930, el PCC ya contaba con células en Oruro, Potosí y Cochabamba. En Potosí, la organización regional comunista editaba el periódico *El Proletario*. Ese año, por otra parte, Felipe Saavedra Morales, en representación de la CTB, participó en el quinto congreso de la Profintern y como delegado del partido clandestino estuvo en la segunda conferencia de los partidos comunistas latinoamericanos, en Moscú. Su actuación en la capital

44 RGASPI, fondo 534, legajo 4, número 51: 52-58, 292.

rusa fue modesta, casi invisible; en el segundo evento, se inscribió para intervenir en la discusión, pero finalmente no lo hizo.[45]

Entre 1928 y 1930, Bolivia fue visitada por varios emisarios del Buró Sudamericano. El último fue un alemán que se presentó como Rigel y creó un comité del partido compuesto por Waldo Álvarez, Moisés Álvarez y Ernesto Calero. Todos eran obreros tipógrafos que formaban parte del grupo de Mendoza Mamani, pero el grupo más influyente era el de José Antonio Arze.

A principios de 1930, pasó en tránsito por Bolivia el líder comunista peruano Eudocio Ravines, con la misión de mejorar los contactos con dicho buró. Según aquel líder, cumplir esa tarea le significó, más tarde, los parabienes de August Guralsky –jefe ruso del buró en el periodo 1930-1934– y, en sus palabras, "un alza de mis valores políticos" (Ravines, 1952). Efectivamente, los contactos se volvieron más sistemáticos. Para fortalecer los cuadros bolivianos, el Buró Sudamericano ofreció al partido enviar a dos camaradas a la Escuela Internacional Leninista de Moscú.[46] Al parecer, el contacto con la Internacional Comunista también se tornó más regular.

1.4.1. La Confederación de Repúblicas Obreras del Pacífico

Sin duda, el grupo de José Antonio Arze fue el de mayor influencia. En 1930, Arze presentó a sus compañeros José Cuadros Quiroga y Waldo Álvarez –en la casa de este último– la idea del nuevo formato y del estatuto para el partido comunista: la Confederación de Repúblicas Obreras del Pacífico (CROP), es decir, Bolivia, Chile y Perú. Esa idea surgió de sus conversaciones con Álvarez, dirigente sindical en *El Diario*, a quien Arze conoció por intermedio de su amigo y correligionario Cuadros Quiroga, que trabajaba también en ese periódico, con la intención de crear algo más innovador que un partido comunista nacional. Según escribió el propio Arze a principios de 1931, llegó a la convicción de que hacía falta salir del círculo cerrado del intelectualismo izquierdista y juntar sus esfuerzos con la clase obrera.

Partiendo de la premisa de que Bolivia, en virtud de su atraso social, no presentaba condiciones objetivas ni subjetivas para los cambios revolucionarios, Arze planteaba la necesidad de unir fuerzas entre los países vecinos para luchar por el socialismo. El proyecto consistía en confederar a los partidos comunistas de los tres países y, al mismo tiempo, abrir un horizonte de unidad política entre las tres naciones. Ese plan fue aprobado en la reunión sostenida en la casa de Álvarez (Schelchkov y Stefanoni, 2016: 272). Todos los miembros del PCC, incluyendo a Moisés Álvarez, Carlos

---

45 RGASPI, fondo 495, legajo 79, número 122: 1.

46 RGASPI, fondo 495, legajo 79, número 153: 5.

Mendoza Mamani, Felipe Saavedra, Rolando Lara y Wálter Guevara Arze, se sumaron a la idea. Waldo Álvarez fue designado como secretario general de la confederación.

Los estatutos de la CROP, aprobados el 18 de octubre de 1931, la definían como una "asociación comunista" (*ibid.*: 208). Ese documento es un curioso y notable ejemplo de la creatividad política de Arze, no obstante que provocaba a la oposición e incluso a la Internacional Comunista. Para Pablo Stefanoni (2015), no deja de ser un reflejo de la inmadurez política de los jóvenes marxistas que no tardarían en estrellarse con el obrerismo secante del tercer periodo de la Komintern. Las primeras líneas indican que el objetivo de la CROP era propagandear las ideas marxistas por medio de la creación de una universidad popular, una biblioteca marxista y un centro de estudios, como también mediante la prensa obrera. Solamente el último objetivo estaba referido a la formación del partido comunista boliviano en confederación con los partidos hermanos de Chile y Perú.

Los intereses y las preocupaciones de Arze fueron la educación y la formación política. A eso se dedicó en la mayor parte de sus trabajos. No es de sorprender, entonces, que su proyecto de la CROP se pareciera al de la universidad popular. Arze no comprendía por qué sus críticos en la Internacional Comunista lo tildaban de iluso e incluso de oportunista. Precisamente, en la educación –y por medio de esta en los cambios del modo de vida–, Arze vio los mejores éxitos del poder soviético en Rusia. En su extenso artículo "Novuy Buity" ("Nueva vida"), dedicado a la revolución cultural en la URSS, Arze apologiza la política de la "dirección estaliniana" sobre la liquidación del analfabetismo y acerca de los cambios revolucionarios en el modo de vida de la gente en Rusia; asimismo, destaca el papel de la juventud en esa revolución cultural (Arze, J. A., 1981: 34-35).

Para ser admitidos en la CROP, se requería la recomendación de sus tres miembros; el postulante solamente era aceptado después de defender una "tesis" sobre el tema marxista. La obligación de los miembros de la CROP era una constante autoeducación marxista que incluía la publicación de artículos en la prensa y la participación tanto en seminarios y en coloquios sobre la situación de la clase obrera como en los cursos de la universidad popular. Además de las cotizaciones correspondientes, los integrantes debían contribuir mínimamente con cuatro libros marxistas para la biblioteca popular que se pensaba crear. A razón de ello, la organización parecía todo menos una agrupación política. Tales ideas, en esencia inocentes, se opacaban con el artículo 7 del estatuto, referido a las posibilidades de salir de la CROP. Cualquier expulsión era considerada como una traición y, "si las consecuencias de la traición de un socio expulsado fuesen graves para los intereses de la causa", la CROP de La Paz adoptaría "medidas de represión

ejemplarizadoras, acordadas y ejecutadas en forma absolutamente secreta" (Schelchkov y Stefanoni, 2016: 211). Lo más sorprendente de ese artículo es la declaración de disfrazar su labor revolucionaria y engañar a las autoridades mediante formas académicas o utilizando como gesto táctico las maniobras de las organizaciones burguesas, todo lo contrario a lo postulados del tercer periodo del comunismo internacional.

Al mismo tiempo, la CROP declaraba su adhesión a los principios y a los objetivos de la Komintern. Su objetivo más adelantado estaba referido a la creación de la Confederación Mundial de las Repúblicas Soviéticas, que apuntaba a ser una URSS alargada a las dimensiones del planeta. El paso transitorio en ese camino eran las uniones regionales de las repúblicas soviéticas, entre ellas la CROP, integrada por Bolivia, Perú y Chile. Los cropistas se declaraban internacionalistas y negaban, rotundamente, su apoyo al patriotismo nacional mezquino, lo que condicionó las persecuciones contra los "derrotistas" de parte del Gobierno, con el inicio de la Guerra del Chaco con Paraguay (*ibid.*: 211-215).

El programa económico repetía literalmente la consigna de Tristán Marof: "Minas al Estado, tierras al indio".[47] Además, incluía la expropiación de la industria urbana por los concejos municipales locales (sóviets). En el periodo anterior a la llegada al poder, que los cropista llamaban "transitorio", ellos suponían realizar la "intensificación de la organización cooperativista y sindicalista, en coordinación con los planes de la Confederación Sindical Latinoamericana, con sede en Montevideo" (*ibid.*: 212). También proponían la organización de huelgas, el boicot y los conflictos de los desocupados. En el apartado político de ese documento, la CROP declaró la necesidad de una "dictadura de clase para la organización interna del partido y para la fase inicial de su gobierno, cuando llegase al poder" (*ibid.*). Lo principal para los cropistas era la "instrucción intensificada de las masas obreras y campesinas, en sentido de los principios comunistas" (*ibid.*). En correspondencia absoluta con las tesis del tercer periodo, de lucha contra el social-fascismo, la CROP anunció su boicot contra los partidos oportunistas y los anarcosindicalistas.

En el ámbito religioso, los cropistas propusieron las medidas más radicales e intransigentes: "Confiscación de los bienes de la Iglesia y destierro del sacerdocio. Creación de la Iglesia Reformada, bajo el gobierno directo del Estado, mientras la difusión del Ateísmo justifique su subsistencia transitoria" (Schelchkov y Stefanoni, 2016: 213). El futuro gobierno socialista fue imaginado como un constante trabajo de educación e ilustración, con principios comunistas. Los cropistas bolivianos, al respecto, se adelantaron al movimien-

47 Propuesta en 1926, en su libro *La justicia del inca*, e inmediatamente adoptada por la izquierda y el sindicalismo de Bolivia, y apoyada por el congreso obrero de Oruro en 1927.

to comunista de la época, inspirándose en doctrinas antropocentristas del primer socialismo premarxista. Pero aquello, justamente, fue visto por los camaradas del Buró Sudamericano como infantilismo e inmadurez clasista.

Es curioso que el estatuto de la CROP abarcara el "Orden moral y eugénico", declarando su adhesión ideológica al "feminismo integral", al amor libre, al neomalthusiasmo[48] y al reconocimiento del "indigenismo artístico". Esa parte, indiscutiblemente, a los ojos de los camaradas kominternianos, era una tergiversación pequeño-burguesa e intelectualoide.

Los cropistas se autodeterminaron como los revolucionarios profesionales o, según decían, como especialistas. Cada miembro de la organización –cada especialista– era responsable de una esfera concreta: militar, económica, política pública, periodismo o relaciones internacionales. Los especialistas, alrededor suyo, conformaban grupos de subespecialistas, reunidos en las secciones temáticas, asemejándose a la estructura de una logia o a la de una orden religiosa, con jerarcas que detentaban poder y sabiduría especial accesible solo a ellos. Para ser especialista, un miembro de la CROP debía pasar por estudios marxistas y servir a la organización en la esfera de la autocrítica (*ibid.*: 214).

El documento de la CROP fue llevado a Buenos Aires por José Antonio Arze, junto con un mensaje para el buró, redactado por el grupo en la reunión del 20 de octubre de 1930 y firmado por Waldo Álvarez y Wálter Guevara Arze:[49]

> Nuestra asociación juzga que es un imperioso deber, para la causa revolucionaria de esta hora, tender a la fusión de los Partidos Comunistas de Bolivia, Chile y el Perú en un solo Partido Comunista Confederal, que tenga por objetivo inmediato la instauración de la Primera República Soviética en la América Latina, sin que esto signifique que dejemos de adherirnos al ideal inmediato de la Confederación Soviética de todos los países del Continente y a su incorporación en el organismo universal de la URSS […]. Mayores probabilidades de constitución inmediata sería la Confederación Soviética de Bolivia, Chile y el Perú, [naciones] ligadas en el pasado por la secular comunidad del régimen incaico y del régimen colonial, solidarizadas en el presente por la analogía de su situación geográfica y la convergencia de sus problemas económicos y caracteri-

48 Teoría demográfica, social y poblacional que considera el exceso de población de las clases pobres u obreras como un problema para su calidad de vida.

49 Guevara Arze, en esos años, era un estudiante radical. Después de la Guerra del Chaco, pasó a las posiciones del nacionalismo revolucionario, siendo uno de los ideólogos del Movimiento Nacionalista Revolucionario y uno de los líderes de la Revolución Nacional de 1952. En 1979, fue presidente provisorio de Bolivia.

> zadas, ante todo, por el hecho de que la zona septentrional de Chile, la occidental de Bolivia y la meridional del Perú, constituyen el sector más proletarizado, tal vez, de Sur América.
>
> Se agrega a esto que el problema indígena es común principalmente al Perú y Bolivia, y hasta la circunstancia de una feliz solución del problema portuario del Pacífico desde el punto de vista comunista, sólo sería posible previo entendimiento de los partidos obreros de las tres repúblicas vinculadas a ese problema (*ibid*.: 218).

La CROP pidió al buró reconocerla como única verdadera organización comunista de Bolivia. También pidió instrucciones de acción en adelante, junto con los partidos hermanos de los países vecinos, con la pretensión de unificarlos en un solo partido. Los cropistas bolivianos informaron que, a finales de 1931, la FOT, con asistencia política de la CROP, convocaría a un congreso obrero de todas las organizaciones sindicales del país, con vistas a crear una Federación Obrera Sindical procomunista. En términos de éxito de tal congreso, se pidió ayuda a la CSLA, recién creada en Montevideo (*ibid*.: 274). Como anota el investigador argentino Stefanoni (2015), los documentos de la CROP llevan el sello de una "inmadurez" y de la ingenuidad política de gente muy joven pero ardientemente entregada a la causa comunista y al marxismo.

Para establecer un contacto más fuerte y presentar su idea de la CROP, Arze y Mendoza Mamani pretendieron viajar a Montevideo, donde se encontraba el Buró Sudamericano después del golpe reaccionario en Argentina, que lo obligó a buscar una nueva sede en Uruguay. Arze era el mayor animador del proyecto cropista y Mendoza Mamani era un camarada conocido y confiado del buró, no obstante las denuncias secretas a ese buró sobre los contactos de Mendoza Mamani con la Policía.[50]

Por razones económicas, solo pudo viajar Arze. En vano trató de convencer al buró de la necesidad de la CROP. En Montevideo, donde llegó el 29 de octubre, y durante los 17 días de su estadía, constantemente negoció con los representantes tanto de aquella instancia como de la CSLA. Se reunió con el chileno Elías Lafertte, con quien compartió su idea de unificación de los

---

50 En marzo de 1929, en vísperas del congreso sindical en Montevideo, el redactor del periódico *Bandera Roja*, José Teodoro Guzmán, quien gozaba de la confianza del Buró Sudamericano y, sobre todo del camarada argentino Pedro Romo, denunció a Mendoza Mamani como agente del Gobierno y de la Policía, y solamente el hecho de haber caído preso liberó al denunciado de las desconfianzas sembradas por la misiva de Guzmán (RGASPI, fondo 495, legajo 122, número 2: 41).

comunistas de ambos países en un solo partido.[51] A principios del noviembre, se presentó ante el representante del buró como Pereira[52] y le entregó todos los documentos de la CROP que llevaba consigo, a tiempo de exlicarle el contenido de sus ideas y propuestas. De ese encuentro, Arze concluyó que el Buró Sudamericano también planteaba la descentralización de su control de los países andinos, la creación de un buró especial para el Pacífico que hiciera efectivo el control del movimiento, en vez de hacerlo desde Buenos Aires. El Buró Sudamericano, que consideraba a la CROP como un comité de simpatizantes a la Internacional Comunista y no como un partido, ni siquiera como un grupo comunista, le informó que tenían la intención de enviar a Bolivia a un delegado de la Komintern para fundar un partido comunista. Fue claramente expresado que no era aceptable el mismo nombre de la CROP (Schelchkov y Stefanoni, 2016: 276). Otra junta importante para Arze fue la concretada con el secretario de la CSLA, el argentino Miguel Contreras, con el que fueron discutidos los planes de convocar al congreso obrero nacional en Bolivia.

Esos encuentros halagaron a Arze. Sin embargo, al mismo tiempo que era visto como un camarada comunista, un posible aliado y simpatizante, también se lo llegó a considerar como un joven boliviano sospechoso y poco confiable. Arze esperaba instrucciones para formar el partido en Bolivia. En vez de eso, encontró faltas de entendimiento y distancia. Lo único que logró de los representantes de la Internacional Comunista fue que Contreras le prometiera una respuesta por escrito sobre los papeles de la CROP y acerca del congreso obrero. La carta-respuesta le fue entregada en vísperas de su partida de Montevideo. Regresando a Bolivia, vía Buenos Aires, Arze fue arrestado por la Policía argentina. Lo liberaron gracias a la intervención activa del embajador de Bolivia, Daniel Sánchez Bustamante, famoso intelectual que conocía y apreciaba a Arze (Abecia López, 1986: 48). Esa intervención diplomática a su favor resultó ser un signo muy negativo a los ojos de los kominternianos: destruyó su reputación "revolucionaria", siendo una prueba fidedigna para ellos de que Arze no era más que un politiquero pequeño-burgués.

La carta de la CSLA a la CROP fue un golpe paralizador para Arze, debido a su contenido crítico sobre los documentos presentados:

51 Lafertte, que representaba a un partido diezmado durante la dictadura de Ibáñez, dividido y muy debilitado, con poquísimos miembros, no apoyó a Arze; declaró que confiaba ese asunto a la decisión del Buró Sudamericano.

52 Se trataba del comunista brasileño Leoncio Basbaum, que trabajó en la CSLA y en el Buró Sudamericano en 1931. Más tarde, en 1934, fue expulsado del partido, acusado de trotskista.

> Por sus estatutos, su "programa", su composición social, sus antecedentes en el movimiento proletario, por sus "tácticas" y su falta de acción efectiva, la CROP en nuestra opinión es un organismo que no tiene casi nada en común con el sindicalismo revolucionario de masa que encarna la CSLA y la Internacional de Sindicatos Rojos (ISR), es decir, con el movimiento que lucha cotidianamente por el pan de los trabajadores y por el derribamiento del capitalismo, según el ejemplo dado por el Proletariado de la Unión Soviética (Schelchkov y Stefanoni, 2016: 221-223).

Se descartaron de ese modo las pretensiones de los cropistas de encabezar el movimiento sindical sin tener alguna base en el sindicalismo. Es más, la CROP pretendía ocupar el lugar del comité central del partido comunista aún en formación en Bolivia, olvidándose:

> […] de la tarea primera y elemental de todo movimiento: la tarea de organizar las fuerzas de la clase obrera y de la masa indígena para luchar por sus reivindicaciones inmediatas, condición fundamental para el desarrollo y la victoria de las luchas revolucionarias contra la burguesía nacional, el imperialismo y el poder burgués (*ibid.*).

Para la Internacional Comunista, la CROP fue una suerte de remedo boliviano de las ideas del político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). La condena fue rotunda: la CROP era el APRA boliviano.[53] La CSLA acusó a la CROP de seudoantiimperialismo, al estilo de los integrantes del APRA que, al principio, también decían ser amigos de Rusia, defensores del proletariado y simpatizantes del comunismo, y que justificaron la adopción de un nombre no comunista por razones tácticas. Ese estigma aprista fue aplicado por la Internacional Comunista a todos los cropistas. Ni Arze ni sus compañeros pudieron convencer al Komintern de lo contrario, como tampoco de su lealtad al comunismo internacional y a Moscú.

En la carta, Contreras aconsejaba a los cropistas, en vez de pensar detalladamente en las acciones de su futuro gobierno en la confederación obrera de Chile, Perú y Bolivia, pensar en cómo "organizar y llevar la lucha por el pan, por el salario, la disminución de la jornada, los seguros sociales" (Schelchkov y Stefanoni, 2016: 227). También ironizaba sobre la propuesta de los jóvenes bolivianos que para ingresar a la CROP exigían presentar un texto escrito sobre temas sociales:

53 RGASPI, fondo 495, legajo 122, número 4: 5.

> […] es como presentar una tesis de doctorado comunista en un instituto universitario… Evidentemente que los obreros y los indios analfabetos, las dos grandes fuerzas de la revolución social boliviana, que se cumplirá bajo la dirección del PC [Partido Comunista] como vanguardia del Proletariado (con estos requisitos) quedan excluidos y descartados por anticipado del selecto y estudioso grupo de la CROP, grupo de intelectuales de la CROP (*ibid*.: 223).

Los cropistas resultaron ser vistos como intelectuales poco maduros políticamente:

> La CROP, más que una organización proletaria revolucionaria y de acción, por su programa, estatutos, sus normas internas, sus llamadas "tácticas", se parece en nuestra opinión a un grupo selecto, sectario e infantilmente conspirativo divorciado de la acción y de las masas. En el mejor de los casos, sería una agrupación de elementos intelectuales y algunos obreros con escasos antecedentes de actuación proletaria, que manifiestan, según las manifestaciones de vuestro delegado, voluntad hacia el movimiento obrero y revolucionario, pero que aún deben ser verdaderamente formados, no en los estudios académicos y en las reuniones conspirativas, sino en las verdaderas acciones, en la lucha junto con los obreros, y por las reivindicaciones obreras e indias (*ibid*.: 224).

La CSLA, además, expresó su rechazo a la iniciativa de convocar a un congreso obrero nacional, auspiciado por la FOT, considerada reformista –aunque militaba en la CSLA–. De acuerdo con la táctica del tercer periodo, la política sindical de los comunistas daba prioridad a la creación de los sindicatos rojos. También planteaba, antes que nada, la formación del partido comunista y para esa tarea la CROP no servía. A los camaradas cropistas les propusieron involucrarse en la lucha proletaria para justificar sus motivos de formar el partido comunista, como también disolver la CROP (*ibid*.: 228-229). El golpe fue fuerte, pero lo aguantaron y decidieron obedecer a las directivas de la Internacional Comunista. El propio Arze pasó mucho tiempo presentando sus razones y dando ejemplos de la Revolución rusa, por medio de cartas a la Internacional Comunista, insistiendo así en sus "errores", lo que determinantemente acabó con su reputación ante la Komintern, que lo tildó de aprista boliviano y nada más.[54]

Mientras Arze estaba en Uruguay, llegaron a La Paz dos comunistas peruanos, Saavedra Fajardo (Ilo) y Chávez Bedoya (Negri), encomendados por

54 RGASPI, fondo 495, legajo 122, número 4: 5.

Ricardo Martínez (alias "Bucone"), un emisario del Buró Sudamericano. [55] Ellos debían proceder a la fundación del partido comunista boliviano.[56] Al mismo tiempo, el Gobierno asestó un duro golpe contra el comité regional del PCC, en Potosí: casi todos sus miembros fueron encarcelados y luego deportados bajo la acusación de ser "agentes soviéticos". La única organización real y fuerte se quedó en La Paz, donde se contaba con alrededor de 30 personas, incluyendo a los cropistas.[57] En La Paz, los peruanos formaron el comité central de un nuevo grupo, con elementos ajenos a la CROP, aunque Waldo Álvarez fue designado como secretario general, por su extracción obrera.[58] Cuando Arze retornó a La Paz, fue sorprendido por aquellos cambios y porque la copia de la carta recibida en Montevideo, con firma de Contreras, ya estaba en poder de los peruanos (*ibid.*: 286).

Arze reunió a los cropistas e invitó a los peruanos. Informó a sus compañeros sobre todos los encuentros que sostuvo en Montevideo y sus resultados. Al final, propuso disolver la CROP, como también el comité creado por los peruanos. El 13 de diciembre de 1931, se celebró la asamblea de unificación de los dos grupos de comunistas, a fin de deshacer simultáneamente la CROP y conformar un nuevo comité central. Se declaró a partir de ello la fundación del partido comunista de Bolivia, pendiente de aprobación de la Internacional Comunista; se aprobó, asimismo, el acta de creación del comité central de dicho partido (sección de la Komintern). Al nuevo comité ingresaron tanto los cropistas –inclusive José Antonio Arze, José Cuadros

55 Martínez y Arze salieron de La Paz en el mismo tren rumbo a Argentina; el segundo se dirigía a sus encuentros con la CSLA. Juntos llegaron a Montevideo donde sostuvieron varios encuentros, pero Martínez nunca le habló acerca de la misión de los peruanos que había dejado en La Paz (Schelchkov y Stefanoni, 2016: 286).

56 Según los testimonios de Arze, los dos peruanos no tenían ningún poder otorgado por el Buró Sudamericano. En cambio, los documentos del buró indican que tuvieron el poder y la confianza de la Internacional Comunista, aunque fueron criticados por su labor deficiente (RGASPI, fondo 495, legajo 122, número 4: 5).

57 RGASPI, fondo 495, legajo 122, número 4: 1.

58 En ese comité fueron incluidos los políticos antes relacionados con el Partido Laborista (1927), creado con la benevolencia de la Komintern como fachada legal para las acciones de los comunistas locales. Sin embargo, ese partido fue dominado por los reformistas y Vittorio Codovilla, quien en su informe dado en la conferencia de los partidos comunistas latinoamericanos en Buenos Aires (1929) reconoció esa experiencia como un fracaso, culpando a los comunistas bolivianos (Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista, 1929).

Quiroga, Carlos Mendoza Mamani, Felipe Saavedra, Wálter Guevara Arze– como los miembros del comité creado por los peruanos, entre ellos José Ordóñez, el más conocido, quien pasó por muchos partidos socialistas y, en su momento, no fue aceptado en la CROP como representante de los artesanos ni de los obreros, sino de la pequeña burguesía.

El comité declaró reconocer las resoluciones del sexto congreso de la Internacional Comunista y los programas del movimiento comunista. Para cumplir con las críticas y las recomendaciones de la CSLA, tomó la decisión de postergar el congreso obrero y la creación de la confederación sindical, antes de la consolidación del partido. Decidió comunicarse con el Buró Sudamericano para pedir la confirmación de su autoridad (*ibid.*: 229-231). Nunca recibió respuesta.

A principios de 1932, los peruanos informaron que un emisario del Buró Sudamericano, de apellido Lezama, en tránsito hacia Chile, había dejado instrucciones verbales: el Partido Comunista pasaba a ser Agrupación Comunista y los principales cropistas –Arze, Cuadros Quiroga y los hermanos Moisés y Waldo Álvarez– pasaban a ser temporalmente considerados solo como simpatizantes. Arze propuso esperar instrucciones escritas del buró, ya que no confiaba en los peruanos. En protesta, Waldo Álvarez abandonó el partido. La Agrupación Comunista fue presidida por Mendoza Mamani, quien también, en su momento, apoyó a la CROP. Luego, la Agrupación Comunista desencadenó una campaña en la prensa contra los cropistas y, personalmente, contra Arze, llamándolos social-fascistas y contrarrevolucionarios (*ibid.*: 289).

Ese año, en vísperas del 1 de mayo, se evidenció una activación de los comunistas "oficiales" y de los rechazados por la Internacional Comunista, que lanzaron varios manifiestos y volantes. En Oruro, el activista comunista Fernando Siñani, desde el periódico *La Igualdad*, llamó a los obreros locales a reunirse en la plaza principal de la ciudad para formar un partido comunista. A su llamado llegaron pocos y el intento quedó sin efecto (Lorini, 1994: 180).

El golpe final al partido lo dio un emisario del buró llamado Rafael,[59] que viajó a Bolivia entre abril y mayo de 1932. Como ocurrió con los peruanos Ilo y Negri, ese delegado asumió arbitrariamente toda la directiva del partido, que ya había sufrido bastante la incompetencia y la parcialidad personal de los otros emisarios. La presencia de Rafael tuvo tintes funestos y lamentables para el movimiento. No es sorprendente que Arze, en su carta a la Internacional Comunista –que no sabemos si llegó a enviar–, protestara ante ese tipo de intervención brutal por parte de los delegados en la vida partidaria. La investigadora ruso-chilena Olga Ulianova sostiene, con razón, lo siguiente:

59 Seudónimo utilizado por el dirigente comunista Francisco Muñoz Diez, aunque no es posible asegurar que se tratara de él.

> […] dentro de la cultura kominterniana, mesiánica y eurocéntrica, la destinación de sus delegados a diversos países se consideraba primordial para asegurar el curso adecuado de la revolución mundial. Sin conocer muchas veces en detalle las más diversas realidades nacionales, pero convencidos de poseer la nueva revelación que salvaría el mundo, los delegados de la Internacional creían ser protagonistas de la Historia con mayúscula, una especie de nuevos profetas (2008: 103).

Al igual que en Chile, los emisarios del Buró Sudamericano en Bolivia nunca fueron figuras de primera línea; además del romanticismo revolucionario, tuvieron cierta ambición y buscaron prestigio y reconocimiento en las redes alternativas. Sin embargo, para los comunistas bolivianos, esas características resultaron fatales. Rafael, desde el principio, comenzó a erradicar el cropismo de las filas del partido. El buró le había recomendado conservar a Mendoza Mamani como secretario general y, apoyándose en él, obtener el control sobre todos los grupos comunistas de Bolivia –se pensaba que controlaba muchos grupos, idea lejana a la realidad–.[60] Para el emisario, Mendoza Mamani era una figura temporal y, en su opinión, era necesario encontrar otro líder. También lanzó sospechas sobre los vínculos de Mendoza Mamani con el grupo de cropistas.

En abril de aquel año, el grupo de Arze propuso la unificación con la Agrupación Comunista y, en caso de que se aceptara su propuesta, planteó llamar a un congreso nacional de comunistas para decidir lo referido a la fundación del partido, lo cual fue considerado por el emisario del buró como "rebeldía" a la Internacional Comunista.[61] Dicho emisario tuvo la tarea de crear el partido bajo un severo control por parte de la Internacional Comunista y, al parecer, planeó quedarse largo tiempo en Bolivia. Empero, Mendoza Mamani lo molestaba porque lo consideraba simpatizante del grupo de los cropistas.

En mayo de 1932, Rafael insistió en la necesidad de librarse de Mendoza Mamani, al igual que en realizar una purga de todos los cropistas. Una vez que el buró señaló a los cropistas como un peligro igual al del trotskismo –comparándolos con Marof–, Mendoza Mamani tuvo que abandonar el grupo. Luego lo responsabilizaron de la detención del emisario por la Policía boliviana.[62] Los cropistas, a su vez, fueron acusados por la tentativa de crear

60 RGASPI, fondo 495, legajo 122, número 2: 16-17.

61 RGASPI, fondo 495, legajo 122, número 2: 2.

62 Según el relato de Mendoza Mamani –reproducido por Lora (1969: 249)–, Rafael reunió a todos los dirigentes y militantes, prescindiendo de las reglas elementales de la conspiración; por ello fue arrestado y detenido varios días.

un "comunismo nacional". [63] De hecho, el partido incipiente fue aniquilado y, después, las represiones policiales contra la izquierda, el inicio de la guerra con Paraguay, la histeria chauvinista y la represión contra los "derrotistas" comunistas inviabilizaron su resurrección. Los derrotistas Arze, Cuadros Quiroga y Waldo Álvarez tuvieron que huir del país; otros fueron movilizados al Chaco, a la guerra. Un pequeño grupo se quedó en Potosí. Ese año, el buró apoyó la idea de convocar a una conferencia nacional para unificar a todos los grupos comunistas del país.[64]

En febrero de 1933, en una reunión comunista autodeclarada como primer congreso del partido –con presencia del representante del Partido Comunista de Argentina, de apellido Garrido–, se eligió a Ricardo Valle Cloza como secretario general. Con el inicio de la Guerra del Chaco, este fue reclutado y cayó prisionero en manos de los paraguayos.[65] Más tarde, se exilió en Argentina, donde terminó enrolándose en las brigadas internacionales de la guerra civil española, en 1938.[66] Alipio Valencia Vega lo menciona en 1934 como integrante del grupo marofista Tupac Amaru, de tendencia filo-trotskista, lo que el propio Valle Cloza "olvidó" incluir en su autobiografía hecha en España para el Partido Comunista de ese país (Lora, 1978: 78).

Con el paso al frente en la Guerra del Chaco del "último" secretario general del partido, no encontramos nuevas tentativas de crear el partido comunista boliviano. La Internacional Comunista, en la tercera conferencia de los partidos comunistas latinoamericanos, realizada en octubre de 1934, en Moscú, insistía en la tarea de crear el partido comunista de Bolivia, con ayuda de los partidos hermanos de los países vecinos.[67] La postura del Buró Sudamericano

63 RGASPI, fondo 495, legajo 122, número 4: 7-8.

64 RGASPI, fondo 495, legajo 122, número 4: 10.

65 Lora escribe que Valle Cloza, prisionero en Paraguay, "tuvo una conducta extraña, contando con el amparo de las autoridades, recorría los campamentos de prisioneros para dar charlas contra la clase dominante boliviana" (1969: 285); le incrimina el "más vergonzoso oportunismo" (*ibid.*). En realidad, en esas campañas, entre los prisioneros bolivianos también actuaban los comunistas paraguayos; de ese modo pudieron tener relación con dicha iniciativa. Valle Cloza explica su liberación de los campamentos de prisioneros por acciones "extraoficiales" del Partido Comunista de Argentina y de la Federación Universitaria Argentina, y no menciona las charlas a las que refiere Lora. Además, Valle Cloza demostró después, con su sangre, el valor de sus convicciones, al ser herido en el frente español (RGASPI, fondo 545, legajo 6, número 318: 10v-12v).

66 RGASPI, fondo 495, legajo 122, número 4: 14.

67 RGASPI, fondo 495, legajo 101, número 22: 71.

y del centro en Moscú fue miope y poco delicada al rechazar a los jóvenes más ardientes, sinceros y leales al comunismo –aunque tal vez un poco ingenuos y con poca experiencia– que formaron una organización poco coherente como la CROP. La negativa de la Internacional Comunista de tratar con Arze, una persona fiel al comunismo internacional y a Moscú, llevó al buró al fracaso de sus intentos por crear un partido comunista en Bolivia. Su sectarismo y el temor ante los intelectuales y otros posibles aliados clasistas no le permitieron un camino certero en un país tan complicado como Bolivia.

Arze tuvo que huir a Perú, donde buscó algunos contactos con los comunistas de ese país, con la idea de restablecer las relaciones con la Internacional Comunista y de buscar justicia para sus ideas y la de los cropistas. Siguió insistiendo en unificar a los tres partidos comunistas: boliviano, chileno y peruano. A partir del rechazo de su idea de la CROP, cambió el nombre de su proyecto y escribió una larga carta a la Internacional Comunista con la propuesta de formar el Buró Trifederal del Pacífico. Esa carta fue entregada a los comunistas peruanos para su envío a Moscú. En su proyecto, Arze tomó en consideración las anteriores críticas del Buró Sudamericano a la CROP. Igual, el intento fue inutil. En la nota adjunta de los peruanos a la carta de Arze, se decía que esa provenía de "un grupo de intelectuales bolivianos que había fundado la CROP en Bolivia, dirigida por un tal Dr. Arze, grupo que trató de descomponer nuestro incipiente movimiento comunista en este país".[68] El documento inicia con una confusión: en las primeras líneas, se entiende que el Partido Comunista de Perú aceptaba la fórmula de Arze y la propuesta sobre la formación del buró trifederal; se dirige a la Internacional Comunista de parte de los comunistas peruanos.[69]

Deseando descartar posibles acusaciones sobre el aprismo, en su carta, Arze escribe:

> La adopción de una táctica confederalista dentro de una ideología universalmente internacionalista parece el único camino adecuado para los partidos comunistas de la América Latina y en ella [es] que se inspira fundamentalmente la iniciativa de confederar los partidos comunistas de Bolivia, Perú y Chile.[70]

La claridad de esas líneas resalta cuando se la confronta con la de los partidos no comunistas. En efecto, todos los partidos demoliberales de América Latina eran nacionalistas y en eso divergían del comunismo, de carácter in-

68 RGASPI, fondo 495, legajo 79, número 188: 89a.

69 RGASPI, fondo 495, legajo 79, número 188: 89.

70 RGASPI, fondo 495, legajo 79, número 188: 91-92.

ternacionalista. El aprismo pretendía ser latinoamericanista antes que universalmente internacionalista, pero su oportunismo se puso al descubierto cuando sus dirigentes incurrieron en la infantilidad de un malicioso cálculo al afirmar que la "unidad política" de América Latina podía consumarse sin coordinar el movimiento de emancipación antiimperialista de este continente semicolonial con potencias internacionales tan fuertes como el imperialismo inglés o el imperialismo yanqui; huelga decir que la sola potencia anticapital capaz de equipararse con esa potencia es, hoy por hoy, la Rusia soviética, vanguardia del proletariado internacional. Por otra parte, el oportunismo del APRA se puso también en claro cuando intentó llegar al poder en Perú por medio de elecciones "democráticas", proclamando a los cuatro vientos que era el partido más acertadamente nacionalista, traicionando de ese modo su propio principio latinoamericanista. De ahí el simultáneo repudio que mereció el APRA por parte del comunismo, que desenmascaró su seudointernacionalismo latinoamericanista, y de los partidos demoliberales, que le sindicaron de seudoperuanismo, con encubiertos planes extranjerizantes.[71]

Arze estaba dispuesto a corregir todos sus errores y desvíos, indicados en la carta crítica de Contreras. Así, constantemente declaraba su lealtad a la doctrina de Marx-Lenin-Stalin y condenaba a Trotsky, autodeclarándose estalinista, defendiendo y glorificando los éxitos y la política de la URSS.[72] Sin embargo, los comunistas y la Internacional Comunista negaron acérrimamente tratar con Arze, condenando toda su actividad política y sus iniciativas como un "desvío" pequeño-burgués y reformista, e inclusive como el aprismo boliviano.[73] Arze esperaba de la Internacional Comunista una discusión como camaradas, un diálogo fraterno, pero le cerraron las puertas.

Al terminar la Guerra del Chaco, Arze pudo regresar a Bolivia. Después del golpe militar-socialista de mayo de 1936, participó activamente en los procesos políticos, hizo propuestas y salió con iniciativas políticas.

1.4.2. La formación de agrupaciones comunistas

Entre 1925 y 1928, en Bolivia, aparecieron los primeros grupos llamados comunistas. El primero fue el conformado por un exilado en Chile, el co-

71 *Ibid.*

72 Inclusive después del asesinato de Trotsky, en México, Arze negó reconocer las evidencias de la responsabilidad de los soviéticos y de los comunistas por ese crimen, considerándolo escaso de pruebas (Arze, J. A., 1981: 139).

73 RGASPI, fondo 495, legajo 79, número 188: 89-95.

merciante boliviano Moisés Dick Ampuero, y por el líder izquierdista de Uyuni, Enrique Loza,[74] luego expulsado de la Federación Obrera de Chile y del Partido Comunista de ese país (Lorini, 1994: 175). Por entonces, realmente no existía ningún grupo comunista con una estructura orgánica más o menos sólida. Unos pocos marxistas se agruparon en los partidos obreros y socialistas con existencia efímera.

En julio de 1927, fue creado el Partido Obrero Revolucionario. A fines de ese año, fue renombrado como Laborista, declarándose marxista. En esa agrupación, se formó un importante núcleo de filiación comunista. Regresando de Chile, Dick Ampuero constituyó un grupo comunista y se dedicó a la propaganda de las ideas de la Internacional Comunista. Publicó el folleto *Organización sindicalista*, con el decidido empeño de aplicar al pie de la letra la experiencia de la Federación Obrera de Chile (Lora, 1969: 181). Como primer paso hacia la Internacional Comunista, Dick Ampuero insistió en la necesidad de adherir los sindicatos bolivianos a la ISR.

En 1929, después de la derrota de los comunistas en el movimiento sindical, en vísperas de la conferencia continental de los sindicatos rojos en Montevideo, se decidió la adhesión de la Confederación de Trabajadores de Bolivia (CTB) a la ISR. Montevideo, sede de la dirección comunista en el Cono Sur, recibió informes muy contradictorios sobre la situación del movimiento sindicalista boliviano. Al final, el responsable por la conferencia, M. S. Khaskin,[75] decidió invitar también a la anticomunista Federación Obrera del Trabajo (FOT).[76] Los dirigentes de la ISR, durante la conferencia, esperaban ganar la simpatía de ambos centros sindicales e incluirlos en la confederación única. Los líderes de la ISR consideraron que las uniones anarcosindicalistas, como la FOT, representaban un terreno propicio para la propaganda comunista. Uno de los dirigentes de la ISR dio las indicaciones para el trabajo sindical en América Latina: dar un trato especial a los anarcosindicalistas, declarando la guerra –sin límites–, a los socialistas, a los anarquistas y a los mutualistas en el movimiento sindical.[77]

74 Loza era un sindicalista saavedrista, miembro del Partido Republicano de Bautista Saavedra, pero simpatizaba con los socialistas y los comunistas.

75 Khaskin –de seudónimo Moris– fue encargado del sector latinoamericano de la ISR desde 1928 y miembro de la Comisión Latinoamericana de la Comisión Ejecutiva de la Internacional Comunista entre 1932 y 1935.

76 RGASPI, fondo 495, legajo 79, número 78: 15.

77 RGASPI, fondo 534, legajo 4, número 220: 27; fondo 495, legajo 79, número 79: 38-41.

En vísperas de la conferencia en Montevideo, Carlos Mendoza Mamani y Alfredo Suazo, en nombre de la CTB, enviaron al Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista un informe sobre la situación sindical en Bolivia, destacando la impotencia de la dirección de la CTB de asentar la unidad sindical en el marco nacional, como también la debilidad de los grupos comunistas en el país.[78] A la conferencia, en mayo de 1929, además de los citados Mendoza Mamani, representante de la CTB, y Suazo, sindicalista minero de Potosí, de Bolivia asistió un dirigente de la FOT, Hugo Sevillano, del sindicato de gráficos, convicto saavedrista. Mientras que los dos primeros apoyaban la creación de la Confederación Sindical Latinoamericana (CSLA), afiliada en la ISR, Sevillano declaraba que nunca aceptaría la postura antiguerra de la ISR, porque, en el caso del conflicto con Paraguay, estaría al lado de su Gobierno. Aquel fracaso de negociación de los comunistas con la FOT desvaneció las ilusiones de poder formar la central única bajo el control de los comunistas. Al regresar a Bolivia, en la reunión de la FOT, Sevillano expresó que la CSLA no representaba otra cosa que los intereses de los marxistas y de la política exterior de Moscú.[79]

A pesar de ese fracaso, la dirección de la ISR decidió dar otro chance a los sindicalistas bolivianos y usar ese camino para formar una sólida agrupación comunista y, luego, el partido comunista en Bolivia. En Montevideo, Mendoza Mamani fue elegido para el consejo general de la CSLA. Aunque no pudo trabajar ahí, los lazos de los sindicatos bolivianos con la ISR se hicieron más estables y continuos. En 1930, otro representante de la diminuta CTB, de apellido Saavedra Morales, fue parte del quinto congreso de la ISR, en Moscú.[80]

La siguiente etapa para fortalecer las relaciones entre los grupos de la izquierda boliviana y la Internacional Comunista se daría con su participación en la primera conferencia de los partidos comunistas latinoamericanos en Buenos Aires, en junio de 1929. De Bolivia fueron invitados los conocidos Mendoza Mamani y Suazo, como también los representantes del núcleo marxista de la recién creada Federación Universitaria de Bolivia, José Antonio Arze y Alfredo Mendizábal. Su objetivo era establecer lazos firmes con la Internacional Comunista y, con su ayuda, formar el partido comunista en Bolivia (Arze, J. A., 1978: 9). Lamentablemente, el debut de los dos jóvenes izquierdistas no provocó buena impresión en los dirigentes de la Internacional Comunista. Mendizábal habló mucho sobre el "atraso"

78 RGASPI, fondo 495, legajo 122, número 2: 3-8.

79 RGASPI, fondo 495, legajo 79, número 53: 61; Lora, 1969: 234.

80 RGASPI, fondo 495, legajo 79, número 81: 1; fondo 534, legajo 1, número 175.

de la clase obrera boliviana. El origen social y la pinta de "intelectuales pequeño-burgueses" de ambos despertaron desconfianza, la cual nunca consiguieron disipar.

En la conferencia, el líder comunista argentino –y real representante de Moscú– Vittorio Codovilla presentó un informe en el que se discutía la táctica comunista respecto al Partido Laborista de Bolivia. Según el documento, las tentativas de transformar ese partido en revolucionario y marxista, creando al interior un fuerte núcleo comunista, no dieron ningún resultado, por lo que en la dirección seguían predominando los reformistas (Codovilla, 1970). Si bien en principio la Internacional Comunista había aprobado la militancia de los comunistas en el partido, luego cambió totalmente su actitud, proclamando su objetivo de crear un partido apoyándose en el grupo de Mendoza Mamani. Los representantes comunistas que asistieron a la conferencia recibieron indicaciones para unificar los grupos dispersos en un solo partido y de concentrar sus esfuerzos en formar su estructura.

Con la coyuntura política del momento, el futuro partido comunista habría sido solamente una organización ilegal. Mendoza Mamani transformó su grupo en el PCC y formó el comité ejecutivo que mantuvo vínculos con el Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista. La fecha exacta de la formación del aquel partido clandestino no es conocida; según Guillermo Lora (1969: 176) y Alipio Valencia Vega (1987b: 1795) –este último de seudónimo Iván Keswar, estudiante marxista que participó en la fundación del PCC–, fue en 1928. No obstante, en el informe de Mendoza Mamani presentado a la Internacional Comunista, fechado en marzo de 1929, no se menciona aquel partido clandestino. Documentos de ese mismo año testimonian que el PCC ya había sido organizado.[81]

El PCC no fue realmente un partido, sino un pequeño grupo de intelectuales y sindicalistas en el que militaron José Antonio Arze, futuro líder del Partido de la Izquierda Revolucionaria; José Aguirre Gainsborg, futuro fundador del Partido Obrero Revolucionario, de corte trotskista; y Wálter Guevara Arze, futuro líder e ideólogo del nacionalismo revolucionario, como también uno de los fundadores del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Los grupos comunistas aparcieron tanto en La Paz como en la ciudad de Potosí y en Uyuni. El Buró Sudamericano insistía en que los diversos grupos debían unificarse en un solo partido. En 1930, dicho buró ofreció a los grupos bolivianos enviar dos representantes a Moscú, a la Escuela Internacional Leninista.[82]

81 RGASPI, fondo 495, legajo 79, número 153: 4-5.

82 RGASPI, fondo 495, legajo 79, número 153: 5.

Dos años más tarde, en Moscú, decidieron que el PCC no podía ser considerado un partido, sino un grupo comunista. En su carta, el Secretariado Latinoamericano (Landersekretariat) subrayó las necesidades de atraer a los trabajadores de los sindicatos anarcosindicalistas, realizar las consignas del frente único clasista obrero-campesino y usar la experiencia de los comunistas peruanos para trabajar activamente entre las masas indígenas. Asimismo, dicha carta contenía las condiciones bajo las cuales Moscú podía reconocer al grupo comunista como el partido comunista boliviano, sección nacional de la Internacional Comunista. La condición principal era convertirse en un partido obrero y de masas. La carta decía: "No será difícil reclutar unos 40 a 50 trabajadores. Solamente después de eso y, solamente como resultado de esta actividad exitosa, acompañada por una purga interna, podemos hablar sobre la formación del partido comunista".[83] Si el requisito para ser un partido de masas era tener de 40 a 50 militantes, suponemos que el número de integrantes del PCC era mucho menor.

En 1930, el PCC se llamó Agrupación Comunista y la cabeza seguía siendo Mendoza Mamani.[84] Se intentó crear grupos en los centros obreros –como por ejemplo Fernando Siñani, en Oruro–, con el claro propósito de cumplir los requisitos para ser reconocidos como partido por la Internacional Comunista (Lorini, 1994: 180). Otra de las condiciones, la purga, también fue cumplida, resultando expulsados del grupo los talentosos e influyentes miembros intelectuales y sindicalistas pequeño-burgueses Alipio Valencia Vega, José Antonio Arze, Waldo Álvarez y José Cuadros Quiroga.[85]

El líder indiscutible del PCC y luego de la Agrupación Comunista fue Mendoza Mamani, un experimentado dirigente de varios partidos socialistas y obreros, quien a mediados de la década de 1920 adoptó posiciones bolcheviques. Llegó a convertirse inclusive en el hombre de confianza del Buró Sudamericano de la Internacional Comunista, pero como era un dirigente de vieja formación socialista, se resistió al estilo mandón del centro comunista bonaerense. El buró criticó sus errores, su conformismo con los políticos pequeños-burgueses y su falta de disciplina para acatar las instrucciones de la Internacional Comunista, y dejó de apoyarlo después de su arresto.

En 1932, el centro directivo en Buenos Aires envió a Bolivia a su representante llamado Rafael –del que se habló en un apartado anterior, pero no se sabe exactamente quién era–. En La Paz, ese mensajero-controlador de la Internacional Comunista insistió en convocar a una reunión del grupo en

83 RGASPI, fondo 495, legajo 122, número 2: 17.

84 Mendoza Mamani cayó preso en 1930, lo que debilitó al grupo comunista.

85 RGASPI, fondo 495, legajo 20, número 353: 2.

la casa de Mendoza Mamani, violando todas las reglas conspirativas. Como resultado, la Policía arrestó a Rafael, que estuvo preso apenas unos días antes de ser expulsado del país. En los informes al buró, la culpa de este fiasco fue atribuida a Mendoza Mamani, quien fue destituido del puesto de líder,[86] ocasionando el golpe final a la Agrupación Comunista, que dejó de existir.[87]

1.4.3. Los socialistas agrupados

En ese periodo, aparecieron en Bolivia varios grupos de izquierda, de orientación socialista, pero sin una clara inclinación hacia el comunismo internacional. Un papel importante lo jugó Tristán Marof –Gustavo Adolfo Navarro–, convertido en el líder indiscutible de los marxistas bolivianos, aunque desde 1921 vivió en Europa. En enero de 1927, en Sucre, se formó un numeroso grupo que se constituyó en el Partido Socialista,[88] a la cabeza de los nuevos líderes Gustavo Adolfo Navarro, Abraham Valdez, Rómulo Chumacero y Rafael Reyeros, entre otros. En su informe a la Internacional Comunista, Mendoza Mamani lo llamó Partido Socialista Máximo.[89] Ese fue, realmente, el primer grupo socialista de nuevo cuño que marcó la historia moderna del socialismo boliviano.

Aquel partido, que tuvo cierta influencia entre los estudiantes, se apoyaba en la Escuela Ferrer, de educación popular, mantenida por Chumacero. Asimismo, contó con el apoyo de la FOT de Sucre, en cuya sede los socialistas realizaban sus reuniones. En el seno de la FOT, Marof y Valdez intervinieron con conferencias sobre temas sociales.[90] Los socialistas de esa ciudad preparaban por entonces una convención de indígenas para abril de 1927; no se sabe si consiguieron realizarla.[91] En las elecciones del congreso

86 RGASPI, fondo 495, legajo 122, número 2: 17.

87 El Partido Comunista de Bolivia reconocido oficialmente por Moscú fue fundado en 1950 sobre la base del ala izquierdista del Partido de Izquierda Revolucionaria, creado por Arze en 1940. Sobre el movimiento comunista boliviano y sus relaciones con el Komintern, véase: Schelchkov, 1996: 39-55.

88 Según Lorini, ese partido, igual que otros en diferentes ciudades de Bolivia, fue la prolongación del Partido Obrero Socialista. Sin embargo, no encontramos ninguna mención a este, ni siquiera se repite el nombre (1994: 166).

89 *Correspondencia Sudamericana*, el órgano de los comunistas en la región, publicó en junio de 1927 "El Manifiesto del Partido Socialista Máximo de Bolivia".

90 *El Socialista*, número 6, 19 de febrero de 1927: 3.

91 *El Socialista*, número 11, 9 de abril de 1927: 4.

de ese año, el nombre de Roberto Hinojosa figuraba en la lista del Partido Socialista junto a Loza, Marof y Dick Ampuero (Lorini, 1994: 166).

Marof fue el inspirador y el teórico del Partido Socialista, en cuya doctrina se declaraba lo siguiente:

> El socialismo transformará la sociedad actual mediante la comunidad de los medios de producción, regresarán los bienes a la colectividad, no existirá la propiedad; todos tendrán un trabajo proporcionado a sus aptitudes. Amaos los unos a los otros, trabajar para vivir. Con estas bases se creará la República Obrera Boliviana de la misma manera que todas las de Sudamérica.[92]

El Partido Socialista editó un periódico de importancia regional, *El Socialista*, en cuyo primer número aclaraba:

> El socialismo es una necesidad urgente en Bolivia […]. El socialismo en Bolivia, compuesto de elementos trabajadores, es el inicio que puede salvar al País de la pobreza actual, organizando a la clase trabajadora, haciendo consciente, enseñándole a luchar contra los burgueses o semiburgueses del país, y destrozando el privilegio. Que se comprenda bien: el socialismo es lucha de clases.[93]

El Partido Socialista declaró el apoyo a la Revolución rusa, pero rechazó al régimen de la URSS; se autoproclamó el partido de la clase obrera y adversario tanto de los partidos tradicionales como de los nuevos, entre ellos el nacionalista, fundado por el presidente Hernando Siles. Según el investigador Huascar Rodríguez García, la visión del socialismo y del proletariado de los socialistas sucrenses era muy amplia y muy cercana al anarquismo. En una carta escrita por Chumacero a Luis Cusicanqui, en febrero de 1927, le decía: "Este [partido] es antiparlamentario y apolítico. Si hemos dado el nombre de un partido, no es con el interés de hacer surgir candidaturas, es únicamente con el de despistar a la burguesía, porque este tiene principios enteramente libertarios" (en Rodríguez García, 2010: 67).

Marof se impuso la tarea de ampliar la influencia del nuevo partido en todo el país. En Tarabuco (Chuquisaca), fue creado un grupo socialista afiliado al partido de Sucre.[94] En abril de 1927, Marof, Chumacero y Víctor Vargas fueron a presentar el Partido Socialista al congreso obrero realizado en Oruro. En el camino, desplegaron actividades en Potosí, dictando con-

---

92 *Ibid.*

93 *El Socialista*, número 1, 18 de enero de 1927: 2.

94 *El Socialista*, número 9, 27 de marzo de1927: 4.

ferencias y organizando reuniones. La iniciativa de expandir el partido a otras regiones logró la fundación de un partido socialista en Potosí, acción que fracasó en Oruro. Paralelamente, Loza conformó un grupo en Uyuni (Potosí), que también se denominó Partido Socialista. En agosto de ese año, Loza fue elegido como diputado por la provincia de Porco (Potosí), en representación de ese grupo.

Tras el fracaso en Oruro, Marof pasó a La Paz, donde consiguió organizar un grupo de estudiantes y de intelectuales que apoyaba la idea del Partido Socialista, pero tuvo poco éxito entre los obreros y los sindicatos locales.[95] También en 1927, el Gobierno acusó a Marof y al denominado "Consejo de los 10" –líderes sindicales y miembros del Partido Laborista, fachada legal de un grupo comunista– de estar implicados en un complot antigubernamental (Sandor, 2009). Por ese tiempo, se desarrollaba una enérgica rebelión indígena en Chayanta (Potosí). Marof fue arrestado y confinado a Apolo (La Paz), de donde fugó hacia Perú y, luego, se fue a México. Su partido no logró sobrevivir a ese golpe represivo ni en Sucre ni en Potosí.[96]

En julio de 1927, surgió el Partido Laborista integrado por los mismos personajes de los partidos obreros socialistas de varias ciudades: José Ordóñez, Enrique Loza, Max Landa, Ezequiel Salvatierra y Carlos Mendoza Mamani. Según este último, el Partido Laborista fue formado por gente de diferentes orientaciones ideológicas, entre los cuales operaba un importante núcleo comunista.[97] En sus documentos, el grupo declaró: "El carácter de nuestro partido es eminente de clase" (Lora, 1970: 162). También decía: "Hemos resuelto tomar el nombre de Partido Laborista, sin perder de vista nuestros puntos doctrinarios que tienen su esencia en el marxismo" (*ibid.*). Su objetivo era claramente electoral. Los comunistas lo consideraron como la posibilidad de construir una base amplia para ganar a las masas antes de crear un partido clasista. Esa iniciativa fue apoyada por la Internacional Comunista. Los laboristas tuvieron bastante éxito entre los sindicatos. Los integrantes nacionalistas se quejaron al Gobierno de que los obreros abandonaban sus organizaciones para unirse a los laboristas en las principales ciudades, como también en los centros mineros.[98] Empero, ese partido tuvo una corta historia. Desapareció completamente en 1929, perdiendo la participación comunista por haber apoyado la ola chauvinista en Bolivia durante la crisis del fortín chaqueño Vanguardia (1927).

95 RGASPI, fondo 495, legajo 122, número 2: 4-5.

96 RGASPI, fondo 495, legajo 122, número 2: 4.

97 RGASPI, fondo 495, legajo 122, número 2: 5.

98 ABNB-PR, 1929, Correspondencia, "Carta al presidente Hernando Siles del 27 de marzo de 1929".

Mientras el Partido Laborista apoyó al Gobierno en su confrontación con Paraguay, bajo el mandato de Siles –quien, no obstante, evitó la guerra–, el Partido Socialista Revolucionario fue el único en demostrar su esencia revolucionaria y marxista (Lora, 1969). En ese partido, Lora advierte las raíces de la tradición del marxismo revolucionario –que luego conduciría a la fundación del Partido Obrero Revolucionario–, puesto en marcha después de la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana de 1929, aunque desconocemos a los integrantes y a los líderes de este grupo (1969: 169-174). Lamentablemente, la información de Lora es escasa.

Una de las fuentes de la invención socialista en el sistema de partidos bolivianos fue el movimiento estudiantil, que se materializó en la fundación de la Federación Universitaria de Bolivia (1928), en su congreso en Cochabamba. De ese movimiento, inspirado en la reforma universitaria y en el movimiento estudiantil de Córdoba (Argentina), salieron las primeras figuras del entramado político tanto de la futura izquierda como del nacionalismo revolucionario y de otras corrientes inconformistas del régimen liberal boliviano. El factótum[99] del congreso fue el cochabambino José Antonio Arze, pero en la convención de la Federación Universitaria de Bolivia tuvieron un papel relevante Ricardo Anaya, Abraham Valdez, José Aguirre Gainsborg –quien ocupó la Secretaría de Vinculación Obrera en la Federación Universitaria de Bolivia–, Arturo Urquidi, José Cuadros Quiroga y Carlos Medinaceli. Los líderes del movimiento estudiantil tenían una clara orientación marxista (*ibid.:* 152). Los líderes estudiantiles de tendencia socialista recién citados, entre otros, se encargaron de propiciar la unidad obrero-estudiantil (Lorini, 1994: 133). Los estudiantes radicales y los sindicalistas-clasistas fueron protagonistas del nacimiento del movimiento marxista en Bolivia.

En aquellos años, Marof se ocupó de divulgar su idea principal: que el comunismo era la única solución posible a los problemas nacionales de América Latina. En septiembre de 1926, regresó a Bolivia. Cuatro meses después, junto al líder sindicalista Rómulo Chumacero, creó un grupo de propaganda marxista en Sucre, llamado Partido Socialista. Luego, en Potosí, fue organizado el Partido Socialista Máximo, con Marof y Roberto Hinojosa como jefes. Marof viajó mucho por el interior del país, dando conferencias y realizando reuniones con las organizaciones estudiantiles y obreras. En agosto de ese año, participó en las elecciones al Congreso como candidato del Partido Socialista por su ciudad natal, Sucre.

La actividad agitada del escritor Marof, ya conocido en Europa, llamó la atención de la élite política de Bolivia. El Gobierno le propuso el cargo de cónsul en Londres o la posibilidad de ser elegido como diputado del

99 Persona de plena confianza que desempeña todo tipo de menesteres.

Congreso Nacional por el Partido Nacionalista, nueva creación silista. La intención era atraer, por intermedio de Marof, a las masas populares, sobre todo a los obreros, a los estudiantes y a los intelectuales. Marof rechazó la oferta de una manera poco respetuosa y brusca, hecho que fue vengado por las autoridades (*ibid.*: 233). Efectivamente, en febrero de 1927, Marof y su compañero Hinojosa fueron arrestados y, luego de pasar 60 días en la cárcel de La Paz, fueron exilados a Argentina, por lo que su partido dejó de existir.

1.5. Agitación en el campo

A la par de las movilizaciones en los centros obreros, parecía que en el campo también se había iniciado un ciclo de agitación. En el tema agrario, tanto Hernando Siles como Bautista Saavedra profesaban el viejo principio liberal de no intervención en los asuntos de la propiedad agrícola. Según sus puntos de vista, la comunidad indígena era el principal impedimento para el desarrollo de la agricultura. Ambos eran partidarios convencidos del proyecto racista de desarrollo agrario del país, el cual excluía la sobrevivencia de los indígenas quechuas y aymaras como pueblos originarios. Incluso antes de llegar al poder, Saavedra, abogado en el famoso Proceso de Mohoza, en el que se juzgó a los líderes de la rebelión campesina de 1899 (Irurozqui, 1994: 185-189), declaró: "Si [los indígenas] decidimos terminar con este atavismo, tenemos que hacerlo lo más rápido y lo más decididamente posible" (*ibid.*). Ni Saavedra ni Siles consideraron, ni siquiera hipotéticamente, la posibilidad de emprender reformas en el agro.

Las sublevaciones campesinas contra los abusos de los hacendados y de las autoridades locales fueron aplastadas sin piedad por el Ejército y por la Policía. En marzo de 1921, el Ejército sofocó una rebelión en Jesús de Machaca (La Paz), donde 116 personas fueron asesinadas y las casas de los campesinos fueron quemadas. De igual modo procedió el Gobierno de Siles con los campesinos de Chayanta (Potosí), en 1927. En la rebelión de Chayanta, surgieron algunos rasgos evidenciando la nueva etapa a la que entraba la lucha de los campesinos indígenas del país. Los políticos de izquierda trataron de utilizar la rebelión para sus fines partidarios y emplearon la propaganda de sus ideas para dirigirse a ese grupo de la población. En particular, los hacendados locales llamaron la atención de las autoridades hacia el hecho de que el abogado Ricardo Daza, uno de los miembros de los grupos comunistas, divulgaba infundios entre los campesinos sobre los supuestos documentos encontrados por él en los archivos, los cuales demostraban que los hacendados detentaba ilegalmente la propiedad de las antiguas tierras comunitarias de Chayanta. Esas acciones coincidían

con los anhelos de los indígenas, demostrados por el movimiento de los apoderados comunales.

Después, la Policía acusó a los políticos de izquierda y a Marof de provocar la rebelión con sus llamados subversivos a la redistribución de la tierra, así como por difundir propaganda comunista (Montes, 1984: 338-341). Los hechos indican que fue poco probable la existencia de vínculos directos entre la actividad de los políticos de izquierda y la rebelión, que transcurrió según los esquemas tradicionales de una sublevación indígena. Lo importante fue que, por primera vez, los campesinos utilizaron en sus acciones argumentos propuestos por políticos de la ciudad. Ambas partes –campesinos e intelectuales izquierdistas– estaban infinitamente lejos de entenderse; sin embargo, eran conscientes de los beneficios de su alianza.

A principios de la década de 1930, los anarcosindicalistas comenzaron a crear sociedades entre los indígenas. El anarquista argentino Ismael Martí informó al conocido historiador del anarquismo, Max Nettlau, que los anarquistas bolivianos preparaban la traducción de los clásicos del anarquismo a las lenguas quechua y aymara (Rodríguez García, 2000: 30). Los anarquistas realmente fueron los iniciadores de la sindicalización y de la agitación socialista entre los indígenas de Bolivia. Todos los movimientos campesinos siguientes –la gran sublevación de 1947 y la revolución de carácter nacionalista de 1952-1953– transcurrieron en el marco de esa alianza de singular colaboración.

Siles dio un paso hacia los campesinos indígenas, partiendo de la idea de integrarlos a la economía del país, de la cual dependía el desarrollo del mercado interno y, de hecho, la formación del sistema económico nacional integral. El presidente consideró que el principal obstáculo en ese camino era la ignorancia, el analfabetismo de las masas indígenas que vivían en un mundo cerrado y aislado. Compartía la opinión dominante en aquella época de que sería suficiente la instrucción de los indígenas para atraerlos hacia los valores de la civilización europea. La "civilización" del agro y la eliminación de los elementos autóctonos tanto de la cultura y como de la economía resolverían el problema indígena y, en consecuencia, el problema agrario.

La campaña de educación de los indígenas fue declarada por Siles en 1926. Fue creado para ello el Instituto Pedagógico, con la misión de preparar a los profesores rurales. Esa política gubernamental recibió el apoyo de la Iglesia católica por medio de su denominada "Cruzada pro Indio", declarando que su objetivo era formar el sistema de educación primaria en el campo. Las acusaciones de las organizaciones de izquierda a esa campaña, incluyendo la Federación Universitaria de Bolivia, como intento de poner la educación indígena al servicio del clericalismo y del latifundismo no eran infundadas. El 18 de abril de ese año, bajo las consignas "¡Abajo el clericalismo!" y "¡Abajo el gamonalismo!",

los estudiantes disolvieron una romería en La Paz. El tema agrario-indigenal resonaba cada día más en el acontecer político boliviano. Sin embargo, en la sociedad aún no había madurado la convicción de que la reforma agraria era inevitable y que sin ella no sería posible lograr la formación de la nación boliviana. Conservar el *statu quo* en el campo significaba excluir a la población indígena de todos los procesos sociales del país.

1.6. La crisis política y la reelección de Hernando Siles

La crisis económica mundial iniciada en 1929 afectó seriamente la situación política en Bolivia. Las reformas no fueron puestas en marcha y el apoyo político al Gobierno disminuía claramente. El Gobierno de Siles mostró su incapacidad económica ante la crisis y perdió el apoyo de la población, no solamente por su abulia, sino por su carácter autoritario e incluso dictatorial de gobernar. El presidente se apoyaba exclusivamente en la fuerza. Todos los partidos y los grupos políticos, a excepción del poco numeroso y débil Partido Nacionalista, pasaron a la oposición.

Mientras tanto, en el gabinete de ministros, una gran influencia fue adquirida por Guillermo Vizcarra, quien con la venia de Siles impuso un régimen policial y aplicó la censura. La capital del país y otras ciudades vivieron en estado de sitio permanente. Asimismo, fueron enviados al exilio los dirigentes de la oposición, tanto de derecha como de izquierda, entre ellos los liberales Luis Calvo y Tomás Monje, al igual que el dirigente sindical Ricardo Soruco, por citar algunos. En una oleada de arrestos, fueron encarceladas por motivos políticos alrededor de 250 personas. Siles trató de conseguir el apoyo del Ejército. Para ello, invitó a ser parte del Gobierno al teniente coronel David Toro, hombre de su confianza por el que sentía una simpatía personal. La apuesta directa por las Fuerzas Armadas azuzó la llama del descontento y causó nuevas protestas. El Ejército –y menos los altos mandos– no apoyó la represión contra la oposición liberal.

El periodo de Siles debía terminar en 1930. Sin embargo, dada la cercanía de las elecciones presidenciales, como también al considerar que sus reformas apenas habían empezado y al constatar que el Partido Nacionalista carecía de un líder capaz de ganar, el presidente decidió permanecer en el poder, incluso violando la Constitución de Bolivia, según la cual no era posible la reelección para un segundo periodo. Así, para conservar la apariencia de legalidad, Siles dimitió a su cargo el 28 de mayo de 1930, entregando sus facultades al Consejo de Ministros y no al vicepresidente como lo señalaba la Carta Magna. La oposición consideró ese acto como un golpe de Estado. Según Siles, dicho Consejo prepararía las elecciones a una Asamblea Constituyente, la que, a su vez, cambiaría el texto constitu-

cional para permitir la reelección del presidente. Los planes de Siles se lograrían solamente si se establecía el más férreo control sobre las elecciones, imponiendo una dictadura.

En respuesta a las ilegalidades del presidente, la oposición, olvidando las ofensas y las disputas pasadas, se unió en un bloque antigobierno en el que el papel de fuerza de choque debía ser jugado por las organizaciones estudiantiles. Simón I. Patiño, preocupado por los planes reformistas de Siles –y prefiriendo tener un Gobierno confiable de oligarquías en el periodo de crisis– prestó ayuda financiera a sus adversarios.

1.7. La revolución de Villazón

Hernando Siles se deslizaba al vacío del soporte social y político. Roberto Hinojosa, líder de un grupo revolucionario de los exiliados bolivianos en Argentina, dedujo que bastaba un atrevido asalto al poder para que el país se sublevara en contra del Gobierno. Para entonces, Hinojosa seguía manteniendo vínculos con Tristán Marof, a pesar de las agrias discusiones sobre la vía de la revolución latinoamericana. Ambos preparaban una sublevación armada que debía ser iniciada en Bolivia y, luego, seguir en los países limítrofes. Para ello, comenzaron a comprar armas y a planear una intervención revolucionaria armada en Bolivia.[100]

En septiembre de 1927, Hinojosa publicó en el diario *Crítica* el "Programa mínimo"[101] de la juventud revolucionaria de Bolivia; es decir, de algunos seguidores que nunca formaron una verdadera organización partidaria. Ese programa es el único documento que evidencia la existencia de dicho grupo. El texto sirvió de base ideológica para las acciones de los partidarios de Hinojosa durante la llamada revolución de Villazón, en 1930. En ese escrito, están fusionadas las ideas más radicales de aquel tiempo. Entre las reivindicaciones planteadas figura en primer lugar la nacionalización de las minas, siguiendo la consigna de "minas al Estado" lanzada por Marof. Aparece también la idea de nacionalizar las grandes industrias: ferrocarriles y telégrafos. Como etapa de transición, se proponía la entrega al Estado del 52% de las acciones de esas empresas.[102]

---

100 Existen testimonios de Marof sobre este asunto en los que se refleja su estado de ánimo apenado porque su gente tuviera que cortar los preparativos de la rebelión después del fracaso de la revolución de Villazón, llevada adelante por Hinojosa en 1930 (Baciu, 1987: 69-70).

101 Término de moda después de la Revolución rusa.

102 AHGE-SRE, 1927, "Roberto Hinojosa. Reseñas y recortes de prensa", fondo 21, legajo 26, expediente 108.

Respecto a la cuestión agraria, Hinojosa expuso una idea de expropiación de los latifundios tras su nacionalización: redistribuirlos sobre la base de la *enfiteusis*.[103] Esa figura, sin embargo, no era novedosa en la legislación agraria boliviana; había sido introducida por los emigrantes argentinos exilados durante el Gobierno de José Ballivián, en la primera mitad del siglo XIX. En las dos primeras décadas del siguiente siglo, la discusión de la *enfiteusis* revivió en Argentina, sobre todo entre aquellos socialistas que planteaban la actualidad de las reformas del presidente Bernardino Rivadavia en nuevas condiciones económicas y sociales. También fue debatida en México durante la primera etapa de su reforma agraria. En esos años, la discusión sobre el tema agrario entre los marxistas fue fundamental. Asimismo, a la luz de las transformaciones sociales que vivía la URSS posrevolucionaria, la idea de estatizar la tierra como paso transitorio a su socialización fue bastante popular. Tales discusiones teóricas influyeron en Hinojosa. Si por varias razones él cambiaba frecuentemente de opinión con relación a otros temas, acerca de la *enfiteusis* se mantuvo fiel a sus convicciones iniciales y las conservó toda su vida.

En el aludido programa estaban incluidas propuestas muy progresistas para su época: igualdad de derechos entre hombres y mujeres, derecho al divorcio, reforma universitaria y legislación social. En efecto, el programa de Hinojosa era bastante radical: además de las reformas democráticas generales, insistía en cambios en el sistema político. Al parecer, fue el primero en Bolivia en proponer la creación de un sistema político funcional, liquidando el sistema liberal-democrático con parlamentarismo y pluralidad política. Así, propuso crear un sistema de democracia funcional fundamentada en la formación de los órganos estatales según el principio gremial y socioprofesional; esto es, con delegaciones de estudiantes, obreros, sindicatos, asociaciones profesionales y organizaciones indígenas.[104] Hinojosa no fue, ciertamente, el creador de esas propuestas, pero sí fue el primer boliviano en proponerlas como alternativa nacional. Especialmente en aquellos años, dicha teoría era discutida ampliamente en Chile, Italia y México, e Hinojosa vio en ellas la base de un futuro sistema político para Bolivia que sustituyera el sistema liberal, el cual, en su opinión, había sido incapaz de resolver los principales problemas de la época, sobre todo en lo referido a la cuestión social y obrera.

---

103 La *enfiteusis* (cesión perpetua o por largo tiempo) lleva consigo la disociación del dominio entre el dominio directo, correspondiente al propietario, y el útil, el de la persona que usa y aprovecha la finca.

104 AHGE-SRE, 1927, "Roberto Hinojosa. Reseñas y recortes de prensa", fondo 21, legajo 26, expediente 108.

La actividad radical de Hinojosa y su viraje hacia la izquierda revolucionaria alarmó a sus amigos mexicanos, quienes se desvincularon de él. Pasados unos meses de silencio, en septiembre de 1928, Hinojosa volvió a pedir recursos financieros para viajar a México. La respuesta negativa y poco cortés de la cancillería mexicana provocó su ira, induciéndolo a enviar varias cartas llenas de indignación a la Embajada de México. En ellas, Hinojosa amenazaba con provocar un grandioso escándalo en la prensa y desenmascarar así a los diplomáticos mexicanos.[105] No sabemos a qué secretos se refería Hinojosa, pero los mexicanos mantuvieron una posición intransigente. El secretario (ministro) de Relaciones Exteriores de México, indignado, instruyó por cable a los representantes en Bolivia "no dejarse chantajear por propagandistas baratos"[106] y cortar todo tipo de relaciones con Hinojosa. A este no le valió ni siquiera una carta humillante y vergonzosa, por su tono lisonjero, que se dirigió al presidente mexicano, Plutarco Calles, reclamándole insistentemente recursos financieros para su frustrado viaje a México.[107] A pesar de todos esos gestos, sus relaciones con aquel país fueron congeladas hasta la llegada a la presidencia del general Lázaro Cárdenas, en 1934. En contra de Hinojosa operó el hecho de haber mantenido relaciones políticas y amistosas con Marof, considerado por la diplomacia mexicana como uno de los organizadores de la campaña antimexicana en los países latinoamericanos, que, según México, fue dirigida desde Moscú (Arriola, 1994). En tales circunstancias, Hinojosa se concentró, otra vez, en la política nacional boliviana.

A finales de la década de 1920, la vida política en Bolivia estaba preñada de convulsiones. La crisis con Paraguay puso a ambos países al borde de la guerra, en 1928. La situación interna del Gobierno de Siles era muy delicada: los partidos tradicionales estaban en plena confrontación con el régimen, mientras que el joven Partido Nacionalista todavía carecía de fuerza y de influencia política. Hinojosa y Marof contaban para su proyecto revolucionario con algunos socialistas y sindicalistas en Bolivia, siendo la figura clave en esa conexión el diputado y sindicalista Enrique Loza, entusiasmado con los planes revolucionarios de Hinojosa (Lorini, 1994: 194-195). De ahí que persuadió a sus compañeros de que en Bolivia todo estaba listo para una revolución y que el plan de Hinojosa contaba con el apoyo de organizaciones

105 AHGE-SRE, "Carta de 11 de septiembre de 1928", fondo 21, legajo 26, expediente 108.

106 AHGE-SRE, "Cable de 12 de septiembre de 1928", fondo 21, legajo 26, expediente 108.

107 AHGE-SRE, "Carta de R. Hinojosa a P. Calles de 4 de octubre de 1928", fondo 21, legajo 26, expediente 108.

obreras y estudiantiles, como también de los militares, en diferentes departamentos del país.

Hinojosa sostenía que la proclama de una república socialista obrero-campesina en Bolivia era el único remedio para evitar la guerra fratricida con Paraguay e iniciar las reformas que pusieran fin a la arcaica estructura feudal del país (Lora, 1969: 252). La situación boliviana, que ya sentía los golpes de la crisis económica mundial desencadenada por la quiebra de la Bolsa neoyorquina en noviembre de 1929, se agudizó a mediados de 1930 cuando Siles declaró sus planes de reelección presidencial. Realmente, parecía que el país estaba al borde de una revolución violenta. Para el 4 de junio de ese año, la ciudad de La Paz estaba en plena rebelión protagonizada por organizaciones estudiantiles; para Hinojosa, aquello era una señal más para actuar. Así, la mañana del 16 de junio, un grupo armado liderado por Hinojosa atacó el puesto fronterizo y la aduana del pueblo de Villazón, en la frontera con Argentina. La localidad fue ocupada por los revolucionarios, quienes proclamaron el inicio de la revolución socialista-obrero-campesina en Bolivia y declararon una marcha hacia La Paz (Lorini, 1994: 194). Hinojosa, líder de los sublevados, fue proclamado presidente provisional de la República.[108]

Los revolucionarios emprendieron su obra con un amplio programa redactado por el propio Hinojosa y publicado en 1944. El manifiesto contenía 70 puntos, lo que resultaba demasiado extenso para un llamado a la acción. Allí figuraba la exigencia de la nacionalización de las minas, de la industria y de los ferrocarriles. Un elemento novedoso era el reclamo de la

108 El 16 de agosto de 2007, Alberto Zuazo Nathes, hijo de Alfredo Zuazo, uno de los participantes de la revolución de Villazón, publicó un artículo en el periódico *La Razón* contando la historia de su padre. Según su versión, Zuazo fue el real protagonista revolucionario, mientras que Hinojosa era arrestado por la Policía al cruzar la frontera argentina. Es decir, Hinojosa no habría estado en Villazón cuando Zuazo fungía como jefe de los revolucionarios, perdiendo la vida en esa aventura. Hinojosa dedicó un folleto a la muerte de Zuazo, intitulado "El holocausto de Zuazo"; Lora lo llama teniente Zuazo (1969: 256). Ese relato es parte de la historia familiar de los Zuazo, transmitida por su esposa. No tenemos datos fidedignos, por lo que preferimos seguir la documentación que evidencia la participación de Hinojosa en aquel acto revolucionario. Zuazo aparece en los documentos de la Internacional Comunista, en la reunión de preparación de la conferencia sindical en Montevideo (1929), y junto al líder del PCC, Carlos Mendoza Mamani, firma el informe sobre la situación en Bolivia. Fue considerado por Moscú como un firme comunista, mientras que Hinojosa era visto como "aventurero pequeño-burgués" (RGASPI, fondo 534, legajo 4, número 220: 27).

cancelación de la deuda externa de Bolivia, la anulación de las obligaciones y de las deudas de los ciudadanos bolivianos con el fisco y la abolición de los impuestos (Hinojosa, 1944: 26). Dicho programa refleja la original opinión de Hinojosa acerca de la imposibilidad de pagar la deuda externa en condiciones de crisis económica mundial. Un año más tarde, su posición dejó de ser revolucionaria y perdió su carácter subversivo, dado que muchos países, entre ellos Bolivia, suspendieron el pago de obligaciones por concepto de deuda.

Por otra parte, la abolición de los impuestos, combinada con el libre comercio y el levantamiento de todas las fronteras aduaneras en el continente (*ibid.*: 25-26), revela en el manifiesto una gran influencia de la teoría y de la práctica del anarquismo en el pensamiento de Hinojosa. Asimismo, una vez más, al igual que en el programa de la juventud revolucionaria, figura la reforma agraria. Para Hinojosa, la solución agraria en Bolivia no consistía en un simple reparto de la tierra, sino en la liquidación radical de toda la propiedad privada latifundista en el campo y en la nacionalización de la tierra (*ibid.*: 25). Hinojosa se oponía a convertir los grandes fundos gamonales en pequeña y en mediana propiedad campesina, una idea compartida prácticamente por todos los partidos y las corrientes políticas reformistas y revolucionarias de la época, inclusive por los marxistas. La solución en el campo, desde la perspectiva de Hinojosa, era la estatización de la tierra.

En el enfoque político del manifiesto, la cuestión social ocupaba un lugar importante. En efecto, como en otros documentos de la pluma de Hinojosa, figuraba la sindicalización general de la sociedad como paso de transición en las transformaciones hacia el socialismo y la democracia funcional. Las relaciones laborales debían fundarse en la colaboración y en la convivencia social entre empresarios y asalariados o, en casos de nacionalización, entre las empresas estatales y los obreros. En ese marco, la propuesta consistía en introducir el sistema de participación obrera en las ganancias de las empresas y en crear comisiones mixtas obrero-patronales para solucionar posibles conflictos laborales (*ibid.*: 26-27). Aquella parte sociopolítica del programa, sin embargo, no podía satisfacer a los marxistas radicales, pero era suficiente para inquietar a los reformistas moderados, aunque seis años después se convetiría en parte fundamental de la doctrina oficial del régimen militar-socialista (1936-1939).

La revolución no encontró ningún soporte al interior del país. La población local se mantuvo indiferente a los manifiestos y a los llamamientos de los jóvenes rebeldes. Hinojosa animó a sus compañeros, persuadiéndolos de que varias guarniciones militares se estaban levantando en apoyo a la revolución, que los obreros estaban declarando una huelga revolucionaria y que el campo estaba en plena sublevación (Lora, 1969: 255). Pero la realidad estaba lejos de esas declaraciones. Después de algunas escaramuzas en las localidades

Salitre, Talina, Mojo y Tupiza (Potosí), las tropas gubernamentales libraron con poco esfuerzo a Villazón de los revolucionarios. Hinojosa y sus compañeros huyeron al extranjero, pero varios participantes de la aventura –entre ellos el diputado Loza, secretario del Comité Revolucionario de Villazón– fueron arrestados (Lora, 1969: 256-258; Lorini, 1994: 194-195). La mayoría de las organizaciones bolivianas de izquierda no apoyó la revolución de Hinojosa. Es más, en agosto de 1930, el Cuarto Congreso Obrero condenó las acciones en Villazón (Lorini, 1994: 114). Los comunistas calificaron esos acontecimientos como una aventura pequeño-burguesa. Marof entró en una acalorada polémica pública con Hinojosa y, muchos años después, le siguió reprochando por haber actuado prematuramente y no haber comprendido el carácter de la revolución latinoamericana. El único político de renombre que apoyó decididamente tanto la revolución de Villazón como el programa suscrito por Hinojosa fue el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre.

El propio Hinojosa no realizó ningún análisis serio de sus pasos ni de las causas del fracaso. Más tarde, continuó considerando que un buen manifiesto y un buen programa eran suficientes para levantar a las masas y propiciar la revolución social. Las causas de la derrota del movimiento habrían sido, según su visión, el aislamiento y la lejanía de Villazón. También argumentó, con toda seriedad, que una de las principales razones del fracaso fue "una dificultad inesperada de movilidad ferroviaria" (Lora, 1969: 256), esto porque el tren que iba cargado de panfletos revolucionarios hacia el interior del país había sido interceptado por tropas regulares poco después de partir de Villazón.

1.8. La caída de Hernando Siles

Simultáneamente a la revolución de Roberto Hinojosa, desde el 12 de junio de 1930, La Paz vivía una rebelión estudiantil plena. El 22 de ese mes, esa rebelión se transformó en violentos enfrentamientos en los que corrió sangre. En tal situación de descontento, el Ejército se negó a obedecer al comandante en jefe. Solamente David Toro, que junto a un pequeño grupo de militares seguía fiel a Hernando Siles, trató de apaciguar la situación. Sin embargo, el 25 de junio, el Ejército se unió a los estudiantes rebeldes. Siles fue derrocado y recibió asilo en la Embajada de Brasil, para después dejar el país con destino a Chile. Los rebeldes allanaron las casas de Toro, de Rafael Taborga y de otros partidarios, como también la del expresidente.

Con el derrocamiento de Siles, fracasaron los intentos de aplicar las reformas moderadas destinadas a fortalecer el sistema político existente y de ampliar la base social de la élite gobernante. Los procesos de la crisis en la sociedad civil, acompañados por el descontento de las capas medias y de la

clase obrera –excluidas del proceso político dado el carácter castista cerrado de la "democracia liberal"–, empujaron a buscar una salida reformista al *impasse* social. No cabía esperar que las contradicciones causantes de esta crisis se agudizaran hasta convertirse en el inevitable derrumbe de todo el sistema.

El reformismo de Siles no fue más radical que el de Bautista Saavedra, aunque utilizó por primera vez el nacionalismo como bandera política y consigna romántica, pero no encontró en el "republicanismo" la energía necesaria para reformar la sociedad. Siles, en mayor medida que Saavedra, perdió el apoyo de la élite política tradicional. Fue entonces que recurrió a las nuevas fuerzas políticas, aquellas que dejaron de lado el social-darwinismo imperante. Ese proceso señaló el inicio de una nueva etapa histórica, caracterizada por una creciente crisis del Estado y de la sociedad civil. En ese escenario, no le quedó otra solución que buscar apoyo para sus planes reformistas entre las nuevas fuerzas políticas –la juventud–, que expresaban los intereses de los sectores dinámicos de la sociedad; es decir, de la burguesía local y de las nuevas capas medias, en primer lugar.

Siles captó a cabalidad la llegada del momento para recurrir al nacionalismo como una justificación interna y externa de las reformas dirigidas a transformar la sociedad en un organismo más flexible y poderoso. Su aparato gubernamental y el programa del Partido Nacionalista consideraban los intereses de la joven burguesía boliviana, ampliando la base social del estado oligárquico. Tanto él como los nacionalistas fueron los primeros en poner el "egoísmo nacional" como principio de una política de orientación nacional.

El reformismo de Siles fue moderado y parcial; no afectaba en absoluto los fundamentos de la vida económica, pues imponía solamente soluciones de parche sobre el viejo sistema político. Históricamente, no habían surgido todavía las fuerzas sociales suficientemente fuertes y capaces de plantear ante la sociedad la necesidad de las reformas estructurales, como tampoco de realizarlas. Aún subsistía la fe en los principios liberales, esto es, en la fuerza del mercado mundial como el único instrumento de progreso económico. Fueron necesarias las conmociones provocadas por la crisis económica y la Guerra del Chaco para que terminaran de madurar las fuerzas políticas, conscientes de la necesidad de reformas para consolidar la nación y superar el círculo vicioso de la dependencia y del atraso. Entre la actividad reformista de Saavedra y de Siles y la época histórica que siguió a la crisis económica mundial y la Guerra del Chaco existe un verdadero abismo. Difícilmente se puede considerar a Siles como un precursor del nacionalismo o del nacional-reformismo boliviano. Durante el gobierno silista, apenas se formaba el futuro núcleo de las fuerzas reformistas, aunque el nivel de captación de los objetivos de las reformas nos impide encontrar analogías debidamente aproximadas

con el periodo siguiente. Siles se mantuvo en el marco del reformismo liberal y puso fin, de hecho, a una época histórica que empezó a fines del siglo XIX y se caracterizó por una serie de reformas orgánicas liberales que modernizaron la arcaica economía nacional y al Estado boliviano.

1.9. La crisis económica mundial y la Guerra del Chaco

La caída de la Bolsa de Nueva York, en octubre de 1929, tuvo significativas repercusiones mundiales. En el caso boliviano, provocó una gran crisis en la industria minera, debido a la disminución del precio del estaño,[109] cuya extracción se redujo de 47.069 toneladas de mineral en 1929 a 20.920 en 1932 (López Rivas, 1955: 83). La caída de la producción de otros metales fue aún más dramática. Así, en 1932, el volumen de bismuto extraído en Bolivia constituía solo el 1% del nivel de extracción de 1900 (Lofstrom, 1968: 58).

En noviembre de 1929, los industriales mineros pidieron al Gobierno una ayuda urgente para el sector. Un mes después, el Ministerio de Hacienda dispuso reducir en 50% los impuestos a las compañías productoras de estaño y liberó también a los empresarios de cualquiera obligación con relación al sueldo mínimo que debían pagar a los trabajadores (*ibid.*: 62). Pero tales medidas no lograron salvar al sector de la depresión. Para coordinar sus acciones, las grandes compañías mundiales de estaño crearon, por iniciativa de Simón I. Patiño, el Comité de Productores de Estaño, reconocido oficialmente por Bolivia en 1930. Este estableció cuotas a la producción para cada uno de los países estañíferos. En Bolivia, las cuotas fueron distribuídas por el Gobierno junto con la Asociación de Industriales Mineros, controlada por Patiño.

Durante el auge de la década de 1920, Patiño aprovechó para ampliar y modernizar sus minas. Su empresa Catavi-Siglo XX (Potosí) se convirtió en la de mayor y más eficiente producción. Para el año 1929, las minas de Patiño producían el 60% del estaño boliviano; tres cuartas partes provenían del centro minero Siglo XX. Patiño también controlaba las plantas metalúrgicas procesadoras del mineral boliviano en Liverpool (Reino Unido). Al estallar la crisis, gestó y encabezó el Cartel del Estaño –o Comité del Estaño–, integrado por representantes de Nigeria (África), Malasia (Asia) y las Indias Occidentales holandesas (el Caribe). Gracias a su hábil política, Patiño logró que Bolivia, muy en desventaja en comparación con sus competidores por el alto valor de producción de mineral, quedara en una situación privilegiada:

109 Los precios del estaño bajaron de 203,9 libras esterlinas por tonelada en 1929 a 142 libras esterlinas por tonelada en 1930, y hasta 97,6 libras esterlinas por tonelada en 1932; es decir, más de la mitad (Valencia Vega, 1973: 239).

consiguió que el volumen mínimo de la producción se equiparara al nivel de exportaciones de 1929, lo que para su compañía significaba una reducción productiva relativamente leve.

A diferencia de Malasia y de Nigeria, en Bolivia, reducir la producción y la exportación significaba afectar la distribución de las cuotas entre los tres barones del estaño, así como entre los pequeños y los medianos productores. El Gobierno boliviano tuvo que cerrar los ojos ante el incumplimiento de aquellas obligaciones de reducción de la producción. Entre tanto, la exportación de estaño por sobre la cuota de los pequeños y de los medianos empresarios mineros llegó a 748 toneladas en 1931 y a 1.502 toneladas en 1932. El Gobierno, por otra parte, pudo realizar el control real de la producción y de la exportación solo a las grandes empresas. Aunque el 25 de julio de 1932, por exigencia del Comité del Estaño, el presidente Daniel Salamanca promulgó un decreto que estipulaba una serie de medidas de reducción de la producción, este no ejerció una influencia efectiva sobre los empresarios mineros pequeños y medianos.

El problema se resolvió aumentando las cuotas y produciendo un auge provisorio en todo el sector. El Gobierno superó esa peligrosa tendencia solamente incrementando las cuotas a las pequeñas minas, de 16,8% en 1931 a 22,3% en 1932, lo que causó la disminución de las exportaciones por sobre la cuota en 152 toneladas en 1933 (Hillman, 1988: 96-97). Bolivia también pudo evitar las complicaciones y las sanciones internacionales por parte de los demás integrantes del comité gracias a que se produjo algo similar en Malasia. Descontento con la situación del comité y la debilidad del Gobierno boliviano, Patiño creó su propio cartel –con la participación del banco inglés Lloyds–, que empezó a formar sus propios acopios del estaño. Así, Patiño sacaba de circulación una parte de su capital y con el nuevo cartel podía esperar el repunte del mercado para luego vender el *stock* a un precio más alto, generando de ese modo buenas utilidades.

La crisis fortaleció la estructura monopólica de la industria del estaño: Simón I. Patiño, Carlos Aramayo y Mauricio Hochschild se convirtieron en los denominados "barones del estaño". Quebró la compañía Guggenheim y Aramayo compró sus minas en 1933, a muy bajo precio. Hochschild, que se especializaba en la compra-venta de la producción de los pequeños y de los medianos mineros, en 1929 controlaba el 80% de la exportación del sector no monopolizado de la industria; asimismo, resistía activamente la cartelización del sector, pues entendía que ello permitiría a Patiño pasar a manejar toda la producción de estaño. El conflicto entre Patiño y Hochschild por la distribución de las cuotas de producción involucraba al grupo de pequeños y de medianos empresarios mineros, difícil de controlar, razón por la que Bolivia se mantuvo permanentemente en calidad de infractor de las cuotas por la venta del estaño (*ibid.*: 87-93).

A pesar del estado caótico de la economía mundial, el Gobierno boliviano continuó fiel al patrón oro, con la moneda libremente convertible. Las reservas de oro se redujeron desde julio de 1929 hasta septiembre de 1931 en el 57% (Íñiguez, 1980: 93-94). La fuga de capitales puso al país al borde de la bancarrota. Con la conferencia de los bancos latinoamericanos, realizada en Lima el 23 de septiembre de 1931, en la que participó Bolivia, acordaron imponer un tipo de cambio fijo a las monedas nacionales, a fin de detener la fuga de capitales de la región.

La crisis afectó dramáticamente las finanzas del Estado boliviano. Los ingresos por los impuestos a la exportación de minerales bajaron dos veces en 1930 y cuatro veces en 1931, en comparación con el año 1929 (Palenque, 1933: 55). La industria del estaño redujo el ingreso de divisas que, a su vez, disminuyó las posibilidades de importar alimentos. Los productos alimenticios subieron de precio. En las ciudades, los pequeños empresarios quebraron en masa. Igualmente, la crisis tuvo grandes consecuencias sociales. El 17 de marzo de 1930, a exigencia de los barones del estaño, el Gobierno autorizó despedir masivamente a los trabajadores mineros; solamente en las empresas de Patiño el número de trabajadores se redujo de 6.688 personas en 1929 a 2.064 en 1932 (Peñaloza, 1987). La irritación social y el descontento con los círculos gobernantes terminaron agotando la paciencia de la sociedad.

Uno de los rasgos más relevantes del desarrollo de Bolivia en la segunda mitad de la década de 1930 fue la urbanización a gran escala. Después de la Guerra del Chaco, las ciudades fueron pobladas por soldados desmovilizados y sus familias, así como por mestizos, habitantes de los pequeños pueblos de las provincias y campesinos indígenas. La Paz y Cochabamba, solamente en 1936, aumentaron su población en un 30% (Klein, 1972: 41).

La demanda de la nueva población urbana de artículos de industria ligera y de productos alimenticios significó un gran crecimiento productivo para esos sectores. Por ejemplo, en La Paz, en 1935 existían unas 35 pequeñas y medianas empresas, y para 1945 llegaron a 173, empleando a 7.890 personas; el 69% de esas empresas correspondía, justamente, a la industria ligera y de alimentos (Schoop, 1981: 60-61). Lo mismo sucedió en Cochabamba, donde surgieron 37 nuevas empresas entre las décadas de 1930 y 1940; la mayoría de ellas se abastecía de materias primas locales. En 1938, los empresarios cochabambinos fundaron una Cámara de Industria que se convirtió en la vocera de la burguesía local.

La urbanización también hizo emerger nuevos grupos de población que se involucraron activamente en la lucha política. En ese escenario, se destacó la figura del obrero industrial, antes opacada por la masa artesanal. Según las estadísticas de 1936, la cantidad de obreros industriales aumentó hasta el 5% de la población económicamente activa, los trabajadores temporales y

estacionales constituían el 7%, y en la industria minera trabajaba permanentemente alrededor del 2% de ese grupo poblacional. Este último sector, no obstante, aportaba más del 20% al Producto Interno Bruto (PIB) del país. Para la década de 1930, se redujo drásticamente el volumen de la producción artesanal, sector que ocupó solamente el 0,1% de la población económicamente activa (Brienen, 1996: 6).

Conviene tener en cuenta que después de la crisis de aquella década empezaron a surgir nuevos sectores productivos y se desarrolló la infraestructura de las ciudades, marcando con ello las transformaciones cualitativas de la estructura del capitalismo boliviano. Los cambios económicos acarrearon también serias modificaciones en la composición de la sociedad, en su estructura y en la naturaleza de las capas medias. Según las estadísticas de 1936, la población urbana estaba distribuida de la siguiente manera: 2% de propietarios urbanos, 3% de comerciantes y empleados bancarios, 1,5% de profesionales, 8% de "clases improductivas", incluidos los estudiantes universitarios. Esos grupos de población podrían ser considerados como las capas medias, las cuales sumaban cerca del 15% de la población del país y la mitad de todos los habitantes de las ciudades. Precisamente, esa categoría de ciudadanos ejercía una influencia decisiva en la vida social y política del país. Cercanos a las capas medias, por sus niveles de ingresos, su comportamiento y su orientación social, estaban los obreros "privilegiados", "instruidos", ocupados en el transporte y en las comunicaciones, que sumaban aproximadamente el 1% de la población.

También se multiplicaron las nuevas capas medias en los sectores que prestaban servicios, esto a fin de atender las demandas económicas de una ciudad moderna, con industrias e infraestructura de transporte. Empezando la década de 1930, ya se podía hablar de dominación de las nuevas capas medias; su superioridad numérica y su iniciativa social se imponían por encima de las tradicionales élites urbanas. Es ejemplar el incremento de las profesiones liberales, el aumento del número de los denominados "nuevos profesionales" y la desaparición paulatina de la élite ilustrada tradicional –los llamados "doctores"–. Con el crecimiento significativo de la población urbana en más de dos veces, en casi medio siglo, el número de abogados, es decir de "doctores", se redujo en un 6% y el de sacerdotes disminuyó en el 50%. Contrariamente, la cantidad de médicos creció en un 50%, la de los ingenieros aumentó en el 310% y la de profesores se incrementó en una cifra gigantesca de 1.158% (Klein, 1971: 393).

El aumento de la clase media y de los obreros cualificados se reflejó en el incremento del número de personas con derecho a voto. Si en el año 1904 el número de ciudadanos con ese derecho llegó a 43 mil personas, en 1926 fue cercano a 70 mil; después de la década de 1930, la cantidad

se elevó a 450 mil. Sin duda, quienes realmente votaban eran menos, aunque las estadísticas electorales incluían a todos los que contaban con tal derecho.[110] Esa dinámica de crecimiento de la cantidad de electores, es decir de ciudadanos que cumplían con los requisitos establecidos por ley –alfabetizados y con un ingreso que superaba el requerido para los votantes–, muestra la tendencia a la elevación numérica de las nuevas capas medias, las cuales, aunque eran "novatas" en la vida política boliviana, se transformaron en sus protagonistas principales.

Las hondas transformaciones de la estructura socioeconómica boliviana mostraron, además, una nueva etapa de su evolución. La razón económica de la crisis política y social de 1930 fue la disminución del nivel de utilidades recibidas por la clase dominante en general y, en primer lugar, del sector económico más poderoso, el de la oligarquía minera: los barones del estaño. Estos perdieron el control financiero y su tutela sobre la clase media, la cual representaba el fundamento político del estado liberal. Los nuevos requerimientos de la economía y de la sociedad entraron en contradicción con el excluyente sistema político. El estado oligárquico empezó a vivir una profunda inestabilidad política.

1.9.1. La Guerra del Chaco y la resistencia de la oligarquía

La Junta de Gobierno, presidida por el general Carlos Blanco Galindo, asumió el poder en julio de 1930, declarando que el principal objetivo gubernamental sería el retorno a la legalidad constitucional y la realización de elecciones libres. Dicha Junta representaba al bloque de los partidos tradicionales opositores a Hernando Siles –sobre todo–, a los liberales y a los republicanos genuinos. El golpe abiertamente apoyado por los barones del estaño fue llamado por el pueblo "revolución patiñista".

El candidato presidencial favorito en las eleciones del 4 de enero de 1931 era Daniel Salamanca, líder de los republicanos genuinos, que reunió alrededor de su candidatura a todas las fuerzas políticas tradicionales, obteniendo en las elecciones 32.282 votos, mientras que los postulantes al cargo de vicepresidente, el liberal José Luis Tejada Sorzano y Bautista Saavedra, recibieron 24.039 y 9.608 votos, respectivamente. Salamanca tenía 61 años cuando asumió la presidencia del país. Fue un brillante orador, un político ampliamente experimentado, un conservador convencido y un defensor de la vieja Bolivia criolla. Fue sin lugar a dudas un patriota, pero de un país que existía solo en su ima-

110 En Bolivia, el censo de 1900 registró 217 mil personas alfabetizadas, incluidas las mujeres, las cuales no tenían derecho al voto (República de Bolivia, 1903), en tanto que el censo de 1950 reveló la cifra de 708 mil personas (República de Bolivia, 1973).

ginación. Para él, Bolivia era el país de una minoría blanca hispanohablante civilizada. Estaba seguro de su capacidad de llevar el Estado criollo a las cumbres de la gloria, fortalecer sus fronteras y eliminar tanto la discordia interna como la protesta social de las clases trabajadoras. Para la vieja Bolivia, Salamanca fue el "hombre símbolo". Así lo empezaron a llamar sus partidarios y sus opositores. En efecto, fue un hombre emblemático del Estado oligárquico y de la rosca. La sobrevivencia de esa sociedad y del Estado dependía del éxito de su Gobierno.

Las relaciones entre Bolivia y Paraguay significaron un dolor de cabeza para el Gobierno boliviano. Se disputaba el derecho sobre el territorio del Chaco. La presencia boliviana se notaba solamente en las zonas del Chaco boreal, cercanas a Santa Cruz, en tanto que Paraguay realizaba la colonización exitosa de los territorios en disputa al norte del río Paraguay. Ambos países construían en el Chaco pequeños fuertes donde emplazaban reducidas guarniciones, preparándose paralelamente para el conflicto bélico a una escala más grande. Previniendo el enfrentamiento, Siles compró armamento a Gran Bretaña, gastando tres millones de libras esterlinas. Ese armamento conformó la base del arsenal del Ejército boliviano durante la Guerra del Chaco. En 1926, Siles invitó de nuevo al general alemán Hans Kundt, encargándole la organización de las Fuerzas Armadas. Kundt llegó con instructores alemanes, oficiales experimentados de la Primera Guerra Mundial.[111] La misión militar alemana contribuyó mucho a la preparación profesional de los militares bolivianos. Resulta curioso constatar que uno de los integrantes de aquella misión fuera Ernst Roehm,[112] al que Kundt conoció durante el *putsch* (golpe) nazi en 1923.

Los temas fronterizos entre Paraguay y Bolivia fueron discutidos durante el periodo 1927-1928 por los diplomáticos de ambas partes, con la mediación de Argentina. Bolivia tenía predisposición a poner la disputa al arbitraje

111 Kundt representaba tanto el profesionalismo de la tradición militar alemana como los intereses comerciales y económicos de las grandes compañías alemanas por entrar al mercado boliviano. Los intereses de las industrias Krupp, Mauser e I. G. Farben no eran indiferentes a la misión militar alemana, la cual era representante comercial de varios grupos industriales alemanes (Nunn, 1983: 103-128).

112 Roehm sirvió en el Ejército boliviano hasta 1930; participó en el conflicto del fortín Vanguardia. Durante el golpe de Estado de 1930, junto a Kundt, pidió asilo en la Embajada de Alemania. En noviembre de 1930, Adolf Hitler le pidió volver a Alemania. Mantuvo vínculos con la Embajada de Bolivia en Alemania y fue amigo de muchos funcionarios de la representación boliviana en Berlín. En las recepciones oficiales, causaba la admiración de todos interpretando el himno de Bolivia en piano. Dejó en Bolivia muchos admiradores de las ideas nacional-socialistas, especialmente entre los militares (Crespo Rodas, 1985: 243-245).

de una tercera parte, pero Paraguay insistía en conservar el *statu quo*, es decir el cese de todos los movimientos militares en el Chaco, mientras seguía, con ritmos acelerados, la penetración civil. Siles, con toda su capacidad, trató de evitar el conflicto; en cambio, la oposición, encabezada por Salamanca, clamó por el empleo de métodos de fuerza en la solución de la disputa.

El clima de tensión se agudizó el 5 de diciembre de 1928, momento en el que las fuerzas paraguayas ocuparon y quemaron el fortín boliviano Vanguardia. Ante esa agresión abierta, Siles retiró de Asunción a su embajador y decidió, en represalia, asestar un golpe similar al fortín paraguayo Boquerón. La ola de chauvinismo inundó el país. Aplaudido por la prensa chauvinista, el entonces opositor Salamanca exigió declarar inmediatamente la guerra, totalmente convencido de la superioridad de las fuerzas bolivianas y de una victoria fácil. Siles, al contrario, estaba seguro de la incapacidad de Bolivia para enfrentar la guerra. Al parecer, Paraguay tampoco estaba preparado para un conflicto militar.

Bolivia y Paraguay firmaron el 3 de enero de 1929, en Washington, un protocolo de arbitraje y dieron una conferencia internacional de paz, invitando a Estados Unidos, México, Colombia, Uruguay y Cuba. El acuerdo restableció la situación antes del ataque a Vanguardia.[113] Siles trató de conservar la paz para poder seguir con las reformas de modernización y continuar fortaleciendo el Ejército, dado que la guerra, en su opinión, llevaría al país a una catástrofe (Crespo Rodas, 1985: 256-265). Sus opositores, los "halcones", encabezados por Salamanca, veían en la guerra el mejor modo de fortalecer moral y políticamente el Estado oligárquico. Ciertamente, necesitaban la victoria para superar la crisis social emergente, mediante una demostración de fuerza moral y de eficiencia de las élites gobernantes.

La llegada al poder del partido de la guerra, encabezado por Salamanca, terminó con los esfuerzos diplomáticos. Los círculos gobernantes, tanto en Bolivia como en Paraguay, sufrieron un complejo de inferioridad respecto a sus vecinos más exitosos, Chile y Argentina, que supieron causarles derrotas militares cuya magnitud y consecuencias catastróficas ejercieron una enorme influencia en la memoria histórica de las generaciones venideras. Salamanca representaba el sentido común predominante en la nación. Gustavo Adolfo Otero expresó del siguiente modo su admiración por el mandatario, un sentimiento compartido por mucha gente, sobre todo de la élite: "Es el único de los gobernantes bolivianos que habló con orgullo, con digno orgullo de boliviano" (1977: 197). La victoria en la guerra debía justificar su mandato y su lealtad a los postulados ideológicos liberales. La

113 Para mayor detalle sobre la historia diplomática del conflicto del Chaco, véase: Korableva, Liudmila, 2000: 132-157.

grave situación interna y la crisis del Estado oligárquico incitaron en los círculos gobernantes de Bolivia a desencadenar una guerra victoriosa con un enemigo, según ellos, débil y fácil de vencer. Para la oligarquía, la guerra con Paraguay debía ser la revancha de Bolivia por las derrotas pasadas y conjurar el descontento con la crisis del modelo económico y la crisis moral del Estado.

El chauvinismo y la histeria bélica se convirtieron en el único modo de lograr el consenso en una sociedad sumida en una profunda crisis económica, política y moral. Esa propaganda afectó a casi todas las fuerzas políticas, incluidos los grupos izquierdistas y nacionalistas que se oponían a Salamanca. Solo las pequeñas organizaciones anarquistas y los sindicatos que estaban bajo su influencia seguían, igual que antes de la guerra, con su propaganda pacifista, pero no contaban con algún respaldo de la sociedad.[114] Todos –barones del estaño, aristocracia terrateniente y capas medias– se manifestaron en contra de las conversaciones de paz con Paraguay.[115]

El tema del petróleo como causa de la guerra se hizo clave solamente con la derrota de Bolivia. Las organizaciones de izquierda, marxistas y nacionalistas, consideraban que el conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay se debía a la lucha por las zonas petrolíferas del Gran Chaco; afirmaban inclusive que detrás de Bolivia estaba la empresa norteamericana Standard Oil. Aunque esa versión se convirtió en un lugar común en la historiografía marxista, incluida la soviética, la participación de dicha empresa tras bambalinas no tiene pruebas y es negada por la mayoría de los historiadores actuales. Es posible que Paraguay pensara obtener los territorios petrolíferos que ya explotaban los bolivianos, pero esto adquirió rasgos reales solamente al final de la campaña, cuando las fuerzas bolivianas en retirada se aproximaron al lugar donde se encontraban los yacimientos petrolíferos. La Standard Oil permaneció asombrosamente indiferente y neutral en el conflicto. Existe la presunción de que esa compañía sabía aquello que los bolivianos conocerían solamente después de muchos años: en el Chaco no había reservas de petróleo y los yacimientos, ya descubiertos, no eran tan significativos como lo pensaban los políticos (Zavaleta Mercado, 1990: 46).

En mayo de 1931, Salamanca aprobó el Plan de Penetración Militar en el Chaco, con el objetivo de adelantarse a Paraguay, adentrándose lo más posible al territorio en litigio. Para financiar ese plan, el Gobierno obtuvo un préstamo "patriótico" de Simón I. Patiño por un monto de 50 mil libras esterlinas. Desde su mirada, la puesta en práctica de ese plan, sin duda, concretaría la guerra. Aprovechando un pequeño incidente fronterizo, Salamanca

114 RGASPI, fondo 495, legajo 79, número 53: 79.

115 FRUS, 1933, volumen 5: 1-6.

rompió relaciones con Paraguay en julio de 1931 y empujó al país al precipicio de la guerra, sin tener planes u objetivos estratégicos, sin explicar al pueblo –ni a sí mismo– sus causas y sus tareas. Simplemente, había que ganar la guerra, sin conocer las características específicas climáticas y geográficas del lugar, y sin tener idea alguna sobre las fuerzas y las posibilidades del enemigo. Peor aún, no estaba consciente del tamaño del conflicto ni de la capacidad boliviana de sobrellevarla; su lema era: "pisar fuerte en el Chaco". Salamanca estaba decidido a instaurar el régimen autoritario ganando la guerra. A fines de 1931, propuso el proyecto de la ley de defensa social, con clara orientación antiobrera y antihuelguista. Aunque el proyecto fue retirado del Congreso, su política antidemocrática, usando el pretexto de la situación de guerra, llevó a cabo su deseo de borrar del mapa político nacional a los sindicatos y a los partidos de izquierda.

Casi medio año después, el 6 de julio de 1932, un grupo de aviadores bolivianos detectó un lago en el Chaco. El 14 de julio, un destacamento militar de Bolivia, bajo el mando del mayor Óscar Moscoso, atacó el fuerte paraguayo López, a orillas de la laguna Pitiantuta –Chuquisaca, según la denominación dada por los bolivianos–. Pronto, los paraguayos lograron sacarlos del lugar. Según la versión boliviana, sus tropas no estaban atacando el fortín de Paraguay, sino que fueron agredidos por los paraguayos mientras acampaban al otro lado de la laguna. La noticia de los incidentes en el Chaco provocó manifestaciones masivas en La Paz. El delirio chauvinista incluyó a todos los partidos y los grupos políticos del país.

Salamanca, sin escuchar las razones del Estado Mayor, que pedía dos meses para concentrar a sus efectivos en la zona, ordenó en represalia ocupar los fuertes paraguayos Corrales, Toledo y Boquerón, el 18 de julio de ese año. Ante los manifestantes, desde el balcón del Palacio de Gobierno, Salamanca pronunció un discurso incendiario, una verdadera declaración de guerra a Paraguay. Inclusive el Partido Nacionalista, que había sido seguidor invariable de los postulados de paz de Siles, apoyó la política bélica. El 30 de ese mes, destacados políticos e intelectuales partidarios del Gobierno, como Alcides Arguedas, Ricardo Jaimes Freyre y Franz Tamayo, al igual que los opositores Carlos Montenegro, Enrique Baldivieso, Justo Rodas Eguino y Vicente Mendoza –que unos años después acusarían a Salamanca poco menos que de traición a la patria y de venderse a los intereses petroleros de la Standard Oil–, firmaron un llamamiento solidarizado con las acciones oficiales del Gobierno y, por supuesto, culpando a Paraguay de desencadenar la guerra (Klein, 1971: 154).[116]

116 Esos políticos nunca recordaron dicho llamamiento cuando acusaron de todo a Salamanca y a la Standard Oil.

Comenzando las hostilidades, los bolivianos ocuparon los fuertes Toledo y Boquerón, y prácticamente llegaron al río Paraguay. En agosto de 1932, llegó la contraofensiva paraguaya contra Boquerón. Las fuerzas bolivianas, desorganizadas, sufrieron la derrota en todo el frente y debieron abandonar aquel fortín. Con la esperanza de mejorar la situación, el mando militar fue entregado al general alemán Kundt, que había encabezado el Ejército boliviano en la década de 1920 (Klein, 1988: 236). Kundt concentró las fuerzas cerca del fuerte Nanawa, donde en julio de 1933 tuvo lugar una sangrienta batalla. Con una hábil maniobra, Paraguay derrotó a su adversario y, además, cercó a una parte del Ejército boliviano.

En la batalla de Nanawa y durante la retirada, Bolivia perdió tres cuartas partes de sus efectivos: diez mil soldados fueron hechos prisioneros y 28 mil cayeron muertos o desaparecieron. El enfrentamiento fue un total fracaso estratégico. La derrota de Nanawa incrementó los ánimos antibélicos en el país. Asimismo, se hizo patente la mediocridad de los militares que conducían la campaña y el Gobierno enfrentó dificultades infranqueables para el financiamiento de la guerra. Era prácticamente imposible contraer préstamos en el exterior, por lo que quedaban solamente dos fuentes: préstamos internos obligatorios e incremento de los impuestos a la exportación. Ambas medidas entraron en vigencia en 1934, causando un fuerte descontento entre los industriales mineros. Los barones del estaño tuvieron que otorgar al Gobierno un préstamo extraordinario.

La retórica patriotera, así como los gestos caritativos de Patiño y de otros oligarcas que declaraban su apoyo "a la patria en el momento difícil de esta prueba", además de la fraseología patética sobre la disposición del "sacrificio junto con su pueblo", ocultaban la absoluta indiferencia y la traición a los intereses de Bolivia. Patiño, más que todos, habló sobre su disponibilidad de apoyar hasta las últimas consecuencias a la patria combatiente, siendo que estaba directamente implicado en la venta de armas al enemigo. A su vez, la compañía francesa Schneider-Renault, en la cual Patiño tenía participación, obtenía enormes utilidades solo con ignorar las sanciones internacionales por vender armas a Bolivia y a Paraguay (*The Hemisphere*, 23 de agosto de 1940: 8).

Los fracasos en los campos de batalla convirtieron el delirio chauvinista en derrotismo y decepción hacia la política de Salamanca. Tras el descalabro en Boquerón, estallaron en La Paz bulliciosas manifestaciones contra el Gobierno y los militares. Salamanca declaró teatralmente su completa disposición de dejar el cargo, pero nadie quiso adjudicarse la responsabilidad en un momento tan crítico, por lo que fue convencido para quedarse en el sillón presidencial. Se desataron represiones contra los grupos y los periódicos de oposición, y también fueron expulsados del país muchos políticos y periodistas. Desde octubre de 1933, fue prohibida la circulación del diario

La República. Otros periódicos opositores, como *El Universal*, sufrieron la confiscación de su tiraje y el cierre provisorio (Knudson, 1986: 12).

El Partido Nacionalista se convirtió en la principal fuerza de oposición. Publicó un manifiesto a la nación firmado por su nuevo presidente, José Tamayo. El documento acusaba al Gobierno por el manejo fatal de la guerra, hecho que amenazaba al país con una catástrofe inminente, y llamaba a la unión nacional, pero sin proponer vías alternativas de salida de la crisis. Se invitó a los partidos políticos a crear un Comité de Salvación Nacional. Los autores de dicho manifiesto eran los líderes del partido Carlos Romero, Humberto Palza y Carlos Salinas Aramayo (Lorini, 2006: 150-151). Esa nueva generación de políticos, si bien todavía no planteaba la ruptura con los partidos tradicionales, mostró una profunda decepción por la conducta de la élite dirigente, incapaz de sacar al país de la catástrofe económica, militar y política. Entre los jóvenes nacionalistas se destacaron Montenegro y Céspedes, que gozaban de mucho prestigio por sus reportajes sobre la guerra, publicados en *El Universal*. Los artículos de Céspedes, notables por su estilo y profundos en su contenido, fueron la base de su libro *Sangre de mestizos: relatos de la Guerra del Chaco* (1936); revelaban a la sociedad la profundidad de la humillación y de la vergüenza nacional por la derrota en la guerra. Céspedes planteaba, inevitablemente, el tema de los culpables de la catástrofe.

La radicalización social afectó también a los saavedristas. Desde 1932, un nacionalista de izquierda, Pedro Silveti Arce, asumió la dirección del periódico del partido *La República*. En julio de ese año, el impreso lanzó la consigna para unir a toda la oposición: “En Bolivia se puede estar junto con la rosca o en contra de ella” (Knudson, 1986: 10).

En el Ejército creció el descontento y el derrotismo. Durante la batalla de Nanawa, la deserción se hizo masiva. En enero de 1933, en aquel lugar, se sublevaron varias unidades que terminaron abandonando las trincheras y exigiendo su envío a la retaguardia. En abril del siguiente año, se levantaron los cadetes de la Escuela Militar; sin embargo, fueron convencidos de entregar las armas. La tensión en el país iba en aumento.

Salamanca era intransigente. En julio de 1934, anunció que las elecciones presidenciales se realizarían en la fecha estipulada, el 11 de noviembre. El Partido Liberal y el partido saavedrista las boicotearon en protesta por la falta de libertades elementales y de garantías democráticas. Resultó elegido como presidente de Bolivia un partidario de Salamanca, célebre poeta y escritor, Franz Tamayo. En esos comicios participó solamente el 20% de los electores, lo que puso en duda la legitimidad de la elección del nuevo presidente (Brienen, 1996: 54).

Los resultados de la Guerra del Chaco mostraron los signos de la próxima derrota boliviana. El cambio de Hans Kundt por Enrique Peñaranda mejoró poco la situación. En septiembre de 1934, las fuerzas paraguayas, bajo el

mando del general José Félix Estigarribia, se lanzaron a una fuerte ofensiva. Sufriendo enormes bajas, principalmente por enfermedades, falta de agua y la inclemencia del clima, el Ejército boliviano retrocedió hasta las faldas de la cordillera de los Andes. La entrega de los fuertes en el río Pilcomayo, en noviembre de ese año, fue utilizada por Salamanca como pretexto para la dimisión de Peñaranda, que gozaba de un gran prestigio en el Ejército. El descontento por Salamanca efervescía en todos los sectores de la sociedad. La crisis de sus relaciones con el generalato provocó su arresto por los militares el 27 de noviembre de 1934, en Villamontes, donde se encontraba para destituir a Peñaranda.

1.9.2. Fin de la Guerra del Chaco: pérdidas y crisis

El jefe de la conspiración y gestor del derrocamiento de Daniel Salamanca fue su antiguo enemigo, el coronel David Toro, jefe del Estado Mayor. Sin embargo, lo protagonizó un joven de 30 años, ya en el rango de mayor: Germán Busch. En el Ejército, su nombre estaba envuelto en la aureola del héroe de la guerra y su palabra era orden acatada tanto por soldados como por oficiales. En parte, gracias a su apoyo, Toro y Enrique Peñaranda pudieron culminar su conspiración. Esa acción demostró que el mando militar se definía por los ánimos y las posiciones de los oficiales medios; en esa coyuntura, el líder indiscutible era Busch. Sin ayuda de Busch, el golpe no habría sido posible.

Los militares se negaron a reconocer los derechos de Franz Tamayo a la presidencia. Lo consideraban una figura de poco peso e incapaz de unir a la nación ante una hecatombe militar, más real que nunca. El Ejército impuso la entrega de las facultades presidenciales al vicepresidente, el liberal José Luis Tejada Sorzano. A diferencia de Salamanca, que despreciaba a los militares, Tejada Sorzano los embaucaba; lo hacía ensalzando sus hazañas en la prensa y en sus discursos oficiales.

Entre tanto, las fuerzas paraguayas se acercaron a la parte baja de la cordillera, a los yacimientos petrolíferos de Charagüa y de Camiri. Bajo amenaza directa estaba la ciudad de Santa Cruz. Los paraguayos, sin embargo, llegaron a la misma situación que los bolivianos a inicios de la guerra: ingresaron a un medio desconocido y hostil, muy separados de su retaguardia y de sus fuentes de abastecimiento, con comunicaciones débiles y lentas. Las fuerzas bolivianas, bajo el mando de Busch, usaban exitosamente las tácticas de guerrilla. Entre enero y marzo de 1935, el frente se estabilizó en la línea Villamontes-Camiri-Ñancaroinza. En abril, las fuerzas bolivianas pasaron a la contraofensiva, hicieron huir al enemigo y volvieron a ocupar Santa Fe y Pozo Blanco, pero no pudieron ampliar su éxito. En el frente se estableció un equilibrio táctico.

El 27 de mayo de ese año, en Buenos Aires, empezaron las conversaciones de paz. El 14 de junio, entró en vigencia el protocolo del cese del fuego.[117] Para Bolivia, la guerra fue de enormes pérdidas materiales y de una gran crisis moral. En el frente murieron 50 mil combatientes, es decir, la cuarta parte de los efectivos movilizados: el dramático 2% de la población. Bolivia se vio obligada a ceder 240 mil kilómetros cuadrados, correspondientes a dos tercios del territorio en disputa del Chaco boreal.

La campaña militar del Chaco mostró todos los defectos y también todas las debilidades del Estado boliviano. La derrota boliviana en la guerra tuvo un rol catalizador de los procesos sociopolíticos formados en el periodo de predominio liberal, demostrando la profunda crisis del modelo económico y de la estructura política del país. Si unos años antes, sobre la necesidad de reformas radicales en la vida de la nación hablaban solamente los políticos y los intelectuales avanzados, después de la guerra, esas ideas fueron asimiladas por capas más amplias de la sociedad. La inercia y la indiferencia criminal de los círculos gobernantes hacia los destinos de Bolivia, que se había ido sumiendo en la tragedia de la guerra, los privaba, a los ojos de la sociedad, del derecho al liderazgo político. De ahí que surgieron nuevos movimientos y líderes políticos, capaces de ofrecer una alternativa al sistema socioeconómico obsoleto. Las búsquedas de un camino de desarrollo futuro caracterizaron al periodo posterior a la guerra contra paraguay.

La crisis económica mundial y la Guerra del Chaco se convirtieron en un hito en la historia de Bolivia del siglo XX. Dicha crisis destruyó la economía del país, orientada completamente a la exportación de los recursos mineros hacia el mercado mundial. El inicio de la urbanización y la aparición de la industria en las ciudades abrieron otra expectativa del desarrollo nacional, con una nueva orientación económica: ampliación máxima del mercado interno como base de la expansión del capitalismo boliviano. Con ello, cambió el sistema de coordenadas de la vida social. En la agenda nacional estaban las reformas radicales de todas las estructuras económicas y sociales, sin las cuales no sería posible siquiera hablar sobre el desarrollo futuro. Esos cambios a escala nacional fueron apoyados y, en parte, causados por las nuevas tendencias de desarrollo del capitalismo mundial. La vieja economía liberal entró en un periodo de crisis orgánica, cuya salida se vislumbraba solamente por vía del fortalecimiento de la intervención del Estado. Los métodos y las formas de esa intervención estaban condicionadas por las tradiciones históricas concretas y por las condiciones nacionales de cada país.

117 El Acuerdo de Paz fue firmado el 21 de julio de 1938.

2

La crisis nacional de posguerra y el golpe militar socialista: el fin del liberalismo

2.1. La revolución de las ideas

La profunda crisis de la ideología dominante se constituyó en el final lógico de los procesos socioeconómicos de los primeros 15 años del siglo XX y en el inicio de los cambios en la estructura social de Bolivia. El rechazo a las nociones y a los conceptos ideológicos tradicionales provocó la denominada "revolución de las ideas", la cual coronaría las búsquedas espirituales de la generación comprendida en el periodo 1920-1930. La ideología, como parte de la hegemonía, al igual que la división social del trabajo, representaba uno de los elementos principales de la estructura de la sociedad; incluía ideas e incorporaba también la praxis material: hábitos, costumbres y modos de vida; es decir, la base de la vida de la sociedad civil. Por ello, esa crisis o revolución de las ideas fue la parte más importante de la crisis estructural, la cual hizo posible cualquier cambio político y social en el país; fue uno de esos factores fundamentales que influyó decisivamente en la formación del reformismo nacionalista boliviano, en la práctica política del régimen del denominado "socialismo de Estado". Sin el cambio ideológico de la década de 1930, no sería posible explicar el régimen militar-socialista y tampoco la Revolución Nacional de 1952.

Los protagonistas fundamentales de las luchas ideológicas de fines de la década 1920 y comienzos de la década de 1930 fueron los líderes políticos y los estadistas de ese periodo de la historia boliviana. Se trató de los dirigentes de los movimientos y de los partidos políticos, de ministros y de diputados; es decir, de los representantes de la élite política del país, cuyas búsquedas ideológicas estaban vinculadas directamente a las cuestiones prácticas de la vida estatal y social de Bolivia en la tercera década del siglo XX.

Con su fuerte sesgo nacional específico, los procesos ideológicos en Bolivia estuvieron fuertemente ligados a la tendencia general de desarrollo del pensamiento social en el continente. Durante esos primeros 15 años del siglo XX, tanto en Bolivia como en el resto de América Latina, predominaban el positivismo y el liberalismo. El positivismo representaba un fenómeno progresista del pensamiento social. Las ideas de Auguste Comte, Hippolyte

Taine, Ernest Renán y Herbert Spencer fueron muy populares en el país. Sus libros se convirtieron en la lectura obligada de los bolivianos ilustrados. Tales ideas fueron popularizadas por Benjamín Fernández, el "Comte boliviano". Los positivistas estaban convencidos de que el progreso era inevitable y que la evolución según la leyes naturales concluiría en la sociedad perfecta. Los principios fundamentales del liberal-positivismo y del determinismo económico, con la idea de la inevitabilidad del progreso, establecían el crecimiento económico y el autoperfeccionamiento del orden social, como también la plena libertad económica y la presencia mínima del Estado.

Los liberales veían en el desarrollo de Bolivia el atraso y los atavismos de las estructuras autóctonas, así como la incapacidad de progresar del habitante originario. Por tanto, era preciso corregir o "liquidar" el material humano existente en el país. De lo que se trataba era de subirse al "tren del progreso" socioeconómico. Orientados exclusivamente a Europa, consideraban que su tarea era asegurar para Bolivia la introducción de las leyes y de los estándares europeos de desarrollo socioeconómico. Los aliados naturales de los liberales social-darwinistas para la formación de una Bolivia modernizada eran el capital extranjero progresista y la civilización europea. Así, de acuerdo con su ideología y su estrategia, rechazaban todo lo nacional y lo autóctono.

En el primer decenio del siglo XX, al interior del positivismo y del liberalismo se fueron gestando nuevas corrientes. Bajo la influencia del poeta nicaragüense Rubén Darío,[118] en Bolivia apareció la escuela modernista, con grandes artistas como representantes, entre ellos Ricardo Jaimes Freyre, Franz Tamayo y Gregorio Reynolds, que apartándose del sentimentalismo y creando su propia estética tuvieron gran influencia no solamente en la literatura, sino también en el pensamiento social contemporáneo. El modernismo sirvió de base literaria, preparando la crisis dominante liberal-positivista. Empero, ni el positivismo ni el modernismo literario dieron respuesta a los problemas más agudos del país, dado que no correspondían a las inquietudes sociales de la intelectualidad. De hecho, los intelectuales se concentraron en el nuevo enfoque de la historia, por lo que dentro del positivismo liberal surgieron corrientes ideológicas que al analizar la realidad se alejaban cada vez más de los principios básicos del positivismo.

Entre los intelectuales que de una u otra manera revolucionaron las ideas sociales e históricas se destacaron escritores y pensadores bolivianos como Alcides Arguedas, Franz Tamayo, Ignacio Prudencio Bustillo y Jaime Mendoza. Sin embargo, sus contemporáneos no apreciaron sus obras. Los libros *La historia general de Bolivia* (1922), *Los caudillos bárbaros* (1929) y otros, de Arguedas, causaron indignación y protestas. Tamayo, a su vez,

118 Seudónimo de Félix Rubén García Sarmiento.

nunca fue aceptado y sus trabajos ni siquiera recibieron la atención del público; tuvieron que pasar dos decenios para que sus ideas se hicieran objeto de calurosas discusiones. Por otra parte, pocos compraban los libros de Prudencio Bustillo.

Darío escribió lo siguiente sobre esos destacados pensadores, literatos, periodistas y filósofos:

> Yo he tenido oportunidad de conocer a bolivianos de tanto valer, como [...] Franz Tamayo cuya viril juventud está llena de sapiencia; a Arguedas, que va por el camino de los triunfos [...]; al doctor Jaime Mendoza en quien quizá pronto se revele en nuestro continente un nuevo y distinto [Maksim] Gorki (en Condarco Morales, 1989: 75).

Justamente, los filósofos y literatos mencionados por Darío prepararon la crisis conceptual del liberal-positivismo. Además, fueron los precursores del indigenismo y del nacionalismo boliviano de las décadas de 1920 y 1930. La crítica al liberalismo y al positivismo tuvo su inicio en las filas del propio liberalismo, desilusionado por la política real de los liberales, cuyo régimen corroído por los fraudes electorales y el aplastamiento de la oposición había provocado el desencanto de muchos intelectuales bolivianos por los principios de la democracia y del progreso.

Prudencio Bustillo, autor de la obra fundamental *Ensayo de una filosofía jurídica* (1923), intelectual de gran prestigio e influencia entre la juventud universitaria, siendo positivista convicto, habló del fracaso de las ideas de la Revolución francesa, de los principios fundamentales de la democracia y de la libertad individual. Asimismo, profesó su simpatía hacia la Revolución rusa, considerándola un intento de crear una democracia "integral" que superara los defectos de la democracia tradicional (Francovich, 1985: 80). Sus ideas se constituyeron en un golpe serio a la ideología liberal-positivista e hicieron dudar de la vitalidad y de la aplicación de sus principios básicos.

Creador de la corriente filosófica conocida como "mística de la tierra", Mendoza planteó a principios del siglo XX el tema del indio y de su espacio natural en el hábitat andino. Basó su enfoque, puramente positivista, en la influencia del medio ambiente sobre la actividad humana; sin embargo, a diferencia de la admiración por Europa y la civilización occidental dominante de aquel entonces, él decantaba al indio y la naturaleza del Altiplano. Fue un místico pesimista; observaba la vida del país alegrándose y entristeciéndose al mismo tiempo. Escribió que Bolivia era "la tristeza hecha tierra" (1978: 7). Utilizando imágenes poéticas, se explayaba acerca de la eternidad y del indio aymara; decía que los hombres del Altiplano estaban hechos de piedra y que la piedra nunca moría, sino que se convertía en paciencia y en tiempo

(Marof, 1961: 168-169). Los personajes centrales de su libro *En las tierras del Potosí* (1911) son el viento, los cerros, el Altiplano. Para el autor, "el hijo de esta tierra es el indio y solo él encarna la grandeza futura de Bolivia" (Francovich, 1985: 98). Mendoza discutía con los que declaraban a Bolivia "un caso geográfico". Pregonaba su fe en el país y en sus habitantes, apoyándose en sus ejemplos de grandeza histórica y en la gran cultura de los antiguos pueblos quechua y aymara. Fue uno de los primeros en dejar de lado el enfoque eurocentrista de las interpretaciones históricas.

El indígena, como protagonista de la realidad nacional, vivía en el centro del pensamiento y de los escritos de Arguedas, una figura singular en la historia boliviana del siglo XX. El fue uno de los pocos escritores e historiadores reconocidos fuera de Bolivia. Participó activamente en la vida política, llegando a ser el líder del Partido Liberal en la década de 1930 y el creador de muchos mitos y paradigmas ideológicos. Arguedas debutó con los relatos *Pisagua* (1903) y *Wata-Wara* (1904), obras en las que demostró su gran interés por la cultura de los pueblos indígenas y por temas históricos. Fue el primer escritor boliviano en plantear el tema indígena como fundamental para entender el ser nacional. Su famoso libro *Raza de bronce* (1919) ha sido llamado "novela apostólica a favor del indio" (Finot, 1943: 339). Sus cuentos y novelas se destacaron por su colorido y frescura. No obstante, al inicio de su carrera, el público "ilustrado" de Bolivia ignoró al joven escritor. Arguedas se fue a Europa. Durante 20 años vivió en París, donde obtuvo un merecido reconocimiento como escritor. En 1909, publicó el libro *Pueblo enfermo*, que lo hizo famoso en todo el mundo. Después de leer ese libro, el célebre pensador uruguayo José Enrique Rodó escribió al autor:

> Los males que Usted señala con tan valiente sinceridad y tan firme razonamiento, no son exclusivos de Bolivia; son su mayor parte, y en más o menos grado, males hispanoamericanos [...]. Usted titula su libro: Pueblo enfermo. Yo titularía: Pueblo niño (Arguedas, 1992: V).

En ese ensayo socioculturológico, Arguedas planteó tres temas principales: la psicología de la raza, la práctica política y el destino histórico de Bolivia. Su primera tesis resulta fundamental: Bolivia es, en primer lugar, un país indígena. Arguedas describió la miseria y el atraso espantosos del campo boliviano, explotado en modo inhumano por la clase alta y el Estado. Se compadeció del indio, protestó por la crueldad de la sociedad hacia el hombre originario del continente y afirmó, al mismo tiempo, que los pueblos indígenas jugaron solo un papel negativo en la historia del país. Retrató al indio como un ser pasivo, lastimero, carente de deseos y de pasiones (*ibid.*: 39-43). El mestizo (cholo) era para Arguedas mucho peor que el indio, era un partici-

pante activo en la vida política que él odiaba y despreciaba. Para el escritor, el cholo representaba la flojera, la barbarie, el alcoholismo y los demás vicios de la vida social boliviana; reunía los peores rasgos de ambas razas, de los blancos y de los indios. El brillante escritor Carlos Medinaceli, con razón, subrayaba que tanto *Pueblo enfermo* como otros libros históricos de Arguedas estaban recargados de prejuicios de raza y de castas (Marof, 1961: 71).

En su obra *Historia de Bolivia*, de varios tomos, Arguedas arremetió contra el cholo, el egoísmo y las bajas pasiones de la plebe. En el acontecer histórico de Bolivia, el autor vio solamente el triunfo de la barbarie y de la decadencia de las clases ilustradas; vio traición, egoísmo y mezquindad en los gobernantes, quienes se apoyaban en la chusma, la cholada y la clase baja y vil en sus necesidades y en sus pasiones. Esas clases, desde su punto de vista, llevaron al país a un callejón sin salida, desde los ámbitos político y social. Arguedas llegó "a la desconsoladora conclusión de que la enfermedad que padece Bolivia no tiene remedio o necesita del heroico recurso del cauterio"[119] (Finot, 1943: 402). *Historia de Bolivia* es una larga crónica de crímenes y de bajezas de los cholos, de la masa, que sirvió de apoyo principal a los tiranos y a los dictadores militares. *Pueblo enfermo* y sus libros de historia, según el eminente periodista y ensayista Rodolfo Salamanca:

> […] latiguean, hieren, desgajan […]. Con un nuevo ingrediente desmembrador, puede constatar que la medicina aplicada a la diagnosis no ha sido propicia. Arguedas, en este orden, ha fracasado con un largo fracaso que puede transformarse, con el tiempo, en triunfo […]. Hasta ahora, sus libros combaten, pelean, y luchamos nosotros: con Arguedas o contra Arguedas (1947: 44).

Apasionadas, llenas de reproche contra la explotación y la barbarie, las páginas de *Pueblo enfermo* reflejan pesimismo y desconfianza en el propio país. Todo lo que Arguedas encontraba en Bolivia lo colmaba de tristeza; no veía perspectiva histórica alguna para su país si este no lograba librarse del atavismo indígena. Compartía plenamente la opinión negativa en boga sobre la viabilidad de los pueblos indígenas. Pero, junto con ello, fue el primero en demostrar que el atraso y la "barbarie" de Bolivia no fueron causados por factores externos, sino que eran una consecuencia de los defectos internos, la baja moral y la ausencia de aspiraciones nobles al interior de la sociedad.

Enrique Finot, historiador boliviano y connotado estudioso de la literatura, diplomático, ministro de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Germán Busch, con toda razón, escribió que la obra histórica de Arguedas

---

119 Agente mecánico o químico que sirve para quemar o destruir las partes mórbidas de un tejido. En forma figurativa, es un remedio enérgico.

estaba llena de pesimismo –presente mendiante metáforas heroicas– y de reproches al "pueblo enfermo" por sus fallos y deficiencias, pero que sus conclusiones no daban ninguna receta de solución a los principales problemas nacionales (Finot, 1946: 393).

Arguedas contrapuso el devenir progresivo de la historia universal a la realidad boliviana y, en consecuencia, colocó a Bolivia fuera de los marcos del progreso y de la civilización. Con tristeza y cariño poéticos, describía así a su patria:

> La pampa, en el invierno, da la impresión del mar, pero de un mar muerto, sin olas, sin furores, lúgubre, hostil. Allí no se sorprende la vida, sino la nada […]. De ahí la ausencia de toda poesía en las razas que lo pueblan (Arguedas, 1992: 16-17).

Según Marta Irurozqui, "Arguedas insistió en la progresiva e irreversible decadencia de la población indígena, la que confirmó a través del paisaje del altiplano, que se encontraba fatal e íntimamente unido a las características del comportamiento indio" (1994: 164). Arguedas trató de demostrar que en Bolivia no existía el progreso del cual hablaban los positivistas, sino que perduraba la perdición patológica de la raza y del país. A pesar de su fe en el progreso invencible e inevitable, sufrió profundamente a causa del atraso boliviano. Estaba convencido de que sus prédicas moralistas serían suficientes para promover los cambios y la reforma. Su biógrafo Gustavo Adolfo Otero subrayó que, más que filósofo o historiador, Arguedas era sobre todo un escritor moralista, herido por su pesimismo aplastante (1992: 114-132). Sin tener la cosmovisión pesimista, al seguir siendo liberal y continuar compartiendo las ideas de Comte, Arguedas asestó un golpe sensible a la idea de progreso, al optimismo histórico positivista. Con razón el investigador Antonio Mitre afirmó que las novelas de Arguedas habían contribuido a socavar el fundamento ideológico del poder oligárquico y, por tanto, a debilitar su control sobre la masa indígena del campo (2002: 106).

En razón de su negación pesimista de la historia boliviana, Arguedas se granjeó la reputación de reaccionario y retrógrado, convirtiéndose a los ojos de la intelectualidad progresista en el símbolo de la ideología oligárquica, racista y colonialista. Los jóvenes intelectuales rebeldes lo convirtieron en objeto de sus ataques constantes. Uno de los líderes juveniles, Tristán Marof, le enviaba artículos poco diplomáticos y, a menudo, simplemente groseros y sucios, que lo ofendían y lo humillaban. Los jóvenes nacionalistas Augusto Céspedes y Fernando Diez de Medina, ambos importantes políticos del régimen militar-socialista, lo atacaba permanentemente en la prensa, provocándolo para que les respondiera con sus amargas cartas.[120] Ellos olvidaban el

120 ALP-LML, Miscelánea, gavetas, número 32.

enorme aporte intelectual de Arguedas, sin intención, al socavar la ideología liberal-positivista.

Si bien las obras de Arguedas causaron la indignación y la protesta del público "ilustrado", la compilación de los artículos que Franz Tamayo había difundido en los periódicos de La Paz –y en los cuales había polemizado con Felipe Guzmán,[121] un representante de la escuela pedagógica normalista–, publicada en 1910 bajo el título *Creación de la pedagogía nacional*, fue apenas percibida y obtuvo solo algunas reseñas indiferentes. En aquellos tiempos, Tamayo todavía no había sido comprendido en toda su magnitud; su lector aún no aparecía. Tras transcurrir diez años, sus ideas fueron acogidas en las mentes de los jóvenes, para convertirse velozmente en el tema principal de las discusiones de los círculos y de los clubes filosóficos y políticos. Por todas partes, en efecto, aparecieron partidarios que desarrollaron las ideas de Tamayo en una dirección política inesperada y no deseada por el propio autor. Al pasar 20 años, aquel libro fue denominado el "Evangelio" del nacionalismo y del indigenismo en Bolivia.[122]

Tamayo nació el 20 de febrero de 1879, en una familia aristocrática, descendiente de caciques peruanos. Su padre, Isaac Tamayo, fue uno de los autores de la Constitución de 1879. Sus padres lo llamaron Francisco, pero, después, él adoptó la forma alemana de su nombre: Franz. No fue casualidad. Su admiración por la filosofía y la cultura alemanas quedó reflejada no solamente en el cambio de su nombre a la manera teutona, sino en la obra literaria del joven poeta. Desde muy joven, se entusiasmó por la poesía y se unió a los modernistas, asimilando su estilo y su manera de escribir. El gran historiador y sociólogo boliviano René Zavaleta Mercado, al referirse a Tamayo, señala:

> Su poesía se hizo solemne y solitaria su vida, frente a un medio que amaba y despreciaba y, al servicio de una fácil originalidad aterradora, fue perdiendo autenticidad, salvo en manifestaciones –que él consideraba secundarias– de su talento, como "LA CREACIÓN DE LA PEDAGOGIÁ NACIONAL",[123] cuya prosa poderosa, orgánica y majestuosa continúa perfectamente la personalidad de Tamayo (1990: 54).

En política, Tamayo cambió muy frecuentemente sus simpatías hacia diferentes personajes, sin dejar de ser un liberal ortodoxo. Empezó siendo un

---

121 Felipe Guzmán, futuro presidente de Bolivia (agosto-diciembre de 1925), fue senador e importante dirigente del Partido Repúblicano.

122 En 1944, la obra *Creación de la Pedagogía Nacional* fue reeditada por el gobierno militar-nacionalista de Gualberto Villarroel.

123 Énfasis del original.

acérrimo partidario del presidente Ismael Montes, convirtiéndose después en un opositor del partido gobernante. Tamayo fue periodista, diputado, ministro y fundador de dos periódicos: *Fígaro* y *El Hombre Libre*. Durante el Gobierno de Baustista Saavedra, fue representante de Bolivia en la Liga de Naciones, en la que trató de llamar la atención de las grandes potencias por el problema de la salida de Bolivia al mar. Junto a Tomás Manuel Elío y Daniel Sánchez Bustamante, fue uno de los fundadores del Partido Radical, de tendencias liberales ortodoxas. También apoyó a Saavedra y a Hernando Siles; después luchó contra ellos. Bajo el Gobierno de Daniel Salamanca, se postuló a la presidencia; si bien ganó las elecciones, no pudo asumir el cargo a causa del golpe militar.[124]

En su obra, Tamayo planteó varias cuestiones de la vida nacional que en aquel momento parecían retóricas. En el centro de su enfoque están presentes los problemas relativos a la formación del carácter nacional, de una nueva moral, de la ilustración y de la educación, aspectos que consideraba fundamentales para el desarrollo del país. De acuerdo con la investigadora Irma Lorini, Tamayo siguió la tradición liberal del siglo XIX, con la línea de pensamientos de Juan Bautista Alberdi y de Domingo Faustino Sarmiento, quienes de igual manera fueron admiradores de la industrialización europea y del progreso que esta trajo consigo (2006: 80). La gran diferencia es que Tamayo admiraba las cualidades de la población autóctona, mientras que los otros veían el futuro de su país en la inmigración europea. Para el pensador boliviano, la mayor importancia para la formación del individuo y del pueblo estaba en el pasado histórico y en el medio ambiente:

> La tierra hace al hombre, y en este sentido la tierra no sólo es el polvo que se huella, sino el aire que se respira y el círculo físico en que se vive [...]. La tierra hace al hombre; y es en la tierra que hay que buscar la última razón de su pensamiento, de su obra, de su moralidad (Tamayo, 1991: 147-148).

Tamayo describió su tierra natal con pinceladas toscas, mínimas, pero enérgicas. La soledad es la característica principal del paisaje de Tamayo, quien de esa manera personificaba la naturaleza. Para el autor, el Altiplano no servía para la vida, era hostil al hombre y al animal. En ese cuadro de naturaleza cruel, sin embargo, aparece un hombre especial, el indio aymara. Según Tamayo, "la tierra excepcional ha hecho también una raza excepcional" (*ibid.*: 160). En consecuencia, desde su mirada, el indígena se constituía en la riqueza central de Bolivia, pues tenía lo principal: energía.

124 En la década de 1940, Tamayo fue elegido como presidente de la Cámara de Diputados del Congreso, actuando desde posiciones conservadoras tradicionalistas, incluyendo el tema indígena-agrario (Frontaura, 1974: 130).

Al igual que Johann Fichte, Tamayo aseguraba que para entender el destino del país había que entender al hombre, visto como la unión de la energía y de la voluntad. Esta última, según el autor, precedía al pensamiento y, junto con la energía, era el fundamento y el inicio de la vida. En su libro de versos de 1924, Tamayo escribió que solamente la energía era capaz de renovar el pensamiento del creador (Ferrufino Llach, 1987: 81-82) y que era la suprema realidad humana, social e histórica, en tanto que el indio concentraba una enorme capacidad energética. De la energía, Tamayo decía: "es [...] lo que no se compra, lo que no se importa de ninguna parte, lo que no se puede plagiar jamás, y lo que justamente creemos que existe en nuestras venas" (1991: 47). Asimismo, señalaba que por "su gran vitalidad, por la incontestable superioridad energética latente e innegable de su sangre, parece el indio destinado a perdurar como raza y a mantenerse en la historia" (*ibid.*: 91).

Tamayo declaró abiertamente que la sociedad boliviana se basaba en el trabajo indígena. En sus palabras: "El indio es el depositario del noventa por ciento de la energía nacional" (*ibid.*: 58). También consideraba que el blanco, descendiente de los europeos, había conquistado América y al indio utilizando la supremacía tecnológica e histórica, pero que carecía de las fuerzas vitales para sostener la creatividad histórica y social. Para el autor, la única salida que tenía el blanco era el mestizaje, la unión con el indio, para recibir de este la energía y la fuerza; el blanco criollo, a su vez, tenía conocimientos y cultura, pero ¿qué importancia tenía para una nación cuya energía vital, o sea del indio, no influía en la historia y en el destino del país? Desde su perspectiva, el indio era opuesto al blanco como la voluntad y la energía lo eran a la razón y al intelecto. "La inteligencia no es la facultad eminente y dominadora del indio", escribió Tamayo (*ibid.*: 104). Igualmente, decía que aquello no era un defecto sino la ventaja principal del indio ante los blancos y los mestizos, por lo que no había que buscar en el indio ánimos decadentes, neurastenia y vicios intelectuales. De acuerdo con ese autor, el indio era sano física e intelectualmente, y tenía fuerza moral, lo que le daba superioridad moral y física (*ibid.*: 117).

Tamayo elevó al indio a la categoría de raza superior, la cual debía convertirse en el fundamento biológico de la formación de la nación boliviana. Mostró el camino hacia lo que denominó la "formación del carácter nacional". Se refería a la educación, a una pedagogía nacional propia que estuviera basada en entender el destino del país como nación y su misión en el mundo. Asimismo, señaló que los principios fundamentales de la vida nacional debían ser la fuerza, la energía, la voluntad y el egoísmo nacional.

En un momento en el que predominaba la visión positivista, con la idea de desarrollo y de progreso como predestinación de la humanidad, Tamayo, sin negar los valores de progreso ni a la civilización europea, dejó de lado

ese enfoque sobre la ciencia social y contrapuso la intuición, la energía y el sacrificio a la razón. Desde su óptica, la nación debía crear nuevos criterios sociales y económicos para transformar el país y, como sostenía Friedrich Nietzsche, crear una nueva escala de valores, más humanos, más racionales, más comprensibles y, al mismo tiempo, más egoistas desde el punto de vista de una nación (Reinaga, 1956: 134). Se pronunció en contra del democratismo liberal, del intelectualismo y del universalismo positivistas. A cambio de esos principios ideológicos, postuló el voluntarismo y el indigenismo radical.

Las ideas del mesianismo y del antieuropeismo aparecieron en aquel periodo no solamente en las búsquedas de los filósofos latinoamericanos. Un decenio después, en Europa, esa cosmovisión fue formulada por Oswald Spengler y Hermann Keyserling, que se convertirían en los ídolos de los pensadores radicales bolivianos. Mucho antes de la aparición de *La decadencia de Occidente* (1918), de Spengler, Tamayo había proclamado a la raza indígena como fundamento del renacimiento de Bolivia y del resto de mundo. Sin duda, hizo un gran aporte al superar el positivismo y el eurocentrismo del pensamiento social boliviano. Siendo, en palabras de Zavaleta Mercado (1986), un "*enfant* terrible" del liberalismo, pudo elevarse con sus ideas por sobre simpatías políticas propias. Incluso su prédica mesiánica abstracta constituía en el mismo esquema social darwinista, positivista, pero invertido: solamente puso al indio en el lugar del blanco (*ibid.*: 212-214).

A pesar de todo, los bolivianos sitúan el nombre de Franz Tamayo junto a los creadores de la filosofía del indoamericanismo: Víctor Haya de la Torre, Manuel Ugarte y José Vasconcelos. El mérito verdadero de Tamayo fue pronunciarse en contra de la "ideología extranjerizante" y de la "colonización ideológica", recurriendo al tema de la tierra como centro del problema del indio.

Aunque Tamayo no fue entendido por sus contemporáneos y quedó, según el filósofo boliviano Guillermo Francovich, como "un esteta y un pensador solitario, encerrado en una hermética torre de marfil" (1985: 64), su influencia fue de gran relevancia en el pensamiento social de las décadas de 1920 y 1930. Su obra dio inicio a las búsquedas espirituales de los intelectuales de aquella segunda década, no solamente en Bolivia, sino también fuera del país. José Carlos Mariátegui fue uno de los que se interesó por sus trabajos, algunos de los cuales fueron publicados en 1926 en la revista *Amauta*, que jugó un gran papel en la formación de una nueva generación de filósofos y de sociólogos, tanto en Perú como en Bolivia.

Arguedas y Tamayo, a veces sin proponérselo, socavaron con sus obras las posiciones dominantes del liberalismo y el positivismo en la sociedad.[125]

125 Tamayo odiaba a su rival intelectual Arguedas. A comienzos de la década de 1930, cuando se celebraba el centenario del nacimiento de Gabriel René-Moreno,

Sus ideas influyeron directa e indirectamente en la preparación de la revolución de las ideas en Bolivia, cuyas premisas empezaron a aparecer a mediados de la década de 1920.

2.2. Marofismo: el marxismo indigenista

Las ideas revolucionarias y antiliberales europeas llegaron a Bolivia en la década de 1920. El socialismo y el marxismo causaron un gran interés en la juventud, especialmente entre los universitarios. En la "Declaración de principios", adoptada en 1928 por la Federación Universitaria de Bolivia, se notaba el contenido puramente marxista. Aunque algún tiempo más tarde casi la totalidad de los estudiantes se entusiasmó con las ideas de Oswald Spengler, Hermann Keyserling y Franz Tamayo, el marxismo conquistó muchos partidarios y se entrecruzó con las ideas indigenistas. Una simbiosis ecléctica de ese tipo gestó el marofismo.

Gustavo Adolfo Navarro nació en Sucre en 1898. Se inició tempranamente en la lucha política,[126] participó activamente en el golpe republicano de 1920 y fue muy cercano al líder republicano y futuro presidente de Bolivia, Bautista Saavedra. Siendo muy joven, se dedicó a la literatura y al periodismo. Su primera novela, *Los cívicos* (1918), era un sencillo panfleto abiertamente politizado en defensa del republicanismo de Saavedra. En esa obra, Navarro presentó un cuadro impactante de la degeneración y de la descomposición social del liberalismo boliviano, que corrompía sus propios principios y sus bases ideológicas:

> Nada se había corrompido tanto como la Policía… Todos los hombres feroces de provincias, cuatreros y matadores, viciosos y cínicos por instinto recíproco convivían allí, en unión compañera y regalona sin más trabajo que martirizar, cuando caían ciudadanos opositores en sus manos con los tormentos más horribles (Navarro, 1918: 43).

El escritor criticaba la hipocresía de la élite política boliviana, que pisoteaba los principios declarados de libertad y democracia. El énfasis de sus primeras obras estaba puesto en la búsqueda moralizadora de la justicia y

---

inesperadamente, Tamayo habló en el Congreso, condenando tanto a Moreno como a Arguedas por la traición nacional y la difamación de la historia del país. Declaró que Arguedas era un imitador mediocre de René-Moreno, "pero más tonto y más vil" (Alcázar, 1946: 178).

126 Navarro integró un grupo de intelectuales que estaba en oposición al gobierno autoritario del Partido Liberal y se agrupaba alrededor del periódico *El Hombre Libre*, encabezado por Tamayo.

de la verdad. No obstante, junto con el antiliberalismo político y la prédica ética, se destacaba también la crítica intransigente al pesimismo social arguediano. Alcides Arguedas, el indiscutible ídolo de la intelectualidad boliviana de las dos primeras décadas del siglo XX, se convirtió por muchos años en una obsesión para Navarro, al que buscaba algún día destruir.

Aquellas fueron las premisas de las primeras obras de crítica literaria de Navarro: *Renacimiento Alto Peruano. Estudios filosóficos* (1918), *Cantos a Francia y a Bélgica* (1918) y *Poetas e idealistas de Hispanoamérica* (1919). Luego fueron publicados sus trabajos más sólidos y maduros, entre ellos las novelas *Suetonio Pimienta* (1926) y *La ilustre ciudad* (1950), que contienen una fuerte y aplastante crítica a las sociedades latinoamericanas. Su producción ya tenía una significación y un valor literario, un mensaje claro de su madurez artística, aunque lo más importante y notable en ellas son los temas de agudo interés social y su fuerza de convicción. El guatemalteco Miguel Ángel Asturias, premio nobel de literatura, en 1928 escribió que *Suetonio Pimienta* era "un libro claro por sus observaciones, para los que estamos cansados de oír cantar mentiras, de oír desfigurar los hechos" (Baciu, 1987: 199).

Los años vividos en Europa cambiaron su vida. Navarro llegó al Viejo Continente cuando apenas había cumplido 25 años. El auge revolucionario de posguerra y tanto las inquietudes como las búsquedas de la intelectualidad europea le causaron enorme impresión. Describió el estado de la vida social en el periodo de posguerra mundial en las siguientes palabras:

> El drama de la guerra nos ha abierto los ojos y todo nuestro romanticismo desordenado, indisciplinado y trágico ha caído por los suelos. Todos los ídolos yacen sin vida, vacíos y gesticulantes, al otro lado de una sociedad caduca y sangrienta. La sangre esparcida por el mundo nos ha purificado y las revoluciones están a la orden del día (en Francovich, 1985: 86.).

En Europa, Navarro evolucionó hacia la izquierda; sus simpatías estaban al lado del marxismo y del comunismo. Su posición antiimperialista y de izquierda radical resultaba incompatible con su puesto diplomático, razón por la que renunció a su cargo. Desde mediados de la década de 1920, se dedicó completamente a una labor literario-publicista y a la lucha política. Europa cambió no solamente el correr de su vida, sino su nombre. En 1921, inventó un seudónimo extravagante: Tristán Marof. En una entrevista que dio en 1967, contó la historia de su "rebautizo":

> Fue en París, allá por 1921. Escribí un libro que se llama "El Ingenuo Continente Americano" y como era cónsul, debía firmarlo con seudónimo, quise hacerlo, naturalmente, con el nombre de "Iván", pero un amigo español que

> tenía, Darius Forti, me sugerió que adoptara el nombre de Tristán. Acepté la sugestión y le dí el apellido de Marof, que ni siquiera es ruso,[127] sino búlgaro (en Abecia López, 1986: 87).

Ya en su obra *El ingenuo continente americano*, Marof destacaba los principios comunistas del incanato (1922: 140-141). El Estado comunista, en su interpretación, era sobre todo un Estado ético basado en la justicia; y uno de los rasgos del comunismo era el Estado productor, que desempeñaba una función económica. En el foco de su crítica sobre la vida cotidiana de Latinoamérica estaban los vicios del actuar político: el militarismo y la democracia politiquera. El autor insistía en que el obrero debía sustituir al soldado y al científico, al general; para que la democracia fuera verdadera, entonces, debía ser popular, obrera (*ibid.*: 123). Marof estaba aproximándose hacia el pensamiento izquierdista-marxista, y su lenguaje brillante y la pasión en exponer sus ideas le crearon el renombre de una estrella naciente de la izquierda latinoamericana, lo que llamó la atención de Henri Barbusse y de Romain Rolland, quienes propagaban la Revolución rusa y el comunismo. Ellos eran una especie de agentes de enganche de intelectuales para la Internacional Comunista.

Barbusse envió a Marof una carta entusiasta expresando su alta valoración de uno de sus artículos.[128] Entre ellos se estableció una relación amistosa. Barbusse escribió los prefacios para las obras de Marof y lo introdujo al círculo intelectual del más alto nivel; contribuyó bastante en la reorientación de las búsquedas ideológicas del joven boliviano, desviándolo del modernismo latinoamericano hacia el marxismo y el comunismo; y le presentó a los líderes comunistas europeos, que lo consideraron como portavoz y caudillo de los marxistas bolivianos, lo cual estaba muy lejos de la realidad. En Europa, Marof se integró al círculo de la intelectualidad progresista latinoamericana y española. Su nombre figuró junto con los "dioses olímpicos" de la intelectualidad de aquel momento: José Ingenieros, Miguel de Unamuno, José Vasconcelos, Miguel Ángel Asturias y Víctor Haya de la Torre, entre los fundadores de la Unión Latinoamericana, creada en París el 29 de julio de 1925.

El primer libro de Marof que tuvo resonancia continental fue *La justicia del Inca*, editado en Bruselas en 1926. En esa obra, Marof citaba por primera vez a Karl Marx y a Lenin,[129] y habla de la Revolución rusa. Asimismo, soste-

127 Marof decía que inclusive su amigo escritor español Pío Baroja lo creía ruso (Baciu, 1987: 42).

128 La carta fue publicada en el prefacio de *El ingenuo continente americano*.

129 Seudónimo de Vladimir Illich Ulianov.

nía que “la revolución americana no debe esperar el florecimiento capitalista. [...] el espíritu y la conveniencia deben precipitar la era socialista sin hacerse ilusiones de que un desarrollo de capitalismo sería antes necesario” (Marof, 1926: 15). Estaba convencido de que el continente, por su propia naturaleza, estaba destinado al cambio socialista. Decía que el continente americano era “el continente hecho para el socialismo donde tiene que dar sus más óptimos frutos” (*ibid.*: 14). También afirmaba que nuestro país, más que otros países vecinos, estaba preñado del socialismo, por las siguientes razones: primero, porque la mayoría de la población eran indios, que conservaban en su memoria histórica y en la estructura orgánica de la comunidad, del *ayllu*, las bases del comunismo incaico; y, segundo, porque era un país rico en recursos naturales, capaz de garantizar el bienestar para toda la población. Si Europa había recorrido varios siglos para llegar al socialismo y al comunismo, Bolivia lo tenía por naturaleza, por su pasado histórico: “Nuestro camino directo es ir hacia un comunismo netamente americano con modales y tendencias propias” (*ibid.*: 21-26).

Marof idealizaba el comunismo incaico,[130] el cual había establecido la fraternidad y la igualdad, pero estaba listo para sacrificar por esos objetivos la libertad y la democracia que, para él, eran nada más que “un privilegio de escogidos, de capitalistas, de aprovechadores” (*ibid.*: 24). Aceptaba la visión totalitaria del comunismo, según la cual, para poder transformar la vida económica y social, es necesario subordinar toda la vida del individuo a la integridad del modelo social. Admitía así las posibles restricciones de la libertad individual, tal como lo profesaban los leninistas. Marof decía: “Para el triunfo del verdadero comunismo no basta la reforma de una parte, ni apoderarse de las fábricas o de las minas: es preciso variar armónicamente el sentido completo de la vida de una sociedad” (*ibid.*).

El cambio al socialismo, para Marof, consistía en la nacionalización de los recursos naturales. Propuso el monopolio del comercio exterior, a fin de evitar el pillaje del país por el capital extranjero, medida que, según él, debía crear el capital nacional (Marof, 1926: 15, 31-39). De hecho, se trataba de un capitalismo de estado que contradecía toda su retórica socialista. Marof formuló un lema histórico: “tierras al indio, minas al Estado”.[131] Esa fórmula “mágica” lo convirtió en un líder de envergadura nacional. Solamente después de un año de la publicación de *La justicia del Inca*, el congreso obrero de Oruro lanzó la misma consigna.

130 Más tarde, Marof decía que su referencia hacia los incas no era otra cosa que una imagen poética y que nunca los había idealizado (Abadie-Aicardi, 1966: 94).

131 Esta consigna suele aparecer también como: “tierras al pueblo y minas al Estado” o “La tierra para quien la trabaja y minas al Estado”.

Marof llamaba a la fraternidad latinoamericana y a una revolución continental purificadora. Pero tenía sus contradicciones: en una página escribía sobre la solidaridad latinoamericana y en la siguiente dejaba ver que no creía en la amistad de los pueblos vecinos, cargados con el peso de los conflictos entre sí. Por ejemplo, como buen patriota boliviano, no podía aceptar ni siquiera la posibilidad de amistad y de unión con Chile, que había anexado el litoral boliviano después de la Guerra del Pacífico. Concluía su pasaje sobre la fraternidad americana de la siguiente manera: “Si Chile no existiera en Sudamérica, habría paz y mil veces el gran ideal de unión americana podía ser una realidad” (*ibid.*: 19). Era nada más que un nacionalista boliviano escondido en la terminología marxista.

En 1935, en Buenos Aires, Marof publicó un libro que ganó mucha popularidad: *La tragedia del Altiplano*. En él, desarrolló algunas ideas suyas ya expresadas en otras obras. En el centro de su análisis sociopolítico de la realidad boliviana estaba la cuestión indígena. Citando a José Carlos Mariátegui, Marof subrayaba que el problema indígena consistía no solamente en la educación y en la instrucción indígena, sino en la liberación efectiva del indio, devolviéndole las tierras usurpadas por los blancos y los criollos desde los tiempos de la Colonia. Para el autor, el indio era socialista y colectivista por naturaleza, y, por tanto, podía ser una base sólida de la formación de la futura sociedad socialista en Bolivia. El deber de los revolucionarios, decía, es hacer de los indígenas una “vanguardia, vincularlos con los mineros y los estudiantes” (Marof, 1934: 53). La solución a los graves problemas nacionales de Bolivia, según Marof, era la realización de un programa de transformación socialista, en cuyo centro estuviera la nacionalización de las minas, del petróleo y de los ferrocarriles. Estaba convencido de que aquello solamente se podía realizar por medios violentos y mediante una revolución social, rechazando los principios de la sociedad construida sobre la base de la propiedad privada: “Minas, petróleo, caídas de agua, suelo y subsuelo, es propiedad social de los trabajadores, de los que aran, siembran, recogen la cosecha y horadan las minas” (*ibid.*: 109).

En ese libro, Marof expuso por primera vez el programa marxista de la revolución: la reforma agraria, la liquidación del latifundio a través de la colectivización de la tierra, la socialización de los medios de producción y, al final, la industrialización. Decía que, caso contrario, se cumpliría la sentencia histórica del desarrollo capitalista: “países retardados y ricos son presa del imperialismo” y seguirán siendo pobres y atrasados (*ibid.*: 82-84). Fue el primer boliviano en perder la fe en el progreso por la vía capitalista. También presentó su esquema tan frecuentemente citado y fuertemente criticado sobre la estructura socioclasista de Bolivia. No cabe duda que su división de la sociedad boliviana en tres, blancos, mestizos e indígenas (*ibid.*: 19-21), fue una obvia simplificación indi-

genista y seudomarxista del cuadro social real muy complicado de Bolivia. Así, lo que había sido una correcta metáfora literaria perdía sus dotes y no pudo resistir la crítica científica sociológica; todo el mundo hizo sus críticas a esa teoría. No obstante, a pesar de sus evidentes fallas sociológicas, los bolivianos veían en esa fórmula literaria una expresión muy cercana a su realidad nacional. Marof, en una manera muy simple pero muy clara y precisa, muy al estilo seudomarxista de los eslóganes, expresó prácticamente lo mismo que escribían todos los indigenistas bolivianos, desde Franz Tamayo hasta Humberto Palza y Carlos Medinaceli. Subrayando el antagonismo entre los indígenas y el mundo blancoide-mestizo, Marof expresó:

> El indio no tendrá aliados sino cuando las circunstancias especiales le deparen. Su liberación depende de dos cosas: de su firme deseo de organizarse para la insurrección y tomar la tierra, y de la descomposición de la clase dirigente, incapaz de tenerse en pie (*ibid.*: 53).

Con ese cuadro clasista-racial de la sociedad boliviana, Marof, desde el punto de vista del marxismo-leninismo, propagaba la herejía, simplificando la teoría de la lucha de clases. Sin embargo, indicaba el punto más débil de todas las teorías izquierdistas eurocentristas, incluyendo el marxismo, que ignoraban la estratificación castista-racial de la sociedad latinoamericana, en la que estaban ausentes los grupos y las capas sociales intermedios que permitirían mantener el equilibrio y la flexibilidad de cualquier sistema social.

En *La tragedia del Altiplano*, Marof, una vez más, claramente subrayó que la lucha por una nueva Bolivia podía librarse solamente con la confrontación contra el capitalismo y el imperialismo. En sus palabras: "La propiedad privada nacional no puede hacer su curva en estos países sin caer en brazos del imperialismo extranjero. La propiedad tiene que convertirse en propiedad social, así como la iniciativa" (*ibid.*: 111). Para Marof, las tareas primordiales de la revolución antiimperialista y antifeudal estaban determinadas por sus fuerzas motrices, el proletariado y los campesinos-indios, que se confrontarían contra la casta de los explotadores, herederos legítimos de los conquistadores españoles, los blancos-criollos fieles aliados del imperialismo foráneo.

Con ese su libro, Marof dio inicio a un movimiento intelectual y social en Bolivia, el indigenismo izquierdista, que buscaba una síntesis con el marxismo. El propio pensador, aunque usaba la terminología marxista, se inclinaba hacia un indigenismo más moderado. En un texto publicado al mismo tiempo que *La tragedia del Altiplano*,[132] muchas de sus ideas aparecen como indigenistas.

132 Se trata de la introducción al libro de Ricardo Setaro, *Secretos de Estado Mayor*, publicado en 1936.

A veces, inclusive, parecería que no es Marof el que escribe, sino su perpetuo rival, Alcides Arguedas. Expone, por ejemplo: "En la realidad la vida de Bolivia se mantiene gris, opaca y sin brillo. Grandes talentos no existen. Grandes creadores tampoco. Ni siquiera grandes bandidos. Todo es mediano, achatado, sin color y sin matiz" (Setaro, 1936: 13). Ese fragmento, en efecto, aparenta haber sido tomado de las páginas de *Raza de bronce*.

Marof –y el marofismo– tuvo muchos seguidores entre la intelectualidad izquierdista radical, los estudiantes y los dirigentes sindicales. Su apasionada propaganda antiimperialista abrió las premisas para la formación de los influyentes movimientos políticos nacionalista y marxistas de izquierda en Bolivia. Él mismo jugó un importante papel político en la década de 1930.

2.3. El nacionalismo: la nueva generación

A mediados de la década de 1920, las obras del filósofo español José Ortega y Gasset fueron una verdadera revelación para la intelectualidad boliviana, sobre todo para la juventud universitaria. Su influencia en América Latina abarcó también a los que no estaban de acuerdo con sus ideas concretas sobre la realidad latinoamericana. Los intelectuales de Bolivia asimilaron del orteguianismo la crítica del eurocentrismo. Ortega y Gasset negó la visión positivista del hombre como un fenómeno unificado, universal, "masivo", y se pronunció en defensa del individuo contra la universalidad. Aquella contraposición de masa-individuo recibió una respuesta positiva de los bolivianos que oponían su individualidad, su peculiaridad nacional, a la universalización europea. La defensa de la individualidad de Ortega y Gasset justificaba la originalidad de la cultura y la historia local.

La teoría de la generación y la noción de crisis –que son parte de la concepción histórica de Ortega y Gasset– causaron un mayor interés en América Latina. La intelectualidad boliviana y principalmente los estudiantes asimilaron de esa teoría, en primer lugar, el llamado a la nueva generación de tomar consciencia de la falsedad de la cultura tradicional. La idea orteguiana sobre la contraposición de la cultura verdadera y de la cultura falsa fue para los bolivianos un real reflejo de su vida cotidiana: la coexistencia del mundo blanco-mestizo e indio.

El líder del movimiento estudiantil, Enrique Baldivieso, uno de los ideólogos del Partido Nacionalista –y futuro ideólogo del régimen del socialismo de Estado, de acuerdo con el esquema orteguiano–, planteó la consigna "ser la generación del centenario", como forma de lucha contra la "anticultura" liberal, creando una nueva república, una nación realmente independiente (Céspedes, 1956: 82-83). El orteguianismo fue el punto de partida desde el cual se formó el movimiento nacionalista durante la

presidencia de Hernando Siles (1926-1930). La rebelión de la nueva generación contra las viejas élites se expresó en la actividad de los jóvenes militantes del Partido de la Unión Nacional: Carlos Montenegro, Augusto Céspedes, Augusto Guzmán y el propio Baldivieso. En sus filas se formó una corriente ideológica del nacionalismo revolucionario, la versión boliviana del nacional-reformismo o populismo, convertido en las décadas de 1940 y 1950 en la ideología dominante en el país.

El nacionalismo surgió de la crítica al liberalismo y al positivismo como doctrinas políticas e ideologías. En la década de 1920, los jóvenes intelectuales Montenegro, Guzmán y Céspedes publicaron sus artículos en la revista *Arte y Trabajo*, editada por el filoanarquista Cesáreo Capriles, en la que criticaban los fundamentos del liberalismo y del eurocentrismo. El ideal de Montenegro era una nación sin castas y sin razas. En sus obras tempranas, advirtió su admiración por el autoritarismo y su negación del comunismo y del liberalismo (*ibid*.: 44-45). Por entonces, ya existía el germen del nacionalismo y una visión antidemocrática de la política y de la vida social.

En esa segunda década del siglo XX, tales ideas –o más bien sus premisas– no se unían todavía con las teorías de Franz Tamayo ni con el indigenismo. Posteriormente, su síntesis se constituyó en el fundamento de la teoría del nacionalismo revolucionario. A finales de ese decenio, Bolivia fue sacudida por una aguda crisis, no solamente económica-social, sino de la ideología liberal positivista imperante, del social-darwinismo. En ese escenario, la intelectualidad asimiló ávidamente las nuevas ideas venidas de Europa. Más que en ningún otro país latinoamericano, en Bolivia se impusieron con gran popularidad las ideas de Oswald Spengler y Hermann Keyserling, con su fe en el destino mesiánico de los países andinos. La juventud convirtió en sus ídolos a Gabriele D´Annunzio y a los ya citados Ortega y Gasset, Spengler y Keyserling. En agosto de 1929, este último visitó Bolivia y a sus charlas públicas asistió una multitud de estudiantes y de intelectuales. El país vivía una intensa vida intelectual. Las viejas ideas liberales y positivistas terminaron siendo archivadas definitivamente.

La literatura filosófica y sociológica se puso de moda. Los autores bolivianos publicaban obras inspiradas en las ideas de Spengler.[133] Se produjo el redescubrimiento de Franz Tamayo y creció la popularidad de Jaime Mendoza y de Alcides Arguedas. Aunque las búsquedas filosóficas y las acaloradas discusiones sobre la sociedad boliviana y las vías del desarrollo futuro del país transcurrieron inicialmente en los medios intelectuales, paulatinamente se

133 Por ejemplo, *La teoría de los ciclos y la realidad históric*a, de Félix Eguino Zabala (1929); *Spengler: algunas de sus ideas aplicadas a la realidad política de la América Hispana*, de René Ballivián Calderón (1929); y *La nueva concepción de la vida*, de Roberto Prudencio (1928).

fueron convirtiendo en el objeto de atención de toda la sociedad. Los bolivianos percibieron y sintieron la decadencia y la insuficiencia tanto de su sistema político como de la ideología dominante.

Las discusiones teóricas de la década de 1930 salieron de las aulas y adquirieron un significado político. El periodo de germinación de las nuevas ideas y de los conceptos sobre el desarrollo social llegó al nivel de necesitar producir un cambio espiritual, mientras que las teorías filosóficas y sociales se transformaban definitivamente en los paradigmas ideológicos que ofrecían a la sociedad determinadas vías de desarrollo. Se crearon nuevos conceptos y, lo que es más importante, objetivos y tareas de significación social para el desarrollo, que fueron paulatinamente acogidos por la sociedad. La hegemonía social pasó a aquellos círculos sociales portadores de esas nuevas ideas. Se realizaba, en definitiva, la revolución de las ideas, un prólogo a las transformaciones políticas y sociales.

La derrota en la Guerra del Chaco dio un cariz trágico a las búsquedas espirituales de la intelectualidad y agregó el sabor amargo de soledad al sentimiento de los bolivianos. Para llegar a ser una nación, había que ocuparse de sí mismos y, en primer lugar, conocer la esencia del espíritu y de la naturaleza nacionales.

Buscando su originalidad nacional, los bolivianos encontraron su sintonía con las ideas de Spengler y Keyserling. Este último admiraba los paisajes del Altiplano y hablaba sobre la predestinación especial de Bolivia. En una conferencia realizada en La Paz, en 1929, declaró: “Bolivia es, posiblemente, la parte más antigua de la humanidad; no se puede sentir mejor el futuro que desde el pasado lejano ya que el tiempo no tiene fin” (en Francovich, 1985: 112). Keyserling hacía un llamado para recurrir a las misteriosas fuerzas telúricas. Sus admiradores descubrieron de nuevo las ideas de Tamayo y de Mendoza, quienes en la tierra, en el medio ambiente, veían el factor decisivo de la formación del hombre, de la raza, de la nación.

De ese modo, en esa década surgió en Bolivia una escuela filosófico-literaria, llamada “telurismo”, con muchos puntos comunes con el indigenismo. Las teorías de Spengler, de Tamayo y de Mendoza fueron desarrolladas por los teluristas: en la filosofía por Roberto Prudencio y Humberto Palza; en la historiografía por Federico Ávila; en la literatura y en la poesía por Carlos Medinaceli, Fernando Diez de Medina y Primo Castrillo; en la pintura y en la escultura por Cecilio Guzmán de Rojas y Marina Núñez del Prado; y en la música por Eduardo Caba.

En sus últimas producciones, Mendoza formuló los fundamentos del telurismo o, como se autodenominaban, de la “mística de la tierra”. Participó activamente en la vida política de esos años, hizo periodismo, dictó conferencias y colaboró con el Instituto Sociológico Boliviano –de corte marxista–, formador de los dirigentes de los nuevos partidos de izquierda. Sus obras, junto con las

de Tamayo, se constituyeron en la base metodológica de todas las nuevas ideas de las corrientes indigenista y nacionalista, siempre antiliberales. Consideraba que la tierra y el medio ambiente creaban el carácter del pueblo y eran la condición de la inmortalidad de la nación boliviana:

> "El medio hace al hombre". O de otro modo: el hombre no es sino su propio medio plasmado en forma de personalidad humana. El agua que bebemos, el aire que respiramos, la luz que nos alumbra, los alimentos que nutren nuestro organismo, se están haciendo cada día en nosotros pensamiento, emoción, voluntad, acción. Creemos obrar por propia iniciativa, y estamos obedeciendo las imposiciones de nuestro medio. Él marca el ritmo a nuestra vida. Una montaña, un río, un bosque, nos dictan normas. Y ni la estrella lejana que vemos en el cielo ni la humilde yerba que pisamos son ajenas a nuestro dinamismo vital. [...] Así también el medio es forjador de razas y creador de naciones. Forja los lazos que atan, unos con otros, los grupos humanos, les da el aire familiar que tienen, crea sus tradiciones, hace su historia (1941: 12-13).[134]

Mendoza desarrolló el concepto de una nación boliviana joven cuya formación todavía estaba lejos de concluir. De acuerdo con Irma Lorini:

> En las obras, aparecidas después de la guerra, ya no existe el pesimismo arguediano a pesar de la derrota, en ellas hubo más bien una constante evocación a la historia, a la cultura ancestral, al medio o paisaje boliviano como factores aglutinantes que debían unificar a la nación (2006: 106-107).

Las ideas de Mendoza fueron retomadas por Montenegro, Céspedes y otros nacionalistas revolucionarios. Por otra parte, en la filosofía y en la literatura sociológica, encontraron su desarrollo en autores más radicales todavía, como Prudencio y Palza.

Después de la Guerra del Chaco, en los medios políticos e intelectuales bolivianos, jugó un destacado papel el profesor universitario Roberto Prudencio. Junto con los excombatientes y los estudiantes de oposición, creó el grupo nacionalista La Estrella de Hierro, que llegó a ser una fuerza política influyente. Fundó la revista *Kollasuyo* (1939), convertida luego en la tribuna del nacionalismo radical. Publicó *La nueva concepción de la vida* (1928), una especie de manifiesto antiliberal y antiracionalista. Fue seguidor del irracionalismo

---

134 Nota de edición (NE): Véase también: Mendoza, Jaime, *El Macizo Boliviano y El factor geográfico en la nacionalidad boliviana*, obra número 37 de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia (BBB), "Historias y geografías" (La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2016: 285).

de Arthur Schopenhauer y del telurismo de Mendoza. El punto de partida de su concepción fue el concepto de la vida como un impulso, un salto en el tiempo, un desafío al mundo (Albarracín, 1982: 28). Analizando la historia de Bolivia, llegó a la convicción que el "sentir" de la tierra, la geografía y el paisaje formaban al hombre y a la nación. Para él, la cultura era nada más que la expresión formal de lo irracional, de lo telúrico. Buscó una fuerza biológica, una voluntad capaz de crear un nuevo ciclo cultural que condujera a Bolivia a la grandeza. Igual que Tamayo, Prudencio encontraba esa fuerza en el indio.

Junto con Prudencio, a mediados de la década de 1930, Palza se convirtió en otro teórico del telurismo. Sus ideas fomentaron a los ideólogos del socialismo de Estado. Después de publicar *El hombre como método* (1939), pasó a ser el líder de una nueva corriente filosófica que desplazó totalmente al positivismo de la ciencia y de la vida intelectual. El postulado central de Palza era la absolutización del espíritu de la tierra, portador del imperativo geográfico que influía en el individuo y en la sociedad, condicionando la forma y el modo de vida del ser humano. Consideraba al hombre como la expresión del espíritu de la tierra, de las fuerzas telúricas. Su obra partía de la concepción del "hombre-cosmos" del filósofo alemán Max Scheller, en la que el hombre era la medida y la personificación del universo. Siguiendo a Tamayo, a Mendoza y a Keyserling, Palza veía en la tierra una energía cósmica sin la cual el hombre no era capaz de concebir el mundo ni su propia alma (*ibid.*: 87-91).

Palza también planteó la cuestión principal que inquietaba a sus compatriotas: ¿qué significaba ser boliviano? Buscando la respuesta, trató de explicar el fenómeno de la cultura boliviana. Afirmaba que la cultura era una transición desde el caos y el desorden a lo individual, lo particular –autóctono– y lo armónico –con el medio ambiente–. Aceptó como axioma la idea de Spengler sobre el ocaso de Europa y llamó a buscar las bases autóctonas de Bolivia. Según él, no existía una cultura universal, como tampoco hombre ni humanismo universales. Decía que cada persona y cada cultura eran sociogeográficas; un hombre indoamericano, por tanto, sentía y pensaba a su manera, y no fuera de sus vínculos con la tierra.

Para Palza, igual que para Tamayo, el indio –como individuo y como comunidad– era el que estaba más ligado a la tierra (Francovich, 1985: 126-129). Por tanto, los bolivianos, en busca de su identidad, debían recurrir al espíritu de los Andes y a la "energía cosmica" de la raza indígena. Con dolor y enojo, Palza escribió: "Bolivia es grande, Bolivia es bella, Bolivia es rica, pero [es] desconsolador que millones de gentes en el mundo no sepan ni que es grande, ni que es bella, ni que es rica" (en *Kollasuyo*, número 64, 1946: 303). Buscaba una idea de lo nacional capaz de unir al pueblo para lograr la grandeza de Bolivia. Un ejemplo de ello era el nacional-socialismo alemán. Palza fue un ferviente admirador de los regímenes totalitarios, a los que consideraba capaces de concentrar

la voluntad y la energía de millones de personas en nombre de los "idearios de la nación". Incluso después de la derrota del Tercer Reich, siguió creyendo en Adolf Hitler y en su misión histórica para Alemania (*ibid.*: 302).

Las ideas de los teluristas significaron una ruptura definitiva de los intelectuales con el pasado liberal-positivista; marcaron la superación del eurocentrismo fuertemente enraizado en la teoría y en la práctica de la vida política y social del país. Las conclusiones prácticas de los ideólogos de la nueva generación de políticos bolivianos fueron naturalmente diversas: partiendo de las ideas teluristas, muchos evolucionaron hacia el nacionalismo revolucionario, y su irracionalismo llegó a aprobar la teoría del corporativismo y del fascismo.

El irracionalismo y el voluntarismo ofrecían nuevas perspectivas de desarrollo social, pues rompían con el pasado "positivo", con la democracia, con el liberalismo e incluso con los valores cristianos. Los teluristas y sus seguidores, en cambio, adoptaron la fórmula nietzscheana: "Dios ha muerto". Sus ideas no eran una extravagancia puramente boliviana. El irracionalismo también afectó profundamente el pensamiento en el Viejo Mundo. En 1930, Thomas Mann, en su discurso "Un llamado a la razón" –pronunciado en Berlín–, afirmó que el irracionalismo del siglo XX había despertado las fuerzas de lo inconsciente, fuerzas turbias que practicaban el mal, negaban el espíritu y la razón, y alababan contrariamente la oscuridad del alma, la voluntad ciega y el instinto. De esa adoración casi religiosa a la tierra, al terreno, a la naturaleza, sacaron sus ideas el nacional-socialismo en Europa y las diferentes corrientes del nacionalismo radical en América Latina. El voluntarismo negaba las fuerzas suprasubjetivas u objetivas, como también el sentido de la historia; postulaba la capacidad de los líderes nacionales de dirigir el proceso histórico, cambiando así el destino de la nación con un esfuerzo voluntario, lo que para muchos bolivianos significaba la única posibilidad de salir del círculo vicioso de la dependencia y del atraso.

Los seguidores del telurismo –como Carlos Medinaceli– trataron de desarrollar las ideas de Tamayo recurriendo a Friedrich Nietzsche y a Henri Bergson, apartándose de las nociones elementales de Keyserling y acercándose tanto al existencialismo como al fenomenologismo (Albarracín, 1982: 22-23). Para ellos, el indoamericanismo, sobre todo el aprismo peruano, representaba una especie de alternativa ideológica al paradigma del capitalismo occidental. Predicaban la creación de una cultura universal basada en el mestizaje y en la asimilación mística del "espíritu cósmico de la tierra", de la indigenización de la sociedad boliviana.

2.4. La experiencia de las escuelas *ayllu*

El indigenismo apareció en reacción al modernismo, como una búsqueda de sinceridad y sencillez artísticas, como la tentativa de aproximarse a la realidad

nacional. Aunque el indigenismo, en tanto corriente ideológica, apareció en la década de 1920, solamente después de la Guerra del Chaco adquirió significado político y empezó a jugar un papel importante. Siguiendo a Franz Tamayo, los indigenistas consideraban a los quechuas y a los aymaras como las bases biológicas de la nación; por eso en el centro de sus estudios estaba la cultura indígena. Inicialmente se formó el indigenismo literario, cuyos representantes más tempranos y destacados fueron Alcides Arguedas –en su versión costumbrista– y más tarde Carlos Medinaceli y Jesús Lara. Aparte de las corrientes filosófico-literaria y política, el indigenismo tuvo una tercera dirección, la educación, en la cual se distinguieron dos escuelas opuestas: la colectivista y la normalista.

Encabezaron la corriente colectivista del indigenismo educativo los profesores entusiastas Elizardo Pérez, Toribio Claure y los esposos Castro. El primero, fundador de ese movimiento, ocupó cargos de importancia en los Ministerios de Trabajo y de Educación durante el gobierno de los militares-socialistas en la década de 1930; asimismo, apoyó activamente el régimen y fue uno de los fundadores del Partido Socialista Obrero Boliviano. El 2 de agosto de 1931, Pérez creó la primera escuela *ayllu* en Warisata, cerca de La Paz.[135] Dicha escuela representaba una forma de unión entre el trabajo y la educación, bajo los principios del colectivismo. Pérez aspiraba a crear la escuela con el "alma boliviana", fundada en los principios sociales del incanato (Pérez, 1962: 478). Inspirado por las ideas de Tamayo, llamó a su teoría "pedagogía de la liberación".

Aunque la oligarquía tildó el experimento de Pérez de comunista y subversivo, lo toleraba. Prefería su actividad educativa a la propaganda revolucionaria de los partidos de izquierda. Pero entre los remezones de la profunda crisis de las ideas, la oligarquía oponía toda su resistencia al ingreso a Bolivia de las nuevas ideas de Occidente. En ello coincidía con las aspiraciones de Pérez, que predicaba el aislamiento y también negaba todo lo europeo –sea avanzado o atrasado–, al que consideraba por igual ajeno a la vida boliviana.

En febrero de 1938, Pérez escribió una carta a Graciano Sánchez, director del Departamento de Asuntos Indígenas de México, señalándole que la doctrina y la filosofía que seguía estaban orientadas, de un lado, a la cultura prehispánica y, de otro, a la organización moderna sobre las bases colectivistas, hacia el restablecimiento del sistema incaico de la agricultura, basada en la comunidad indígena, en el *ayllu*.[136]

Pérez negaba la revolución y los levantamientos como forma de lucha; consideraba que solamente la comunidad y la escuela *ayllu* podían resolver todos los problemas socioeconómicos de los indígenas. Por otra parte,

135 En 1937, durante el Gobierno de Germán Busch, el 2 de agosto fue proclamado el Día Nacional del Indio.

136 AHGE-SRE, fondo 30, legajo 3, expediente 16.

no apoyaba los llamados a la reforma agraria y la redistribución de la tierra, ya que era adversario de la transformación social del agro boliviano. Efectivamente, sostenía que en Bolivia no había un problema de tierra, sino de falta de población (*ibid.*: 462). El indigenismo de Pérez era utópico y conservador, pues temía que la expansión de la civilización europea absorbiera y destruyera la civilización indígena. Prefería la autarquía y el aislamiento del mundo indígena, para cuya preservación y defensa frente al mundo exterior y al capitalismo proponía un instrumento efectivo, la escuela *ayllu*, una forma de reproducir la vida comunitaria.

En el movimiento por la educación de los indígenas había una corriente opuesta a las posiciones de Elizardo Pérez, la de los partidarios de la occidentalización del mundo indígena, de su españolización. Uno de los ideólogos de esa corriente, Rafael Reyeros, en febrero de 1937, en uno de sus polémicos artículos escribió que lo más importante era entregar al indio nuevos mecanismos de trabajo, adaptarlo a la nueva vida económica y crear nuevos estandartes y costumbres, y que eso podía ser realizado por la escuela, puesto que –según decía– no existía ningún terrateniente, comerciante, que no viera ventajoso para sí la educación del indio, porque así fomentaba la producción propia y sus ingresos (en *La Crónica*, 5 de febrero de 1937). En 1936, Reyeros había creado la Escuela Rural Utama, en Caquiaviri (La Paz). A pesar del apoyo oficial, su movimiento fue de fugaz existencia.

Tanto la educación indígena como las obras de los maestros indigenistas lograron una influencia importante en las discusiones ideológicas de aquel entonces. El indigenismo estaba compuesto por varias corrientes diversas, entre las cuales se destacaban dos totalmente opuestas: una racista indianista y otra revolucionaria izquierdista. El periodista y estudioso de la literatura Carlos Medinaceli, autor de numerosas obras dedicadas a temas socioculturales, era un destacado representante de los indigenistas revolucionarios. En la década de 1930, participó activamente en la política; fue uno de los dirigentes del Frente Popular de Potosí, que prácticamente gobernaba en esa ciudad. En 1938, fue elegido a la Asamblea Constituyente, en la que fue uno de los líderes del bloque obrero.

Para Medinaceli, la derrota de Bolivia en la Guerra del Chaco representó el "fin de la raza", de la oligarquía blanca; el fracaso de la clase gobernante de la Bolivia criolla. Su ánimo pesimista de entonces se manifestó mediante una frase lapidaria: "País de montañas muy grandes y de hombres muy pequeños". La catástrofe nacional significó para cada boliviano una derrota personal, un sufrimiento y una humillación individual. Medinaceli sentía profundamente la tragedia personal de un país sin futuro. Según su filosofía, "el yo individual fracasa donde no se realiza el yo nacional" (Zavaleta Mercado, 1990: 55-56).

A diferencia de sus antecesores pesimistas e irracionales, Medinaceli consideraba el indigenismo como una ideología revolucionaria para la forma-

ción de un hombre nuevo. Sus maestros fueron los peruanos José Carlos Mariátegui y Uriel García, más que Tamayo o los teluristas bolivianos (Medinaceli, 1969: 122). Idealizando el régimen incaico, sin embargo, predicaba la lucha por un indio nuevo, llamando a toda la sociedad boliviana a franquearse ante el indígena. Escribió que el problema del indio era, más bien, "el problema total del boliviano frente al indio" y que de cómo lo resolvamos "depende[rá] nuestra existencia futura" (*ibid.*: 140).

Medinaceli se alejó del idealismo literario paternalista y conservador, y, siguiendo a Mariátegui, llamó a resolver, en primer lugar, los problemas socioeconómicos del campo y, con ello, los de todo el país. Decía: "Es justo y urgente [...] por la reinvidicación social del indio, por su incorporación a la vida boliviana y por su culturización" (*ibid.*). El indigenismo revolucionario puso en la agenda política nacional las cuestiones indígena y agraria, que ningún partido pudo ya prescindir. Las búsquedas filosóficas, literarias y culturológicas del indigenismo se constituyeron en las las bases ideológicas de las nuevas corrientes políticas, como el nacionalismo revolucionario y las diversas orientaciones del marxismo y del socialismo bolivianos.

El cauce más influyente fue el nacionalismo revolucionario, una variante boliviana del nacional-reformismo. Sus ideólogos, Carlos Montenegro, Augusto Céspedes, Wálter Guevara Arze y Víctor Paz Estenssoro, declararon su adhesión al indigenismo, al indoamericanismo de la Alianza Popular Revolucionaria Americana e incluso al marxismo. En la intelectualidad boliviana, de hecho, tuvo gran influencia el aprismo. Uno de sus ideólogos, Manuel Seoane, visitó Bolivia en 1927 y escribió su famoso libro *Con el ojo izquierdo mirando a Bolivia*. En esa obra, planteó los temas más agudos: la nacionalización del estaño y la reforma agraria. Muchos postulados del aprismo fueron asimilados e integraron luego el arsenal ideológico del nacionalismo revolucionario.

Montenegro fue el ideólogo de este movimiento político y uno de los fundadores, en 1935, de la Confederación Socialista. Él y sus compañeros socialistas compartían ideas del nacionalismo agresivo y profesaban la supresión de los intereses "egoístas" del individuo en nombre de los intereses supremos de la nación; consideraban que la democracia era un obstáculo en el camino hacia la grandeza de Bolivia. Montenegro idealizaba los métodos autoritarios y totalitarios de gobierno, así como la supresión de las libertades y de la democracia. Formuló el concepto de 'revolución nacional'. Afirmaba que desde la Colonia, en Bolivia, existían dos polos: la nación y la antinación –o antipatria–. Esa terminología la copió de los falangistas españoles que, a su vez, la hicieron suya de los nazis alemanes. Para Montenegro, con la llegada de la independencia al país, la nación (el pueblo) quedó aplastado por la antinación (la oligarquía) (1979a: 71-82).

Este intelectual, que dirigió su crítica más mordaz contra la ideología liberal-positivista, puso el signo de igualdad entre la oligarquía y el imperialismo. Sostenía que la oligarquía trataba de sembrar en el suelo boliviano la cosmovisión europea, contraria a los principios autóctonos, "verdaderamente nacionales". Negaba la viabilidad de cualquiera doctrina o concepto europeo social para Bolivia. Escribió que la ideología liberal –puramente europea– que profesaba el régimen fue, asimismo, "impuesta al pueblo, sólo como otra expresión de dominio del extranjero" (*ibid.*: 191).

Desde su perspectiva, la revolución nacional tenía un carácter político y no social, pues de lo que trataba era de liberarse de la dominación colonial externa que oprimía a todas las clases de la nación, sin exclusión. La oligarquía había formado el super-Estado, que dominó al verdadero Estado, usurpando su soberanía. Montenegro llamó a los nacionalistas a dirigir la lucha principal contra ese super-Estado. La revolución consistía –para él– en restablecer la soberanía, sacar a la oligarquía del poder y cumplir los objetivos antiimperialistas; era un acto "conservador" que restablecería la justicia histórica –entendida metafísicamente–, que liberaría al Estado, es decir a la nación, del dominio del super-Estado o, lo que es lo mismo, de la oligarquía (Zavaleta Mercado, 1983: 66). Montenegro consideraba que el proletariado, siendo la vanguardia de la nación, no tenía futuro si no se fusionaba con otras clases. En su concepción, la oligarquía había dividido al pueblo, sumiéndolo en el abismo de la lucha de clases. De ahí la tesis referida a que la oligarquía impedía la unidad del pueblo y que este, por consiguiente, lograría de nuevo su unidad mediante la revolución nacional y creando una sociedad armónica, sin contradicciones, sin lucha de clases (Zavaleta Mercado, 1978: 523-524).

Montenegro y Céspedes, compañeros en el diario *La Calle* –que empezó a circular en 1936– y del partido socialista del periodo del socialismo-militar, en sus trabajos periodísticos, históricos y literarios, como también en sus prácticas políticas, formularon los principios fundamentales del nacionalismo revolucionario. No todos los nacionalistas "románticos" de la época de Hernando Siles pasaron con Montenegro al campo del nacionalismo revolucionario, antidemocrático y agresivo. Muchos de ellos, bajo la influencia del indigenismo y de la reforma universitaria, se inclinaron hacia las ideas marxistas y socialistas de izquierda, como Alberto Zelada Valda, cuyas ideas fueron cercanas a las de los nacionalistas moderados y los indigenistas.

Zelada Valda fue uno de los políticos más brillantes de aquellos años. Llegó a ser el ministro más joven del Gobierno de Germán Busch y hombre de confianza del entonces presidente. En su libro *Kollasuyo* (1933), sostuvo la tesis de la continuidad de la nación boliviana desde la civilización incaica. En su cosmovisión tuvo gran influencia la obra *El sentido humanista del so-*

cialismo (1926), de Fernando de los Ríos,[137] cuyo tema principal planteaba la necesidad de unir la democracia y la libertad, postuladas por el liberalismo, con la justicia social del socialismo. En tanto propagandista activo de las ideas del socialismo humanista, Zelada Valda afirmaba: "Profesamos el socialismo, propugnamos lógica y coherentemente la reorganización del país sobre bases socialistas y proclamamos que este es un instante de nuestra historia en que no es posible ser efectivamente nacionalista y revolucionario sin ser socialista" (en Francovich, 1988: 126). Si bien trató de compatibilizar los principios de la democracia y del liberalismo con el nacionalismo, en una época de crisis y de aguda lucha de los extremos, tales ideas pacificadoras no tuvieron éxito. No obstante, su actividad y sus puntos de vista ejercieron una gran influencia en el contenido de la nueva Constitución, aprobada por la Asamblea Constituyente en 1938. Su pensamiento fomentó la teoría y la práctica del socialismo de Estado

Finalizando la década de 1920, ya se advertía la presencia del marxismo en Bolivia. Los libros de Lenin, Nikolai Bukharin y Leon Trotsky[138] empezaron a llegar de Chile y de Argentina. Los problemas del marxismo y del socialismo eran discutidos en todas partes, desde las reuniones sindicales de los poblados mineros hasta las cátedras universitarias. La terminología marxista estaba presente en los trabajos filosóficos y sociológicos de las corrientes más diversas. Mientras que el indigenismo y el nacionalismo revolucionario negaban abiertamente la tradición liberal-positivista, o sea el eurocentrismo y el internacionalismo, el marxismo se convertía en el refugio de la intelectualidad liberal. El liberalismo puro había muerto. Sus escasos representantes integraban partidos minúsculos y las organizaciones conservadoras no lograban influir políticamente en las masas o en los círculos intelectuales. El marxismo era, de hecho, un heredero del liberalismo, ya que admitía nociones fundamentales como el universalismo, el internacionalismo, el optimismo histórico, el determinismo económico y el racionalismo.

En Bolivia, la continuidad entre el liberalismo y el marxismo se notaba con mucha claridad. Al interior del marxismo boliviano de la década de 1930 se fueron formando dos corrientes antagónicas: el trotskismo y el marxismo liberal. El trotskismo estuvo vinculado a Tristán Marof y José Aguirre Gaisnborg. Durante la Guerra del Chaco, sobre todo en su fase final, los exiliados izquierdistas en los países vecinos formaron grupos revolucionarios. Aguirre Gainsborg se exilió en Chile, donde fue conocido como

137 Fernando de los Ríos, político español, fue ministro de Justicia del gobierno republicano durante la guerra civil española.

138 Seudónimo de Lev Davídovich Bronstein.

Max Fernández, nombre con el que militó en el partido comunista trasandino (Abecia López, 1986). En disidencia con la línea oficial, este organizó el grupo trotskista Izquierda Boliviana, del que también participó Eduardo Arze Loureiro, quien en una entrevista recordó lo siguiente:

> Nosotros decidimos organizar el partido comunista. ¿Cómo? Con un manifiesto. Escribimos un manifiesto de los exilados bolivianos. A mí me arrestaron, estoy seguro que toda la literatura revolucionaria está en las gavetas de "Investigaciones" (policía secreta) en Santiago, pero a este momento hemos hecho un progreso en nuestra idea del partido y en la organización del grupo que hemos llamado Izquierda Boliviana en Santiago de Chile que era el primer paso hacia el partido [...] la mayor parte de la propaganda fue escrita por José Aguirre Gainsborg (Sandor, 2006: 54).

Luego decidieron que precisaban un líder con prestigio y confianza. Aguirre Gainsborg propuso a Marof. En 1932, Marof fundó una agrupación marxista en Argentina, el Grupo Revolucionario Tupac Amaru, que en su programa incluyó su oposición a la aventura militar en el Chaco y subrayó la necesidad de unificación de los diversos agrupamientos antiimperialistas para la construcción del primer gobierno socialista en América. En la declaración del grupo, escrita por Marof, se lee: "Su mayor empeño es fomentar la revolución proletaria y antiimperialista, la única que puede dar libertad a los oprimidos, tierra a los indios y destrozar el bárbaro feudalismo que todavía subsiste en el altiplano boliviano" (Marof, 1934: 222). A pesar de la manifiesta simpatía por Trotsky, el grupo mantuvo contactos con los estalinistas, entre ellos los comunistas del extinto Partido Comunista Clandestino y los cropistas José Antonio Arze y José Cuadros Quiroga, que estaban en el exilio.

En 1934, el grupo de Aguirre Gainsborg cambió de nombre por Agrupación Comunista Boliviana y acordó un frente común con el Grupo Revolucionario Tupac Amaru de Marof. Alipio Valencia Vega –de seudónimo Iván Keswar– formó la Unión Boliviana de Exilados, en el norte argentino. Esos tres grupos suscribieron un acuerdo, en diciembre de ese año, dando origen al Frente Único Socialista, cuyo manifiesto fue publicado por Marof en su libro *La tragedia del Altiplano*. Más tarde, se celebró en Córdoba (Argentina) una reunión a la que asistieron Marof, Aguirre Gainsborg, Valencia Vega, Esteban Rey, Hugo Mansilla y el comunista paraguayo Oscar Creydt; los dos últimos como observadores. El 24 de junio, fue fundado el Partido Obrero Revolucionario (Salazar Mostajo, 1988: 147). En una carta dirigida a Trotsky, informaron que el grupo contaba con 50 miembros en Argentina y unos cien entre los prisioneros bolivianos en Paraguay (Sandor, 2009: 79). No obstante, pasaría mucho tiempo y ocurrirían divisiones internas hasta que el partido lograra tener in-

fluencia en el movimiento obrero boliviano, lo que efectivamente ocurrió en la década de 1940, luego de su refundación.

El Partido Obrero Revolucionario se declaró marxista-leninista. Sus líderes tenían un discurso claramente protrotskista.[139] Sin embargo, lo más curioso fue la presencia en aquella reunión fundacional de una persona como Creydt, que fungía de referente del Partido Comunista paraguayo, lo cual muestra el interés de los comunistas proestalinistas de conseguir acercar el nuevo partido a las filas de la Internacional Comunista y el hecho de que aún consideraran posible utilizar a Marof como su aliado, mientras no se declarara abiertamente trotskista. En efecto, la Internacional Comunista recomendó colaborar con él en el movimiento antiguerra.[140]

Entretanto, desde Chile, Aguirre Gainsborg trató de arrastrar a los marofistas al bolchevismo internacional –es decir, al trotskismo–, mientras que la visión de Marof sobre el partido que se necesitaba era mucho más amplia (Lora, 1969*:* 81). Por ello, su filotrotskismo todavía no era definitivo y los comunistas promoscovitas no perdían la esperanza de utilizarlo para sus fines políticos en Bolivia. Según Steven Sandor, el futuro movimiento trotskista boliviano fue formándose a partir de dos corrientes diferentes: una intergrada por los derrotistas exiliados en Chile, jóvenes marxistas ligados a los trotskistas chilenos, y otra conformada por un grupo ideológicamente más amplio, encabezado por Marof en Argentina, que era una mezcla de indigenismo, nacionalismo antiimperialista y marxismo (2009*:* 78). Para Guillermo Lora, el Partido Obrero Revolucionario conformado en Córdoba era, más que un partido, un frente único entre el grupo de Marof y la izquierda boliviana, resultado de los esfuerzos de Aguirre Gainsborg por fundar un partido bolchevique a partir de los diez puntos propuestos en el programa de su grupo (1978*:* 83).

Adicionalmente, en junio de 1935, comenzó a publicarse en Córdoba la revista *América Libre*, editada por los trotskistas argentinos, cuyo redactor-jefe era Marof. En su segundo número, ya se comunicaba la creación del Partido Obrero Revolucionario y se repetía la famosa consigna de 1920 de autoría de Marof: “La tierra para quien la trabaja y minas al Estado” (Justo, 1967: 102). Entre febrero y marzo de 1936, en las páginas de la revista argentina de izquierda *Claridad*,[141] se desarrolló una ardua polémica entre Creydt y Marof acerca de

139 Formalmente, el Partido Obrero Revolucionario se declaró trotskista y se adhirió a la IV Internacional recién en 1938.

140 RGASPI, fondo 495, legajo 79, número 228: 9.

141 Esta revista empezó a ser publicaba en Buenos Aires desde 1922, bajo la redacción de Antonio Zamora, y se constituyó en una tribuna de diferentes corrientes de la izquierda, como el aprismo peruano.

la estrategia de la izquierda marxista en aquel momento histórico. Mientras que el primero defendía los nuevos postulados del VII Congreso de la Internacional Comunista (1935) sobre el Frente Popular –consigna de alianza antifascista que reemplazó el obrerismo y el sectarismo del tercer periodo–, su oponente sostenía la necesidad de la revolución proletaria en Bolivia. A pesar de sus diferencias, Creydt instó a Marof a juntar fuerzas en el movimiento antiguerra hegemonizado por la Internacional Comunista. Una vez más, se restablecieron las relaciones entre los personeros de la Internacional Comunista y Marof.

Asombra, nuevamente, la delicadeza con la que en sus inicios fue tratado el Partido Obrero Revolucionario por la Internacional Comunista, lo que resulta significativo bajo la intransigencia de Moscú frente a cualquier manifestación de simpatías protrotskistas. No tenemos una explicación completamente satisfactoria de la línea moderada de la Internacional Comunista hacia Marof, conociendo su alianza con Aguirre Gainsborg, quien para el Buró Sudamericano era un caso perdido: se declaró abiertamente trotskista siendo aún miembro del Partido Comunista chileno. Solo podemos argumentar que los comunistas consideraban a Marof una pieza clave para influir en el movimiento obrero de la nación andina.

Después de la Guerra de Chaco, Marof volvió a Bolivia. Todos esperaban que a su llegada desencadenara la revolución social o, por lo menos, creara un partido proletario de masas. Sin embargo, el estilo personalista y caudillista de la directiva del Partido Obrero Revolucionario provocó el conflicto entre Marof y Aguirre Gainsborg, entre el Partido Obrero Revolucionario y el trotskismo. Su siguiente viraje político, esta vez alejándose del trotskismo, era perfectamente explicable. Marof realmente nunca fue ni trotskista ni estalinista, como tampoco marxista. Al marxismo, inclusive en su forma primitiva y doctrinaria-vulgar, no lo aceptó como su visión del mundo. Durante su discusión abierta con el periodista conservador y líder de los republicanos genuinos, Demetrio Canelas, en el Colegio Ayacucho (La Paz), para el asombro común de los presentes, no pudo explicar qué era "valor adquirido", según Marx. Su actitud resultaba algo típica para la intelectualidad izquierdista y radical de América Latina.

Otro trotskista, el argentino Liborio Justo (Quebracho), hijo del presidente Agustín Justo, que llamó a Marof "un liberal socializante", en 1939 escribió lo siguiente a sus amigos bolivianos:

> No podemos sino plantear nuestro absoluto desacuerdo con su defensa de Tristán Marof y del Partido Socialista Obrero Boliviano. Yo conozco suficientemente a Marof para asegurarle que nada tiene que ver con el marxismo, es en este sentido que nosotros lo hemos atacado y continuaremos haciéndolo precisamente para evitar engaños y confusiones, no por cuestiones personales que nunca las hemos tenido con él de ninguna clase. Desde su desacuerdo con

> Aguirre Gainsborg, a raíz del Congreso del POR [Partido Obrero Revolucionario] en esa, Marof puso bien en evidencia su tendencia hacia un "socialismo" difuso, vacuo, localista, lindando con el liberalismo burgués y que nada tiene que ver con el socialismo marxista, de clase, revolucionario. El hecho de que los estalinistas del PIR [Partido de Izquierda Revolucionaria] ataquen a Marof, no es una demostración de que siga una línea revolucionaria. Como no lo demuestra tampoco el hecho de que Marof y su partido ataquen a los estalinistas (Justo, 1967: 104).

Por otra parte, Lora reconocía que en América Latina los trotskistas habían juntado más frecuentemente no a personas que querían luchar contra Josif Stalin por la "pureza" de las ideas marxista-leninistas, contra su tergiversación burocrática, sino a los que no compartían las ideas marxistas y, con el tiempo, terminaron también abandonando las filas trotskistas (Lora, 1969: 310). Al contrario de Marof, que se alejó del trotskismo, Aguirre Gainsborg siguió fiel a las tesis marxistas-leninistas sobre la revolución proletaria en Bolivia. Lo cierto es que el trostkismo conservó su gran influencia gracias a figuras tan brillantes como Marof, Aguirre Gainsborg, Oscar Barrientos –de seudónimo Tomás Warki–, Valencia Vega y Lora.

Según se vio al inicio de este capítulo, la segunda mitad de la década de 1930 fue la época de la revolución de las ideas en la sociedad boliviana. El indigenismo, el nacionalismo y el marxismo destruyeron por completo los estereotipos ideológicos existentes. Dicha revolución estuvo estrechamente vinculada con la lucha política, escenario en el que actuaban los mismos personajes, planteando los mismos temas de discusión que en las cátedras de los intelectuales. Sin el cambio, sin la revolución en las ideas dominantes, sin la revolución preparada por las élites intelectuales finalizando la década de 1920 e iniciando la siguiente, habría sido imposible cualquier reforma radical.

La discusión política durante los gobiernos militares-socialistas, y hasta la Revolución Nacional de 1952, operaba con los conceptos y los términos elaborados en el curso de la revolución de las ideas de la segunda y de la tercera década del siglo XX. Dicha revolución, efectivamente, promovió las nuevas fuerzas políticas hegemónicas que determinarían las vías de desarrollo de Bolivia en esa nueva etapa histórica. La crisis ideológica provocó una crisis de legitimidad que afectó, en primer lugar, la ideología dominante, bajo cuyo alero funcionaba el aparato político, así como las formas y los métodos de intervención del Estado en la vida económica del país. La crisis ideológica también influyó en el aparato coercitivo del Estado, del Ejército y de la Policía, respecto a la interpretación de las leyes, justificando de esa manera la posibilidad de una salida ilegítima de la crisis política.

2.5. La crisis política y el golpe militar del 17 de mayo de 1936

La derrota boliviana en la Guerra del Chaco complicó seriamente la situación política interna del país. La mayor parte de la población quedó complacida con el derrocamiento de Daniel Salamanca, en noviembre de 1934. La oposición recibió con júbilo el golpe militar. El vocero del Partido Nacionalista, el periódico *El Universal*, en su editorial publicó lo siguiente:

> La disposición de Salamanca, como hecho histórico y moral, testimonia la probidad del Ejército y significa para la conciencia nacional una verdadera vindicta[142] que se hacía imperiosa, precisamente dentro del mismo estado de guerra, como supremo recurso de salvación, […] a la destitución de Salamanca han concurrido todas las fuerzas de la vida del país, inspiradas en la sagrada necesidad de eliminar al enemigo público número uno, a Daniel Salamanca, personaje cuya siniestra egolatría, cuya ignorancia de los problemas nacionales y cuya estructura psicopatológica puestas en el gobierno, paralizaban toda la posibilidad de acción nacional (en Alcázar, 1946: 194).

En la sociedad, junto con los cambios políticos, surgieron esperanzas de que mejorase la situación en el frente, como también de que finalizara la guerra. El golpe que derrocó a Salamanca puso también punto final a la carrera política de Franz Tamayo, ganador de las elecciones presidenciales de 1934, anuladas por los militares. El puesto de jefe del Estado fue asumido por el vicepresidente, el liberal José Luis Tejada Sorzano.

El nuevo mandatario tenía una reputación de tecnócrata, de hombre sin grandes ambiciones políticas; era demócrata y gozaba de popularidad no solamente entre los políticos tradicionales orientados hacia el Partido Liberal, sino también entre la juventud nacionalista. Pertenecía a aquella parte de los liberales que en funciones de gobierno instaba a limitar la omnipotencia de los barones del estaño. En esa línea, en 1919, siendo ministro de Hacienda, Tejada Sorzano señaló los males sociales causados por los monopolios de la industria minera. Un día, conversando con el escritor y destacado personaje del Partido Liberal, Alcides Arguedas, le dijo que Carlos Aramayo, uno de los barones del estaño, se interesa nada más que en sacar del país la mayor cantidad posible para su propio enriquecimiento.[143] De ahí que insistía en la necesidad de superar la tendencia a la disminución constante de los ingresos provenientes de la minería al presupuesto estatal, junto con el aumento de la tensión social en las regiones mineras donde aumentaban las protestas de la

142 Venganza.

143 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 7: 202.

clase obrera (República de Bolivia, 1952: 33). Estaba convencido de que el sistema existente podía ser reformado con cambios moderados, corrigiendo las desproporciones de la estructura económica del país, la cual dependía más y más de los monopolios mineros.

El pragmatismo y el patriotismo de Tejada Sorzano atrajeron la simpatía de amplios sectores de la población. A diferencia del derrocado "hombre símbolo", lo llamaron "hombre de paz". Aunque la Guerra del Chaco seguía siendo el principal problema, el país necesitaba no solamente la paz externa, sino también la interna. En esa dirección, el nuevo presidente inmediatamente hizo un gesto a la oposición, invitando a su gabinete a los representantes de los republicanos saavedristas y a los nacionalistas. En el Gobierno, los importantes puestos fueron ocupados por los liberales y por los republicanos genuinos, entre ellos David Alvéstegui, Tomás Manuel Elío y Juan María Zalles. La oposición también recibió cargos muy importantes: la cartera de ministro de Guerra le fue ofrecida al viejo caudillo de La Paz, Bautista Saavedra. Aunque él se negó, sus partidarios aceptaron la invitación de formar parte del Gobierno. El saavedrista Gabriel Gosálvez ocupó la cartera militar, el joven político Enrique Baldivieso, uno de los líderes del Partido Nacionalista de la época de Hernando Siles, tuvo el cargo de ministro de Educación.

Tejada Sorzano recibió la presidencia de Bolivia en medio de una pésima situación económica. Debía resolver problemas tan grandes como la insolvencia financiera del Estado. La Guerra del Chaco llevó al país al borde de la quiebra. Para apreciar las dimensiones de la catástrofe de posguerra, resulta suficiente mencionar el monto de la deuda nacional: 250 millones de libras esterlinas, diez veces más que el presupuesto anual de país. El déficit del presupuesto llegó en 1935 a 136 millones de bolivianos, equivalente al 71% de los gastos. La moneda nacional se devaluó 20 veces durante el conflicto bélico. Surgió el mercado negro de divisas. La población sufría a diario el alza de precios. En comparación con el año 1931, el índice de precios de los principales artículos de consumo aumentó más de dos veces (Gallego, 1991: 34-35, 83). El flujo de la población rural hacia las ciudades agudizó la escasez de productos alimentarios.

Todos los Gobiernos, sin excepción, trataron de resolver esos problemas a costa de la importación y del incremento de la presión sobre la moneda nacional, causando su devaluación y, por consiguiente, una nueva subida de precios. Para garantizar la vital importación de alimentos y mantener el nivel mínimo de consumo en las ciudades, el gobierno de Tejada Sorzano estableció varias tasas de cambio,[144] hecho que ocasionó una serie de abusos

144 El sistema de tipo de cambio diferenciado, con franquicias para los importadores de alimentos, fue introducido por primera vez durante el Gobierno de Siles. Lo mismo hizo, en condiciones de guerra, Salamanca.

financieros y enriqueció a los especuladores de divisas, sin salvar la moneda nacional de la depreciación ni terminar con el incremento de precios. La entrega obligatoria de una parte de los ingresos en moneda extranjera, con una tasa de cambio especial, ya había sido aplicada bajo la presidencia de Siles y el volumen de la venta de divisas al Estado llegó al 65% en 1933; el Gobierno justificó aquellas medidas drásticas con la lógica de la guerra y la necesidad de movilizar todos los recursos para fines bélicos.

La única fuente de ingreso para el fisco consistió en la emisión monetaria y en la presión tributaria sobre las compañías mineras. Tales medidas presidenciales levantaron una fuerte crítica de los partidos tradicionales, los cuales eran su principal soporte político. El Gobierno, entonces, dispuso para los exportadores la entrega obligatoria, en moneda extranjera, del 55% de sus ingresos de divisas, recibiendo el equivalente en moneda nacional, con una tasa de cambio más baja que en el mercado libre. Además, Tejada Sorzano amenazó con la expropiación a las compañías infractoras de ese régimen cambiario (Gallego, 1988). En 1934, la tasa del cambio obligatorio para las divisas que las compañías mineras recibían por concepto de exportación fue cuatro veces más baja que la de su cotización en el mercado libre. Comprando la divisa "barata" a los exportadores, el Estado la vendía a los importadores a un precio más alto. Fue un verdadero impuesto adicional a la minería que influyó negativamente en su capitalización, redujo el margen de utilidades y detuvo prácticamente la renovación en las minas. Por la diferencia en los tipos de cambio, el Estado obtuvo el 31% de todos los ingresos en 1938 y el 40% en 1939 (Brienen, 1996: 45).

Para cubrir los crecientes gastos estatales, el Gobierno aumentó los impuestos a los exportadores, la única fuente de divisas. Desde 1934, esos impuestos, en primer lugar del estaño, fueron duplicados. Aquello, por una parte, fue un sensible golpe a la minería, disminuyendo su competitividad; por otra, desde la década de 1930, las arcas del Estado dependían exclusivamente de la situación en la minería: su tabla de sobrevivencia. Eso se explica a partir de los numerosos proyectos de reformas de la minería, desde el control parcial o completo sobre la exportación del estaño hasta su nacionalización.

Tejada Sorzano intentó aflojar las tensiones políticas internas. El Gobierno distendió la censura y declaró el 20 de febrero de 1935 una amnistía general, la cual permitió a los emigrados políticos volver al país. La estabilización del frente bélico, seguida por la contraofensiva de las tropas bolivianas a comienzos de ese año, fortaleció la autoridad gubernamental. Rindieron sus frutos los esfuerzos diplomáticos del gabinete, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores fue presidido por el experimentado diplomático Tomás Manuel Elío. En junio de aquel año, se logró una tregua y, en Buenos Aires, comenzaron las conver-

saciones de paz con Paraguay.[145] Tales circunstancias aumentaron la confianza del país hacia su presidente y el Congreso prolongó el mandato de Tejada Sorzano hasta agosto de 1936. Las elecciones fueron fijadas para octubre de 1935, pero posteriormente quedaron aplazadas hasta mayo del año siguiente.

A pesar de los éxitos destinados a resolver el conflicto bélico y a consolidar todas las fuerzas políticas, la situación de Tejada Sorzano se mantuvo vulnerable. La crisis política avanzaba inexorablemente. Asimismo, las dificultades económicas crecían y los partidos políticos exigían abolir las restricciones del periodo de guerra. Los exaliados del presidente, los republicanos genuinos, que fueron los más criticados por su Gobierno durante la guerra, publicaron un documento acusando al alto mando de incompetencia en la Guerra del Chaco (Salamanca, 1976: 117-126). Para conservar las buenas relaciones con los militares, Tejada Sorzano rompió con los republicanos genuinos e incluso reprimió a sus líderes, a los que, acusándolos de conspiración, expulsó del país en abril de 1936. Esas medidas imposibilitaron la alianza preelectoral de los partidos tradicionales. En ese lapso, las relaciones entre los militares y los políticos tradicionales sufrían una profunda crisis. Las críticas y las acusaciones mutuas socavaban la unidad de las élites políticas, debilitando sus posiciones en la sociedad. Tales contradicciones y la enemistad en aumento fueron aprovechadas con habilidad por las fuerzas políticas nuevas.

2.6. La apuesta por la fuerza socialista

Uno de los rasgos característicos de la crisis de posguerra fue la formación de nuevos partidos, en su mayoría antioligárquicos. En el último año de la guerra (1935), en las ciudades más importantes de Bolivia, surgieron muchos grupos izquierdistas y nacionalistas que se autodenominaban socialistas. Durante la contienda, se quebró el movimiento estudiantil de izquierda y se alejaron del marxismo grupos que pasaron a las posiciones del nacionalismo y del indoamericanismo, convertido en la doctrina política de moda gracias al trabajo propagandístico activo del aprismo peruano. Una parte de los estudiantes exizquierdistas pasó a simpatizar con el nacional socialismo y el fascismo. Partidarios del aprismo, exestudiantes de izquierda y marxistas, como Julio Zuazo Cuenca, Luis Iturralde Chinel, Víctor Andrade, Wálter Guevara Arze y Hernán Siles Zuazo –futuros nacionalistas revolucionarios–, fundaron en julio de 1935 Beta Gamma, un grupo semiclandestino cuyo nombre se componía de las primeras letras de las palabras "Bolivia Grande". Al principio, las reivindicaciones no avanzaron más allá de exigir una reforma constitucional. A fines de 1935, la organización empezó a editar un periódico del mismo nombre.

145 FRUS, 1933, volumen V: 1-6.

Beta Gamma estableció una estrecha alianza con el movimiento obrero. Ello influyó en la radicalización de su programa. Declararon que su objetivo era crear un Estado socialista en Bolivia con el que se establecería la alianza de la clase obrera con los campesinos y las capas medias (Valencia Vega, 1987a: 1808-1809). En el seno de esa agrupación, nació un ala radical de izquierda a la cabeza de José Aguirre Gainsborg, que acababa de volver de Chile, donde fue uno de los organizadores del partido trotskista. Pronto, esos izquierdistas crearon su propio grupo llamado Bloque Socialista de Izquierda, que integró a Beta Gamma como miembro colectivo. Aguirre Gainsborg, quien ejercía una gran influencia en aquel grupo que cada vez se inclinaba más y más hacia la izquierda, declaró que el objetivo programático del nuevo movimiento socialista buscaba crear "un Estado de los sindicatos" (*Última Hora*, 4 de noviembre de 1935). La radicalización de las posiciones de Beta Gamma convirtió en su aliado al grupo de izquierda de Cochabamba, encabezado por el destacado líder estudiantil de la década de 1920 y conocido propagandista del marxismo, José Antonio Arze. Aguirre Gainsborg insistió en cambiar el nombre del grupo por Acción Socialista Beta Gamma.

Al finalizar la guerra, los nacionalistas de la época de Hernando Siles recomenzaron sus actividades, buscando restablecer su organización. En octubre de 1935, el Partido Nacionalista realizó su congreso en La Paz, en el que declaró fundada la Célula Socialista que, de hecho, ya existía desde agosto de 1935 (*El Diario*, 8 de octubre de 1935). Esta publicó su primer programa el 4 de noviembre de ese año. Durante el congreso en La Paz, Carlos Montenegro insistió en el denominativo "socialista" para subrayar su carácter antiliberal (Céspedes, 1956: 147). Aquello significaba transformar un partido antiguo, y bastante moderado, en una organización más radical.

Muchos antiguos miembros del Partido Nacionalista, veteranos de la Guerra del Chaco, formaron reducidos grupos políticos que siempre se autodenominaron socialistas. Los más importantes fueron el Partido Socialista –de Enrique Baldivieso– y la Asociación Nacional de Excombatientes Socialistas, como también la Asociación de Excombatientes de Bolivia. Algunas organizaciones estudiantiles y sindicales formaron la Confederación Socialista, que aprobó el programa de Acción Socialista en diciembre de 1935. La exigencia era la nacionalización paulatina de las minas, del petróleo, de los ferrocarriles y de los bancos; además, se planteaba la necesidad de distribuir los latifundios y la educación para los indígenas. Su tarea estratégica consistía en la industrialización y en la diversificación de la economía con los recursos de la minería. Dicha confederación consideraba los ingresos de la exportación de los minerales como la única fuente de financiamiento para la industrialización del país (Lorini, 1994: 204).

El objetivo político de los socialistas era unir a la nación para el avance histórico, es decir, salir del círculo vicioso de la dependencia y del atraso. Consideraban que el principal obstáculo en ese camino estaba en las limitaciones de la casta gobernante que, con su resistencia a las reformas, retraía al país hacia el estancamiento económico y la inestabilidad social.

La plataforma política de los socialistas partía del nacionalismo y del antiliberalismo. El nacionalismo, en ellos, provenía como una reacción natural ante la explotación imperialista. La oligarquía minera hacía mucho tiempo que había perdido cualquier vínculo con su país; era el símbolo de la influencia foránea. La derrota en la guerra aumentó el sentimiento nacionalista de los jóvenes políticos, pues la expresión oligárquica –el liberalismo– fue la responsable ante los ojos de los socialistas del fracaso de la economía y de todas las derrotas en Bolivia. Por ello, en su programa, proponían reformar la estructura estatal basada en los principios de la democracia funcional progresista, capaz de abolir la lucha de clases en nombre de los intereses nacionales.[146] Sus autores estaban influidos profundamente por las ideas corporativistas del fascismo italiano, por la experiencia de la República socialista de Chile y por las ideas de democracia funcional divulgadas en Chile durante la dictadura de Carlos Ibáñez.[147] Bajo las banderas de la antioligarquía y del antiliberalismo, los socialistas pudieron reunir a las fuerzas políticas más heterogéneas, desde los marxistas y los partidarios del indoamericanismo aprista hasta los representantes de los radicales de derecha, simpatizantes del fascismo.

En la capital de Bolivia y en otras ciudades, además de la Confederación Socialista y del grupo Beta Gamma, surgieron partidos y agrupaciones similares: el Grupo de Izquierda en Cochabamba, la organización Ariel en Sucre, Inti y el Bloque Avance en Oruro, y el grupo Henri Barbusse en La Paz. Todos autonombrados socialistas. Reunían en sus filas tanto a nacionalistas como a marxistas y se apoyaban en los intelectuales radicales de izquierda, los estudiantes, los profesionales y los obreros.

En enero de 1936, la directiva de Beta Gamma, dirigida por su secretario general Iturralde Chinel, insistió en establecer una alianza con la Confederación Socialista, próxima por sus ideas. El 30 de ese mes, se anunció la fusión que, para sus líderes, suponía la formación de un partido socialista único, lo que se concretó en su congreso del 15 de marzo, con todos los grupos llamados socialistas; en realidad, nacional-reformistas. En su programa fue incluida la declaración de la Confederación Socialista de diciembre de 1935. Lideraron

146 RGASPI, fondo 495, legajo 122, número 4: 12.

147 Es curioso que la mayor influencia del socialismo chileno la tuviera Baldivieso, secretario de la embajada boliviana en Santiago de Chile hasta 1934, que frecuentemente hablaba sobre la experiencia del socialismo chileno.

el nuevo partido los antiguos activistas del Partido Nacionalista y miembros de la Confederación Socialista, Enrique Baldivieso, Carlos Montenegro y José Tamayo, al igual que Luis Iturralde Chinel (de Beta Gamma) y Moisés Álvarez (de la Federación Obrera del Trabajo - FOT). Aunque el nuevo partido era pequeño y orgánicamente débil, tenía un importante peso en la política real, dado que agrupaba a periodistas, escritores, dirigentes sindicales y estudiantiles. Los socialistas trataron de aglutinar bajo su techo a todos los grupos políticos y sindicales antioligárquicos. De ese modo, el Partido Socialista se convirtió muy pronto en una fuerza política decisiva.

Incluso antes de ese congreso, en enero de 1936, los socialistas y el grupo marxista Bloque Avance realizaron en Oruro el Primer Congreso Regional de la Izquierda, en el que se constituyó el Frente Único Revolucionario. El programa aprobado en ese encuentro incluyó los postulados fundamentales del Partido Socialista, a los que agregaron fórmulas más radicales con relación a las reformas del sistema estatal. Si bien el Frente Único Revolucionario propuso la sindicalización general y la reforma política necesaria para crear un Estado de sindicatos, como también la socialización de la industria, la reforma agraria con la colectivización de las tierras y otras medidas revolucionarias (Delgado, 1984: 95-97), no pudo unificar los diversos grupos y pronto se diluyó al interior del Partido Socialista. Este último empezó a cobrar fuerza rápidamente. Ciertamente, los partidos tradicionales lo empezaron a tener en cuenta, con el propósito de domesticarlo. De ahí sus ofertas de alianza y sus deseos de compartir el poder con los jóvenes políticos, muchos de los cuales procedían de las mejores familias de la élite boliviana.

En marzo de 1936, el Partido Liberal propuso a los socialistas desarrollar una acción política conjunta. Los liberales querían atraer hacia el Gobierno de José Luis Tejada Sorzano a los jóvenes del Chaco y a los nuevos partidos. No obstante, subestimaron la profundidad de las discrepancias ideológicas con los socialistas, que hacían imposible tanto la alianza como el diálogo. En su respuesta a esa propuesta, publicada en la prensa, Baldivieso subrayó las diferencias doctrinales con el liberalismo:

> La filosofía política liberal consideró al Estado como una acumulación de voluntades. Para los socialistas el Estado no es una ficción, sino una estructura, fundamental y esencialmente económica, está formada por funciones sociales, por fuerzas productoras, que son las únicas que tejen la realidad social, política y económica (en Lorini, 1994: 209).

Los grupos y los partidos políticos nacidos al concluir la guerra, en medio de la crisis del poder, representaban a las fuerzas sociales que, decepcionadas

por el sistema tradicional, aspiraban a reformar la economía y el Estado. La mayoría de ellos esgrimía consignas socialistas en sus banderas.

Baldivieso, Tamayo, Iturralde Chinel y otros autodenominados socialistas creían que el socialismo era un sistema económico y político en el que el Estado representaba el valor fundamental y la fuerza decisiva. Lo imaginaban como un sistema capaz de sacar al país de la crisis, fortalecer el Estado y consolidar la nación. Siendo que los socialistas, en aquel tiempo, manejaban visiones más bien eclécticas de la sociedad que aspiraban construir. Por un lado, predicaban los principios de justicia social y hablaban de la prioridad de los intereses nacionales, de la defensa de los recursos naturales y de la limitación a los monopolios; por el otro, los unía el rechazo a la democracia liberal. En efecto, aspiraban a estatizar todos los ámbitos de la vida social y a construir un gobierno corporativo, lo que demostraba la influencia que sobre ellos tenía el fascismo europeo. Sus consignas eran la justicia social y la superación de la lucha de clases, entendidas como la estatización de todos los aspectos de la vida social, en particular de los sindicatos y de los partidos políticos; lo llamaban "modelo de democracia funcional". Postulaban el deber ineludible de las clases productoras de participar en la dirección del país; es decir, los empresarios, los obreros, los militares y otros, organizados según los principios del corporativismo. Los socialistas consideraban que en el futuro Estado los intereses individuales debían ser superados en nombre de la grandeza de la nación. El egoísmo nacional, la absolutización e incluso la adoración de la idea del Estado, así como la negación de los principios de la democracia y del liberalismo, por obsoletos, al igual que el voluntarismo político, eran sus postulados principales. En el futuro, esas ideas serían las que sentarían las bases de la ideología del nacionalismo revolucionario, la variante boliviana del nacional-reformismo, como ya se dijo.

Los políticos de extrema izquierda no podían estar de acuerdo con el hecho de que un gran partido nacionalista-reformista absorbiera a los grupos revolucionarios. En esa fusión, Aguirre Gainsborg advertía acertadamente la elección política definitiva de Beta Gamma en el nacionalismo reformista y en el radicalismo antiliberal de tipo fascista. Por eso, junto con sus partidarios, dejó las filas del grupo. En febrero de 1936, escribió un manifiesto en el que señaló: "La Confederación no es socialista, defiende y respeta la propiedad capitalista y feudal; promete entregar al país mayormente al imperialismo, al capital extranjero [...]. ¡Por la formación de nuestro Partido Socialista de Clase!" (en Álvarez, 1986: 85). Sus partidarios se unieron a un pequeño grupo marxista denominado El Nuevo Camino, dirigido por el líder obrero Max Portugal, con quien formó el Bloque Socialista de Izquierda; es decir, conservando el nombre del grupo de Aguirre Gainsborg. Esa formación política fue declarada como partido proletario y, a pesar de su divorcio con los socialistas, en esa etapa, se consideró necesario seguir colaborando con la Confederación Socialista.

A pesar de sus discrepancias con los nacionalistas que predominaban en Beta Gamma, Aguirre Gainsborg conservaba la esperanza de crear una organización socialista única. Conversó con Baldivieso, al igual que con el grupo Asociación Nacional de los Excombatientes Socialistas y muchas otras agrupaciones socialistas, a los que propuso formar el Frente Único de Izquierda para derrocar revolucionariamente a la oligarquía y realizar las reformas radicales (Abecia López, 1986: 89). Pensaban que ese frente era parte de la realización del plan de formación del partido obrero en Bolivia, tal como que se lo planeó en el Congreso de Izquierda en Córdoba (Argentina), en junio de 1935, cuando fue creado el Partido Obrero Revolucionario, en el exilio.

Aguirre Gainsborg aspiraba a convertir el Partido Obrero Revolucionario –bajo ese u otro nombre– en un partido proletario de masas en el país.[148] Sus desvelos no llegaron al fin buscado. Un partido marxista no podía reunir en sus filas a toda la oposición antioligárquica. Solo la idea de un Estado nacional, de un socialismo amplio de tipo antiliberal, podía unir a la izquierda. Justamente, los nacionalistas –o socialistas, como ellos se autodenominaban– gozaban de popularidad en las organizaciones de masas de los excombatientes y en los sindicatos. La iniciativa política pertenecía a los nacionalistas de la Confederación Socialista y a Beta Gamma, mientras que los grupos marxistas seguían siendo marginales.

Las posiciones trotskistas de Aguirre Gainsborg y de Marof ahuyentaron a los comunistas prosoviéticos y a los marxistas moderados que preferían las consignas del Frente Popular a los objetivos de una revolución proletaria inmediata. En 1936, en muchas ciudades de Bolivia, fueron creados los comités regionales de izquierda que en un lapso de cuatro años se unieron formando un partido marxista moderado con declarada orientación prosoviética. Entre los comités provinciales destacaban el Frente Popular de Potosí, que prácticamente gobernaba la ciudad, los grupos marxistas Bloque Avance en Oruro y Antahuara en Sucre; este último incluso publicaba una revista teórica. Tales grupos establecieron comunicación entre sí y trataron de contactarse con la Internacional Comunista en Moscú.[149] Como consecuencia de las contradicciones entre los estalinistas y los trotskistas del grupo de Aguirre Gainsborg, los últimos podían encontrar con mayor facilidad un lenguaje común con los socialistas nacionalistas que con sus correligionarios marxistas. Los trotskistas usaban la táctica del "entrismo", es decir,

148 RGASPI, fondo 495, legajo 122, número 4: 12-13.

149 En los archivos del Komintern figura la carta del grupo Antahuara, firmada por Roberto Alvarado y Miguel Bonifaz, destacados sociólogos e historiadores bolivianos y entonces futuros líderes del Partido de Izquierda Revolucionaria (RGASPI, fondo 534, legajo 7, número 89: 7).

introducirse en los partidos de izquierda y, a veces, también en los partidos burgueses, a objeto de reformarlos desde adentro, convirtiéndolos en organizaciones proletarias o, al menos, presionándolos internamente hacia políticas más radicales.

Junto a los nuevos partidos de izquierda, el Partido Republicano de Bautista Saavedra pretendió jugar el rol principal en la oposición socialista. En función de subrayar su ruptura con todo el sistema político, Saavedra cambió la denominación por Partido Republicano Socialista. El nuevo programa partidario proponía reformas socioeconómicas moderadas y la reorganización del Estado según los principios corporativistas: "representación parlamentaria basada no sobre cifras mayoritarias, sino sobre intereses corporativos, industriales, comerciales, universitarios; municipalidades técnicas y eficientes; función social del Ejercito" (Gómez, E., 1975: 297). La oposición de Saavedra al Gobierno de Daniel Salamanca y su propia evolución hacia las ideas corporativistas reavivaron el partido. En el periodo de guerra, los antiguos estudiantes marxistas Abraham Valdés, Francisco Lascano y Félix Eguino Zabala, simpatizantes con las ideas de Benito Mussolini y el nacional-socialismo, se adhirieron al partido saavedrista. Después del conflicto bélico, el Partido Republicano Socialista volvió a ser un influyente partido de masas.

En marzo de 1936, Saavedra publicó un manifiesto programático socialista desarrollando las ideas corporativistas de organización de la sociedad. Los republicanos socialistas o saavedristas hablaban en su nuevo programa acerca de la diversificación de la economía, la nacionalización paulatina de las minas, la colonización de las tierras vírgenes y el impulso a la agricultura (Cornejo, 1949: 101-103). Saavedra se había convertido en un ferviente admirador del fascismo italiano y se pronunciaba por un Estado corporativo igual que el de Italia. Si bien seguía siendo un líder popular, sobre todo para los sectores pobres de La Paz –pues utilizaba sabiamente el discurso socialista y antiimperialista en su propaganda demagógica, obtuvo poco éxito, ya que a pesar de su apariencia vanguardista era un hombre del pasado en momentos en que los bolivianos buscaban nuevos políticos, no vinculados con deshonras ni catástrofes ocurridas, políticos que no tuvieran nada que ver con los republicanos ni con los liberales. Saavedra lo entendía. Por ello ofreció su colaboración a sus principales competidores, los socialistas.

Se suponía que la alianza de los saavedristas y de los socialistas apoyaría la candidatura del propio Saavedra en las próximas elecciones presidenciales.[150] No obstante, era poco probable que los militares apoyaran sus aspiraciones y le entregaran todo el poder. Los saavedristas emprendieron una complicada política de alianzas y de compromisos ante sus pocas oportunidades de llegar al

150 RGASPI, fondo 495, legajo 122, número 4: 12.

poder, ignorando a los militares. Saavedristas y socialistas se pusieron de acuerdo sobre acciones conjuntas y el 4 de febrero de 1936 firmaron una alianza, que fue la base de la conspiración contra el Gobierno de Tejada Sorzano. Al igual que los saavedristas, los socialistas consideraban al movimiento obrero su aliado natural. Justamente, la clase obrera era la destinataria de la mayoría de sus postulados sobre la construcción de un Estado de justicia social, una república de trabajadores, etcétera. Su alianza con el movimiento obrero convertía a los socialistas en una de las fuerzas más influyentes del país.

Al terminar la Guerra del Chaco (1935), los sindicatos –que habían sido disueltos por Salamanca– reanudaron sus actividades. Los sindicatos mineros Itos, Socavón y San José lo hicieron en Oruro. En octubre, se reorganizaron los sindicatos de obreros gráficos y de choferes, que eran las agrupaciones más disciplinadas y combativas. El sindicato gráfico estaba encabezado por Waldo Álvarez, un joven líder radical de 33 años que gozaba de gran prestigio. Ese año, en pleno auge del movimiento huelguístico, se vio la necesidad de organizar una central sindical nacional. En abril de 1936, los sindicatos participaron en el Congreso Regional de Izquierda, del que surgió el Frente Único Revolucionario (Rodríguez Ostria, 1991: 98). El movimiento obrero seguía siendo muy diverso. Las agrupaciones sindicales de las ciudades participaban activamente en la lucha política, mientras que los mineros se mantenían expectantes, alejados de la política y, a veces, negándose a colaborar con las centrales sindicales claramente politizadas por los partidos y los grupos de izquierda que fueron surgiendo por doquier en esa etapa.

Durante la Guerra del Chaco, había llegado de Chile un grupo de líderes obreros, conformado por Moisés Álvarez, Ezequiel Salvatierra y Enrique Loza, que anunciaron la formación de la Confederación de los Trabajadores de Bolivia. El 27 de noviembre de 1935, los líderes de esa confederación, junto con la nueva dirección de los sindicatos de obreros gráficos y de choferes, realizaron una asamblea sindical en la que se acordó restablecer la vieja FOT de La Paz, disuelta durante el conflicto bélico. El comité reorganizador, con ayuda de los socialistas del Frente Único Revolucionario, restituyó la FOT en Oruro, conducida por su antiguo dirigente Gabriel Moisés. Pronto, los comités de la FOT fueron restablecidos en otras ciudades. El 11 de julio de aquel año, había reaparecido también la vieja Federación Obrera Local (FOL), anarquista (Lorini, 1994: 122).

Tejada Sorzano dio pasos serios para acercarse al movimiento obrero. La fuerza de los sindicatos obligó al presidente a buscar su colaboración política. En septiembre de 1935, el Gobierno promulgó nuevas leyes que regulaban la contratación, reforzando sensiblemente la legislación social de la década de 1920, que prohibía todo tipo de trabajo forzado y exigía establecer un contrato formal con los trabajadores (Ponce, Shanley y Cisneros, 1968: 28).

El 8 de enero del siguiente año, el Gobierno propuso a la FOT enviar a su representante a la municipalidad de La Paz, lo que permitiría resolver los conflictos por la vía de conversaciones y de compromisos, y haría más flexibles a los líderes de los partidos de izquierda. La FOT rechazó la oferta del presidente. En los sindicatos y en los partidos políticos que lo apoyaban, como la Confederación Socialista, prevalecían opiniones radicalizadas e irreconciliables, tanto sobre el Gobierno como acerca del sistema político. Planteaban la reforma radical del Estado y, por tanto, de la economía nacional.

Justo entonces, la FOT preparaba una campaña nacional de protesta contra la política económica y el deterioro de la situación de los trabajadores. A esa iniciativa se unieron los socialistas, el Bloque Socialista de Izquierda –de Aguirre Gainsborg–, las organizaciones de los excombatientes e incluso el saavedrista Partido Socialista Republicano, que tradicionalmente era apoyado por los sectores populares de la ciudad, los artesanos, los estudiantes y, en general, las capas medias de La Paz.[151]

Junto con los grupos izquierdistas y los sindicatos, el Ejército adquirió un gran peso político en la sociedad. Aunque sobre los militares pesaba la vergüenza de la derrota en la guerra y los altos mandos eran, con razón, acusados de la conducción mediocre de las tropas, lo que provocó enormes pérdidas, las nuevas autoridades coqueteaban con el Ejército. En efecto, realizaban comidas en honor de los altos mandos y alababan el heroísmo castrense. En enero de 1936, Alcides Arguedas escribió al respecto en su diario de vida:

> Y los militares se presentaron humildes, contritos, casi sumisos; pero primero el presidente Tejada, luego el municipio y después los famosos Amigos de la Ciudad organizaron banquetes y festejos en su honor; y los militares poco a poco fueron recobrando bríos. Y hoy hacen lo que quieren y dominan el país porque han tomado todas las ramas de la administración y son ellos quienes gobiernan sirviéndose del presidente, que sólo es un muñeco en sus manos.[152]

El alto mando del Ejército obtuvo más funciones en el Gobierno y la autoridad no podía dar un solo paso sin su apoyo. Así, los militares recibieron el derecho exclusivo para la distribución del petróleo y de sus subproductos; adicionalmente, el telégrafo y todos los demás medios de comunicación eran controlados por las autoridades militares. El alto mando recibía la parte leonina del presupuesto nacional: de los 130 millones de bolivianos del presupuesto, restando los gastos del servicio de la deuda externa y los recursos

151 AHGE-SRE, 1936, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios", fondo 27, legajo 29, expediente 13: folio 44.

152 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 7: 173.

destinados a repatriar a los prisioneros de guerra, el Ejército recibía 40 millones de bolivianos, en tanto que la a administración civil debía contentarse con 30 millones.[153]

Los militares manejaban la censura bajo la dirección del coronel David Toro, que estableció un control personal total sobre la prensa. El Estado Mayor, independientemente del Gobierno, resolvía cerrar periódicos o confiscar toda la tirada. Es el caso del periódico liberal *La Prensa*, cerrado el 21 de marzo de 1936 porque se atrevió a publicar un artículo crítico hacia los militares. A pesar de que la guerra había finalizado, el Estado Mayor se resistía a los planes de Tejada Sorzano de restablecer cuanto antes la legalidad constitucional, levantar el estado de emergencia y devolver a las instituciones republicanas su funcionamiento pleno. Los militares estaban en contra de levantar la censura y de liberar el ingreso al país de los emigrados bolivianos y extranjeros. También controlaba con mano dura al propio Ejército. Su exagerada participación en la política le permitía reprimir cualquier descontento en sus filas.[154]

El cuerpo de oficiales del Ejército sufrió profundos cambios en la guerra. Durante el conflicto, a los militares profesionales –educados en la década de 1920 en los principios apolíticos de la doctrina militar prusiana, inculcada por la misión del general Hans Kundt, a la cabeza de las Fuerzas Armadas bolivianas–, se sumaron nuevos oficiales y sargentos improvisados, representantes de las capas ilustradas de la población, como también una masa de clases provenientes de los sectores populares urbanos. El servicio militar era una de las pocas formas de movilidad social. Después de la movilización y la baja, y de completar el cuerpo de oficiales desde diferentes capas sociales, el Ejército se renovó socialmente; sus clases representaban todas las capas sociales del país, siendo un aglutinador social de todas las capas de la sociedad boliviana. La mayoría de los viejos oficiales procedía de los sectores medios empobrecidos que, en la guerra, habían sufrido un amargo desengaño con relación a los altos mandos del Ejército y estaban indignados por el gobierno mediocre de la oligarquía que llevó al país a la catástrofe. Entre los oficiales eran muy populares tanto las ideas nacionalistas como las antidemocráticas y autoritarias. Aquí vale la pena indicar que durante la guerra vinieron a Bolivia 105 oficiales chilenos para participar en la contienda. La mayoría fue contratada por el Gobierno boliviano, dado que se necesitaba compensar las pérdidas de los cuadros de oficiales en los primeros tiempos de enfrentamiento. Muchos eran de filiación izquierdista y habían vivido tanto las experiencias de la República socialista de

153 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 7: 202-203.

154 A fines de abril de 1936, circulaban en La Paz rumores sobre la conspiración contra el alto mando del Ejército, específicamente contra Toro y Peñaranda (ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 7: 202-203).

Marmaduke Grove como las políticas autoritarias corporativistas de Carlos Ibáñez. Apoyaron en ciertos momentos a establecer un contacto más ideológico entre socialistas y militares bolivianos, en quienes influyeron con sus ideas. Es curioso que fuera Enrique Baldivieso quien tratara primero con los oficiales chilenos para su contratación en el Ejército boliviano. Él se desempeñaba como secretario de la Embajada de Bolivia en Santiago de Chile, en 1934, cuando ahí llegaron los primeros voluntarios chilenos (Jeffs, 2005: 47-61).

Más que con su alto mando, aquellos oficiales se alinearon con otros líderes militares informales y conocidos por sus posiciones reformistas y nacionalistas, lo que hizo crecer la conciencia sobre la necesidad de realizar reformas. Habían dejado de creer que los políticos civiles podían gobernar con eficiencia. Arguedas anotó en su diario una conversación que sostuvo con un amigo militar:

> Yo no creo en la democracia pura ni me entusiasma el sufragio… No creo, sobre todo, en nuestra democracia y nuestro electorado está corrompido […] todos hemos errado, y yo también; pero hay que reaccionar, hacer política nueva, corregirnos, rehabilitarnos […].[155]

Esos oficiales escuchaban frecuentemente el llamado a fusionarse con el pueblo y darle la posibilidad de elegir su destino; se consideraban los voceros de la voluntad popular. En julio y en agosto de 1935, los militares empezaron a regresar del Chaco a las ciudades, en primer lugar a La Paz. Creían, posiblemente con razón, que entendían los intereses nacionales del país mejor que los políticos civiles. Entre la oficialidad, se reemplazaba el conservadurismo por las ideas radicales de izquierda. Es curioso el caso que cuenta en sus memorias el líder obrero Waldo Álvarez. Conocía a un coronel Vargas, que de los escaños universitarios fue llamado a las filas del Ejército, al comenzar la guerra. Durante la campaña, ascendió a coronel. Conservaba sus ideas de estudiante rebelde y seguía siendo fiel al marxismo. En 1936, escuchó asombrado una gran charla dada por Vargas sobre la economía política marxista. El líder obrero decía que muchos de los oficiales, antes de la guerra, eran estudiantes universitarios con un pasado izquierdista-marxista (Álvarez, 1986: 91).

En el Ejército, la dependencia hacia el alto mando de los oficiales jóvenes, principalmente de sus líderes Enrique Peñaranda y Germán Busch, se explicaba por la pérdida de prestigio del generalato en la sociedad. El alto mando tenía miedo de ser responsabilizado por su actuación deficiente en la contienda y veía en los líderes informales de la oficialidad a héroes de guerra, entre ellos a Busch, como también a Bernardo Bilbao Rioja e inclusive a David Toro, considerados como los únicos que podían salvar el honor de los

155 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 7: 201.

institutos militares a los ojos de la sociedad. Eso explica la solidaridad de los altos mandos hacia los jóvenes oficiales y su subordinación voluntaria a los líderes informales del Ejército. Curiosamente, el miedo de los militares fue tan grande que durante el regreso del general Peñaranda a La Paz, en octubre de 1935, fueron adoptadas medidas de seguridad sin precedentes por la animosidad abierta expresada por la población capitalina.

2.7. Los socialistas al poder

Los militares creaban organizaciones secretas y logias, participaban activamente en las discusiones sobre el futuro del país y abiertamente se solidarizaban con los grupos y los partidos de oposición. Ya durante la guerra, el 2 de mayo de 1934, en uno de los campamentos de los prisioneros de guerra en Paraguay, los oficiales patriotas formaron una logia secreta llamada Razón de Patria. Después integraron ese grupo muchos de los jóvenes oficiales, veteranos de guerra. Los dirigentes de la logia afirmaban que contaban con alrededor de 200 a 400 integrantes. La logia estaba dirigida por los jóvenes oficiales Elías Belmonte y Gualberto Villarroel.[156] El programa de la logia, que actuaba bajo secreto absoluto, exigía la defensa de los intereses nacionales y la lucha por la liberación moral y espiritual del país, repitiendo muchos puntos parecidos a los contenidos en los programas de las organizaciones políticas nacionalista.

La logia tenía dos rasgos característicos. Uno referido a su programa, el cual prohibía a sus miembros ser militantes de cualquier partido o grupo político; tampoco se les permitía ocupar altos cargos políticos, como el de presidente o de ministro de Gobierno. Desde el principio, Razón de Patria dejaba de lado la lucha directa por el poder, aspirando a ayudar en secreto a sus aliados para lograr los objetivos comunes (Belmonte, 1994: 43). El otro rasgo era su carácter hermético absoluto. Con el tiempo, no pudo cumplir el primer punto de su programa; en diferentes épocas, los radepistas participaron del poder y después lo tomaron, pese a que les estaba prohibido participar en golpes de Estado. El segundo punto, el del carácter ultrasecreto, sí pudo ser cumplido. Se supo de su existencia solamente después del derrocamiento de Villarroel, en 1946, cuando fueron publicados documentos confidenciales encontrados en el Palacio de Gobierno. Razón de Patria

156 Belmonte ocupó varios cargos de importancia en el Gobierno de Busch y se hizo famoso con el llamado "*putsch* nazi", encabezado por él. El caso fue fabricado en 1942 por la inteligencia británica. Villarroel fue presidente de Bolivia de 1943 a 1946. Murió colgado en la plaza Murillo, frente al Palacio de Gobierno, en La Paz, durante el levantamiento popular de 1946 inspirado por la oligarquía.

y otras organizaciones militares secretas se contactaban con grupos políticos de izquierda; en primer lugar, con los socialistas, que en 1936 formaron una alianza con los militares nacionalistas. Los radepistas apoyaban a los socialistas y eran sus principales aliados en la fuerza castrense.

La persona más célebre y popular del país en aquel momento fue el coronel Germán Busch, conocido como un verdadero héroe de guerra por haber comandado la única contraofensiva boliviana exitosa, en Camiri (Santa Cruz), en 1935. El pueblo lo llamaba "el tigre del Chaco". Las tropas de La Paz y las organizaciones de excombatientes se subordinaban tan solo ante él. Busch hechizó a muchos políticos, los cuales creían en su honestidad y sinceridad, incluyendo a Tejada Sorzano, quien más tarde lo reconocería amargamente como "el mayor comediante que conozco […] y no era nada limpio".[157]

Busch nació en 1904, en una familia conformada por un inmigrante médico alemán casado con una boliviana. Creció en la parte oriental de Bolivia, en la región tropical del Amazonas. Pasó su infancia en constante penuria. En 1927, al terminar su formación en el Colegio Militar, entró al servicio en el Estado Mayor, ambos en La Paz. En 1929, fue nombrado el segundo edecán del presidente de la República. Durante los golpes contra Hernando Siles, fue designado como jefe de la guardia personal del primer mandatario. Busch fue el último en deponer las armas, resistiendo contra un levantamiento antisilista, por el que pagó con el exilio en Roboré, una alejada guarnición en la selva tropical en el departamento de Santa Cruz.

Durante la guerra, desde julio de 1933, Busch comandó el Regimiento Lanza. En enero de 1934, fue nombrado como jefe del Estado Mayor del Primer Cuerpo del Ejército; y el 15 de agosto de 1935, como jefe de una brigada de caballería. Fue el organizador principal de la defensa y de la contraofensiva en Camiri, donde con éxito usó la táctica de guerrillas y con una hábil maniobra pudo contener el avance del enemigo y pasar a la contraofensiva.

Busch fue un patriota sincero y apasionado. Asumió la derrota en la guerra como su tragedia personal. Su carácter duro e inflexible causaba la admiración de la oficialidad, de los excombatientes y de la mayoría de los bolivianos, cansados todos de las intrigas de los politicastros[158] civiles del Gobierno. Con todo, era ingenuo en la política, como él mismo reconoció, y no pretendía jugar un rol independiente.

El militar con más experiencia política era David Toro, jefe del Estado Mayor. Tenía 37 años y procedía de la clase más privilegiada de Chuquisaca. Empezó su carrera militar siendo edecán del presidente José Gutiérrez Guerra. En 1920, en Oruro, donde Hernando Siles organizó la sublevación apoyando

157 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 7: 250.

158 Malos políticos.

el golpe republicano de Bautista Saavedra, actuó al lado de los revolucionarios. Fue donde conoció a Siles, su coterráneo. En 1926, cuando Siles fue elegido presidente, Toro se convirtió en su mano derecha en cuestiones militares; le encargaron las de mayor importancia y complejidad. En 1927, emprendió el proceso de liquidación de la Guardia Republicana saavedrista y formó en su lugar el Regimiento Ingavi. Siles confiaba en Toro y por intermedio suyo controlaba el Ejército. En 1930, año crítico para Siles, Toro apoyó sus planes de mantenerse en el poder y trató de convertir el Ejército en sostén de la dictadura. En junio, cayó el Gobierno de Siles y Toro, que encabezaba el gabinete, intentó aplastar la rebelión contra la dictadura.

Los paceños no simpatizaban con Toro –tampoco con Siles–, por su origen chuquisaqueño. Por ello, al no poder contar con el apoyo de la población, apostó a la fuerza militar, en particular al Regimiento Ingavi. Debió rendirse cuando todo el Ejército pasó al campo de los rebeldes. Su casa de La Paz fue allanada por la multitud y tuvo que marchar al exilio. Solo al comenzar la Guerra del Chaco pudo volver al Ejército, donde ocupó un destacado cargo en el Estado Mayor. Fue uno de los promotores y protagonistas del derrocamiento de Daniel Salamanca. Sin embargo, su reputación no era tan impecable como la de Busch. Toro tuvo gran parte de responsabilidad en la derrota militar, al igual que su amigo cercano, el fracasado general Hans Kundt.

Entre los militares, no obstante su vasta experiencia, Toro no tenía en su haber una hazaña bélica importante, como Busch o Bilbao Rioja. Toro y Busch se complementaban. Además, Toro manejaba muy bien su alianza y guardaba como un as bajo la manga a su joven compañero Busch, que lideraba las masas de militares y a los excombatientes; mantenían buenas relaciones y se entendían principalmente porque Busch carecía de ambiciones políticas. No pasaba lo mismo con el políticamente activo Bilbao Rioja, héroe de guerra y líder de los excombatientes. En octubre de 1935, Toro pudo enviar a Bilbao Rioja en una misión a Londres y, después, hizo todo lo posible para que esa visita se prolongara por tiempo indeterminado.

Toro y Busch comprendían perfectamente la necesidad de coordinar las acciones del Ejército con los sectores socialistas y con el movimiento obrero porque, a pesar de su supuesta omnipotencia, los militares no podían contar con que la población apoyara sus aspiraciones de poder sin el atractivo de un programa de reformas políticas radicales de por medio. Esa alianza convertía a los militares en el partido de las reformas revolucionarias de la sociedad. Solamente en tales condiciones podrían obtener el apoyo de las amplias masas populares.

Los oficiales apelaban a las organizaciones de excombatientes y a sus líderes informales, los héroes de la Guerra del Chaco. En septiembre de 1935, nació la Legión de Ex Combatientes (LEC), que agrupó casi a todos los sol-

dados y los oficiales desmovilizados. Los oficiales en servicio activo también la integraron. En su directiva, predominaban hombres de ideas nacionalistas y con vínculos socialistas. De hecho, se convirtió en un fuerte respaldo para los socialistas, que continuaban siendo un grupo pequeño aunque influyente. En enero del siguiente año, su cuerpo directivo fue completamente renovado. Asimismo, se aprobaron nuevos estatutos y una declaración de principios en la que se advertía la influencia predominante de los socialistas. En tales documentos, la LEC se autodefinía abiertamente como "una institución sindical de ideología socialista" (Gallego, 1991: 77). La encabezaban los héroes de guerra Bilbao Rioja y Busch.

La alianza entre militares y socialistas, representada por la LEC, se constituyó en una fuerza política decisiva. El destino del Gobierno dependía del rumbo que tomaría esa alianza. El presidente trató de neutralizar la actividad de las organizaciones de excombatientes y de los grupos políticos de izquierda. En abril de 1936, propuso a Bautista Saavedra y a Enrique Baldivieso formar un acuerdo nacional para gobernar. Empero, ni el uno ni el otro pensaban apoyar con su autoridad a Tejada Sorzano, sino que planificaban tomar el poder. El Gobierno se vio en un callejón sin salida. Al recibir su negativa, ofreció a los militares participar en el gabinete e, incluso, crear un gobierno de transición puramente militar para garantizar la realización de las elecciones. Bajo la presión de la LEC y de los socialistas, los militares rechazaron la oferta (Gallego, 1988). Tejada Sorzano se esforzaba por salvar el sistema y garantizar la legitimidad del traspaso de poder al nuevo presidente. Con esa oferta a los militares, quiso impedir la formación del bloque de militares, socialistas y el movimiento obrero, fatal para el Gobierno de entonces.

El deterioro de la situación de los trabajadores a consecuencia del alza permanente de los precios[159] llevó a la radicalización del movimiento obrero. En marzo de 1936, en La Paz tuvo lugar una huelga general que amenazaba con convertirse en un levantamiento obrero; fue encabezada por el sindicato de obreros gráficos, bajo el liderazgo de Waldo Álvarez. Los obreros actuaron de manera muy organizada y disciplinada. La ciudad pasó a manos de los huelguistas, que organizaron su propia guardia policial para mantener el orden. Sobrepasado por la magnitud del movimiento, el Gobierno exigió a los militares restablecer el orden en la sede de Gobierno, pero ellos se negaron a usar la fuerza contra los trabajadores. La alianza política entre la oposición, el movimiento obrero y los militares se forjó justamente durante aquella

159 La inflación promedio llegó al 50% anual. Es preciso considerar que en los años de crisis anteriores y durante la Guerra del Chaco (1932-1935), el alza del costo de vida fue de alrededor del 17% anual (Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, 1958: 58-62).

huelga. A pesar de la debilidad gubernamental, los sindicatos suspendieron temporalmente esa medida de presión.

A fines de 1935 y principios de 1936, los dirigentes obreros habían establecido contacto directo con los líderes militares-reformistas. Cuando las tropas arrestaron a José Aguirre Gainsborg, Waldo Álvarez pidió hablar directamente con el jefe del Estado Mayor, el coronel David Toro. En esa conversación, este último manifestó su acuerdo con los nuevos partidos y grupos de izquierda, declarando su solidaridad con los objetivos del movimiento sindical. Incluso se proclamó abiertamente partidario de los planes de cambiar el "demoliberalismo" por un nuevo sistema sociopolítico fundado en las ideas de renovación nacional y de justicia social. Como reconoció Álvarez en sus memorias, esa reunión fue el principio de su amistad con Toro y estrechó sus vínculos con los militares (1986: 82).

A mediados de abril de 1936, los sindicatos entregaron al presidente un pliego de peticiones de 19 puntos, planteando en particular el incremento de los salarios, la disminución de los precios a los artículos de primera necesidad, la amnistía, la abolición de la Ley de Huelga, las garantías de la libertad democrática y la expropiación de los bienes obtenidos por medio de la especulación durante la guerra. Se creó una comisión gubernamental para estudiar las exigencias sindicales (Lorini, 1994: 123). Sin embargo las conversaciones con los sindicatos fracasaron estrepitosamente. Tejada Sorzano, sin éxito, trató de presionar a los empresarios para que hicieran concesiones a los obreros. A comienzos de mayo, fueron creados incluso los Comités de la Lucha contra la Especulación (Gallego, 1991: 87). Esas medidas solamente causaron la ira en los círculos conservadores, descontentos por la incapacidad de las autoridades para aplastar las manifestaciones de los obreros y de los socialistas que los apoyaban. El Gobierno quedó entre la espada y la pared: por un lado, perdía el apoyo de los círculos conservadores oligárquicos; por el otro, sentía la fuerte presión de parte de los partidos de izquierda y del movimiento obrero.

Para mayo de ese año, la situación era tan tensa que sin la intervención de los militares a favor de alguna de las partes enfrentadas solo podía desencadenarse el caos político. De marzo a mayo, no cesaron en todo el país las huelgas de los obreros, apoyados por prácticamente todas las capas de la sociedad. La vida en las ciudades, especialmente en La Paz, permanecía paralizada. El Gobierno, dejado a su suerte por los militares, no estaba en condiciones de controlar la situación fuera del palacio presidencial. La preocupación aumentó ante la noticia de que los sindicatos preparaban una huelga política general, considerada como la antesala del derrocamiento del Gobierno. El 23 de abril, de hecho, se unificaron dos federaciones obreras de La Paz, la Federación Obrera del Trabajo (FOT) y la Federación Obrera Local (FOL), que agrupaban entonces a cerca de 34 organizaciones locales y regionales. En ese mo-

mento se decidió declarar la huelga general para el 4 de mayo. Las autoridades arrestaron de inmediato a 20 dirigentes sindicales, pero muy pronto tuvieron que soltarlos. El Gobierno solamente logró postergar la acción de los obreros de La Paz.

Los preparativos para la huelga general y la negativa del Ejército a apoyar al Gobierno dan una idea de la seriedad de la crisis política. Se acercaban las elecciones del 31 de mayo. De acuerdo con la resolución oficial del 4 de agosto de 1935, las elecciones presidenciales y las parlamentarias debían realizarse simultáneamente. Las fuerzas competidoras reales eran, por una parte, los candidatos del bloque gobernante, a la cabeza de los liberales, y, por la otra, la alianza entre los socialistas republicanos y el Partido Socialista. La oposición socialista tenía pocas posibilidades de ganar las elecciones, puesto que la maquinaria electoral estaba completamente controlada por los partidos tradicionales, los cuales seguían siendo fuertes en las regiones. Los militares y sus aliados comprendían perfectamente que no se podía demorar el pronunciamiento. La huelga de los obreros aceleró el final.

Alcides Arguedas, preocupado por el inevitable golpe, escribió en enero de 1936 una carta a Tejada Sorzano señalando que la única alternativa al militarismo podía ser la unificación de todos los partidos en un solo bloque.[160] Pero la enemistad entre sus líderes Saavedra, Elío y Canelas imposibilitó ese plan. En su respuesta, Tejada Sorzano reconocía francamente que el Gobierno no podía manejar el país sin la participación del Ejército, ya que los partidos políticos tradicionales estaban desorganizados, sumidos en el esnobismo y no representan ya una alternativa real de desarrollo político. Justamente por ello, el presidente quería llevar al país a elecciones honestas, sin someterlo a los peligros de una dictadura militar. En lo referido a los partidos nuevos, en primer lugar a los socialistas, señalaba, con razón, que estos, concientes de su debilidad –e interesadamente–, buscaban alianzas con los militares para tomar el poder.[161]

Tejada Sorzano buscaba la manera de interesar a todas las fuerzas políticas en la necesidad de conservar la legalidad constitucional y atraerlas hacia el proceso electoral, que era poco prometedor para el todavía joven y poco numeroso Partido Socialista. Por ello, propuso a todos los participantes del proceso electoral crear un consejo de control que garantizara la libertad en las elecciones y sus resultados. En su calidad de líder del partido más grande, le propuso encabezar ese consejo a Saavedra, cuya participación en las elecciones era vital. Saavedra primero se interesó en la propuesta, pero después se mostró indiferente. En una conversación privada con Arguedas, que participaba en las conversaciones por parte del Gobierno, dijo que no se

160 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 7: 183.

161 ALP-LML, Miscelánea, gaveta 32.

podía tener emprendimiento alguno sin la participación de los militares.[162] Saavedra no tenía interés en realizar elecciones honestas; estaba involucrado en una conspiración contra el Gobierno.

Ante la creciente tensión social y la presión de parte del Ejército, el 3 de mayo de 1936, el dirigente de los liberales en conflicto con Tejada Sorzano, Elío, dio una entrevista al periódico *El Diario*. En ella sostuvo que no participaría en esas elecciones porque el Ejército no iba a respetar sus resultados e intervendría el proceso político para establecer un nuevo régimen (*El Diario*, 3 de mayo de 1936). El mandatario quedó "huérfano" político, incluso en el seno de su propio partido. Hay que agregar la completa indiferencia hacia la suerte de Gobierno por parte de los barones del estaño, que estaban descontentos con la política de la entrega obligatoria de divisas a una tasa de cambio rebajada. Desde fines de abril, se sabía que la intervención militar directa era cosa de días. Al presidente solamente le quedaba intentar convencer a los militares con los tradicionales llamados a cumplir su deber cívico y profesional respetando la Constitución (*La Razón*, 5 de mayo de 1936).

Los temas del inminente golpe y de la participación de cada miembro de la alianza revolucionaria han sido enfocados y evaluados por los historiadores de manera diferente. Herbert Klein asevera que en la conspiración para derrocar al presidente Tejada Sorzano participaron los saavedristas y Busch, pero niega la participación de Toro (1972: 167); otros documentos indican lo contrario. En realidad, fue precisamente Toro –una figura clave en las Fuerzas Armadas y que mantenía estrecho contacto con los socialistas– el que dirigió la conspiración. A partir de 1934, se había acercado nuevamente a Carlos Montenegro y a Enrique Baldivieso, sus antiguos compañeros en el exgobierno de Siles, quienes preconizaban activamente las ideas de la reestructuración socialista del país, la nacionalización del petróleo y el establecimiento de una democracia funcional en vez del sistema representativo de gobierno, entre otras. El diplomático norteamericano que actuaba como representante en Bolivia escribió en sus informes a Washington que Toro no solamente estaba vinculado con los socialistas, sino que encabezaba un movimiento de socialistas jóvenes en el alto mando del Ejército.[163] En marzo de 1936, Toro entró en conversaciones directas con las organizaciones de izquierda en busca de formar una coalición revolucionaria para derrocar a Tejada Sorzano y no permitir la victoria electoral de los partidos políticos tradicionales. Al mismo tiempo, el Partido Socialista declaró inesperadamente no estar interesado en ganar

162 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 7: 203-205.

163 FRUS, 1936: 221.

las elecciones y que el único camino de salvación política para el país era la revolución.[164]

Ese mismo mes, Toro se reunió con el representante de la izquierda, corresponsal del Komintern, el cual mandó un extenso informe a Moscú. Toro le había adelantado su intención de tomar el poder:

> […] sólo conseguiríamos así formar un Gobierno apoyado en las bayonetas y soy partidario de un Gobierno fuerte, apoyado por el partido popular; la Confederación Socialista podría ser ese partido, aún no se ha cristalizado como tal. Es necesario esperar.[165]

Toro también consideraba necesario esperar el golpe que venía; "una revolución cívico-militar", en sus palabras. Precisamente, se le escuchó hablar de la fórmula del socialismo de Estado. Según él, ese sistema ideal era solamente la primera etapa de las reformas revolucionarias. Decía: "Bolivia será socialista o no será nada".[166]

Fue de esa manera que se formó la alianza conspiradora de los militares –liderados por Toro– con el grupo socialista de Baldivieso. El Partido Obrero Revolucionario, más bien el Bloque Socialista de Izquierda, ofreció a Toro su colaboración para conquistar el poder. Tomando en cuenta la influencia y la importante posición de José Aguirre Gainsborg y de Tristán Marof en el movimiento obrero, Toro y Baldivieso aceptaron la alianza propuesta. Marof planteó un triunvirato conformado por Toro, en representación de los militares, alguien por los socialistas y un tercero por el Bloque Socialista de Izquierda.

El Partido Obrero Revolucionario puso como condición el cumplimiento de sus exigencias políticas: la amnistía y la nacionalización de las minas, del petróleo y de los bancos, como también la parcelación de los latifundios. El punto más discutido fue el de la nacionalización inmediata de las minas. Toro y Baldivieso consideraban que no era posible nacionalizar el estaño sin tener mercados alternativos a los de Estados Unidos e Inglaterra. Ese mercado podía haber sido, según ellos, la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Se decidió retomar las propuestas para comprar el estaño boliviano que había hecho la empresa soviética Yuzhamtorg, en 1929. Para estudiar la posibilidad de reorientar el mercado del estaño hacia la URSS, se pensaba mandar hasta Moscú a Marof y a Iván Keswar, que se encontraban en Argentina, así como a los representantes de los socialistas de Baldivieso.

---

164 RGASPI, fondo 495, legajo 122, número 4: 12.

165 *Ibid*.

166 *Ibid*.

En el caso de una respuesta positiva, como pensaban que sucedería, se podría nacionalizar el estaño al llegar al poder, sin temer las sanciones del Comité Internacional del Estaño, controlado por Simón I. Patiño.[167]

También en marzo de 1936, Marof entró en contacto, una vez más, con los comunistas argentinos. En una carta confidencial dirigida a Moscú, Rodolfo Ghioldi indicaba que como en Bolivia todavía no había un partido comunista y la influencia de los grupos comunistas de orientación moscovita era muy escasa, el partido argentino había intentado aumentar su influencia entre los partidarios de Marof. Con ese fin, un año antes, por intermedio de Oscar Creydt, los comunistas argentinos se contactaron con Marof, quien les habría dejado abierta la posibilidad de romper con el trotskismo.

En 1936, Marof reanudó relaciones con el partido argentino y, esta vez, les propuso crear el partido comunista en Bolivia. Asimismo, para establecer contactos más fuertes y duraderos, planteó viajar a Moscú junto con su compañero y también activista del Partido Obrero Revolucionario Iván Keswar. Sus propuestas provocaron muchas dudas. Ghioldi caracterizó a Keswar como un hombre serio, de buenos principios, con el cual se podría trabajar en el futuro, subrayando que había militado en el partido comunista –o mejor dicho en el grupo comunista de La Paz–, pero que había sido equivocadamente expulsado durante la "purga de intelectuales" en los partidos sudamericanos y especialmente durante la campaña de la Internacional Comunista contra la Confederación de Repúblicas Obreras del Pacífico (CROP) de José Antonio Arze. No obstante, contando con el hecho de que en Bolivia no existía un partido comunista y que sería muy difícil crearlo sin la participación de Marof, Ghioldi propuso ceder en cuestiones de principios y establecer una alianza condicional con él, a fin de fundar un partido comunista de masas y asestar así un rotundo golpe a los trotskistas del Partido Obrero Revolucionario dirigido por Aguirre Gainsborg, quitándoles las masas que, según él, seguían a Marof. La única condición que impuso la Internacional Comunista a la visita de Marof y de Iván Keswar a Moscú fue la ruptura pública con el trotskismo, una abierta solidaridad con la URSS y la aceptación de las decisiones del Séptimo Congreso de la Internacional Comunista sobre el Frente Popular.[168]

No encontramos más datos sobre el devenir de esa historia de enredos. Además de los problemas técnicos de comunicación con Moscú y de la falta de información en la Internacional Comunista sobre la realidad política boliviana, los personeros de esta última no confiaban mucho en su corresponsal Ghioldi, que era considerado un intelectual y un comunista no suficientemente "duro". El asunto se agravó, además, con la ad-

---

167 RGASPI, fondo 495, legajo 122, número 4: 12.

168 RGASPI, fondo 495, legajo 20, número 353: 3.

versidad de la Internacional Comunista hacia el propio Marof, la principal figura de esta historia. Si era cierto que la Internacional Comunista no lo había repudiado como trotskista, solamente lo tratarían como un "escritor burgués" (Sinani, 1934: 240). Empero, la personalidad compleja y a menudo imprevisible de Marof no hubiera augurado un vínculo estable con la Internacional Comunista, en caso de haber encabezado un partido oficialmente comunista en Bolivia.

Lo cierto es que los acontecimientos en el país andino se desarrollaban demasiado rápido y la Internacional Comunista no conseguía estar al curso del día ni reaccionar a coyunturas complicadas y a menudo políticamente confusas. El hecho quedó como algo anecdótico y sin consecuencias políticas. Para fines de investigación, ese acontecimiento guarda tremendo interés, pues expone la amplitud del espectro político de la alianza revolucionaria y del alcance de las conversaciones que llevaron a cabo los militares, además de hacer evidente la participación de David Toro en la conspiración realizada por los militares y los socialistas.

En mayo de 1936, la situación política en Bolivia se agudizó. Los obreros gráficos declararon una huelga en La Paz, en fecha 9. Al principio, sus reivindicaciones se limitaban a exigir un aumento de salarios, pero muy pronto adquirió un contenido eminentemente político. El 10 de ese mes, se sumaron los sindicatos de la FOT y de la FOL. La huelga se hizo general. Dejó de funcionar el transporte y los piquetes del Comité de Choferes impidieron cualquier movimiento en las calles. En su diario, Arguedas describió como sigue la situación de la ciudad: "Entretanto sigue la huelga. El comercio ha cerrado sus puertas y las calles están vacías. No hay autos, ni nadie se atreve a sacar el suyo porque correría el riesgo de hacerlo destrozar con la turba".[169] Las tiendas y los mercados, cuyos dueños apoyaban a la FOL anarquista, cerraron sus puertas; los bancos dejaron de trabajar y todas las empresas de la ciudad paralizaron sus labores en apoyo a las reivindicaciones de los gráficos. Es lamentable la no aparición de los diarios en esos días, porque se perdió una fuente importante de información sobre jornadas de acontecimientos tan importantes en la vida del país. A pesar del estado de sitio y de la prohibición de las manifestaciones, estallaron ruidosas y densas marchas callejeras de protesta.

El Gobierno trató de mostrar mano dura en su lucha contra los sindicatos. Tejada Sorzano convocó para el 12 de mayo, en el Palacio de Gobierno, a una "reunión de notables", con cerca de 50 representantes de diferentes grupos políticos y sociales de la capital. El mandatario describió el dramático panorama de quiebre financiero y de fracaso político. La única salida vislum-

169 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 7: 228.

brada, desde su punto de vista, era la de las elecciones generales sin el *boicot* de los partidos y sin la presión del Gobierno ni de los militares. Subrayó su seguridad en el comportamiento del Ejército y personalmente de Busch.[170] Pronunció esas palabras con total sinceridad. El 7 de mayo, había recibido de Busch una carta en la que aquel comprometía su palabra de honor de oficial, asegurando que ninguna unidad militar tenía intenciones de sublevarse.[171] El 12 de mayo, mientras Tejada Sorzano se reunía con la élite política, los líderes obreros, a la cabeza de Waldo Álvarez, se encontraron con Busch, quien les garantizó que el Ejército no utilizaría la fuerza contra un movimiento de carácter puramente económico. Es más, declaró su solidaridad con la lucha de los huelguistas y, al despedirse, expresó su sinceridad abrazando a los dirigentes obreros (Álvarez, 1986: 88).

El 15 de mayo, tuvo lugar la asamblea de la FOT, en la que esta decidió lanzarse a una huelga general, con el argumento de exigir un aumento salarial debido al encarecimiento del costo de vida y porque en enero el Gobierno había subido los sueldos a los funcionarios estatales, mientras que en las empresas particulares no hubo aumento alguno. Ante la movilización conjunta de la clase obrera de La Paz, Tejada Sorzano trató de maniobrar con la promesa de estudiar urgentemente los temas. De todas maneras, necesitaba tiempo, pero no pudo convencer a los sindicatos de aplazar la huelga.

La ciudad permanecía paralizada. El 16 de mayo, los estudiantes se unieron a los trabajadores. La Federación de Estudiantes apoyó todas las reivindicaciones de la FOT y salió a las calles, protagonizando enfrentamientos con la Policía y con los partidarios del Gobierno. Ante el curso de la huelga, se planteó el asunto de la gobernabilidad del país y de la incapacidad de las autoridades para garantizar el más elemental orden en la sede de Gobierno. En contraposición, el 12 de mayo, el Comité de Huelga había aprobado la organización de una instancia policial sindical y los destacamentos obreros mantuvieron el orden en la ciudad. Tejada Sorzano decidió intervenir la huelga haciendo uso de la fuerza militar.[172] Para aplastar las manifestaciones de los trabajadores se necesitaba una fuerza de la que el Gobierno no disponía. Una de las últimas declaraciones de Tejada Sorzano, en vísperas del golpe, rezaba: "El Ejército no debe parcializarse. Si así lo hiciera, abandonaría su más augusta misión; perdería el respeto de la sociedad" (Díaz Machicao, 1957a: 23). Las palabras del presidente

170 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 7: 228-229.

171 ABNB-PR, 1936, Correspondencia, "Carta de G. Busch a J. L. Tejada Sorzano del 7 de mayo de 1936", caja 12, tomo 143.

172 FRUS, 1936: 230.

no despertaron eco en los militares. Resultaron vanas las esperanzas de la autoridad puestas en el Ejército.

El 16 de mayo, Tejada Sorzano recién emitió el decreto de estado de sitio para las instituciones estatales y la movilización de todos los empleados públicos. Envió al Estado Mayor una orden, dirigida al teniente coronel Busch, para que se restableciera la normalidad con la fuerza del Ejército. En respuesta, tres oficiales ingresaron a las tres de la mañana del día siguiente a la residencia de Tejada Sorzano anunciándole su arresto, exigiéndole firmar su renuncia y la inmediata entrega del poder a una Junta Revolucionaria (Gallego, 1991: 88-89).

El cambio de poder transcurrió sin derramar una sola gota de sangre. El golpe se produjo en ausencia de los representantes más influyentes del alto mando, David Toro y Enrique Peñaranda, que se encontraban en Villamontes (Tarija), donde los alcanzó la noticia de los cambios en La Paz. Aunque más tarde Toro negaría haber tenido conocimiento sobre la preparación del golpe, sosteniendo que incluso estaba dispuesto a defender a las autoridades legítimas, documentación de la época señala su directa participación en la conspiración. Además, la orientación ideológica del golpe, mostrando las primeras medidas políticas y las declaraciones de Busch, concuerdan plenamente con los pronunciamientos sobre el socialismo de Estado escuchados de boca de Toro en conversaciones sostenidas antes del golpe con los comunistas argentinos que representaban a la Internacional Comunista.[173]

El 17 de mayo, al referirse a las tareas y a los objetivos del nuevo Gobierno, Busch declaró que se trataba de crear un sistema político y social totalmente nuevo para el país. Dejó anunciada la instauración del socialismo de Estado. Declaró también que esperaba que la Junta orientara a la nación hacia un socialismo de Estado prudente y gradual, y que, evitando convulsiones y atentados, estableciera un régimen de justicia social (Valencia Vega, 1987). El pueblo boliviano bautizó ese régimen como “militar-socialista”, ya que su idea estaba clara: el socialismo boliviano no era promovido por la sociedad, sino por el mismo Estado; en este caso, por el gobierno militar.

Los militares usaron consignas revanchistas y chovinistas, llamando a la contraofensiva en el Chaco, haciéndose eco del estado de ánimo de las mayorías populares. Los gestores del golpe se valieron del sentimiento patriótico

173 Herbert Klein afirma que Busch, improvisando, bautizó el nuevo régimen como el “socialismo de Estado”, lo que contradice la información de los archivos de la Internacional Comunista, según los cuales ese término fue utilizado por Toro ya en marzo de 1936. Es evidente el vínculo espiritual de los militares bolivianos con la República socialista chilena del año 1932.

para consolidar las fuerzas nacionalistas, inclusive las del Ejército. Explicaron que su intervención obedecía a las aspiraciones de cambiar radicalmente el curso de la guerra y conseguir la revancha militar, y responsabilizaron a los gobiernos civiles por la derrota. La emisora estatal Illimani cayó a los niveles más elementales de propaganda: tocaba ininterrumpidamente marchas patrióticas y emitía llamados a defender el Chaco, con duros insultos en aymara a los paraguayos.[174] Daba la impresión de que el país volvía a 1932, en vísperas de la catastrófica Guerra del Chaco.

El mismo día del golpe, los más activos fueron los militantes de la Confederación Socialista. La renuncia de Tejada Sorzano fue la señal de acción para los revolucionarios civiles. Un grupo de socialistas, liderado por Carlos Montenegro, ocupó y allanó el Club de la Unión, cuyos miembros eran los más importantes oligarcas, entre ellos los barones del estaño. Colgaron en el edificio del club una bandera roja y pusieron un letrero que decía “Comité Revolucionario”. Ese ataque al símbolo de la oligarquía, con el beneplácito de los líderes militares del golpe, horrorizó a las clases altas. La élite tradicional cayó en pánico (Frontaura, 1974: 79). Muchos creyeron que nada podía salvarlos. Tales acciones enérgicas de los revolucionarios crearon las premisas necesarias para neutralizar el poder de la oligarquía en la etapa de formación del nuevo régimen.

El golpe transcurrió con el apoyo activo de la clase obrera en La Paz. Por la mañana, los destacamentos obreros armados llenaron la plaza Murillo.[175] Aparecía así un elemento nuevo en la correlación de fuerzas: los obreros apoyaban al Ejército. Busch pretendía subrayar la alianza entre los militares socialistas y el movimiento obrero. A las diez de la mañana de aquel 17 de mayo, a petición de los obreros, Busch asistió a una asamblea sindical reunida en el Teatro Municipal de La Paz. En su breve intervención, el militar prometió a los sindicatos garantizar la participación de sus representantes en el nuevo Gobierno.[176] En la asamblea, Busch declaró:

> Estoy de acuerdo con los trabajadores, porque mi padre también fue un trabajador. Sé los sufrimientos que pasan los choferes, los gráficos, los ferroviarios y todos los sectores obreros; por esta razón también estoy de acuerdo con el pliego de peticiones de ustedes y mi gobierno ha de hacerlo cumplir íntegramente (Álvarez, 1986: 92).

174 ABNB-PR, “Diario de Alcides Arguedas”, tomo 7: 231.

175 ABNB-PR, “Diario de Alcides Arguedas”, tomo 7: 230.

176 AHGE-SRE, 1936, “Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 8 de octubre de 1936”, fondo 27, legajo 29, expediente 13, folio 45.

El accionar de los militares y de los socialistas era apoyado por los obreros de la capital, aunque la huelga de los gráficos seguía y sus participantes no estaban satisfechos con el cambio de autoridades. En la nueva situación, naturalmente, los sindicatos estaban seguros de lograr el triunfo ante los empresarios.

Al día siguiente del golpe, los líderes obreros asumieron acciones más decididas. Declarando su apoyo a los militares, los sindicatos sacaron a los obreros a la calle. El 18 de mayo, surgieron las poderosas manifestaciones obreras mostrando el potencial de los trabajadores, no solo a los empresarios con los cuales todavía no se firmaba el acuerdo de aceptación de las reivindicaciones de los huelguistas, sino también a los militares, no muy entusiasmados con sus aliados de izquierda, sobre todo con el movimiento obrero. Durante esa manifestación, los obreros ocuparon el edificio municipal de La Paz e izaron una bandera roja en el techo. La Alcaldía fue declarada como la Casa del Pueblo y se levantó el acta de creación del Consejo Funcional de la Comuna de La Paz.

Aquella ocupación por los sindicatos significó la caída tanto del Gobierno como de todo el viejo régimen republicano y de sus instituciones de poder. Dado que el nuevo régimen político no pensaba volver al antiguo, tal hecho recibió la aprobación de los militares, que deseaban convertir a los sindicatos en uno de los componentes clave del socialismo de Estado. Los acontecimientos en La Paz llevaron a los izquierdistas a tomar el poder en las regiones. En Potosí, el Frente Popular procomunista y la Legión de Ex Combatientes, grupos encabezados por los marxistas Arturo Arratia y Abelardo Villalpando, prácticamente se adueñaron de la ciudad.[177]

2.8. La conformación de la alianza revolucionaria

De acuerdo con las tradiciones anarcosindicalistas, en la nueva Casa del Pueblo, fue convocada la Asamblea General de los Trabajadores, que decidió apoyar al nuevo Gobierno. El 19 de mayo de 1936, esa asamblea eligió como representante suyo en el Gobierno a Waldo Álvarez, líder de los gráficos (Álvarez, 1986: 94-95). Con ello, por primera vez en la historia de Bolivia, un representante de los sindicatos accedía a un cargo gubernamental. El mismo día, el secretario de la Junta y el representante de la Ferereción Obrera del Trabajo (FOT) se habían dirigido por radio a los huelguistas, instándolos a regresar al trabajo, con la promesa de aumentarles los salarios y ofreciendo un puesto para Álvarez en el Gobierno.[178] Por acuerdo entre la FOT y la Junta,

177 ABNB-PR, 1937, Correspondencia, "Carta de LEC [Legión de Ex Combatientes] a D. Toro del 16 de marzo de 1937", caja 13, tomo 152.

178 FRUS, 1936: 225.

ese día también terminó la huelga. Los salarios subieron dos veces. Los grupos de obreros se desplazaron por la ciudad en autos y en tranvías gritando vivas a los militares y exclamando: "¡Viva la revolución! ¡Viva la victoria!".[179] Entre los obreros reinaba la sensación de triunfo y de inicio de una nueva época.

Después de emitir una declaración de principios, base del futuro Gobierno, Germán Busch formó un Comité Revolucionario, cuya composición permite sacar conclusiones sobre quiénes participaron en la conspiración contra José Luis Tejada Sorzano. El golpe se produjo por una acción conjunta entre el Estado Mayor, David Toro, los saavedristas y los socialistas, aliados con los excombatientes y las organizaciones obreras.

Según Bautista Saavedra, integrarían el nuevo Gobierno aquellos militares que no fueran partidarios de Toro.[180] Sin embargo, luego de que Busch evaluara la situación real, con la huelga general y el claro predominio de los socialistas, cambió todo el juego; los saavedristas ocuparían funciones secundarias. Los líderes del ala izquierda de los republicanos socialistas, Pedro Zilvetti Arce y Gabriel Gosálvez, asumieron respectivamente las carteras de Obras Públicas y de Defensa, que era clave. Los socialistas recibieron dos puestos: el Ministerio de Hacienda, que fue ocupado por Fernando Campero, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que se desempeñó Enrique Baldivieso. Se debe resaltar que desde un principio se había señalado el carácter provisional de esa Junta. De hecho, Busch pensaba ceder el poder a Toro para que este, a su regreso del Chaco, pudiera empezar la formación del nuevo Gobierno.

Dentro de la alianza revolucionaria, entre las fuerzas políticas que integraban la Junta después del golpe, se libraba una cruda lucha por lograr la mayor influencia posible sobre los militares, especialmente sobre Busch. Por ello, en los primeros días y tras elaborar el curso del nuevo Gobierno, salieron a flote las divergencias entre los aliados. Los saavedristas trataban de enfrentar entre sí a Toro y a Busch. Toro no podía entenderse con Saavedra, no solamente por la pesada carga de ofensas mutuas que se remontaban a la época de la presidencia de Hernando Siles, sino también por el muy fundado miedo del líder de los republicanos socialistas de ser desplazado a posiciones de segundo orden en el futuro Gobierno (Gallego, 1991: 94-95). Lo cierto es que Toro era un político suficientemente independiente y experimentado como para contentarse con un rol de simple ejecutor de la línea de Saavedra. Este último quedaría muy contento con la candidatura de Busch, un líder militar joven e inexperto en la política. Busch, a su vez, se daba cuenta de sus defectos y no se atrevía a aprovechar el enorme poder que tenía. Además,

179 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 7: 253-254.

180 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 7: 235.

estaba absolutamente claro que cumplía los acuerdos concertados antes del golpe y apoyaba completamente a Toro.

Saavedra se resistía a llamar a Toro para gobernar el país, tratando de convencer a Busch de enfrentarse a aquel. Los socialistas temían que la coalición se disolviera y se formara un Gobierno puramente militar. Trataban de conciliar las partes, subrayando siempre su fidelidad a la alianza con los militares. El líder de los socialistas, Baldivieso, fue incluso a Oruro, donde estaba Toro, para prevenirlo sobre la impopularidad de su figura en La Paz. Utilizando ese hecho, Baldivieso quería impedir cualquier reacción hostil por parte de Toro contra sus aliados civiles, insinuando que detrás de ellos estaban las masas populares de la capital (Gallego, 1988: 482). Al mismo tiempo, los saavedristas organizaron manifestaciones, principalmente con la participación de estudiantes y de obreros que aún recordaban las represiones de 1930, de responsabilidad de Toro, por entonces ministro de Gobierno.[181] La de los estudiantes se convirtió en una protesta contra toda participación de los militares en el ámbito político. Con la casi total aprobación ciudadana a la actuación de los militares, tal manifestación pasó como hecho aislado que utilizarían sabiamente los grupos oligárquicos para formar una oposición liberal al régimen militar.

Ese 19 de mayo, se anunció la disolución de la Junta. Busch expuso como razón las divergencias al interior del Comité Revolucionario. No obstante, fue principalmente para que Toro tuviera mayor libertad para formar un nuevo gabinete de ministros: la nueva Junta. Al día siguiente, Toro llegó a La Paz. La oposición oligárquica, representada por Carlos Aramayo –que mantenía vínculos bastantes cercanos con Toro–, ofreció apoyo y financiamiento al nuevo presidente, con la condición de que sacara a Saavedra y a los socialistas de la Junta.[182] Pero, más allá de sus deseos, Toro dependía de la alianza revolucionaria y de Busch, que no habrían aceptado ese cambio.

Antes de ocupar la presidencia, Toro exigió del alto mando del Ejército una declaración firmada –no solamente por el comandante en jefe, el general Peñaranda, sino por todos los altos oficiales– sobre el incondicional apoyo de las Fuerzas Armadas a su futura gestión (Toro, 1941: 262-263). Precisamente, el Ejército se constituía en la base de poder del gobierno socialista. La composición de la nueva Junta formada por Toro repitió prácticamente la del Comité Revolucionario, que llegó al poder el 17 de mayo. Sin embargo, fue notable el fortalecimiento de los socialistas y de los militares partidarios de Toro, en detrimento de los saavedristas.

181 FRUS, 1936: 225-227.

182 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 7: 236.

Esa tendencia empezó a manifestarse en las primeras declaraciones del Gobierno. El 23 de mayo, durante la presentación del nuevo gabinete, Toro sostuvo que el país necesitaba una renovación a partir de nuevos principios de funcionamiento de la economía y de la sociedad. Asimismo, anunció reformas que permitieran orientar la economía hacia los estándares "puramente socialistas". Reforzando aquellas declaraciones, el líder de los socialistas, Baldivieso, afirmó que el objetivo principal del golpe fue el derrocamiento del régimen liberal y que no se trataba de un socialismo total, puesto que Bolivia todavía necesitaba capital extranjero (*El Diario*, 24 de mayo de 1936). Los militares socialistas se proponían construir un sistema en el que el Estado tomara bajo su cuidado el bienestar de las clases trabajadoras, se responsabilizara por un desarrollo estable de la economía y garantizara la seguridad social, la salud y la educación; es decir, un sistema totalmente contrario a los viejos principios liberales de no intervención estatal en la vida privada de los ciudadanos ni en la administración de la economía nacional.

Por 'socialismo', los militares y sus aliados entendían el fortalecimiento del Estado, la regulación rígida de la economía y el fortalecimiento del control de las autoridades sobre todos los aspectos de la vida. El socialismo completo, a su juicio, consistía en la estatización total de la economía y de la esfera social. Para su construcción, había que pasar por la etapa de industrialización y de diversificación de la economía nacional, para lo cual se requerían inversiones extranjeras. Asimismo, pensaban comenzar de inmediato a construir las estructuras del nuevo régimen. Los ideólogos del socialismo de Estado no se cansaban de establecer serias diferencias con el socialismo marxista. Ese régimen, en efecto, se contraponía al marxismo internacional, pues sus objetivos eran puramente nacionales. Toro subrayaba el carácter preventivo de la revolución, que impedía el deslizamiento hacia la anarquía y el comunismo. Todos esos grandes planes de reformas revolucionarias del país no debían realizarse en nombre del proletariado y de sus aliados de clase, como lo afirmaban los comunistas, sino en nombre del Estado y de la nación.

En su primer mensaje a la nación, Toro declaró que su intención era "implantar el socialismo de Estado con el concurso de los partidos de izquierda" (Díaz Machicao, 1957a: 24). Fue adoptada oficialmente la palabra 'compañero', lo que le daba un toque romántico a todo el movimiento socialista de los militares. El nuevo Gobierno declaró amnistía general y levantó el estado de emergencia. El gabinete, apoyando la acción de los sindicatos, anunció su política de defensa de los intereses de los trabajadores y de los excombatientes.

El 26 de mayo, la Junta publicó un programa mínimo de 52 puntos, cuya autoría corresponde a Baldivieso, de quien están reflejadas sus con-

signas socialistas. En el documento se mencionan las diferencias entre un capital salvaje y uno "bueno" y progresista, el cual era necesario defender, pues no saquearía las riquezas nacionales, sino que ayudaría al desarrollo industrial. De ahí que es posible concluir que el nuevo gobierno estaba dispuesto a colaborar con los empresarios nacionales y extranjeros, controlados por el gobierno socialista (Valencia Vega, 1987; Gallego, 1991: 98). Hablando sobre el control de las actividades del capital por parte del Estado, incluido el extranjero, los militares-socialistas se mostraron como verdaderos innovadores y revolucionarios que rompían con toda la política económica pasada.

Entre las reformas de la estructura económica ocupaba un lugar importante la reforma tributaria. Los impuestos a las utilidades debían ser la principal fuente de ingreso del Estado, desplazando los impuestos de aduana, como también los impuestos indirectos. La política tributaria debía convertirse, entonces, en una herramienta eficiente de regulación estatal de la economía. Se planteaba, por otra parte, nacionalizar paulatinamente los ferrocarriles y las comunicaciones. Según la opinión de los militares-socialistas, toda la infraestructura y las ramas estratégicas de la economía debían ser de propiedad del Estado, creando con ello las condiciones para el desarrollo del capital nacional, la industrialización y la diversificación. En su política económica cotidiana, la Junta establecía objetivos como la elaboración de un presupuesto balanceado y el logro de la estabilización financiera, asuntos de suma importancia por la alta inflación de posguerra y la falta de artículos de primera necesidad. La Junta ofreció establecer subsidios a los artículos de primera necesidad, los alimentos, que llegaban a las ciudades básicamente por la vía de la importación. En suma, se prometieron reformas estructurales a la economía.

En la minería, el programa prometía cambiar el sistema tributario y, lo más importante, traspasar una parte de sus acciones al Estado para crear, en vez de monopolios privados, compañías mixtas con participación estatal decisiva. En una perspectiva a largo plazo, según los planes de la Junta, la minería sería paulatinamente nacionalizada por la vía del traspaso al Estado del voto decisivo en la administración de las empresas. También se proponía crear un Banco Minero que se convirtiera en un agente estatal con el derecho monopólico de vender los metales al extranjero. El establecimiento del control estatal en la comercialización del producto permitiría, sin nacionalizar la producción misma, supeditarla por entero al Estado.

Esos proyectos revolucionarios de la Junta socialista causaron entusiasmo y aprobación en los partidos de izquierda, pero, a la vez, obligaron a la oligarquía a movilizar todas sus fuerzas. La derecha pudo más tarde sepultarlos, sin esperar las acciones concretas del Gobierno. Los militares-socialistas no tuvieron voluntad política ni fuerzas para afectar los intereses de los mag-

nates mineros. Los planes de limitar la omnipotencia de los monopolios y de restablecer el control estatal sobre las materias primas, fundamentales para la reforma económica del país, quedaron en papel.

El programa mínimo abordaba también el principio de la propiedad privada en el agro. La declaración del Gobierno sobre la necesidad de favorecer el reparto de las tierras de aquellos latifundios no productivos fue complementada con un comentario que señalaba la aplicación de dicha política de manera paulatina y sin forzarla (Valencia Vega, 1987).

Otro de los puntos centrales del programa fue la revisión de los convenios con la Standard Oil y la creación de la industria petrolera nacional. El caso de esa petrolera era parte de la investigación de la responsabilidad política y económica de las personas y de las compañías por la Guerra del Chaco. Además, la Junta se proponía limpiar la sociedad de los elementos corruptos e investigar todos los casos de enriquecimiento dudoso en el periodo de guerra (Díaz Machicao, 1957a: 24). Tales medidas debían constituirse en una suerte de revancha moral por la derrota en la guerra.

El programa planteaba como otro de sus puntos la necesidad de reformar el Estado y la sociedad, basándose en los principios socialistas. En general, esas reformas significaban crear un nuevo sistema en reemplazo de la democracia parlamentaria. La base debía surgir de la sindicalización obligatoria y de la estatización de los sindicatos (Klein, 1965: 37). La parte política del programa era poco clara; mencionaba solamente algunas reformas a las instituciones estatales y destacaba particularmente el nuevo papel de los sindicatos como base de todo el sistema político. El sentido programático podría ser expresado con una fórmula: el fortalecimiento general del Estado.

Las declaraciones anticapitalistas y socialistas de los nuevos miembros del Gobierno, en vísperas del golpe, produjeron preocupación en los círculos conservadores. Después de la conocida Revolución de Mayo, se moderó el tono general de las declaraciones de los socialistas. Tras la llegada al poder, su líder, Enrique Baldivieso, en conversación con el embajador británico, dijo que todas esas declaraciones radicales eran solamente un tributo propagandístico a los ánimos de la ciudadanía y que, en comparación con las leyes de Inglaterra, las reformas bolivianas parecían más conservadoras (Gallego, 1991: 100). Baldivieso fue sincero solo en parte. La realidad era que el sistema de gobierno y de economía de Bolivia, entonces arcaico y atrasado, necesitaba reformas que realmente eran moderadas, pero para Bolivia representaban una ruptura revolucionaria con el pasado. Sin embargo, Baldivieso se veía obligado a justificarse ante los embajadores extranjeros, como también a tranquilizar a Estados Unidos y a Gran Bretaña, las contrapartes económicas principales de Bolivia, para convencerlos de su lealtad y de su "decencia".

Los militares-socialistas crearon nuevos ministerios: de Trabajo, de Minería, de Petróleo y de Agricultura. En el Ministerio de Educación, en cambio, se conformó el Comité de Asuntos Campesinos. Creado por decreto de 2 de junio de 1936, el Ministerio de Trabajo recibió el encargo de elaborar una legislación laboral apropiada a la sindicalización. El primer ministro de Trabajo fue el líder sindicalista Waldo Álvarez, que ya durante el golpe había sido propuesto por la Asamblea General Obrera como representante de los sindicatos al gabinete ministerial. Lo secundó, por muy poco tiempo, José Aguirre Gainsborg, pasando luego a trabajar para el Ministerio de la Industria y el Comercio (Álvarez, 1986: 98). Para el cargo de director del Departamento de Trabajo –es decir, el segundo hombre del Ministerio de Trabajo–, fue designado Alberto Mendoza López,[183] representante del Partido Socialista, que hizo de contrapeso a la dirección demasiado izquierdista de ese ministerio. Como asesor jurídico en esa misma cartera de Estado fue invitado el conocido marxista José Antonio Arze, quien por entonces regresaba del exilio. Dirigentes sindicales y políticos de izquierda recibieron los demás cargos de responsabilidad ministerial, entre ellos Ricardo Anaya, dirigente marxista del Grupo de Izquierda, y Hugo Sevillano,[184] saavedrista.

Los militares preferían la colaboración de los socialistas y de los líderes obreros de izquierda a las otras alianzas, particularmente aquellas con los saavedristas. Los izquierdistas abordaron activamente el cumplimiento de los objetivos declarados por los militares, como el fortalecimiento del rol de los sindicatos en la vida política del país, en primer lugar. Los militares, invitando a los izquierdistas, pensaban estrechar una alianza con el movimiento obrero, al que en esa etapa consideraban como el principal aliado del régimen. Desde su punto de vista, un movimiento obrero fuerte apoyando a la Junta garantizaba también la lealtad del Ejército, donde, además de tenaces partidarios del nuevo Gobierno, quedaban bastantes generales conservadores que no aceptaban las novedades “socialistas”.

En el Ministerio de Trabajo, fueron constituidas las comisiones para elaborar la legislación laboral y preparar el Código de Trabajo. La misión fue encomendada a los militantes de izquierda y a los dirigentes del movimiento laboral. Álvarez participó directamente. El Gobierno hizo grandes concesiones al movimiento obrero. El 1 de junio de 1936, la Junta emitió un decreto incrementando signi-

183 ABNB-PR, 1936, Correspondencia, “Carta de D. Toro a W. Álvarez del 3 de junio de 1936”, caja 12, tomo 127.

184 Sevillano participó en la Primera Conferencia de los Sindicatos Rojos de América Latina en Montevideo (1929). Volvió a Bolivia convertido en un acérrimo anticomunista.

ficativamente los sueldos a los funcionarios estatales y los salarios del sector privado. Por otro decreto, fueron establecidas las franquicias a los excombatientes del Chaco (Díaz Machicao, 1957a: 25). Con esas medidas populares, el nuevo Gobierno pensaba ganarse a las amplias capas de la población.

Los excombatientes del Chaco fueron los más vigorosos partidarios de la Junta, como lo demostró el Primer Congreso de la Legión de Ex Combatientes (LEC), realizado en Oruro, cuya exigencia principal consistió en investigar las responsabilidades de la derrota en la guerra. En esa ocasión, fueron expulsados los veteranos que no apoyaron la idea del socialismo de Estado. La LEC fue la herramienta con la cual el Gobierno socialista neutralizó a los militares, particularmente a los de alto rango, descontentos con los cambios. Fue así que consiguió conservar el control del Ejército en manos de los líderes informales, es decir, de los gestores del golpe. El régimen asignaba a las organizaciones de excombatientes el rol de "partido del Gobierno".

En aquellos primeros días de junio, el Gobierno entró en una crisis interna. Saavedra pretendía jugar el papel principal dentro de la Junta y su actitud lo puso en conflicto con los militares y con los socialistas. Empero, los saavedristas no consiguieron sembrar la discordia en las filas castrenses ni adjudicarse el apoyo de una parte del Ejército. Saavedra intentó presionar a la Junta con sus tradicionales métodos de movilización de los cholos paceños, organizando en La Paz, precisamente, manifestaciones, mitines y asambleas populares de los partidarios de los republicanos socialistas.

También en esos días, el Partido Republicano Socialista creció numéricamente, hecho que preocupó bastante a sus aliados en el Gobierno. Por entonces, los saavedristas convocaron a un gran mitin en el Teatro Municipal de La Paz, donde se opusieron abiertamente a los socialistas, cuya actividad fue caracterizada como comunista. Saavedra llamó a crear el frente único de los socialistas moderados, alrededor de su partido. El diario *La República* lanzó una campaña de acusaciones contra el Gobierno y los militares, arguyendo que propiciaban el comunismo. Las principales críticas de Saavedra iban contra el Ministerio de Trabajo y contra los socialistas que apoyaban a Álvarez.

Los socialistas reaccionaron con más y más hostilidad a las pretensiones hegemónicas del saavedrismo. A fines de junio, las organizaciones locales en las provincias, seguidas por el Comité paceño de los socialistas, declararon la ruptura de su alianza con los republicanos saavedristas. Deseando neutralizar a Saavedra, Toro le ofreció integrar la delegación de Bolivia en la Conferencia de Paz, en Buenos Aires, lo que significaba el alejamiento del líder de los republicanos-socialistas del país que, al fin de cuentas, hacía inevitable la ruptura de su partido con la coalición revolucionaria. Con la negativa de Saavedra, el conflicto se hizo abierto.

La principal diferencia entre los saavedristas y los socialistas en cuanto a su trato con los militares consistía en que esos últimos, conociendo su debilidad orgánica, no aspiraban a gobernar solos el país y confiaban en su alianza con los militares. Saavedra y sus seguidores, en cambio, utilizaban alianzas y compromisos políticos para alcanzar la plenitud del poder y sacar a las Fuerzas Armadas del escenario político, como se hizo en 1930. El conflicto de Saavedra con los militares se veía inevitable.

Los socialistas, a su vez, consiguieron dividir el saavedrismo. Waldo Álvarez narró en sus memorias que en el gabinete de ministros trataban de convencer al representante del Partido Republicano Socialista, Gabriel Gosalves, de revisar la orientación personalista del partido y de dejar de seguir ciegamente al viejo caudillo. El ministro de Hacienda, Fernando Campero, propuso a Gosalves destituir, con ayuda de las autoridades, a Saavedra y encabezar él mismo el partido, a fin de fortalecer la coalición de la Junta revolucionaria (Álvarez, 1986: 103-104). La presión de los ministros y de los militares tuvo serias consecuencias para el Partido Republicano Socialista, que terminó por dividirse. La fracción antipersonalista que apoyaba al Gobierno de Toro se separó del partido.

2.9. El golpe al Gobierno de David Toro

La respuesta de los militares a la posición de Bautista Saavedra fue decidida y rápida. El 21 de junio de 1936, Germán Busch dio el golpe. Disolvió la Junta y exigió de David Toro la formación de un Gobierno puramente militar. Toro, que siempre quiso mostrarse partidario de la legalidad y contrario a las acciones golpistas, declaró de nuevo que las acciones del Estado Mayor eran inesperadas para él. A primera vista, parecía que el golpe estuvo dirigido precisamente en contra de Toro. Sin embargo, es poco probable que Busch hubiera emprendido tal acción sin el conocimiento y la aprobación del jefe de la Junta, ya que Toro fue quien sacó el mayor provecho de esos acontecimientos (Gallego, 1991: 106-107). El implacable Gustavo Adolfo Otero caracterizó así a Toro: "Este es un cínico, sin escrúpulos, un verdadero salvaje o un hombre del renacimiento, sin honor, sin moral, y sin nada. Borracho mujeriego, defraudador y ladrón" (1977: 206).

Busch se dirigió a la nación con un manifiesto en el que habló de su fidelidad al socialismo de Estado y al movimiento de renovación nacional, iniciado por la revolución de aquel 17 de mayo. Acusó a los saavedristas de resistir a las tareas revolucionarias del Gobierno. A los socialistas les propuso unirse a los militares a partir de la doctrina socialista, realizar una limpieza interna y sacar a los politiqueros y a sus satélites (Díaz Machicao, 1957a: 27).

También dijo que el Ejército se apoyaba exclusivamente en los excombatientes y en el movimiento obrero (*El Diario*, 27 de julio de 1936).

En todas las declaraciones castrenses, era común el descontento por la politiquería de los civiles y de sus partidos, como también su rechazo a las reglas y a los hábitos de la lucha política tradicional. Las declaraciones de Busch se dirigieron también contra los socialistas que, junto con los saavedristas, fueron acusados de vacilantes y de conspiradores. Enrique Baldivieso, como los saavedristas, fue retirado del Gobierno y en vez de justificarse y de defender a su partido reconoció que Busch tenía razón. Finalmente, Baldivieso dejó el cargo de jefe del partido, que luego fue ocupado por José Tamayo (Lorini, 1994: 210). Después de esa crisis, Baldivieso supo conservar relaciones de confianza con los militares; en particular, con Busch.

Luego de la intervención de Busch, el Gobierno fue reorganizado. Toro quedó con plena libertad para formar una nueva Junta.[185] Fueron expulsados del gabinete los ministros socialistas y saavedristas. A pesar de las duras declaraciones de rechazo de cooperación con los socialistas, el periódico socialista *La Calle*, que prácticamente representaba a todo el Partido Nacionalista, apoyó el golpe y saludó las acciones de Busch, subrayando su compromiso antiliberal con los militares:

> Consideramos indispensable dejar al ejército socialista todo el campo de maniobra que requiera para cumplir lealmente su compromiso [...]. Estamos de acuerdo con el imperio de un poder vigoroso y sincero, ajeno en todo al hipócrita temperamento "legalista" de la democracia altoperuana (Gallego, 1991: 108).

El 22 de junio de 1936, Saavedra fue arrestado y deportado junto con sus numerosos partidarios. También salió del Gobierno Baldivieso. Carlos Montenegro, por otra parte, fue enviado a Buenos Aires como secretario de la Conferencia de Paz. No todos los civiles fueron expulsados del gabinete. Conservaron sus puestos el socialista Fernando Campero y el dirigente de los sindicatos obreros Waldo Álvarez, que quedó a cargo del Ministerio de Trabajo, lo que debió simbolizar la alianza de los militares con el movimiento obrero. Desde ese momento, los militares socialistas tomaron el rumbo hacia la ruptura definitiva con el sistema político tradicional y demostraron a la élite política su deseo inflexible de construir un Estado y una sociedad totalmente nuevos.

Durante la aguda crisis política de los años 1935 y 1936, rápidamente empezó a madurar el movimiento antioligárquico y antiliberal que asimiló las consignas socialistas y nacionalistas. La catástrofe militar en el Chaco

185 FRUS, 1936: 236.

se constituyó en el factor que permitió la formación del movimiento nacionalista en el Ejército. Nuevos partidos y movimientos se consolidaron alrededor de los militares reformistas que se plantearon sacar al país de la prolongada crisis económica y política, y realizar las reformas radicales de las estructuras sociales. Los militares reformistas, en alianza con los socialistas y con los sindicatos obreros, dieron el golpe para declarar la instauración de un régimen de socialismo de Estado.

El golpe de mayo de 1936 iba dirigido contra el Estado oligárquico y el sistema social arcaico. Las acciones de los militares y de sus aliados se vieron respaldadas por la mayor parte de la población, la cual se sentía decepcionada por la ineficacia de los métodos de la democracia liberal tradicional, desacreditada, además, por la derrota en la Guerra del Chaco y por el cataclismo económico. La sociedad esperaba de las nuevas autoridades reformas económicas y políticas, y los militares aceptaron casi por completo el programa de sus aliados socialistas. El periodo que siguió al golpe fue el más radical en todo el régimen del socialismo de Estado y parecía ser solamente el comienzo de una verdadera revolución social capaz de vencer el atraso y la dependencia seculares del país. Más adelante, muchos postulados del primer programa revolucionario fueron olvidados y los personajes más radicales, que se convirtieron en aliados incómodos para los militares, se vieron obligados a dejar el Gobierno.

3

El régimen del socialismo de Estado: el Gobierno de David Toro

3.1. La política económica del Gobierno de David Toro (1936-1937)

Apenas llegados al Palacio de Gobierno, en junio de 1936, los militares asumieron la tarea de aplicar sus ideas de reconstruir toda la sociedad sobre bases absolutamente nuevas. Naturalmente, primero precisaban resolver los serios problemas económicos heredados de las viejas autoridades, pues David Toro recibió el mando de un país al borde de la catástrofe económica. Durante la Guerra del Chaco, el Gobierno había contraído préstamos internos y en el extranjero. La deuda llegaba a la astronómica suma de mil setecientos millones de bolivianos y solamente por el servicio de deuda externa se debían pagar 400 millones de bolivianos anuales (Klein, 1972: 51). Recrudecía la inflación. El alza de precios afectaba no solamente a los sectores populares de las ciudades y a la clase obrera, sino también a las capas medias, las cuales antes llevaban un relativo buen pasar. En tal situación, todas las esperanzas de mejoramiento de la situación del pueblo venían supeditadas a las promesas de Toro de acabar con las tendencias negativas de la economía y encontrar una salida de la crisis.

Al asumir el poder, los militares-socialistas declararon los objetivos de su nueva política económica: construir una sociedad de justicia social. Por tanto, su tarea prioritaria era garantizar el abastecimiento a la población con productos de primera necesidad. La magnitud del movimiento huelguístico de abril y de mayo de 1936, así como sus consecuencias, obligaron al gobierno militar a preocuparse de contener la escalada de los precios y lograr, al menos, mantener el nivel de vida de la población. Con ese fin, durante junio, agosto y septiembre de 1936, Toro promulgó varias leyes contra la especulación y subsidió el comercio de productos alimenticios. Así, el 19 de agosto, fueron creados los comités de lucha contra la especulación; dos meses antes, mediante el decreto de 20 de junio, se había prohibido recargar los precios de los productos de consumo masivo por sobre el 12%.[186] El Gobierno también impuso tarjetas de racionamiento y decretó precios fijos a los productos

186 Véase: República de Bolivia, *Anuario Administrativo de 1936*, volumen 1 (La Paz, 1937: 1028).

alimenticios, una medida que despertó amplio apoyo del pueblo y, a la vez, causó escasez en el mercado.

El Comité Anti Especulación regularmente publicaba las listas de los precios oficiales y supervisaba el cumplimiento de sus disposiciones por intermedio de la por entonces recién creada Policía Comercial. Además, difundía la lista de las mercancías provisionalmente prohibidas de importar a Bolivia. Se trataba de artículos de lujo o destinados a un círculo estrecho de consumidores. En su listado figuraban objetos como pianos, juegos de billar, parquet, carteras de cuero y otros (*El Diario*, 10 de septiembre de 1936). Tales medidas administrativas limitantes, sin embargo, no consiguieron superar las dificultades creadas por el desabastecimiento; tampoco terminaron con el alza de los precios ni con la propagación del mercado negro. La prensa izquierdista llamaba a fusilar a los especuladores, como en la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) (*La Calle*, 14 de octubre de 1936). El Ministerio de Comercio amenazó con expulsar del país a los comerciantes extranjeros dedicados a la especulación; se trataba, por supuesto, de hebreos emigrados de Europa para los cuales la expulsión representaba una seria amenaza (*El Diario*, 4 de marzo de 1937).

Las prohibiciones y los decretos amenazantes no terminaron con el mercado negro ni pararon su expansión. Los periódicos reconocían que los productos que faltaban en el comercio estaban en manos de los especuladores. Los terratenientes, abastecedores de los productos agrarios, escondían los alimentos para no venderlos a los reducidos precios oficiales. Ese año, el Gobierno consideró seriamente la urgencia de emprender operaciones militares para encontrar los alimentos acaparados en las haciendas y en las comunidades (*El Diario*, 12 de septiembre de 1936).

Debido a la escasez de los artículos de primera necesidad, causada por la disminución de las importaciones, el Gobierno de Toro creó el Ministerio de Agricultura, el cual debía aumentar el suministro de los artículos alimenticios de producción nacional. Asimismo, instauró la Junta de Fomento Triguero, que tenía por misión solucionar la aguda falta de pan en el mercado interno (Economic Commission for Latin America - ECLA, 1951: 32). Adoptó también medidas específicas para mejorar el abastecimiento de los sectores de bajos ingresos, como las casas de abasto, una red de tiendas estatales destinadas a reemplazar a los negocios particulares de artículos de primera necesidad, creadas por las autoridades en junio de 1936. Esas providencias de resguardo popular aliviaron temporalmente el impacto de la crisis en la población más pobre.

El Partido Socialista saludó el nacimiento de aquellas tiendas estatales, pues las consideraba como un signo del programa socialista de la Junta, en el cual un papel importante estaba ocupado por la idea del Estado empresario.

Sin embargo, tal medida levantó un vendaval de críticas en los periódicos y en los partidos de derecha, que la calificaron como una amenaza a la libertad del comercio y a la empresa privada (*El Diario*, 13 de mayo de 1937). Las polémicas medidas eran explicadas a partir de la nueva dirección tomada por la política económica, dirigida al establecimiento de las bases del capitalismo de Estado. La regulación estatal de los precios y el manejo del mercado de consumo masivo se convertía de ese modo en la principal herramienta de la política económica.

Durante el año en el que Toro manejó el poder (junio de 1936-julio de 1937), la situación económica del país empeoró aún más. Preocupaban igualmente las finanzas y la inestabilidad de la moneda nacional. Aunque esta fue diez veces devaluada durante el periodo de guerra, seguía derrumbándose vertiginosamente; prácticamente, durante un año, "perdió su peso" en un 20%, pasando de 160 a 200 bolivianos por libra esterlina (Díaz Machicao, 1957a: 50). Los asesores económicos propusieron al presidente establecer tipos de cambio diferenciados para contener el alza de los precios y un régimen de franquicias para los importadores de alimentos.

Los exportadores, por su parte, estaban obligados a vender al Estado una parte de sus divisas con un tipo de cambio rebajado. Así, los importadores seguían comprando divisas baratas, lo que, según los militares, debía contener el alza de precios en el mercado minorista. Tal medida provocó la ácida crítica de los monopolios mineros, que no querían entregar parte de sus ganancias en función de mantener el nivel de vida de la población. La crisis de los tipos de cambio se transformó en el impedimento infranqueable para el suministro de alimentos importados a las ciudades, obligando al Gobierno a buscar fuentes adicionales de divisas. Los socialistas presentaron a instancias gubernamentales un proyecto de reforma tributaria para modernizar el sistema financiero obsoleto. La propuesta incluía un impuesto diferenciado a las utilidades y a la renta (*La Calle*, 2 de diciembre de 1936). El Gobierno eligió el camino trillado de apropiarse de una parte de las utilidades de las compañías mineras mediante los tipos de cambio rebajados.

La empresa de Simón I. Patiño reclamó al Gobierno por la disminución drástica de la rentabilidad de sus minas. En una carta dirigida a Toro, el representante de la compañía minera señalaba:

> Durante 1936 el Gobierno de Bolivia percibió de la Compañía la respetable suma de 696.275 libras, más aproximadamente Bs. 4.400.000, por entregas de divisas e impuestos directos, respectivamente, mientras que [...] la utilidad obtenida en Bolivia por accionistas de Patiño Mines fue de nada más que 30.360 libras aparte de 5.711.000 en bolivianos depreciados y por el momento incon-

vertibles […]. La mina ha sido trabajada principalmente en beneficio fiscal y no de los accionistas.[187]

La prensa de derecha, representando intereses de los monopolios mineros, exigía permanentemente liquidar las diferencias de los tipos de cambio y establecer una tasa de cambio única para todos los sectores de la economía.[188] El sistema del tipo de cambio diferenciado no pudo ayudar a resolver el problema de la moneda nacional y de las divisas necesarias para garantizar las importaciones de los productos alimenticios. Las especulaciones desbarataron definitivamente el mercado financiero y la diferencia de los tipos de cambio se sumó al caos total.

El 29 de agosto de 1936, a la cabeza del ministro de Hacienda, Fernando Campero, comenzó a funcionar una comisión integrada por representantes de las compañías mineras, de los bancos y del comercio. La comisión tenía la tarea de desarrollar un programa integral destinado a superar la crisis económica. Las esperanzas en el mejoramiento de la situación estaban vinculadas exclusivamente con los pronósticos optimistas de la situación en el mercado mundial del estaño (*El Diario*, 1 de septiembre 1936). Bolivia seguía siendo miembro del Comité Internacional del Estaño, que le imponía cuotas de producción y de exportación del mineral. El mercado del estaño se reactivó a principios de 1937, cuando los precios crecieron y su demanda también aumentó, lo que permitió a dicho organismo aflojar las limitaciones a la producción nacional (Hillman, 1988: 102-104). Para apoyar a los pequeños y a los medianos mineros, en enero de ese año, fue creado el Banco Minero, el cual les compraba el mineral (*El Diario*, 8 de agosto de 1937). La Asociación de Industriales Mineros se negó a enviar a su representante al directorio de aquel banco, expresando así su disconformidad con la política de injerencia estatal en el comercio de los minerales.[189]

A fines de 1936, sin embargo, apareció un nuevo factor en la política relacionada con el estaño: Estados Unidos emprendió la complementación de sus reservas estratégicas de materias primas. Los bolivianos quisieron aprovechar esas circunstancias e iniciaron conversaciones sobre las ventas directas del mineral, lo que podía destruir todo el sistema de control del mercado creado por ese comité. El Gobierno de Toro, prudentemente, no contestó de

187 ABNB-PR, 1937, "Carta de Patiño Mines a David Toro del 4 de junio de 1937", caja 13, tomo 153.

188 Véanse las ediciones de *El Diario* de fechas 19 de octubre de 1936, 26 de enero de 1937, 2 y 4 de julio de 1937.

189 ABNB-PR, 1936, "Informe del Ministerio de Minería e Industria Petrolera del 24 de octubre de 1936", caja 12, tomo 127.

inmediato a la tentadora oferta estadounidense, temiendo sanciones del comité y la resistencia política de Patiño al interior del país.[190] Estados Unidos estaba interesado en transgredir las limitaciones impuestas por el comité e instó a Bolivia a que las emprendiera, pues necesitaba desesperadamente aumentar las exportaciones y recibir más divisas.

En noviembre, Toro se reunió con el embajador de Estados Unidos en Bolivia para conversar sobre el suministro de estaño a ese país, el acuerdo intergubernamental y la construcción en el país del norte de una fundidora para el mineral boliviano. Toro le informó que contaba con el apoyo de Carlos Aramayo y que Bolivia requería las suficientes garantías de parte de Estados Unidos en el caso de que surgiera un conflicto con Patiño.[191] A causa de la amenaza creciente de una guerra europea, Estados Unidos demostró gran interés con la propuesta de Bolivia y planteó así concertar un acuerdo comercial amplio.

En su política económica, Toro se orientaba hacia la opinión de Aramayo, con quien mantenía vínculos amistosos. Aramayo libraba un serio conflicto con Patiño por la distribución de las cuotas del estaño boliviano. Esto porque Patiño controlaba la fundición de ese mineral en Inglaterra y Aramayo, que se había fortalecido en los años de la crisis mundial, lidiaba por reorientar el curso de esa riqueza hacia Estados Unidos. En ese aspecto, sus intereses coincidían con las aspiraciones de los pequeños y de los medianos mineros, ansiosos de terminar con las limitaciones impuestas por el Comité Internacional del Estaño y venderles el mineral directamente.

Mientras transcurrían las conversaciones y Estados Unidos regateaba las rebajas aduaneras para sus productos en Bolivia, la situación en el mercado mundial cambió drásticamente. A inicios de 1937, la demanda del estaño creció de un solo golpe y su precio se elevó de 228 libras esterlinas por tonelada en enero a 301 libras esterlinas por tonelada en marzo. Así, a pesar de que los estadounidenses insistían en firmar lo más rápido posible un acuerdo comercial, para los bolivianos ese acuerdo había perdido vigencia a causa de una nueva y muy favorable situación en el mercado.[192]

El 8 de septiembre del año anterior, el Gobierno de Toro había impuesto la obligación de entregar al Estado el 10% de las divisas recibidas por concepto de exportación, con un tipo de cambio rebajado. En marzo de 1937, en Potosí, tuvo lugar el Congreso de Pequeños y Medianos Mineros, donde se criticó fuertemente tanto al comité, es decir a Patiño, como al Gobierno, por su polí-

190 FRUS, 1936: 237-238.

191 *Ibid.*

192 FRUS, 1936: 273-274.

tica financiera que desangraba el sector. En el congreso se exigió subir la tasa de cambio oficial de 50 a 80 e inclusive a cien bolivianos por libra esterlina, ya que en el mercado libre la tasa llegaba a 160 bolivianos. Tales exigencias coincidían con la posición de los monopolios del estaño que hacían un frente común (*El Diario*, 4 y 29 de marzo de 1937). Bajo esa presión, el Ministerio de Hacienda cedió y estableció una escala compleja de tasas de cambio convenientes para los grandes productores: mientras más crecía el volumen del mineral exportado, más alta era la tasa de cambio de las divisas destinadas a entregar al Estado.[193] Esa medida, objetivamente, solamente mejoró la situación de los barones del estaño, en perjuicio de las pequeñas y de las medianas empresas, a pesar de que el Gobierno las consideraba como su apoyo social.

Entre las resoluciones y los cambios aplicados sobresalía un bloque de disposiciones que nos permiten hablar de una verdadera nueva etapa de la política económica boliviana: la regulación estatal de todos los sectores de la economía. Basta mencionar la creación del Banco Minero, el control al cambio de divisas, el monopolio de la venta de oro y la política petrolera nacionalizadora. Ante la escasez de las reservas de oro, el Gobierno estableció el monopolio estatal a la venta del oro extraído en el país. Bajo la amenaza de anular las concesiones de extracción, las compañías privadas y los buscadores de oro debían entregar todo el metal al Banco Central de Bolivia. Para controlar el cumplimiento del decreto, en el Ministerio de Minería fue creada la Policía Nacional del Oro, dirigida por el nacionalista radical miembro de la logia Razón de Patria, Elías Belmonte (1994: 155). Es curioso que la extracción de ese mineral pareciera una salvación ante la crisis de la minería. Los militares-socialistas bolivianos coincidían en esa fantasía con sus antecesores, los socialistas chilenos, sobre todo con el militar Marmaduque Grove, líder en 1932 de la República socialista chilena.

El programa de reformas económicas elaborado por la Junta significaba el fortalecimiento del rol del Estado en la administración de la economía nacional. En septiembre de 1936, en todos los departamentos del país, fueron constituidos los Consejos de la Industria y el Comercio, a objeto de apoyar y de fundar las industrias de las regiones (*El Diario*, 13 de septiembre de 1936), impulsando sus actividades con un sólido financiamiento. Pero, considerando la grave crisis financiera, no era posible esperar resultados serios en el trabajo de tales organismos nuevos.

La formación de esos instrumentos estatales de regulación del consumo y de las finanzas, así como el establecimiento del control estatal en los sectores estratégicos de la economía, revelaban una dirección nueva, estatista, de la

193 El decreto fue firmado el 22 de enero de 1937, pero el mecanismo concreto fue puesto en funcionamiento en mayo de ese año (*El Diario*, 12 de mayo de 1937).

política económica de Bolivia: la creación de un sector estatal en la economía que en el futuro ocuparía posiciones de liderazgo. Junto con las tareas estratégicas de las reformas formuladas en el programa gubernamental de los militares-socialistas, David Toro debía resolver los asuntos cotidianos de la administración de la economía, agitada por la crisis, haciendo concesiones a diferentes e influyentes grupos. Toro solía tomar decisiones contradictorias. Su política seguía siendo imprecisa, confusa, coyuntural y poco eficiente, pues trataba de resolver los problemas del día en perjuicio de las reformas fundamentales, lo que complicaba todavía más el proceso de cambios y de reformas postulados por los militares-socialistas.

3.2. La ideología del socialismo de Estado

La actitud de las nuevas autoridades reflejaba una búsqueda ideológica, como la que se dio en la sociedad boliviana de las décadas de 1920 y de 1930 respecto a las nuevas teorías sobre el Estado, de amplia divulgación en el continente. En primer lugar, el nombre del régimen –socialismo de Estado– no era una novedad doctrinaria para América Latina; su origen terminológico procede de la Alemania de preguerra, cuya idea principal era el amparo y la tutela del Estado sobre las clases trabajadoras. También así llamaron a su régimen los creadores de la efímera República socialista de Chile, en 1932. Los militares-socialistas consideraban que el socialismo era la única alternativa al capitalismo clásico, que se encontraba sumido en una profunda crisis económica, política y moral. Los éxitos económicos y sociales de los nuevos regímenes surgidos en Europa –los de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) comunista y de la Alemania nacional-socialista, que los militares-socialistas asociaban por ser opuestos a la democracia liberal– eran los mejores argumentos a favor de las nuevas formas políticas y sociales para el funcionamiento del Estado.

Al hablar de los intereses nacionales, esos políticos, que accedían por primera vez al poder y que actuaban en oposición a los "intereses egoístas" de algunos grupos bolivianos, reconocían la contradicción entre los intereses de la nación y los de la oligarquía. Así, por ejemplo, en su primer discurso a la nación, Germán Busch declaró:

> Esta irritante desigualdad, que esterilizó el sacrificio de los miles de hombres que quedaron en las arenas del Chaco y que ha creado al exacto decir de un periodista nacional, una anacrónica casta privilegiada en Bolivia, ha hecho nacer también en la mente por la creciente superación del Ejército, aprovechando las experiencias de la guerra, para que la eficiencia de la institución armada sea garantía segura de la integridad y el decoro de la Nación en lo internacional, y del orden dentro de la Justicia y la Ley, en lo interno (Boullón, 1936: 16).

La principal tesis ideológica del nuevo régimen consistía en el fortalecimiento del Estado y en liberarlo de la oligarquía. Justamente, en aras de un Estado libre de los intereses egoístas de algunos grupos y clases, que constituían un valor en sí, debían los bolivianos sacrificar sus intereses y derechos particulares. En el nombre mismo del régimen, el Estado figuraba en primer lugar y solo después se hablaba de una nueva organización de la vida social, del socialismo.

En realidad, los ideólogos bolivianos de la nueva doctrina utilizaban una interpretación limitada del término 'socialismo'. Toro señaló más de una vez que se trataba solamente de una nueva fase del desarrollo de la sociedad, una que superaba las limitaciones ideológicas del liberalismo y del individualismo, y que consistía en un socialismo integral, es decir, total (Valencia Vega, 1987a: 1754). El líder socialista Enrique Baldivieso, convertido en el ideólogo del régimen, aseveraba que Bolivia no tenía la preparación suficiente para un socialismo integral, por lo que había optado por introducir su modelo de socialismo de Estado. Decía que la nueva doctrina no utilizaba teorías foráneas, europeas, sino que se basaba en la realidad socioeconómica y geográfica de Bolivia.

Los objetivos estratégicos del nuevo régimen eran la justicia social, así como la diversificación y la industrialización de la economía del país (*La Razón*, 24 de mayo de 1936). En su primera conferencia de prensa en el palacio presidencial, el 21 de mayo de 1936, Toro afirmó:

> La ideología del Ejército está de acuerdo con la que sostienen los partidos de izquierda; quieren los partidos de izquierda; quiere el Ejército que se haga un gobierno de justicia social, que ponga fin a los antiguos métodos y sistemas políticos. Nuestra intención, al tomar parte en el Gobierno, es la de desenvolver una acción socialista, de socialismo de Estado, para lo cual se ha pedido el concurso de los partidos de izquierda (Boullón, 1936: 28).

Pese a sus declaraciones socialistas, los militares manifestaban su disposición a lograr un compromiso con el sistema político antiguo e incluso a tolerar provisionalmente los actuales principios de funcionamiento de la economía. Por supuesto, estaban muy lejos de querer establecer un régimen de tipo totalitario, que cambiara por completo la vida social y económica, debido a que para ello estaban demasiado débiles política y doctrinariamente. En su editorial del 4 de octubre de 1936, el diario *La Calle*, convertido en el vocero del régimen, se calificaba de socialista a la futura sociedad de Bolivia, en términos de "la organización que unirá racionalismo y moral colectivista". Mientras tanto, se trataba solamente de un proceso de acercamiento hacia esa sociedad, para lo cual el Estado desempeñaba el papel de elemento organizador (*ibid.*).

Para los militares-socialistas, el modelo económico de desarrollo era un capitalismo progresista con la participación activa del Estado. En su informe ante la Junta, Toro definió del siguiente modo los principios del nuevo régimen económico: "El socialismo de Estado se basa en el principio fundamental del Estado empresario, del Estado que retiene para sí el ejercicio de actividades que en manos de los particulares no cumplen función social alguna" (en Gallego, 1991: 138). Esa fórmula resumía el sentido de la política económica de tipo nacional-reformista, la cual encontraba en el Estado la única herramienta posible para armonizar el desarrollo del país. El Estado debía desplazar a los privados desde las esferas en las que su eficiencia y su utilidad eran, desde el punto de vista del nacionalismo económico, insuficientes o limitadas. Los socialistas estaban convencidos de que los intereses económicos de la oligarquía eran diferentes de los nacionales. El Estado debía corregir la injusticia histórica y devolver al pueblo las riquezas y el poder usurpados por la oligarquía. El periódico vocero del Gobierno, *La Calle*, publicó que era preciso construir en Bolivia el capitalismo de Estado, porque constituía solo la primera etapa de la organización socialista de la sociedad (*La Calle*, 1 de diciembre de 1936).

Reconociendo el derecho del Estado a la iniciativa empresarial e incluso a ocupar las posiciones de liderazgo en los sectores estratégicos, los militares-socialistas no se negaban a ofrecer garantías al capital privado. La función social fue el principio básico de la política económica, como también del régimen constitucional. En el caso de la propiedad privada, la función social estaba destinada a compatibilizar los principios del capitalismo progresista con la naturaleza del socialismo. Los ideólogos del régimen estaban convencidos de que era necesario "someter la producción a los fines de función social a los que se halla obligada toda la propiedad privada, dentro del Estado socialista".[194] La teoría de la función social, en boga por entonces, limitaba la inviolabilidad de la propiedad privada a su función social, determinada por su utilidad a la sociedad –léase el Estado–. Esas ideas fueron muy populares en todos los países de América Latina. En Chile, durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, el tema fue ampliamente discutido. Las mismas ideas llegaron de México, donde se expandía activamente el sector estatal y se hablaba mucho del socialismo.

El socialismo de Estado en Bolivia suponía el rechazo definitivo a la democracia y a las libertades cívicas fundamentales. En lo político, era heredero de las ideas de Franz Tamayo, para quien los socialistas contraponían al mecanismo democrático de toma de decisiones la voluntad y la energía de la nación, que debían expresarse en aquellas fuerzas nacionales que se adjudica-

194 ABNB-PR, 1936, "El plan de la organización del Ministerio del Trabajo de 15 de junio del 1936", caja 12, tomo 127.

ron el derecho de expresar los intereses nacionales egoístamente entendidos. Como Tamayo, los socialistas exigían el sacrificio a todas las capas sociales, en aras de lograr los objetivos nacionales.

La democracia fue el principal objeto de crítica de los ideólogos del régimen. Al asumir su cargo en mayo de 1936, el ministro de Relaciones Exteriores, Baldivieso, manifestó que la democracia liberal era "una expresión del capitalismo al servicio de la minoría" (Klein, 1972: 36). Según Baldivieso, Bolivia necesitaba sustituir el anticuado capitalismo liberal por aquel "productor y progresista". El camino hacia ello debía pasar por la reforma social evolucionista, en la que predominaba la propiedad estatal y se restringía el poder oligárquico (*ibid.*). El componente político de la reforma debía ser la así llamada "democracia funcional". Aquello significaba el cambio del sistema clásico de representación por el régimen corporativo, que limitaba los derechos individuales y las libertades fundamentales en nombre de los intereses del Estado.

Al individualismo y al egoísmo del demoliberalismo se oponía la unión de los elementos progresistas de la nación, los generadores de su energía vital: la clase obrera y el capital. Los ideólogos del régimen consideraban que solamente el Estado podía lograr su unidad, priorizando en su política el bienestar supremo de la nación, incluso en perjuicio de los intereses de esas clases cuya libertad individual limitaba. Tales principios estaban expresados en "La doctrina del socialismo de Estado", un documento programático del Departamento Nacional de Propaganda en el cual se sostenía que el socialismo de Estado era un llamado a la solidaridad efectiva de los miembros activos de la sociedad, un reino de la ley que defendiera el trabajo.[195] También se señalaba que el deber de cada ciudadano era dedicar sus esfuerzos al Estado en nombre de la grandeza de la nación.

Al calificarse como socialistas, aunque fueran socialistas de Estado, los militares aclaraban de inmediato que en ningún caso se trataba de comunismo, pues a diferencia de los comunistas –que consideraban al socialismo, por lo menos doctrinalmente, como el desarrollo de la democracia y ratificaban su fidelidad a los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución francesa–, los militares-socialistas eligieron como objeto de sus críticas el régimen democrático. Más aún, los ideólogos del régimen declaraban que su gobierno constituía una barrera para impedir el avance del comunismo, al que calificaban como una fuerza internacional –igual que el capital extranjero y el imperialismo– y, por lo mismo, antinacional (*La Razón*, 19 de febrero de 1937). Si los comunistas defendían los intereses del proletariado, los

---

195 AHGE-SRE, 1937, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 30 de mayo de 1937", 31-25-3.

militares-socialistas pretendían defender los valores nacionales, superando la lucha de clases al establecer la armonía social.

El fascismo italiano y el nacional-socialismo alemán ejercieron gran influencia en la ideología del socialismo de Estado cuando proclamaban la primacía de la nación sobre el individuo y las clases. Muchos de los actores del régimen, especialmente los militares, profesaban una gran simpatía hacia el nacional-socialismo de Hitler. La influencia del nazismo en el Ejército boliviano era enorme; los militares bolivianos mantuvieron vínculos con los nazis alemanes antes y después de la llegada de Hitler al poder. Oscar Moscoso, ministro de Defensa del Gobierno de Toro, decía que en las reformas al Estado era preciso guiarse por la doctrina nacional-socialista. En octubre de 1936, creó la Legión Nacional-Socialista de los Ex Combatientes del Chaco,[196] que ejercía una importante influencia en la línea política del régimen.

No solamente los militares expresaron abiertamente sus simpatías por el fascismo, sino también varios políticos civiles, ante todo los miembros del Partido Socialista, futuros ideólogos y líderes del nacional-reformismo, como Carlos Montenegro y Enrique Finot, entre otros, que realizaron la propaganda antiliberal mediante el diario *La Calle*. Ciertamente, el teniente coronel Guillermo Vizcarra publicó en ese matutino un editorial titulado "Nuestro camino nacional-socialista boliviano", en el que alababa a los regímenes políticos de Alemania e Italia y aseveraba que el sistema nacional-socialista era el único régimen que garantizaría el progreso y el bienestar social (*La Calle*, 23 de octubre de 1936).

Los ideólogos del régimen encontraron muchas coincidencias con la doctrina fascista e hicieron una activa propaganda sobre los éxitos de los regímenes totalitarios europeos. Los militares, como sus aliados socialistas, no ocultaban que sus opiniones tenían lazos de parentesco con el nacional-socialismo. En marzo de 1937, el embajador de México se reunió con Javier Paz Campero, Fernando Campero y Enrique Finot –destacados personajes del régimen–, quienes trataron de exponerle los principios del socialismo de Estado; le dijeron que el liberalismo democrático había quedado obsoleto y que el régimen boliviano caminaba en la misma dirección que el nacional-socialismo en Alemania y el fascismo en Italia.[197]

Con la llegada de los militares-socialistas al poder, en la sociedad boliviana se reemplazaron las ideas del liberalismo y del individualismo, hasta

196 AHGE-SRE, 1936, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 8 de octubre de 1936", 27-29-13, f. 30.

197 AHGE-SRE, 1937, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 30 de mayo de 1937", 31-25-3.

entonces predominantes, por las del autoritarismo y del Estado social. Tales postulados se convirtieron en puntos centrales de la teoría de la nueva Bolivia, que era la negación de los principios del liberalismo y de la democracia en la economía y en la política. Los militares-socialistas desechaban todo lo relacionado con el viejo capitalismo de libre competencia que se había derrumbado durante la gran crisis mundial. La iniciativa privada se contraponía al capitalismo estatal, al mercado mundial, al movimiento libre de productos y capitales, a la economía nacional regulada e, incluso, a la autarquía y a la orientación de satisfacer solamente las necesidades internas del país. La democracia liberal, con su individualismo y sus intereses egoístas particulares, se oponía al colectivismo y a la subordinación del individuo al Estado, a la nación.

El Estado se adjudicaba la responsabilidad por el desarrollo económico y social. De hecho, se trataba del capitalismo de Estado bajo el cual las contradicciones de clase y la rivalidad de intereses entre las diferentes capas sociales quedaban suprimidas en nombre del ideal nacional. Ante la debilidad de la clase empresarial local, el Estado debía cumplir con las tareas tanto de acumulación primaria de capital como de industrialización. Según los militares-socialistas, la democracia liberal no podía crear las premisas indispensables para el desarrollo económico y el progreso social. Ellos estaban en condiciones de proponer un sistema de gobierno en el que los diferentes grupos políticos y sociales subordinaran sus intereses a un objetivo determinado por el Estado, esto es, donde todos los partidos y la sociedad civil se diluyeran por completo en el Estado.

Muchos postulados de la ideología del socialismo de Estado fueron heredados después por el Movimiento Nacionalista Revolucionario. A pesar de la filiación y de la continuidad evidentes –de bases ideológicas y de práctica política entre los militares-socialistas y el nacionalismo revolucionario–, existen serias diferencias entre ambas corrientes, lo cual permite concluir que el socialismo de Estado significaba la contraposición más radical a la democracia liberal y a todo el sistema capitalista. La autocalificación del régimen como socialista no fue solamente un tributo a la moda, sino una expresión de la convicción de sus creadores de que estaba destinado a sustituir al régimen liberal democrático e, incluso, al propio capitalismo. Se entremezclaron en ese impulso antimercado y anticapitalista tanto los izquierdistas como las fuerzas derechistas de tipo fascista. Su fuerte componente anticapitalista le daba al socialismo de Estado un significado más radical y antisistémico.

El acatamiento a las nuevas ideas demostraba el cambio de mentalidad producido en la sociedad y la hegemonía de las fuerzas intelectuales y políticas que en aquel momento expresaban la tendencia antiliberal, nacionalista y autoritaria.

3.3. Las reformas políticas

Al llegar al poder, con el golpe ocurrido en mayo de 1936, los militares-socialistas no aspiraban a legitimar su régimen sobre la base de los principios constitucionales vigentes en aquel momento, pues se plantearon la tarea de crear su propio sistema político corporativo. Declararon su propósito de convocar a una Asamblea Constituyente que, basándose en los principios socialistas, redactara la nueva Constitución Política del Estado.

Las reformas políticas debían afectar a los órganos supremos del poder, al sistema judicial y al Gobierno local. La Junta preparaba una amplia reforma judicial dedicada a supeditar íntegramente ese poder al Ejecutivo (*La Calle*, 17 de noviembre de 1936). En el ámbito de las autoridades locales, con el decreto de 14 de agosto de 1936, David Toro derogó las elecciones de alcaldes, que en adelante pasarían a ser designados por el Gobierno central. Asimismo, los representantes de las asambleas municipales ya no serían elegidos por la población, sino seleccionados por la Cámara del Comercio, la Cámara de la Industria, los Colegios de Abogados, Médicos e Ingenieros, la Sociedad de Propietarios Rurales y la Federación Obrera Local (FOL). Por otra parte, se asignaba una remuneración a los alcaldes de las ciudades y del área rural, lo que podía significar la democratización de tal institución, pues el funcionario contaba únicamente con esa fuente de ingresos (*El Diario*, 25 de octubre de 1936). Se trataba de una medida puramente teórica, pues no serían las organizaciones sociales sino el Gobierno central el que escogería a los alcaldes, basándose en las conveniencias políticas y promoviendo, naturalmente, a sus partidarios. Por ello, en suma, los alcaldes garantizarían la verticalidad del poder ejecutivo. Para los militares, un Estado fuerte constituía el objetivo principal de toda la reforma política.

La base del nuevo sistema, según Toro, debía ser la democracia funcional. Explicaba su rechazo a la democracia clásica, como expresión de derechos y de libertades del individuo, por la necesidad de considerar los intereses de las clases y de las capas de la población, que constituían la mayoría absoluta de la nación. La reforma política cambiaría por completo el sistema representativo y liquidaría la democracia parlamentaria, reemplazando el principio electivo de las autoridades por el sistema autoritario corporativista. Así, el principio de la democracia funcional no partía del individuo, del ciudadano, sino de las clases populares y de los grupos profesionales.

Toro no aprobaba el extremismo de algunos de sus correligionarios y no era partidario acérrimo de los regímenes de moda: los de Adolf Hitler y Benito Mussolini. En su condición de político bastante pragmático, propuso una variante de consenso para la estructura del Poder Ejecutivo. Según su fórmula, tanto la Asamblea Constituyente como el futuro esquema parla-

mentario debían conformarse simultáneamente a partir de elecciones ordinarias entre los representantes de los sindicatos. La mitad de los diputados se elegiría en los distritos y la otra mitad sería delegada por los sindicatos. Al respecto, es preciso señalar que se trataba exclusivamente de sindicatos corporativistas, creados por las autoridades.

El antiliberalismo y la lógica de la política estatista convertían al movimiento obrero en el aliado natural del régimen. Además, postulaban la reforma estatal y política, la cual convertía a los gremios en la base del nuevo sistema de poder. La configuración del movimiento sindical y su adaptación a las necesidades de las nuevas autoridades fueron los objetivos primordiales de la reforma. Para sentar las bases del nuevo sistema político, la Junta elaboró y publicó los decretos sobre el trabajo obligatorio y la sindicalización total de la sociedad. Para justificar tales medidas, Toro sostuvo que era necesario reorganizar el Estado sobre nuevos fundamentos y que los sindicatos funcionales, bien organizados y controlados, serían un factor adicional para la renovación del sistema sociopolítico. El parlamento debía funcionar, entonces, sobre la base de la doble representación (*El Diario*, 28 de agosto de 1936).

En una carta fechada el 30 de junio de 1936, basándose en las necesidades de la minería, Toro encomendó al ministro de Trabajo elaborar y presentar cuanto antes un proyecto de decreto.[198] De ese modo, el 6 de julio, fue publicado el Decreto del Trabajo Obligatorio, propuesto por el Ministerio de Trabajo y firmado por Toro. Según sus disposiciones, Bolivia se proclamaba una "República de los trabajadores" y, por tanto, todos los ciudadanos tenían la obligación de trabajar. El Estado asumía el derecho de reclutar obligatoriamente a los cesantes y a las así llamadas clases parasitarias. A los desempleados se les proponía dirigirse a los departamentos de Trabajo o a la Policía, donde se integrarían a las brigadas asignadas a las empresas privadas, a las obras públicas y a tareas como la construcción de caminos. Tales actividades eran obligatorias no solamente para los cesantes, sino para todos aquellos que no querían o no podían pagar un impuesto caminero. A los soldados desmovilizados de la Guerra del Chaco se les ordenaba encontrar trabajo en un plazo de 20 días.

Cada boliviano, en ese escenario, debía tener una libreta de trabajo, convertida en el documento fundamental de habilitación cívica.[199] Los empresarios debían comunicar al Ministerio de Trabajo sus necesidades de fuerza laboral y las autoridades, por su parte, debían facilitarles los obreros y los profesionales requeridos. Velar por el cumplimiento del decreto era tarea

198 ABNB-PR, 1936, "Carta de D. Toro a W. Álvarez del 30 de junio de 1936", caja 12, tomo 127.

199 ABNB-PR, 1936, "Proyecto del Decreto del Trabajo Obligatorio", caja 12, tomo 127.

de una nueva unidad policial, la Inspección del Trabajo, que registraba y organizaba a los desempleados, y enviaba esas brigadas de trabajadores según las necesidades de las empresas mineras, industriales y comerciales, las cuales eran acompañadas por la Policía hasta los lugares señalados. Los periódicos se encargaban de alertar que quienes, siendo desempleados, carecieran de aquella libreta de trabajo serían detenidos y mantenidos bajo custodia hasta determinar el lugar de su futuro puesto laboral (*La Calle*, 3 de octubre de 1936). El decreto, cuyo ejecutor más ferviente fue Elías Belmonte, conocido por admirar la organización laboral del Tercer Reich (*El Diario*, 11 de octubre de 1936), señalaba:

> Si durante el viaje, o del lugar del destino, desertaren algunos individuos, el contratante o conductor de las brigadas, dará parte a las autoridades policiales que procederá a su captura; en este caso, los gastos de viaje serán descontados del jornal.[200]

El Decreto del Trabajo Obligatorio perseguía dos objetivos. Por un lado, reaccionaba ante las quejas de los dueños de las minas, que manifestaban serias dificultades ante la falta de mano de obra, al mismo tiempo que trataba de solucionar el problema de los soldados desmovilizados y desocupados que pululaban en las ciudades; de ahí que, durante todo ese año, las compañías mineras exigieron su cumplimiento y el envío de mano de obra adicional a las minas (*El Diario*, 29 de marzo de 1937). Por otro lado, disimulaba una fuerte carga ideológica e institucional, consistente en la instauración del control estatal sobre los recursos laborales y la creación de las condiciones para un modelo económico totalitario. Los socialistas rechazaban los mecanismos de mercado para regular la oferta y la demanda de los recursos laborales, y se inclinaban hacia el ejercicio de un control total del empleo por parte del Estado. Dicha reforma tenía un fuerte contenido antimercado, anticapitalista. El único problema estaba en saber si sería posible cumplir los planes de los socialistas.

El Ministerio de Trabajo hizo todo lo posible para que se acataran los postulados del decreto. En ese intento, a fines de septiembre de 1936, envió una nueva instrucción a las autoridades locales, reconociendo que posiblemente, creyendo que no se le daría cumplimiento estricto, la mayoría de la gente no se había preocupado de contar con el certificado que acreditara su ocupación. A los ciudadanos no les preocupaba recibir libretas de trabajo. El ministerio, en tanto, insistía ante las autoridades locales en reforzar su labor en la organización de las brigadas y hacía hincapié en tres sectores: la minería, la construcción de caminos y la agricultura. Los desempleados debían ser detenidos

200 *Ibid.*

en los cuarteles, sin derecho a salir. Las comisiones que seleccionaban a los desempleados debían satisfacer, en primer lugar, las necesidades de las grandes empresas mineras de estaño y, luego, las de las pequeñas y de las medianas. Se subrayaba que las comisiones y los órganos políticos debían cumplir estrictamente las órdenes del Ministerio de Trabajo y atenerse a lo estipulado en la ley, independientemente de la persona o de la posición social de los ciudadanos llamados al trabajo obligatorio, incluidos los extranjeros.[201]

Aunque en sus informes al presidente Waldo Álvarez destacaba los éxitos en el cumplimiento del decreto,[202] tal innovación quedó solamente en el papel porque las amenazantes convocatorias de los organismos del Poder Ejecutivo para llevarla a cabo no tuvieron efecto. El Decreto del Trabajo Obligatorio quedó como la muestra de una creación jurídica totalitaria frustrada, pues no se cumplió en la vida real, excepto por algunas acciones ejemplificadoras. En esa etapa, además, el Estado no contaba con los recursos ni con las posibilidades para proveer de empleo a tantos desocupados. Aunque la eficiencia del decreto fue casi igual a cero, su difusión causó una ola de indignación en los medios intelectuales, para quienes significaba el comienzo del totalitarismo en Bolivia (Gallego, 1991*:* 113-115).

Considerando al movimiento obrero como la base del futuro sistema político, el Ministerio de Trabajo se ocupó de las nuevas estructuras sindicales que debían quedar bajo el control del Gobierno. Las Asambleas Nacionales Permanentes de las Organizaciones Sindicales (ANPOS), creadas a iniciativa de José Antonio Arze, asesor jurídico del Ministerio de Trabajo, serían el instrumento para la dirección política de la sociedad sindicalizada. Esas asambleas debían controlar las actividades de aquel ministerio por medio de las organizaciones obreras y preparar un congreso nacional del cual surgiera una central sindical única. Las ANPOS estaban integradas por representantes de todas las organizaciones sindicales, incluidas las antiguas Federación Obrera del Trabajo (FOT) y Federación Obrera Local (FOL). En la circular del 30 de junio de 1936, dirigida todas las organizaciones sindicales del país, Álvarez escribió:

> Deseando de mantener un contacto más íntimo con las organizaciones obreras que lo han constituido en su representante, para recibir en forma frecuente y eficaz las sugestiones de la clase trabajadora cuanto para tenerla informada de las gestiones que se realizan en beneficio suyo, ha resuelto sostener una confe-

201 ABNB-PR, 1936, "Las instrucciones adicionales al Decreto del Trabajo Obligatorio del 29 de septiembre de 1936", caja 12, tomo 127.

202 ABNB-PR, 1936, "Informe de Waldo Álvarez de 2 de octubre de 1936", caja 12, tomo 127.

rencia semanal con los delegados de las organizaciones obreras de La Paz y del interior de la República.[203]

La idea de esa reunión semanal era que, mediante las ANPOS, debían llegar a la clase obrera todas las iniciativas del gobierno socialista (Álvarez, 1986: 105-106). Buscando dar mayor importancia a esas asambleas en la estructura del socialismo de Estado, Álvarez pidió permiso a Toro para poner el edificio del Senado a disposición de tales organizaciones.[204] El permiso fue concedido y en el hemiciclo del Senado, para espanto de los políticos de derecha, empezaron a sesionar los líderes obreros. El gesto del Gobierno no solamente tuvo un significado simbólico, también demostraba el triunfo de los nuevos principios del poder estatal.

Muy pronto, con el decreto de 4 de julio de 1936, los nuevos sindicatos fueron oficializados y las ANPOS se convirtieron en un nuevo organismo del poder. Aquellos, junto con las organizaciones de los empresarios organizados, conformaron las asambleas tanto nacionales como locales, según los principios gremiales. En las empresas, fueron creados los comités de los gremios, los cuales conformaban las federaciones nacionales que, a su vez, se integraban en las ANPOS; sus dirigentes eran designados por el Ministerio de Trabajo. Su estructura debía reemplazar a todos los demás sindicatos, convirtiéndose no tanto en una confederación de diferentes gremios, sino en un preparlamento sindicalista que delegaría a sus representantes al Parlamento Nacional.

Mediante las ANPOS, el Gobierno esperaba poner bajo el control del Ministerio de Trabajo el proceso de organización de los sindicatos obreros. En la reunión del 23 de julio de aquel año, las ANPOS expresaron su apoyo al gobierno socialista y exigieron a la Junta la aprobación, cuanto antes, de un decreto de sindicalización obligatoria, con el cual proyectaban organizar verticalmente los sindicatos en todo el país.[205] La sindicalización total era, como lo pensaban los militares-socialistas, una herramienta para estatizar el movimiento sindical.

Para los dirigentes sindicales, la creación de un gobierno representativo, sindicalizado, corporativista, más bien señalaba el fin del Estado burgués y el triunfo de los principios socialistas. Un elemento importante del nuevo

203 ABNB-PR, 1936, "Circular del Ministerio de Trabajo de 30 de junio de 1936", caja 12, tomo 127.

204 ABNB-PR, 1936, "Carta de Waldo Álvarez a D. Toro de 1 de julio de 1936", caja 12, tomo 127.

205 ABNB-PR, 1936, "Carta de W. Álvarez a D. Toro de 25 de julio de 1936", caja 12, tomo 127.

sistema político debía ser la sindicalización obligatoria, declarada el 19 de agosto de 1936. Dos años después, el Ministerio de Trabajo, en su informe del 28 de diciembre, hizo especial hincapié en la importancia de ese decreto en el curso de la reforma política:

> La sindicalización general y obligatoria como fundamento del nuevo régimen para el ejercicio de la ciudadanía en Bolivia, significando por sí misma el reconocimiento de un derecho inalienable de la colectividad activa a participar en los destinos del país, ha venido sencillamente a satisfacer una necesidad sentida[206].

En el considerando del decreto, como fines de esa acción, se señalaba:

> La sindicalización general y obligatoria debe ser fundamento para instituir el nuevo régimen de ejercicio de la ciudadanía y debe concursar como uno de los factores básicos para el funcionamiento del mecanismo electoral y para la constitución de los poderes públicos de la República (Antezana y Romero, 1973, Anexos: 9-10).

Por otra parte, el decreto disponía que:

> Todo poblador del territorio boliviano, sea hombre o mujer, que de cualquier modo participe en la producción, distribución y el uso de la riqueza, está obligado a sindicalizarse con sujeción al procedimiento que determinará el estatuto sindical (*ibid*.).

En esa dinámica, cada ciudadano recibía un carné sindical que reemplazaba cualquier otro documento de identidad que lo habilitaba para participar en las elecciones. Asimismo, el artículo 3 decía:

> Los sindicatos estarán bajo la tuición y control permanentes del Gobierno Socialista y la organización sindical será incorporada al mecanismo del Estado como base para la constitución funcional de los poderes públicos (*ibid*.).

Fueron dos tipos de sindicatos los que se formaron: los patronales y los de trabajadores asalariados. La ley estipulaba la constitución de comisiones o de comités mixtos de patrones y de trabajadores para conseguir el entendimiento entre capital y trabajo, resolver las disputas y acordar conjuntamente cómo mejorar la producción. El Ministerio de Trabajo indicaba a cada sindicato la federación sectorial o regional que debía integrar. Se convocó a las federaciones a realizar un congreso nacional unificador de los trabajadores para noviembre

206 ABNB-PR, 1936, “Informe del Ministerio del Trabajo del segundo semestre de 1936”, caja 12, tomo 127.

de 1936. En ese evento, lo que se buscaba era crear una confederación sindical nacional. Según el decreto, el futuro congreso debía aceptar los estatutos propuestos por el Ministerio de Trabajo, que serían la principal base normativa de las relaciones laborales (Antezana y Romero, 1973, Anexos: 11-12). Ese sistema había sido diseñado con el fin de establecer el control total sobre los sindicatos. Explicando la necesidad de una reforma política radical, Toro dijo que el país vivía la desorganización de todas las instituciones políticas y sociales, y que la vida de la sociedad se caracterizaba por la falta de grupos políticos sanos, debido a la inercia de las masas y al predominio de los intereses privados y egoístas que buscaban solamente la explotación del Estado (*El Diario*, 28 de julio de 1936).

El decreto causó una gran discusión en el Gobierno. Se presentaron dos proyectos, uno para el decreto y otro para los estatutos sindicales, que se oponían en su concepto sobre la formación social y el lugar que ocuparían los sindicatos en ella. La autoría del primero provenía del Ministerio de Trabajo, concretamente de los marxistas José Antonio Arze y Ricardo Anaya, quienes insistían en aprobar lo más rápido posible su proyecto de estatutos sindicales. En septiembre de 1936, Arturo Urquidi, como representante del Partido Socialista de Cochabamba –aunque el líder real del partido era Anaya–, escribió una carta al ministro Álvarez en la que le decía que:

> […] era necesario y urgente concluir el proceso de la sindicalización obligatoria con la aprobación del Estatuto y, de este modo, sacar el terreno de los adversarios reaccionarios del carácter socialista de las reformas en curso, tratando imponer sus planes al régimen.[207]

Del contenido de los estatutos sindicales dependía el modo en que se desarrollarían las relaciones entre los sindicatos y el Estado. Álvarez y sus partidarios del movimiento socialista e izquierdista empezaron a elaborar el estatuto inmediatamente. Para diciembre de ese año, el Ministerio de Trabajo informó al Gobierno sobre su conclusión exitosa, prometiendo presentar en breve los estatutos para su aprobación por la Junta.[208]

Una idea muy diferente sobre la sindicalización obligatoria la tenía el ministro del Interior, el teniente coronel Julio Viera,[209] quien consideraba esa

---

207 ABNB-PR, 1936, "Carta de A. Urquidi a W. Álvarez de 9 de septiembre de 1936", caja 12, tomo 127.

208 ABNB-PR, 1936, "Informe del Ministerio del Trabajo del segundo semestre de 1936", caja 12, tomo 127.

209 Según el historiador español Ferrán Gallego (1988), la idea de sindicalización obligatoria con base corporativa provenía de Waldo Álvarez y del Ministerio de

medida como un paso en el proceso de construcción de un Estado corporativo. Su ideal era el fascismo italiano, con su organización política corporativa. La redacción del decreto estaba condicionada a la aprobación de los estatutos sindicales. Tales diferencias produjeron la lucha entre los sindicalistas de izquierda, representados por Álvarez, y los corporativistas de derecha, encabezados en el gabinete por Viera. La discusión sobre el tema se mantuvo hasta la dimisión de Álvarez a fines de 1936, cuando los izquierdistas fueron sacados del Ministerio de Trabajo y el proyecto quedó en el olvido.

Los círculos sindicales acogieron el decreto con entusiasmo. Los izquierdistas se imaginaban que bajo el nuevo régimen socialista se plasmarían las ideas anarcosindicalistas acerca del lugar de los sindicatos en la revolución y en el régimen social futuro. Álvarez declaró que los sindicatos serían el fundamento de la democracia funcional y la forma de realización del poder público (Klein, 1972: 42-43). A pesar de la resistencia de la derecha, los líderes sindicales lograron algunos éxitos en la aplicación de la reforma sindical. Según el informe de septiembre de 1936 del Ministerio de Trabajo, al mes se entregaban, en promedio, tres mil carnés sindicales. Asimismo, durante el primer mes de vigencia del decreto, dicho ministerio registró cerca de 12 sindicatos a la semana, lo que demostraba un trabajo serio de organización llevado adelante por su dirección de izquierda.[210]

El objetivo del régimen era integrar el movimiento obrero al sistema político mediante la estatización de los sindicatos. Según los autores de esas medidas, los fines doctrinales declarados por los militares-socialistas de crear una democracia funcional se hacían realidad justamente con la sindicalización total. La idea de convertir los sindicatos en organismos del poder contenía una fuerte tendencia antiburguesa, antisistémica, cuyo peligro captaron inmediatamente tanto los militares moderados como los círculos conservadores del país, que hicieron todo lo posible para convertir esos decretos en una mera declaración de intenciones.

Las repentinas acciones de iniciativa popular solían desconcertar al Gobierno y a los dirigentes de izquierda, que no estaban preparados para encabezar la creatividad espontánea de las masas. Surgían nuevos organismos de control y de poder popular. Las organizaciones obreras y los excomba-

---

Trabajo. Esa aseveración no concuerda con las acciones posteriores del ministerio que desvirtuaron el sentido corporativista del decreto apoyado por Julio Viera. Álvarez hizo todo lo que pudo para conservar la fuerza de las centrales sindicales existentes, mientras que Viera se proponía formar nuevos sindicatos corporativos dependientes del Gobierno (*ibid.*: 486-487).

210 ABNB-PR, 1936, "Informe de W. Álvarez de 2 de octubre de 1936", caja 12, tomo 127.

tientes presionaban al Gobierno, no solamente a través de los grupos políticos y de los funcionarios cercanos del gabinete de ministros, sino por acción directa, a veces violenta. Casi siempre, la Junta se veía obligada a reconocer *post factum* los logros de tales acciones.

Las dificultades para encontrar productos de consumo masivo y el auge de la especulación producían protestas espontáneas de las masas populares, indignadas por la incapacidad del Gobierno para ordenar el comercio. Los grupos radicalizados de izquierda incentivaban a la población a usar los métodos de la democracia directa y a establecer el control popular del comercio. El 12 de septiembre de 1936, encabezada por los dirigentes de las organizaciones de veteranos –entre ellas la Asociación Nacional de Excombatientes Socialistas, la más radical–, una multitud ocupó la sede del Departamento de Consumo y entabló un juicio a sus funcionarios porque, según los acusadores, no cumplían con sus obligaciones de controlar el comercio. Incapaz de controlar a las inquietas organizaciones de izquierda, el Gobierno se vio obligado a reconocer lo justo de aquellas acciones espontáneas y decretó la presencia de controladores populares en los órganos del poder local, en representación de las organizaciones de los excombatientes y de los partidos de izquierda (*El Diario*, 13 de septiembre de 1936). Esos elementos del nuevo poder popular, carentes de suficiente impulso antiburgués, no llegaron a desarrollarse y se fueron apagando paulatinamente.

Para realizar una reforma política en todos los ámbitos, el 1 de octubre de 1936, la Junta instaló la comisión que elaboraría una nueva Constitución. La integraron no solamente los partidarios del socialismo de Estado, Javier Paz Campero, José María Salinas, Vicente Mendoza López –jefe de la comisión– y Franklin Mercado, sino también los representantes de las fuerzas políticas tradicionales, los cuales no compartían las ideas innovadoras de los militares-socialistas sobre las futuras formas institucionales del poder. Como parte de la comisión, los exministros del Gobierno de José Luis Tejada Sorzano, los derechistas José María Gutiérrez y Pablo Guillén, trataron de desvirtuar todas las innovaciones socialistas.

En noviembre de ese año, Toro declaró que la Asamblea Constituyente sería convocada según nuevos principios políticos; es decir, la mitad de los diputados estaría en representación de los sindicatos y la otra mitad sería elegida en comicios generales (*El Diario*, 3 de noviembre de 1936). La Asamblea Constituyente, desde la perspectiva de Toro, debía elaborar una nueva Constitución bajo la cual tendrían lugar más adelante las elecciones de los nuevos organismos de poder (*La Calle*, 27 de diciembre de 1936). Surgieron propuestas de no convocar a dicha Asamblea, sino de elaborar una carta provisional para los cuatro o cinco años venideros, ya que la vieja Constitución había "muerto" en la revolución desarrollada en

mayo de 1936 y los nuevos principios de la vida política socialista recién se estaban estructurando.

A pesar del carácter cerrado de los trabajos de la comisión, en enero de 1937, la opinión pública pudo conocer las tesis generales del futuro Estado. Según sus declaraciones a la prensa, la comisión había estudiado todas las nuevas constituciones modernas, incluidas las de México, Chile y la entonces Unión Soviética. También había examinado, en particular, la experiencia del Tercer Reich alemán. Muchos observadores comentaron que la comisión, encabezada por Vicente Mendoza López, bajo las indicaciones del presidente, tomó como ejemplo las leyes de la Alemania nazi (*El Diario*, 2 de febrero de 1937). El colectivismo y el antiindividualismo eran los principios fundamentales de la legislación; en efecto, se declaró que los intereses del Estado eran superiores a los intereses y a los derechos del individuo. Las relaciones entre los trabajadores y el capital, según los integrantes de la comisión, debían seguir el ejemplo alemán y estar dentro de la lógica de los decretos de sindicalización y de trabajo obligatorios, que debían incluirse en la nueva Constitución (*El Diario*, 28 de enero de 1937). A principios de 1937, por otra parte, ya estaba elaborado el proyecto del nuevo parlamento funcional, que proponía crear un congreso con el sistema mixto, incluyendo la fórmula sindicalista corporativa y el antiguo sistema parlamentario. Los representantes de los sindicatos y de las organizaciones sociales integrarían la Cámara de Diputados, por partes iguales, y los senadores serían designados por los sindicatos por un periodo de nueve años (*El Diario*, 30 de enero de 1937).

Las pugnas internas en el bloque gobernante postergaron indefinidamente la reforma constitucional. El cambio de ánimo sufrido por las autoridades se reflejó en el trabajo de la comisión. A fines de abril de 1937, Mendoza López renunció a la presidencia de esa instancia, explicando que su decisión se debía a que algunos de sus integrantes no compartían las opiniones sobre el futuro modelo socialista del Estado y que, por tanto, no era posible lograr un entendimiento con ellos.[211] Una de las causas del conflicto fue el proyecto de estatutos sindicales, el cual se mantenía bajo el concepto liberal tradicional;[212] las ideas corporativistas habían sido reducidas a su mínima expresión. La comisión lo justificó subrayando que:

---

211 ABNB-PR, 1937, "Comisión de la Constitución a D. Toro de 19 de abril de 1937r", caja 13, tomo 156.

212 El 23 de febrero de 1937, Toro exigió a la comisión la entrega del Estatuto Sindical, el cual se convirtió en una piedra de toque en la construcción del Estado corporativo (ABNB-PR, 1937, "Comisión de la Constitución a D. Toro de 23 de febrero de 1937", caja 13, tomo 152.

> [En él también se establecía] un sentido de armónica solución de los conflictos sociales no solamente entre el capital y el trabajo contemplado desde el punto de vista del obrero y del patrón, sino integrando el concepto con una amplia colaboración social y administrativa en las funciones económicas de la producción.[213]

Mendoza López insistió en que tal proyecto era inadmisible y fue secundado por Enrique Baldivieso, líder de los socialistas, que protestaba contra el espíritu reaccionario impuesto en la comisión.[214] Toro se negó a aceptar la renuncia de Mendoza López, considerándola infundada, pero tampoco tomó medidas para cambiar la composición de la comisión, donde ya pocos se interesaban por llevar adelante su trabajo.[215] Posteriormente, nadie se preocupó ni se interesó por los resultados del trabajo de la comisión y las elecciones a la Asamblea Constituyente fueron aplazadas.

La aplicación consecuente de los decretos sobre la sindicalización de todos los trabajadores, las ANPOS, el trabajo obligatorio, la reforma del Parlamento y de la administración local pudieron realmente constituir la base de un nuevo régimen político, poco parecido a una democracia burguesa. Esa reforma política habría creado las bases para la profundización y el desarrollo de los elementos anticapitalistas y antimercado en el socialismo de Estado. Si bien el radicalismo de tales reformas atrajo a la izquierda y al movimiento obrero, su carácter abiertamente antiburgués ahuyentó a los aliados derechistas del régimen.

Los militares maniobraban parchando cada situación conflictiva, para posteriormente hacer concesiones a una y otra parte. Con todas sus vacilaciones e inconsecuencias, el primer medio año de existencia del régimen del socialismo de Estado fue el periodo más radical de la reforma política. Sin embargo, el empuje revolucionario de los primeros años se debilitó rápidamente y el régimen se inclinó más y más hacia una política de reformas moderadas.

3.4. La cuestión social y el movimiento obrero

Los sindicatos obreros, por su parte, aplicaron en defensa de sus intereses la disposición sobre la sindicalización obligatoria. En momentos en los que los

213 ABNB-PR, 1937, "Comisión de Constitución a D. Toro de 19 de abril de 1937", caja 13, tomo 156, folio 42.

214 ABNB-PR, "Comisión de Constitución a D. Toro de 21 de abril de 1937", caja 13, tomo 156, B857.

215 ABNB-PR, "Carta de D. Toro a la Comisión de la Constitución", caja 13, tomo 156, B773.

militares desarrollaban sus esquemas teóricos sobre el futuro régimen corporativo, basado en los sindicatos estatales, el movimiento obrero independiente fortalecía sus posiciones. Al desaparecer las viejas mutuales, surgieron los nuevos sindicatos que se agrupaban en la Federación Obrera del Trabajo (FOT) y en la Federación Obrera Local (FOL), en tanto centrales nacionales. Una vez fortalecidos los centros provinciales de la FOT, exigieron mayor participación de los sindicatos en el Gobierno. La FOT de Oruro, basándose en la declaración de la Junta sobre la participación de sus agrupaciones en la administración del Estado, exigió un cargo ministerial para su representante (*El Diario*, 16 de septiembre de 1936). El 28 de septiembre de 1936, esas federaciones firmaron un acuerdo sobre la puesta en marcha de acciones conjuntas y formaron un amplio Frente Único Sindical, en cuyo marco las organizaciones de base conservaban su autonomía y su independencia. La tarea inmediata de aquella agrupación sindical era la preparación de un congreso nacional unitario de los sindicatos (*La Calle*, 25 de octubre de 1936).

El movimiento sindical, que apoyaba al Gobierno en su deseo de reunir bajo su mando a todas las organizaciones obreras del país, recibió a su vez un firme apoyo del Ministerio de Trabajo, y personalmente de Waldo Álvarez. Así pudo ser realizado, en noviembre de 1936, el Congreso Nacional Obrero en Oruro, donde se reunieron 213 organizaciones sindicales en representación de 70 mil obreros (*La Calle,* 15 de noviembre de 1936). Los delegados, en su mayoría, fueron enviados de los sindicatos de las ciudades de La Paz (42), Cochabamba (19) y Oruro (26); fue menor la representación de los centros mineros de Pulacayo (3) y Corocoro (1). Entre los delegados figuraban viejos líderes obreros anarquistas y anarcosindicalistas de la FOL, saavedristas y socialistas de la FOT, al igual que comunistas. Hubo también figuras importantes de la izquierda, como José Aguirre Gainsborg, Ricardo Anaya y Carlos Montenegro. El ala de extrema izquierda, liderada por Aguirre Gainsborg, y los moderados se opusieron a la ideologización clasista y marxista del movimiento sindical que trataban de imponer los comunistas. Los conflictos que de ahí surgieron amenazaron con la división. Los socialistas moderados, cercanos a los militares, acusaron a Álvarez de ayudar a los trotskistas que ocuparon el Ministerio de Trabajo (*La Calle*, 2 de octubre de 1936). Costó grandes esfuerzos conciliar las posiciones y evitar el fracaso de la buscada unificación.

La Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia (CSTB) fue creada por el Congreso Nacional Obrero. La fundación de una confederación nacional que agrupara a los grandes sindicatos de obreros industriales, mineros, ferroviarios, gráficos y otros reflejaba los procesos reales que se estaban dando al interior del movimiento sindical. También significaba la salida de la crisis de las organizaciones artesanales y regionales, como la FOT y la FOL.

El congreso adoptó un programa que contenía un pliego de peticiones a la Junta. De la parte económica de aquel documento es posible destacar las propuestas radicales sobre el traspaso al Estado del 40% de las utilidades de la minería –no se mencionaba la nacionalización–, la eliminación de las concesiones a la empresa petrolera Standard Oil, el establecimiento del control del Estado sobre los flujos monetarios y de oro, y el emprendimiento de una industrialización forzosa con el rol económico activo estatal. En la parte política, se mencionaba la reforma constitucional y el derecho de los sindicatos a participar en las elecciones (Delgado, 1984: 109). Las exigencias de la CSTB no superaban el programa estatal de las reformas ni los postulados ideológicos del socialismo de Estado. El radicalismo del movimiento obrero no sobrepasaba el programa mínimo de la Revolución de Mayo, ratificando su lealtad a los principios declarados por la Junta. En esas condiciones, lo natural fue adoptar una resolución apoyando al gobierno socialista.

Durante el congreso pasó algo extraordinario: los delegados obreros le retiraron su confianza a Waldo Álvarez. Era la manera en que los sindicalistas expresaban su frustración por los proyectos de reorganización del movimiento obrero postulados por el Gobierno. Álvarez dimitió pensando que en su lugar sería colocado otro líder obrero, como Gabriel Moisés, que había recibido la mayoría de los votos. Con su renuncia, el Gobierno dio un viraje hacia la derecha. David Toro no se apresuró en designar un nuevo ministro de Trabajo e ignoró las propuestas de la CSTB. Mientras tanto, los líderes de la FOT, José Guzmán y Hugo Sevillano, no deseaban perder su independencia subordinándose a la CSTB, entre cuyos dirigentes predominaban los cabecillas de la nueva generación crítica hacia los viejos dirigentes anarcosindicalistas. La animosidad de la FOT y de la FOL frente a la CSTB salió a la luz, por primera vez, el 9 de enero de 1937, cuando se negaron a participar en una manifestación pro Gobierno. En una carta dirigida a Toro, la FOT quiso convencer al Gobierno de su lealtad y subrayó que el problema era el conflicto con la CSTB; prometió realizar su manifestación otro día.[216] Aunque todas las federaciones integraban formalmente la CSTB, las centrales antiguas trataban de conservar su autonomía y de trazar una línea política independiente.

En su carta de renuncia, Álvarez recordó al presidente su promesa de conservar el cargo de ministro de Trabajo para los candidatos propuestos por esa instancia obrera y justificó su dimisión por la evolución del régimen hacia la derecha.[217] Aunque no mencionó lo desfavorecido que resultó en la

216 ABNB-PR, “FOT a D. Toro de 9 de enero de 1937”, caja 13, tomo 152.

217 ABNB-PR, 1936, “Declaración de W. Álvarez a D. Toro de 28 de noviembre de 1936”, caja 13, tomo 127.

votación del congreso,[218] en sus declaraciones a la prensa fue más categórico: explicó su salida del Gobierno por la imposibilidad de trabajar en un ambiente de persecución a sus amigos y correligionarios, enviados al exilio (*La Calle*, 2 de diciembre de 1936).

Por su parte, Toro remitió al congreso obrero un saludo, con la promesa de dejar para los sindicatos el cargo de ministro de Trabajo (*La Calle*, 3 de diciembre de 1936). A pesar de ello, el ambiente que reinaba en el encuentro, las fuertes discusiones y las contradictorias opiniones sobre el futuro del movimiento obrero defraudaron al Gobierno. El presidente esperaba que la confederación sindical fuera un instrumento dócil y pensaba que el movimiento obrero debía convertirse en una pieza integrante de la máquina estatal.

Las discusiones sobre los intereses de clase y la independencia política del proletariado, dominantes en el congreso, decepcionaron a los militares. Incluso el Departamento de Propaganda publicó una declaración muy crítica, mencionando que la clase obrera debía estar alerta frente al peligro de escisión interna y que era preciso llegar a un entendimiento mutuo si se quería destruir para siempre los residuos del pasado feudal en Bolivia y fortalecer el socialismo de Estado (*La Calle*, 8 de diciembre de 1936). De ese congreso no surgió una estructura corporativa sumisa al Gobierno, sino una unión obrera vigorosa que debía ser tomada en consideración. También se definió la postulación de Gabriel Moisés para ministro de Trabajo, a quien Toro consideraba "demasiado izquierdista", lo que influyó en su decisión de ignorar el acuerdo de mayo de 1936 con los sindicatos. Según publicó *La Crónica* en aquellos días, Moisés alegaba extremos que no encajaban en un Estado socialista.

Ante la negativa de Toro de aceptar al candidato de la CSTB para el cargo principal en el Ministerio de Trabajo, el 22 de diciembre de 1936, la FOT le dirigió una carta con sus propuestas:

> Es evidente que no puede haber "socialismo" sin intervención directa y activa de las masas; que no puede haber comprensión ni armonía si los trabajadores no intervienen directamente en la producción, en el consumo y, en general, en todas las actividades económicas del capital y el trabajo. El Ministerio de Trabajo, en este caso, viene a ser el órgano genuino de los trabajadores en la política gubernativa socialista que está empeñada en realizar la junta de su presidencia.[219]

---

218 Moisés obtuvo el primer lugar con 32 votos y Álvarez, que era considerado como un líder indiscutible de los obreros, obtuvo el tercer lugar con 22 votos (Delgado, 1984: 104-110).

219 ABNB-PR, "FOT a D. Toro de 22 de diciembre de 1936", caja 13, tomo 152 .

La FOT llamaba a Toro a cumplir con la promesa hecha a los trabajadores durante el proceso revolucionario de mayo, designando como ministro a un representante de los sindicatos. Se adjuntaba una larga lista de posibles candidatos, entre los cuales figuraban conocidos sindicalistas de esa federación, en particular los saavedristas Ezequiel Salvatierra y Hugo Sevillano, y los socialistas Rómulo Chumacero y Fernando Siñani, entre otros.[220] Aquella postulación de candidatos para ese cargo, al margen de la CSTB, mostró un movimiento obrero dividido. Tales conflictos al interior de la organización sindical fortalecieron la aspiración de los militares de ignorar los acuerdos para la inclusión de un representante suyo en el gabinete ministerial. Toro, al enfrentar una CSTB fuerte pero díscola, se aprovechó de su falta de unidad. Como consideraba a Moisés demasiado izquierdista para su Gobierno, desistió de recurrir a los dirigentes sindicales y designó como ministro de Trabajo a Javier Paz Campero, conocido por su cargo de abogado del industrial minero Carlos Aramayo.

El 19 de enero de 1937, al asumir su cargo, el nuevo ministro de Trabajo declaró que el capital y el trabajo, siendo los factores antagónicos de la producción, desempeñaban la misma función social y, por tanto, ambos requerían las garantías del Estado; señaló también que debían cumplir con su deber para el desarrollo armónico y el progreso del país (*El Diario*, 20 de enero de 1937). Inmediatamente, puntualizó su opinión sobre el movimiento obrero; teniendo en cuenta los objetivos de la reforma política y la sindicalización obligatoria, consideró que los sindicatos debían desarrollarse bajo el rígido control estatal. Una de las tareas para ordenar las relaciones entre el Estado, la clase obrera y el capital debía ser, en su opinión, elaborar el código laboral y declarar su vigencia inmediata (*ibid.*). Naturalmente, bajo la nueva dirección del ministro, la política de Gobierno hacia el sector laboral cambió totalmente; todos los discursos iban dirigidos principalmente a la cooperación armónica entre trabajo y capital.

En el marco de la política laboral corporativista, el 30 de marzo de 1937, se emitió el decreto sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y el aumento de los salarios. Para poner en práctica los principios de participación de los obreros en las utilidades de las empresas, inició su trabajo un comité nacional de representantes de los trabajadores y de los empresarios. Las autoridades locales debían crear esos comités a nivel departamental y provincial.[221] Tales organismos, encargados de la interacción entre trabajo y capital, serían los responsables de decidir lo referido al incre-

220 *Ibid.*

221 Véase: República de Bolivia, *Anuario Administrativo de 1936*, volumen 1 (La Paz, 1937: 629).

mento salarial, los pagos adicionales a los obreros y controlar toda la parte financiera en el funcionamiento de las empresas. Su creación debía eliminar las causas económicas de las huelgas. Al igual que muchas otras iniciativas del Gobierno de Toro, ese decreto quedó en papel; la autoridad no dio un solo paso para su ejecución. El Ministerio de Trabajo también preparó leyes para reglamentar la jornada laboral, crear las cooperativas de consumo obrero y regular el trabajo de mujeres y de niños.

La Junta llevó a cabo una política social flexible, pues era consciente de la situación difícil que vivía la mayor parte de la población a causa de la crisis económica y como consecuencia de la guerra. Desde sus inicios, el gabinete ministerial castrense estudió y preparó un decreto sobre el salario mínimo garantizado, que fue firmado el 1 de junio de 1936 y modificado el 27 de ese mes con el decreto de aumento diversificado de los sueldos, según la escala de 10% a 129%, dependiendo del monto de la remuneración (Álvarez, 1986: 105); con la primera ley ganaron los trabajadores peor pagados. Después del 9 de marzo de 1937, durante la aguda crisis política, Toro volvió a aumentar las remuneraciones y las jubilaciones entre el 25% y el 40%. Los disturbios en las minas de Llallagua (Potosí) aceleraron la aprobación de las medidas a favor de los trabajadores. En esa localidad, los mineros abandonaron el trabajo e irrumpieron en el edificio de la gerencia de la empresa exigiendo el aumento de los salarios y la congelación de los precios de los productos alimenticios (Rodríguez Ostria, 1991: 102). Al adoptar medidas económicas destinadas a suavizar los embates de la crisis en tan amplios sectores populares, los militares-socialistas buscaban conseguir el apoyo de la clase obrera.

A pesar de su enfoque laboral flexible, el Gobierno no pudo evitar conflictos con los trabajadores. Entonces, para dirimir diferencias y mediar en caso de huelga, se creó la Comisión Conciliadora, encabezada por el viceministro de Trabajo. El ministerio reconoció que durante 1936 tuvo que mediar en "infinito número de diferendos entre patrones y proletariado".[222] En la mayoría de los casos, logró compromisos entre las partes (*El Diario*, 11 y 12 de septiembre de 1936).

Bajo la dirección del nuevo ministro, las relaciones del Gobierno de Toro con el movimiento obrero se tensionaron y se agrietaron. Al poco tiempo, el distanciamiento fue total. En abril de 1937, pese al ampuloso gesto de elevar las remuneraciones, un importante conflicto laboral en las minas de Potosí rompió la paz social. Para junio de ese año, el movimiento huelguístico amenazó la existencia misma del régimen de Toro. La designación de Paz Campero como ministro de Trabajo había reducido

222 ABNB-PR, 1936, "Informe del Ministerio del Trabajo del segundo semestre de 1936", caja 2, tomo 127.

significativamente el campo de maniobra política al propio Toro. Los dirigentes obreros acusaron al ministro de haber convertido esa cartera en un organismo de cooperación con los barones del estaño.[223] Tratando de separar a la izquierda de la extrema izquierda e imponiendo a los sindicatos los principios de la cooperación de clases, Toro no conseguía sus objetivos de controlar el movimiento obrero, perdiendo cada vez más el apoyo de las organizaciones populares, al tiempo que aumentaba su dependencia del Ejército.

Desde su llegada al poder, los militares-socialistas prestaron mucha atención al movimiento obrero, razón por la que los sindicatos llegaron a ocupar un lugar destacado en el nuevo régimen. El mundo castrense veía en el movimiento obrero a su aliado principal y, más todavía, estaba convencido de que expresaba sus propios intereses. La sincera alianza de los uniformados con las organizaciones obreras fundamentó las acciones del régimen en el periodo comprendido entre mayo y diciembre de 1936. La coalición lanzó una serie de medidas radicales en las esferas social y política. El distanciamiento entre Toro y los sindicatos, a comienzos de 1937, no deshizo por completo la alianza, pero relegó al movimiento obrero a un segundo plano.

3.5. La lucha política bajo el Gobierno de David Toro

En el primer gabinete que siguió a la reorganización de la Junta, en junio de 1936, los ministerios clave quedaron en manos de quienes proclamaban la necesidad de establecer un régimen autoritario socialista, siguiendo el ejemplo de Benito Mussolini en Italia y de Adolf Hitler en Alemania. Los principales exponentes de esa tendencia eran el jefe de gabinete y ministro del Interior, coronel Julio Viera; el ministro de Defensa, coronel Oscar Moscoso; y el ministro de Finanzas, el socialista Fernando Campero. Desde un principio, Viera dio a entender a los partidos tradicionales que no veía ninguna posibilidad de trabajar con ellos. Cuando el líder de los republicanos genuinos, Demetrio Canelas, solicitó permiso a Viera para realizar el congreso de su partido, recibió una negativa tajante e inequívoca:

> El Ejército, al asumir el poder, busca en las fuerzas políticas de verdadera orientación socialista, la colaboración y apoyo que necesita para realizar su programa de acción regenerativa, y no en grupos antagónicos que pertenecen a la demagogia y al caudillismo tradicional del pasado. Por lo tanto, el Ministerio de

223 AHGE-SRE, 1937, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 8 de enero de 1937", 31-25-3.

> Gobierno considera que los partidos tradicionales no existen en Bolivia [...]. El Gobierno concederá garantías políticas a todos los partidos de la izquierda, pero no a los tradicionales "que no existen" (Álvarez, 1986: 132).

Es más, a muchos de esos políticos les limitaron sus viajes dentro del país. Canelas debió solicitar autorización al presidente David Toro para trasladarse a las provincias, incluso por asuntos personales.[224] Los socialistas apoyaron la represión contra los partidos tradicionales, pensando en mantenerse como el único partido oficialmente permitido.

El 23 de junio de 1936, los socialistas del Comité Revolucionario habían fundado el periódico *La Calle*, cuyo primer director fue Nazario Pardo Valle y más adelante el famoso periodista de izquierda Armando Arze (Knudson, 1986: 12). Este último ya había dirigido el medio saavedrista *La República*, como también *El Universal*; también había escrito para la revista *Inti*, editada por Hernán Siles Zuazo. Arze, que se hizo famoso durante la Guerra del Chaco –gracias a su posición antibelicista–, le dio un gran dinamismo a *La Calle*, el medio escrito más barato y popular del país. Para ello, utilizaba un nuevo estilo periodístico, llamativo y menos intelectual, muy cercano a los volantes callejeros. Con el tiempo, ese periódico se convirtió en el núcleo del Movimiento Nacionalista Revolucionario, determinante durante muchas décadas en la vida política de Bolivia. Alrededor de *La Calle* se fueron agrupando prácticamente todos los socialistas, hecho que lo transformó en el principal apoyo ideológico, político y social del régimen del socialismo de Estado.

En su segundo número, el periódico abrió fuego contra los liberales, inculpándoles de todo, desde la caída de la minería hasta de sabotaje. Posteriormente, exigió enjuiciar al expresidente José Luis Tejada Sorzano y a Héctor Ormachea Zalles, su ministro de Hacienda, por haber condonado ilegalmente la deuda de un millón de bolivianos, por concepto de impuestos, a la empresa inglesa Fabulosa Mines (*La Calle*, 30 de junio de 1936). Inmediatamente después de aquellas publicaciones, el 5 de julio de 1936, Toro ordenó personalmente investigar el caso. Pese a que al fiscal Pablo Guillén le interesaba dejar ese caso en el olvido, ya que él también había sido ministro de Gobierno de Tejada Sorzano, la campaña del periódico perseveró (*La Calle*, 5 y 7 de julio de 1936), conduciendo el caso hasta la Corte Suprema. Se trataba de la primera acción exitosa contra el imperialismo, durante la cual ese medio impreso pudo demostrar a los lectores sus principios nacionalistas.

---

224 ABNB-PR, 1937, "Disposición de D. Toro al Ministerio del Interior de 15 de marzo de 1937", caja 13, tomo 156.

Mientras que los socialistas supieron encontrar un lenguaje común con los militares, los marxistas –como José Aguirre Gainsborg y José Antonio Arze, al igual que el ministro Waldo Álvarez– provocaban cada vez más descontento entre los moderados de la Junta. La avanzada contra la izquierda comenzó en las provincias; posteriormente recibió apoyó del Gobierno. En una de sus memorias, el ministro Viera informó a Toro que los líderes sindicales locales se quejaban de las persecuciones de las que eran víctimas por parte de los prefectos y de otras autoridades por difundir "propaganda socialista". Viera concluía que, en realidad, las autoridades habían "cumplido con su deber no permitiendo la propaganda disolvente de tendencia comunista que algunos llevaban allí con pretexto de divulgación socialista".[225] Reconocía, además, que la cierta relación existente entre ambas doctrinas daba "pábulo a los extremistas, que hábilmente disfrazan de socialismo sus conatos anarquistas".[226] También señalaba que era necesario reprimir con regularidad y decisión tanto el comunismo como el anarquismo. El presidente Toro respaldó las acciones de su ministro y de las autoridades locales.

Bajo la influencia de los derechistas, y debido al curso que tomó la delimitación de las posiciones políticas entre los diferentes partidos, se produjo el divorcio entre las agrupaciones izquierdistas y los militares. En septiembre de 1936, se hizo patente la división del partido socialista en dos alas: una de derecha y otra de izquierda. Ese año, cuando Toro, con el acuerdo tácito de *La Calle*, realizó una "limpieza" en el país de los extremistas de izquierda, Carlos Montenegro acusó a la izquierda, vía la prensa, de ser comunista e internacionalista, lo que era sinónimo de traición nacional (*La Calle*, 14 de octubre de 1936). Incluso le recordó a José Antonio Arze su idea de crear en 1929 la Confederación de Repúblicas Obreras del Pacífico (CROP), en la que Bolivia perdía definitivamente su soberanía a condición de ser parte de la confederación proletaria junto con Perú y Chile.[227]

Influido por esa campaña, Toro promulgó el 16 de septiembre de 1936 un decreto que prohibía a los comunistas sus actividades y su ideología. Dicho decreto antiextremista había sido emitido el 26 de junio para las primeras represiones dirigidas por entonces contra los saavedristas. En septiembre, sin embargo, el Gobierno lanzaba acusaciones de extremismo y de

225 ABNB-PR, 1937, "Memoria de J. Viera a D. Toro de 25 de enero de 1937", caja 13, tomo 156.

226 *Ibid.*

227 El Ministerio del Interior utilizó a la CROP como pretexto para expulsar del país a Arze (ABNB-PR, 1937, "Carta del Ministerio de Interior a D. Toro de 14 de enero de 1937", caja 13, tomo 156.

comunismo contra el Partido Obrero Revolucionario –es decir, contra el Bloque Socialista de Izquierda, su fachada legal, que integró en su tiempo el partido socialista–, así como contra los grupos marxistas, como el Bloque Obrero de Oruro y el Grupo Izquierdista de Cochabamba, entre otros (*El Diario*, 22 de septiembre de 1936). El decreto ordenaba la expulsión de los extranjeros comunistas como elementos indeseables e instauraba el control policial sobre los bolivianos sospechosos de actividades comunistas. Muchos izquierdistas, principalmente intelectuales, fueron expulsados del país o desterrados a provincias alejadas.

Los reconocidos líderes de izquierda Aguirre Gainsborg y Arze se vieron obligados a pedir asilo político en la Embajada de México. No obstante, Toro les prohibió salir del país y reforzó la guardia alrededor de aquella embajada. Tales medidas fueron presentadas como la victoria del Gobierno nacional sobre las fuerzas internacionales cosmopolitas –léase antinacionales–. Toro acusó a muchos dirigentes de izquierda de ser espías del Komintern y de Moscú. En ese caso, evidentemente, se basaba en su propia experiencia de contacto clandestino con los agentes de la Internacional Comunista. Después de largas conversaciones, con la mediación del presidente del Partido Socialista, José Tamayo, se obtuvo el permiso de salida del país para Aguirre Gainsborg y Arze, que el 24 de septiembre de 1936 partieron hacia Chile.[228]

La persecución a la izquierda causó gran confusión en los sindicatos, precisamente en esos momentos de gran preocupación en las organizaciones obreras y socialistas por la "derechización" del Gobierno. El fortalecimiento de las posiciones de derecha en las provincias obligaba a los izquierdistas a dirigirse al Gobierno para exigir depurar el aparato funcionario local. Por ejemplo, el Partido Socialista de Cochabamba consideró que debía designar a quienes ocuparían los cargos importantes solamente después de las consultas con la dirección del partido, además de despedir a los funcionarios que no eran militantes del partido o no compartían los principios del socialismo de Estado.[229]

Por esa razón, el régimen no pudo consolidar un firme apoyo de las masas. La ruptura con los grupos marxistas de izquierda y, más adelante, el enfriamiento de las relaciones con los socialistas agrupados en torno al periódico *La Calle*, produjeron un vacío político que el Gobierno trató de llenar creando un partido o movimiento oficialista. Bajo la supervisión di-

---

228 AHGE-SRE, 1936, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 25 septiembre de 1936", 27-29-13.

229 ABNB-PR, 1937, "Petición del Partido Socialista de Cochabamba de 28 de noviembre de 1936", caja 13, tomo 153.

recta del Ministerio del Interior, el 23 de diciembre de 1936, fue fundado el Frente Popular Boliviano. Lo integraron la Asociación Nacional de los Excombatientes Socialistas, el Partido Socialista, la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia (CSTB) y los grupos marxistas Avance y Universidad Estudiantil Socialista. A cambio de su apoyo, la Legión de Ex Combatientes (LEC) exigió cargos estatales en el Gobierno y en las provincias, así como la aplicación de drásticas medidas contra los partidos que no se adhirieron al bloque progubernamental.[230]

Los socialistas se consideraban a sí mismos como la base del régimen unipartidista, por lo cual acataban con mucho gusto las iniciativas del Ministerio del Interior. La falta de independencia en los temas políticos contingentes restaba capacidad tanto a los partidos como a los frentes socialistas y limitaba su influencia en el movimiento obrero y, por ende, en las esferas populares. Alberto Mendoza López, Moisés Álvarez, el líder obrero de apellidos Taboada Ávila y el dirigente estudiantil César La Faye habían pasado a integrar la dirección del Frente Popular Boliviano. La nueva agrupación proclamó su apoyo a los principios socialistas del Gobierno de David Toro y su deseo de unir a todas las fuerzas de izquierda del país. El llamado de aquel frente señalaba que las discrepancias ideológicas no podían ser un obstáculo para consolidar las fuerzas en la construcción del Estado socialista, capaz de garantizar el bienestar social (*La Calle*, 27 de diciembre de 1936). El Frente Popular Boliviano no alcanzó los niveles de una organización política de masas; al contrario, mantuvo su calidad de agrupación de cúpulas generada por orden del Ministerio del Interior.

3.6. El Partido del Socialismo de Estado

El frente unificador de los grupos de orientación socialista y de los sindicatos quedó tan aislado, por su escaso prestigio ante la población, que el Gobierno decidió fundar su propio partido. La idea de organizar un partido del socialismo de Estado fue del ministro Julio Viera, en tanto que el Ministerio del Interior empezó inmediatamente a coordinar con los dirigentes políticos para concretar su conformación. Entre febrero y marzo de 1937, a la cabeza de José Sanjinés, los socialistas promovieron primero la Organización Obrera Socialista de Estado, que luego se transformó en el Partido Obrero del Socialismo de Estado, bajo la tutela del Ministerio de Gobierno.[231] Los altos

230 ABNB-PR, 1937, "Carta de la LEC a D. Toro de 16 de enero de 1937", caja 13, tomo 152.

231 ABNB-PR, 1937, "Carta de la Organización Obrera del Socialismo de Estado a D. Toro de 2 de marzo de 1937", caja 13, tomo 152.

personeros del Gobierno partieron en gira por el país organizando a las agrupaciones locales del nuevo partido, al cual se iban adhiriendo con entusiasmo los socialistas y los militares. Las secciones locales quedaban encabezadas por los prefectos y los alcaldes. Finalmente, el 7 de abril de aquel año, vio la luz pública el nuevo Partido del Socialismo de Estado (*El Diario*, 8 de abril de 1937), con la participación de múltiples organizaciones socialistas.

La militancia en dicho partido era obligatoria para los empleados públicos y los militares en todo el país. Asimismo, se convirtió en el partido oficialista, por lo que tuvieron que integrarse a él los veteranos del grupo Bolivia y de la Asociación Nacional de los Excombatientes Socialistas, como también los dirigentes de la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia (CSTB) y hasta los republicanos socialistas; es decir, todo el sector de las fuerzas moderadas reformistas.

El Partido del Socialismo de Estado proclamó su objetivo de establecer el socialismo de Estado corporativo en Bolivia, basado en los principios de la democracia funcional. El Gobierno tramaba pasar muy pronto a un sistema de partido único, para lo cual disolvería a todos los demás partidos y movimientos políticos. Su constitución fue, por tanto, el paso lógico en la construcción de la verticalidad socialista: sindicatos-partido-Estado.

Aquel partido eligió a sus directivos en una reunión efectuada el 20 de abril de 1937. En calidad de presidente honorario fue nombrado el propio David Toro. Bajo la dirección de Sanjinés, integraron formalmente la directiva los ministros Julio Viera, Enrique Finot y Javier Paz Campero, y los oficiales de alta graduación como el general Enrique Peñaranda y el coronel Germán Busch.[232] La novel organización, con la ventaja que le daba el ser el único partido permitido por el Gobierno, esgrimió inmediatamente una postura irreconciliable con todos sus opositores, fueran de derecha o de izquierda. Toro reiteró su lealtad a los ideales socialistas en su llamado especial del 14 de abril de 1937, exigiendo tomar "desde ya medidas enérgicas para cortar de raíz la ponzoñosa política de nuestros adversarios que no desperdician ocasión para sembrar la anarquía del país".[233]

La creación del Partido del Socialismo de Estado se constituyó en un acto puramente formal. Pese a su existencia, se mantuvo la misma correlación de fuerzas políticas anterior a su fundación, pues se trataba solamente de una entidad regida administrativamente. Por ello, durante los festejos del aniversario revolucionario de mayo, el Gobierno se llevó una desagradable sorpresa cuando en el desfile de los integrantes y de los partidarios del

232 ABNB-PR, 1937, "Acuerdos del PSE [Partido del Socialismo de Estado] de 20 de abril de 1937", caja 13, tomo 152.

233 ABNB-PR, 1937, "Carta del PSE a David Toro", caja 13, tomo 152.

Partido del Socialismo de Estado participó un escaso número de manifestantes, sumando no más de cien personas, sin contar con los instrumentistas de las bandas de músicos que recorrieron algunas calles de la ciudad (*El Diario*, 17 de mayo de 1937).

El debilitamiento de los socialistas y el enfriamiento de las relaciones con el movimiento obrero obligaron al Gobierno a buscar nuevos aliados en los otros partidos y grupos políticos. Toro aceptó con mucho gusto un acuerdo con el Partido Centralista, creado por Carlos Aramayo para participar junto con José María Zalles en las elecciones presidenciales previstas para mayo de 1936. Ese partido era el último reducto de las fuerzas conservadoras tradicionales y, al mismo tiempo, representaba el ala moderada de la oligarquía, dispuesta a emprender algunas reformas políticas y sociales destinadas a preservar su poder total en el país.

Después de la ruptura con la izquierda, con un claro viraje hacia la derecha, a fines de 1936, los centralistas pudieron ser una alternativa de apoyo civil al régimen. Toro designó a Fernando Gutiérrez Granier, representante de ese partido, al Ministerio de Hacienda, forzando la dimisión del socialista Fernando Campero. Los cambios en el Gobierno no dejaron dudas: se trataba de olvidar el programa de reformas del socialismo de Estado.

El favoritismo y la estrecha vinculación de Toro con Aramayo provocaron inquietudes en los representantes de las demás compañías mineras, todas competidoras particularmente de Simón I. Patiño, el rey del estaño. Por tal razón, en febrero de 1937, la asociación de los industriales mineros, controlada por los patiñistas, protestó por el constante asedio a Patiño de los medios de prensa organizados, según ellos, por el ministro de Trabajo, Javier Paz Campero.[234] Patiño se unió a los adversarios de Toro en el Ejército, prometiéndoles todo su apoyo financiero para derrocar el régimen. Al terminar 1936, el Gobierno de Toro quedó sostenido en el poder tan solo por dos grupos: los centralistas –el partido de Aramayo– y los militares admiradores del fascismo y del nazismo.

La evolución de Toro hacia un curso más moderado, incluso prooligárquico, provocó la oposición de los antiguos partidarios de su régimen. Enfrentado al desencanto general de sus exadherentes, Toro se dio cuenta de que su gestión dependía más y más del Estado Mayor y del Ejército, controlado por Germán Busch. En las propias filas uniformadas cundía el ánimo opositor, particularmente en aquellos oficiales que no captaban la necesidad de cambiar el régimen constitucional y no aceptaban las ideas del socialismo de Estado. Encabezó esa oposición castrense el coronel Roberto Bilbao La

234 ABNB-PR, 1937, "Asociación Minera al Ministerio del Trabajo de 15 de febrero de 1937", caja 13, tomo 153.

Vieja, héroe del Chaco, que tiempo atrás había sido invitado por el presidente a ocupar el Ministerio de Defensa, invitación que no aceptó alegando la inconstitucionalidad del régimen. Según Gustavo Adolfo Otero, aquel político era de "tipo jesuítico, dominador, intrigante y perverso" (1977: 210). A fines de 1936, Bilbao La Vieja debió dejar el cargo de presidente de la Legión de Ex Combatientes (LEC), donde lo reemplazaron por un socialista leal, el exlíder de Beta Gamma Julio Zuazo Cuenca (Gallego, 1991: 193). Toro, en acuerdo con Busch, se comportó duramente contra ese popular oficial que provocaba dolores de cabeza al Gobierno y al Estado Mayor. Bilbao La Vieja tuvo que dejar el país.

Al interior de la LEC también se libraba una lucha por el liderazgo político. El exilio de Bilbao La Vieja debilitó la influencia de la legión, la cual desde principios de 1937 había perdido su significado para el régimen, conservando solamente su prestigio simbólico como la primera organización de los excombatientes. Ahora bien, el golpe mortal se lo propinó su propia burocratización, que le quitó su poder de movilización de las masas. Toro quiso inicialmente convertir la LEC en la estructura política oficial, contribuyendo a la burocratización y a la decadencia de la organización.

La LEC, los sindicatos y tanto los grupos como los partidos socialistas reunían en sus filas a múltiples partidarios del régimen, al igual que a ciudadanos generalmente neutrales. Tales organizaciones influían poderosamente en sus adherentes y podían producir reacciones decisivas en la opinión pública. De hecho, se trataba de levantar las nuevas estructuras de la sociedad civil, cuyos engranajes de funcionamiento se diferenciaban seriamente de los del sistema político liberal precedente. Nacía el nuevo vínculo entre las organizaciones sociales de masas y las autoridades. En sus reuniones y asambleas participaban siempre los representantes de las autoridades locales o centrales, que captaban allí el ánimo de las masas respecto a su política. Los mecanismos de la democracia directa se aplicaban con más frecuencia en la política real.

La aparición de las organizaciones sociales masivas tuvo una serie de consecuencias. Primero, los sectores más vastos de la población –incluida la clase obrera, al igual que los sectores populares de las ciudades– se integraban a la vida política a través de dichas organizaciones, las cuales eran parte fundamental de la sociedad civil, pues ampliaban la base social de apoyo al régimen. Segundo, su existencia cambió el carácter del poder político. De hecho, el Estado de castas, el oligárquico, y la democracia para los elegidos quedaron en el pasado; se formaba un nuevo Estado y nacía una sociedad civil de nuevo cuño, caracterizada por el manejo y la manipulación de la población estructurada y organizada de manera diferente a la que se dio en los periodos anteriores.

Los militares-socialistas, conscientes de su debilidad política, no podían esperar avance alguno y se preocupaban únicamente de influir ideológicamente y de buscar consenso en la sociedad. La estatización de las organizaciones sociales y su conducción administrativa habían sido el único camino posible de formación de la nueva sociedad civil y del nuevo Estado. La burocratización y la estatización de los sindicatos y de los partidos oficialistas, característicos del nacional-reformismo, surgieron en Bolivia por primera vez con el régimen militar-socialista. Empero, el presidente Toro, al crear el eje Estado-partido-sindicatos, de tipo totalitario, en lugar de fortalecer a sus aliados, los debilitó, subordinando automáticamente al Estado a todos aquellos grupos sociales que apoyaban al Gobierno.

Conforme Toro trabajaba activamente para consolidar el apoyo político al régimen, perdía cada vez más el apoyo militar. Era evidente que la Junta se mantenía en el poder solamente gracias al respaldo del jefe del Estado Mayor, Germán Busch, aunque él era crítico sobre la actitud del Gobierno, al no apreciarse resultados tangibles de las reformas en marcha.

A comienzos de marzo de 1937, el enfriamiento de las relaciones entre los dos líderes de la revolución, Toro y Busch, desembocó en una grave crisis política. Inesperadamente, Busch llamó al director del periódico *El Diario* y en la entrevista concedida declaró su disposición a dimitir al cargo de jefe de Estado Mayor (*El Diario*, 3 de marzo de 1937). Todos, y en primer lugar Toro, comprendieron que esa declaración contenía una amenaza directa al Gobierno. Busch reprochaba al presidente y al gabinete su actitud politiquera y condenaba su alianza con las fuerzas de la oligarquía. La causa de fondo del conflicto era la posición de Toro en sus relaciones con el Ejército. Por ejemplo, sin consultar con el Estado Mayor, varios oficiales de alto rango habían sido expulsados del país, lo que indignó a Busch, pero lo que finalmente lo sacó de quicio fue la designación de un coronel de apellido Candia al mando del Ejército, a pesar de su oposición. Para ese cargo –el segundo en importancia en las Fuerzas Armadas– quería a un hombre de su absoluta confianza. Además, Candia tenía fama de ser un hombre de tendencia conservadora, que se hizo famoso por su escandalosa declaración pública tras la ocupación de Madrid por las tropas de Francisco Franco, cuando propuso que la fecha debía celebrarse en Bolivia como fiesta nacional. Considerando la correlación de fuerzas políticas en el Ejército, Busch no podía aceptar su nombramiento.

Finalmente, Toro pudo convencer a Busch de desistir de su renuncia. Uno de los argumentos decisivos para resolver pacíficamente la disputa fue la noticia recibida respecto a que efectivos militares paraguayos se habían concentrado en la zona de la línea divisoria entre ambas fuerzas en

el Chaco. También lo convenció de no aumentar las dificultades internas ante un enemigo todavía muy fuerte, que pretendía apropiarse de la región petrolífera de Camiri en el departamento de Santa Cruz, y de esperar hasta el arreglo definitivo de las relaciones con Paraguay en la Conferencia de Paz de Buenos Aires.[235]

El creciente conflicto entre Toro y Busch obligó al Gobierno a acelerar la investigación del tema del que dependía la supervivencia política del régimen: los crímenes y los abusos financieros y económicos durante la guerra y el castigo de los culpables. También lo impulsó a encarar la nacionalización de la Standard Oil. La investigación demostró públicamente los abusos de las autoridades y de los empresarios durante la Guerra del Chaco.[236] El país exigía verdad y justicia, como especie de revancha ante la humillación por la derrota. En diciembre de 1936, comenzó sus funciones la Comisión Especial para la revisión de los contratos de guerra, la cual descubrió numerosos fraudes relacionados con los suministros de armas en los que aparecían involucrados los más altos funcionarios públicos, incluidos los del Ministerio de Guerra. La revelación de los robos y de las irresponsabilidades de la administración pasada mostraba a Toro como el líder de una revolución purificadora, llamada a terminar con la corrupción y la inmoralidad, no solamente en las esferas políticas, sino también en el Ejército.

Estupefacción nacional provocó, por ejemplo, el inédito caso del norteamericano Freeman Higgins, quien durante la guerra no solo alcanzó el grado de teniente coronel del Ejército boliviano, sino que suministró equipos militares defectuosos. El fraude causó, por supuesto, un enorme perjuicio a las finanzas del país. Además, premiaron al proveedor de chatarra con el cargo honorario de embajador de Bolivia en Honduras y al momento de la investigación lo encontraron sirviendo en el Consulado de Bolivia en Oslo (Noruega).

Fue más escandaloso el suministro de armas, repuestos y aviones por parte de la empresa Webster y Ashton. Los empresarios estafadores vendieron los mismos aviones a Paraguay y a Bolivia, y después de recibir su pago no los despacharon ni a la primera ni a la segunda dirección. Más tarde, los aviones aparecieron, pero en manos de un tercer comprador, una compañía privada del Perú que los había recibido del Gobierno peruano. Las armas y las municiones vendidas por la misma empresa eran defectuosas y no estaban

235 AHGE-SRE, 1937, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 8 de marzo de 1937", 31-25-4.

236 En octubre de 1936, fue publicado el decreto sobre la investigación de todos los contratos celebrados por el Gobierno durante la guerra (*El Diario*, 25 de octubre de 1936).

aptas para su uso, en momentos en que el Ejército boliviano más lo necesitaba, pues sufría en el Chaco grandes dificultades con los suministros.[237] Ambos comerciantes fueron arrestados por la Policía boliviana.

El descubrimiento de tan onerosos fraudes con el armamento significó para Toro la excelente posibilidad de demostrar su patriotismo. Los bullados casos de descomposición moral y los fraudes cometidos durante el periodo de guerra no pudieron, sin embargo, aliviar la gravedad de la situación política y la vulnerabilidad de su Gobierno. El conflicto con el Ejército, en particular con Busch, así como el hielo en las relaciones con la izquierda y las organizaciones obreras, formaron un vacío político a su alrededor. Las organizaciones de excombatientes de orientación socialista sentían crecer la inquietud por la ineficacia del Gobierno, en tanto que en el Ejército se intensificaba el tránsito político hacia la oposición.[238] La creación artificial del Partido del Socialismo de Estado y el expreso deseo de Toro de cambiar el apoyo del Ejército por un fuerte respaldo civil preocupaban al mundo castrense, incluyendo al círculo de Busch. Se aproximaba la ruptura de las relaciones entre el Ejército y el presidente.

La situación económica del país empeoraba. El alza del costo de vida sumaba cada vez un mayor número de descontentos a la ebullición social. Los representantes de las autoridades y el Partido del Socialismo de Estado rogaban, literalmente, a los sindicatos obreros que prescindieran de las huelgas y de las acciones de protesta. Un dirigente sindical, excomunista y activista de ese partido, Enrique Loza, que recibió el cargo de alcalde de la ciudad minera de Pulacayo (Potosí), en uno de los mitines manifestó:

> El supremo Gobierno no admitía huelgas, ni disturbios de ninguna clase y los mineros deberán reconocer que los beneficios de la modificación son obra eminentemente socialista, la noble labor del gobierno socialista al que el obrerismo tiene derecho de respaldar con activo civismo, y que una vez presente el delegado del Ministerio de Trabajo, los obreros deberán reclamar sus derechos con absoluta confianza.[239]

La Junta ordenó aumentar los salarios de todos los trabajadores en un 175%, en marzo de 1937. Las autoridades trataban de bajar la tensión social

237 AMIN-RREE-MIN IN, 1938, "Carta del fiscal A. Mariaca al Ministerio del Interior de 5 de febrero de 1938", 1-109 (0112).

238 ABNB-PR, 1937, "Carta de la ANDES [Asociación Nacional de los Excombatientes Socialistas] a D. Toro de 30 de marzo de 1937", caja 13, tomo 153.

239 ABNB-PR, 1937, "Informe del PSE de la provincia de Quijano a D. Toro de 22 de abril de 1937", caja 13, tomo 153.

recurriendo a concesiones económicas y a la presión política, pero a fines de abril empezaron los paros de los trabajadores y estallaron las manifestaciones de protesta de los obreros de Potosí, exigiendo a las autoridades controlar el mercado negro, terminar con la especulación, fortalecer la moneda nacional y bajar los precios. De esa manera, el movimiento obrero se apartaba más y más del gobierno socialista, hasta dejarlo en un aislamiento político absoluto. En julio de ese año, al igual que lo ocurrido en mayo de 1936, los gráficos se lanzaron a la huelga y tras ellos todos los demás trabajadores declararon la huelga general. Los trabajadores exigían al Estado respeto a la independencia sindical, que estaba siendo socavada por la sindicalización obligatoria y por toda la reforma política del socialismo de Estado (Barcelli, 1957: 148). Los obreros estaban nuevamente a la vanguardia de las fuerzas antigubernamentales. Quedaba claro que los días del régimen de Toro estaban contados.

3.7. La expropiación de la petrolera Standard Oil

Uno de los acontecimientos más importantes durante el Gobierno de David Toro fue la expropiación de la compañía petrolera norteamericana Standard Oil. Ese acto quedó en la memoria de las generaciones siguientes. El caso tuvo un gran significado político en el país y una amplia repercusión en todo el continente.

Gracias a los esfuerzos de la propaganda marxista y nacionalista de izquierda, la opinión pública boliviana pudo convencerse de que los principales culpables de la Guerra del Chaco fueron las corporaciones petroleras internacionales. Los políticos y los periodistas nacionalistas, en particular Carlos Montenegro y Augusto Céspedes, encontraron a un apropiado culpable de la aventura bélica: la compañía petrolera norteamericana Standard Oil. La versión que explicaba la causa de la guerra mediante el conflicto de intereses de los monopolios petroleros de la Standard Oil, que supuestamente empujaba al Gobierno boliviano a la aventura del Chaco, y la Royal Dutch Shell, que estaba detrás del Gobierno paraguayo, actuó de manera muy convincente y, además, cayó en suelo fértil, pues al ser asimilada desde el comienzo por la opinión pública fue difundida ampliamente tanto por los nacionalistas como por los marxistas. En su propaganda antiboliviana, Paraguay también utilizó activamente esa versión y presentó su participación en la guerra como antiimperialista y libertadora. Algunos dichos de Daniel Salamanca sobre la necesidad de tener un puerto en el río Paraguay para la exportación del petróleo (Mariaca, 1966: 53-54) sirvieron como argumento favorable para la teoría petrolera. Aunque no se investigó ni entonces ni después, y aunque políticos e historiadores no encontraron señal o prueba alguna de las acusaciones contra la Standard Oil, la mayoría de los bolivianos jamás dudó de que la guerra hubiera estallado por el petróleo.

Justamente, en los años del enfrentamiento del Chaco (1932-1935), la producción de crudo en Bolivia –región de Camiri, departamento de Santa Cruz– se hizo importante y ejerció una gran influencia en la vida económica del país. La producción total entre 1931 y 1935 aumentó diez veces, de 2.160 a 25.979 metros cúbicos al año (López, 1955: 87). En condiciones de baja del rendimiento en el sector minero, la extracción de petróleo demostraba resultados extraordinarios y pasaba a representar la esfera de la economía de mayores perspectivas. Muchos economistas y políticos suponían que el fluir de esa riqueza podía desplazar del poder a la oligarquía minera. En aquellos años, existía una euforia petrolera y los sueños de los economistas nacionalistas bolivianos no alcanzaban límite alguno. Se trataba de un optimismo fundado básicamente en la dinámica de los precios mundiales del petróleo que, en la práctica, no fueron muy afectados por la crisis de la década de 1930. El petróleo manaba como el elixir de la vida para la economía.

Los monopolios del estaño, aunque internacionalizados, tenían origen boliviano y participaban activamente en la vida política del país. Los barones del estaño observaban con recelo el amenazante peligro de una nueva fuerza económica y política que asomaba, y que representaba a la Standard Oil. La oligarquía, aunque no recogió la versión de la causa de la guerra postulada por los nacionalistas y los comunistas, eludió pronunciarse en defensa de la petrolera norteamericana. La élite boliviana veía en la compañía norteamericana una suerte de chivo expiatorio ante la derrota en la guerra. A su vez, la Standard Oil actuaba de manera tan desafiante y altanera hacia el Estado boliviano, e infringía tan cínicamente sus leyes, que las sanciones en su contra fueron apoyadas unánimemente por toda la sociedad.

El proceso judicial contra la Standard Oil empezó en el Gobierno de José Luis Tejada Sorzano, con la acusación de falsificar documentos para engañar premeditadamente al Estado boliviano. Se descubrió que en la década de 1920, mientras la compañía pregonaba la inexistencia de extracción, en realidad no solamente sacaba crudo, sino que, además, lo exportaba en secreto y sin pagar un céntimo al fisco boliviano. En 1935, los diputados del Congreso argentino publicaron los documentos según los cuales la Standard Oil habría construido el oleoducto secreto desde Bermejo (Bolivia) hacia Aguas Blancas (Argentina), a través del cual el petróleo llegaba clandestinamente a ese país y pasaba a Paraguay, a manos del enemigo de boliviano, en momentos en que Bolivia tenía que comprarlo en el extranjero. Con ese fraude, se comprobó que la compañía norteamericana había engañado al Estado boliviano una suma de 26,5 millones de bolivianos (Valencia Vega, 1987a: 1762).

Grupos nacionalistas de izquierda, los socialistas –encabezados por la Unión de Defensa del Petróleo, creada por Carlos Montenegro– y el periódico *La Calle* exigieron sanciones en contra de la Standard Oil. *La Calle*, que casi

en cada edición publicaba un artículo de Montenegro, lideró la ofensiva contra esa empresa y demandó su nacionalización inmediata. El petróleo se presentaba como la panacea para acabar con los males y el atraso en todos los ámbitos de la economía nacional. Siguiendo a Montenegro, todos los partidos de izquierda fueron contagiados por el increíble optimismo y la fe absoluta en el rol salvador que el *boom* petrolero tenía para con la economía del país. Así, el Partido del Socialismo de Estado se dirigió al presidente con el siguiente llamado:

> Bolivia reconquista con ese decreto su libertad económica y se coloca entre las primeras potencias petrolíferas del mundo. El Estado, nadie más que el Estado se beneficiará con el petróleo. Nuestra moneda, ya en alza, se NIVELARÁ[240] pronto; las necesidades del pueblo serán eficaz y largamente atendidos, en una palabra Bolivia tendrá lo que está en Bolivia.[241]

La campaña propagandística de los socialistas y los ánimos antiimperialistas predominantes en la sociedad obligaron a Toro a emprender acciones decisivas. El decreto de fecha 10 de julio de 1936 anuló todas las concesiones petrolíferas en las cuales no se realizaba extracción o prospección; así, de las 225, quedaron solamente seis y su territorio se redujo de 13 millones a 380 mil hectáreas (Klein, 1965: 43-44). La opinión pública, sin embargo, exigía medidas más drásticas. En octubre, la prensa y los círculos gubernamentales discutían una nueva ley para la extracción del petróleo. De ahí que el diario izquierdista *La Crónica* reivindicaba la reducción del plazo de las concesiones que el Gobierno entregaba a las compañías privadas y abogaba también por la mayor participación del Estado en el producto extraído (*La Crónica*, 23 de octubre de 1936).

En respuesta a las proposiciones de la izquierda, el Gobierno fue bombardeado con cartas de los economistas y de los empresarios, llamando a reducir la participación del Estado en la extracción de petróleo y alegando dificultades de transporte y de organización de la exportación:

> La regalía baja, en final de cuentas, es más conveniente para el Estado, pues facilita la inversión de capitales y recibiría más el Estado si se explota en grande y recibe una participación moderada que si se explota en pequeña escala y recibe una gran regalía.[242]

240 Énfasis del original.

241 ABNB-PR, 1937, “Llamado de PSE a D. Toro de 18 de marzo de 1937”, caja 13, tomo 152.

242 ABNB-PR, 1936, “Carta de G. Mariaca al Ministro de Minería e Industria Petrolera de 23 de octubre de 1936”, caja 12, tomo 127.

Al finalizar ese año, las intenciones del Gobierno se perfilaron definitivamente. El 21 de diciembre, y de acuerdo al modelo argentino (*El Diario*, 25 de diciembre de 1936), se creó la compañía petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El decreto emitido el 13 de marzo de 1937, sobre la expropiación de la propiedad de la Standard Oil, se constituyó efectivamente en un acto histórico del presidente Toro. El Gobierno de Bolivia, argumentando la infracción de las leyes tributarias del país por esa compañía, el fraude premeditado en los documentos financieros y el contrabando, declaró nulas todas sus concesiones. Se trató de sanciones económicas a una compañía que había cometido delitos económicos. Asimismo, sus propiedades en el territorio boliviano pasaron al Estado y tanto los pozos activos como las refinerías fueron entregados a YPFB. La Standard Oil apeló ante la Corte Suprema de Bolivia, pero el 8 de marzo de 1939 esa apelación le fue negada.

No obstante, en los documentos oficiales y en las intervenciones públicas de los militares-socialistas, nunca se habló acerca del restablecimiento de la soberanía estatal sobre el subsuelo ni en torno al carácter antiimperialista de un acto tan trascendente. A pesar de toda su retórica nacionalista, solamente se trató de restablecer la prioridad de las leyes bolivianas ante un fraude descarado realizado por una compañía privada. Esa argumentación aminoró significativamente las consecuencias negativas de tal decisión audaz respecto al capital extranjero y, más todavía, norteamericano. Estados Unidos condenó el radicalismo exagerado de las acciones del gobierno militar, pero no tomó represalias contra Bolivia.

El Estado boliviano recibió de parte de YPFB una cantidad importante de ingresos para el fisco. A pesar del sabotaje emprendido por la antigua administración de la compañía, la producción de petróleo siguió creciendo, por lo que YPFB era optimista con relación a la extracción del oro negro. En el análisis del potencial productivo de la región de Bermejo (Tarija), efectuado entre abril y mayo de 1937, los especialistas de la compañía concluyeron que existía la posibilidad de producir de 4.000 a 4.500 barriles de petróleo diarios, lo que superaba varias veces las cifras entregadas por la Standard Oil.[243] Los economistas bolivianos veían el futuro con confianza.

Al principio, YFPB se topó con grandes dificultades. Los administradores norteamericanos habían sacado del país todos los documentos técnicos y financieros. Las autoridades bolivianas recién pudieron organizar el trabajo del sector después de pedir ayuda a México. Los mexicanos entregaron a YPFB los ejemplares de los documentos técnicos, contables y administrativos, ayu-

243 ABNB-PR, 1937, "Carta de D. Fionini a D. Toro de 14 de mayo de 1937", caja 13, tomo 152.

dando a desarrollar el marco legal y a elaborar el reglamento interno de la compañía petrolera estatal de Bolivia.[244] El efecto internacional del caso de la Standard Oil puso al país en el curso antiimperialista, al lado de México. El Departamento de Estado empezó a difundir la idea de la participación de políticos nazis en esa acción, insinuando que en el caso de la petrolera norteamericana estaba metida "la mano alemana". El periódico *La Calle* y los socialistas, entre ellos Carlos Montenegro, Augusto Céspedes y Dionisio Fionini, propulsores de la expropiación, fueron declarados agentes de Adolf Hitler y de Benito Mussolini, enemigos de la democracia y de Estados Unidos.

El efecto de la expropiación de la Standard Oil en la historia de Bolivia fue enorme. El Estado boliviano pudo establecer, por primera vez, la prioridad de las leyes y la soberanía del país ante la explotación imperialista y el desprecio de los representantes de una gran potencia hacia una república sudamericana. Ese fue un acto de afirmación de la dignidad nacional y del triunfo de los intereses nacionales. De hecho, Toro abrió la historia del nacionalismo económico boliviano. Después de la expropiación del petróleo, se consideraba lógico continuar con los monopolios mineros. Por ello, el 20 de marzo de 1937, en una carta a Toro, la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia (CSTB) acusó a los monopolios mineros de acciones subversivas encaminadas a romper la alianza de los militares-socialistas con el proletariado; al mismo tiempo, convocaba al Gobierno para aplicar a los barones del estaño los mismos criterios que llevaron a expropiar la Standard Oil.[245]

Cuando el régimen dio un giro tan profundo hacia la derecha, en marzo de 1937, el tema de limitar el poderío de los monopolios, sin hablar de nacionalizarlos –como se planteó en el primer periodo de existencia del socialismo de Estado–, ya ni siquiera aparecía en la agenda del Gobierno. El principio de expropiación quedó fuera de la estrategia de desarrollo postulada por los militares-socialistas, como una anomalía, como un tributo al momento político. Lo cierto es que el radicalismo de Toro nunca iba a alcanzar a los monopolios mineros. Después de firmar el documento de expropiación de la Standard Oil, Toro dictó la disposición con la que a Carlos Aramayo se le entregaban en concesión los riquísimos yacimientos de oro de Tipuani y de Guanay, en el departamento de La Paz (Frontaura, 1974: 81).

Paralelamente a la organización de YPFB, el Estado monopolizó en la compañía nacional distribuidora de petróleo toda la extracción y la distribución de los hidrocarburos. Esa medida cabía en el marco de la estrategia del

244 AHGE-SRE, 1937, "Legación en Bolivia". Publicaciones. III-89-4.

245 ABNB-PR, 1937, "Llamado de la CSTB a D. Toro de 22 de abril de 1937", caja 13, tomo 153.

nacional-reformismo destinada a fortalecer el papel estatal en la economía y su control sobre las riquezas naturales del país. Como es de suponer, la política económica estatista de la Junta fue blanco críticas, no solamente de los conservadores y de los liberales, sino también de las organizaciones obreras, en particular de la Federación Obrera del Trabajo (FOT), que en una carta del 11 de junio del 1937 dirigida al presidente Toro reprobó la monopolización de las ventas del petróleo y defendió los principios del libre comercio.[246] Apoyando la expropiación de la Standard Oil, el movimiento obrero no estaba todavía listo para aceptar el modelo nacional-reformista de desarrollo de la economía boliviana, en el que el intervencionismo estatal se constituía en un elemento importante y con el cual los sindicatos perderían su autonomía.

La expropiación de la petrolera norteamericana fortaleció el Gobierno de Toro. Ante el enemigo externo, todos los antiguos opositores volvieron a unirse alrededor de la Junta. Los políticos, entusiasmados por ese acto nacionalista, particularmente los socialistas, lanzaron llamados extremistas, como la dirección del Partido del Socialismo de Estado que pidió al Gobierno que declarara como "traidores de la Patria a los agentes nombrados o a otros que estuviesen al servicio de los malos manejos de la indicada Compañía".[247] Con la rápida solución del tema de la Standard Oil, Toro pudo superar la crisis política provocada por la declaración de Busch sobre su dimisión. Después de ello, volvió a tener como leal aliado al jefe del Estado Mayor del Ejército y obtuvo la tregua necesaria para crear el partido civil y conseguir el apoyo político al régimen.

El caso de la Standard Oil y la constitución de la primera empresa estatal del sector extractivo fueron la principal conquista del Gobierno de Toro. De hecho, dieron inicio a una nueva política estatal en la esfera de la explotación de los recursos naturales, cuya regulación se convirtió en el tema principal de la vida política en los años siguientes. Esa expropiación fue una especie de hito en la política del nacionalismo boliviano.

3.8. El experimento agrario de los militares-socialistas en el valle de Cliza (Cochabamba)

Durante la Guerra del Chaco, los oficiales y la intelectualidad proveniente de la clase media –constituida en la masa principal de la oficialidad–, en la convivencia cotidiana en el frente pudieron percibir, por primera vez, el carácter multiétnico de Bolivia. Allí se enfrentaron directamente con los pro-

246 ABNB-PR, 1937, "FOT a D. Toro de 11 de junio de 1937", caja 13, tomo 153.

247 ABNB-PR, 1937, "Llamado del PSE al Gobierno de 12 de abril de 1937", caja 13, tomo 152.

blemas múltiples y complicados de la población indígena aymara y quechua. Los campesinos indígenas llamados a las filas sostuvieron en sus hombros todo el peso del conflicto bélico y recibieron la carga de la humillación por la derrota. Al desmovilizarse, tanto los soldados de origen campesino como sus compañeros de armas de las ciudades volvieron a sus casas con una nueva visión de los problemas sociales del país. Eran hombres distintos de aquellos que marcharon al frente de la guerra.

Si bien los militares-socialistas, al llegar al poder, reconocieron que la distribución desigual de las tierras había sido el motivo de las agitaciones populares en todas partes, en los primeros documentos programáticos oficiales no figuraba un plan detallado sobre las reformas en el agro. Solamente se señalaba la necesidad de "creación de un Patronato Nacional que estudie todas la realidad de la clase indígena, especialmente su incorporación a la vida civilizada y parcelación de tierras" (Gallego, 1991: 160).

El gobierno militar creó una comisión para estudiar la reforma agraria y elaborar los actos que prohibieran el pongueaje y el trabajo gratuito de los campesinos (*El Diario*, 1 de octubre de 1936). Los documentos propagandísticos de la Junta sobre el tema agrario decían: "El problema de la redención del campesinado es el problema económico. Encararlo en su aspecto educativo es apenas un factor para su completa liberación. Al indio hay que proporcionarle tierra" (Gallego, 1988: 496). Por otra parte, en diferentes ciudades fueron creadas las Ligas de Defensa del Indio y la prensa, tanto nacionalista como de izquierda, emprendió una amplia campaña exigiendo la reforma agraria. El conocido profesor indigenista Rafael Reyeros vaticinó que de nuevo sucederían las sublevaciones en Sica Sica y en Laja (La Paz), que los campesinos se rebelarían y que ocurrirían represiones y el desahucio de las tierras, aunque para todos estaba clarísimo que el campo había llegado al punto final de sus sufrimientos (*La Crónica*, 16 de febrero de 1937). El reconocimiento del problema de la redistribución de las tierras representó un enorme paso respecto al pasado cuando la solución al problema agrario se pensaba realizar, solamente, mediante la liquidación de la comunidad y la asimilación de los indígenas.

Aunque las temáticas indígenas eran competencia del Ministerio de Educación, Waldo Álvarez trató de abordar el problema agrario partiendo de las tareas del Ministerio de Trabajo, cuyo plan de organización presentado a la Junta subrayaba específicamente el significado especial de la solución a tal problema:

> Es del mayor interés para el Estado socialista que desea regular la economía sobre una base de justicia, eliminando toda explotación, atender de modo señalado e inmediato el problema campesino con mayor razón si su

> descuido podría ocasionar el levantamiento indígena, con el más perfecto derecho.[248]

Como medidas a futuro, el Ministerio de Trabajo proponía organizar un intercambio directo entre las futuras cooperativas sindicales industriales y los campesinos indígenas organizados en los sindicatos agrarios. Además, prometía preparar los proyectos de ley de la socialización de la tierra y de los "experimentos socialistas en el campo".[249] En el marco de la sindicalización de la vida política y social, esos proyectos pudieron haber tenido éxito. De hecho, se trataba de socializar la tierra y de entregar su administración en manos de los sindicatos campesinos. Sin embargo, los militares abandonaron rápidamente la idea por considerarla demasiado comunista.

El movimiento obrero y los socialistas, en todos sus programas y declaraciones, exigían la abolición del pongueaje. El Ministerio de Trabajo preparó y puso a consideración de David Toro el proyecto de ley sobre la abolición del pongueaje.[250] Aunque dicha ley no fue adoptada bajo el Gobierno de Toro, sus cláusulas se hicieron parte de la Constitución de 1938. La práctica demostró el carácter lírico de tales medidas; el Gobierno de Gualberto Villarroel (1943-1946), que se consideraba sucesor de los militares-socialistas, tuvo que abolir el pongueaje por segunda vez en 1945. Esa vergonzosa práctica del trabajo no remunerado y obligatorio para los campesinos desapareció solamente después de la Reforma Agraria de 1953.

Los militares-socialistas apoyaron el movimiento de educación de los indígenas. En 1937, funcionaban 16 escuelas indígenas. El Gobierno de Tejada Sorzano ya había promulgado la ley de la escuela primaria gratuita para ese grupo de población, obligando a las comunidades y a los terratenientes a apoyar conjuntamente tales escuelas; el decreto de fecha 9 de agosto de 1936, ciertamente, obligaba a estos últimos a crear en sus propiedades escuelas de educación primaria. Al año siguiente, el 2 de agosto, día en que se organizó la escuela *ayllu* en Warisata (La Paz), los militares declararon el Día del Indio[251] (Bonifaz, 1953; 509).

---

248 ABNB-PR, 1936, "Plan de la organización del Ministerio del Trabajo de 15 de junio de 1936", caja 12, tomo 127.

249 *Ibid.*

250 AHGE-SRE, 1937, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 8 de enero de 1937", 31-25-3.

251 También un 2 de agosto, en 1953, Víctor Paz Estenssoro firmó el decreto de Reforma Agraria.

La sociedad discutía el tema del movimiento educativo en el área rural. Nadie se atrevía a cuestionar esa noble idea. Junto a ello, los indigenistas radicales hacían notar socialmente que en el centro del problema indígena existía la necesidad de devolver a los pueblos quechua y aymara las tierras comunitarias, de las cuales habían sido despojados en los tiempos de la Colonia y durante la época republicana. El socialista Antonio Campero insistía en que, sin la redistribución de la propiedad agrícola, la educación indígena era una pérdida de tiempo (*Última Hora*, 25 de febrero de 1937). Las mismas ideas fueron expresadas por el periodista Carlos Oropeza, quien sostenía que el objetivo real era eliminar el latifundio, el gamonalismo, para poner fin al feudalismo en el campo. Oropeza decía que "solamente la reforma agraria radical sería el acto más lógico del socialismo de Estado" (*Última Hora*, 2 de febrero de 1937).

Los defensores de los gamonales, como no podían pronunciarse abiertamente en contra de la educación, proponían hipócritamente sus propios planes y proyectos para desarrollar el programa educativo de los indígenas. Los conservadores trataban de convencer al Gobierno de la necesidad de colaborar con los terratenientes en la introducción gradual de la enseñanza escolar rural. Insistían en que las escuelas no debían ser construidas en las aldeas, sino en los pueblos vecinos y que debían tener el carácter de internados. Expresaban su oposición rotunda a los experimentos con las escuelas *ayllu*, donde se enseñaba sobre los principios colectivistas y la ayuda mutua comunitaria (*El Debate*, 7 de febrero de 1937). Los contrarios a esos planes trataban de convencer al Gobierno de que los experimentos indigenistas eran peligrosos y perjudiciales, e insistían en la españolización de la escuela rural.

Los terratenientes recibieron dichos proyectos con recelo. Por tal razón, los profesores experimentales y sus escuelas *ayllu* fueron objeto tanto de ataques verbales como de violencia física. Los terratenientes y la élite mestiza de los pueblos vecinos formaron bandas armadas que, con la vista gorda de la Policía, allanaban las escuelas y las casas de los maestros. Los socialistas propusieron crear un cuerpo policial rural especial, cuya principal tarea fuera proteger las escuelas ante los agresivos oscurantistas. Esa idea fue apoyada por Toro, quien durante su visita a Warisata prometió el apoyo total a la causa de Elizardo Pérez (*La Calle*, 6 de octubre de 1936). En efecto, bajo el régimen de los militares-socialistas, la causa de la ilustración de los indígenas se convirtió en una iniciativa social de la política oficial.

De ahí que en diciembre de 1936 fuera instituida la Dirección General de Educación Campesina e Indígena, a la cabeza de Pérez, líder de la educación indígena y fundador de la escuela de Warisata. Bajo la influencia ideológica de los indigenistas de izquierda, se elaboró y se aprobó el Estatuto de la Educación Campesina. En muchas regiones de Bolivia, con el apoyo

de los campesinos, se crearon las escuelas *ayllu*. En San Andrés de Machaca, cerca de Warisata, por ejemplo, se formó una federación de escuelas *ayllu*, integrada por seis comunidades vecinas.[252]

Un mes antes, en La Paz, tuvo lugar el primer congreso de directores de las escuelas indígenales, organizado con el respaldo del Gobierno. El propio Toro demostró la importancia que los militares asignaban al movimiento indigenista al presentarse al congreso y expresar su apoyo: "Sé, como todos, que éste no es problema que se resuelve con discursos o teorías de falsa entraña socialista. El problema del indio es problema económico, primero, y de educación después" (*La Calle*, 6 de noviembre de 1936). Según Toro, había que convertir al indígena en un agente activo de la producción y del consumo, e integrarlo al mercado. Para ello, se necesitaba educación. El presidente después agregó: "Hay que alfabetizarlo, primero, dedicarlo, luego, a las faenas para las cuales se encuentra preparado. El indio ama su tierra sobre todas las cosas" (*ibid.*).

En su respuesta a ese discurso, uno de los líderes de la educación indígena, Toribio Claure, vinculó la tarea de la educación de los indígenas con "una realización práctica e inmediata del ideario socialista que animaba y pregonaba el Gobierno" (Antezana y Romero, 1973: 53). El congreso reiteró el apoyo mutuo del movimiento de los profesores indigenistas y los militares-socialistas.

Los partidarios de Pérez actuaban en diferentes partes del país. Eduardo Arze Loureiro y Pérez crearon en la zona de Cliza (Cochabamba) una escuela semejante a la de Warisata. Los indigenistas, especialmente Arze Loureiro –que trabajaba en Cochabamba–, jugaron un papel muy importante en la realización de los experimentos agrarios durante el Gobierno de Toro. En las filas del movimiento socialista de Cochabamba, antes que en otras regiones del país, se exigió la promulgación del decreto que prohibía los servicios personales de pongueaje y de mitanaje, así como otras formas de trabajo forzado.[253] En Cochabamba, además, los militares-socialistas emprendieron los primeros intentos de reforma agraria.

En aquella época, los valles en los que está situada la ciudad de Cochabamba estaban poblados principalmente por quechuas y mestizos. Se trataba de la región agraria más desarrollada de Bolivia, aunque con falta de tierras de cultivo y una gran concentración de población campesina. Cochabamba, el "granero de Bolivia", abastecía de alimentos a las ciudades, a los centros mineros de ese departamento y al Altiplano. Asimismo, se autoabastecía casi por completo

252 ABNB-PR, 1937, "Carta de los campesinos a D. Toro de 18 de febrero de 1937", caja 13, tomo 152.

253 ABNB-PR, 1936, "Petición del Partido Socialista de Cochabamba de 28 de noviembre de 1936", caja 13, tomo 153.

con trigo; su población gastaba en la importación de alimentos solamente 6,2 bolivianos per cápita, cuando en Potosí ese gasto era de 87,67 bolivianos y en La Paz de 64,09 bolivianos (República de Bolivia, 1972: 1949). Predominaban por entonces los fundos medianos y pequeños –66.918 predios, cuando en los grandes terrenos agrícolas de los departamentos de La Paz y de Oruro existían 8.507 y 224, respectivamente–, cuyas superficies variaban de cinco a varias decenas de hectáreas, aunque también existían los latifundios (Di Natale, 1953: 68).

El levantamiento de Cliza influyó en la resolución ministerial sobre el arriendo. En ese valle se encontraba la hacienda Santa Clara, que desde 1715 pertenecía al monasterio de Santa Clara. A comienzos de la década de 1930, el monasterio arrendó algunos terrenos a campesinos que juntaron su dinero producto de su trabajo en las minas y en las fábricas de las ciudades. Posteriormente, los monjes arrendaron todo el predio a un tercero con mano de obra incluida. Como era de suponerse, la explotación a los campesinos por el hacendado arrendador fue tan despiadada que, en octubre de 1935, estalló un levantamiento encabezado por los hermanos Delgadillo, excombatientes del Chaco. Los rebeldes estaban vinculados a los vecinos del pueblo de Cliza, donde vivían muchos excombatientes. Ellos contactaron a los campesinos con el abogado Arze Loureiro, conocido marxista y filotrotskista, quien organizó clandestinamente un sindicato de los trabajadores agrícolas, bajo el amparo de una escuela rural fundada por él (Dandler, 1983: 68-69).

Los campesinos de Santa Clara exigían liquidar el subarriendo de los terrenos. Así, en agosto de 1936, viajaron a La Paz en busca de ayuda, donde por intermedio de Arze Loureiro pudieron entrevistarse con el ministro de Trabajo, Waldo Álvarez. Incluso consiguieron la audiencia con el presidente de la República, a quien contaron que habían reunido 80 mil bolivianos –suma enorme para aquellos tiempos–, más que suficientes para comprar las tierras al monasterio. Esa visita causó una tremenda impresión al mandatario, que en su discurso de año nuevo a la nación declaró su firme apoyo al sindicato de los colonos de Santa Clara (*ibid.*: 70-71). Un sindicato parecido fue creado en Huacas, en la región del Altiplano, donde actuó otro entusiasta indigenista, el maestro Toribio Claure.[254]

Como resultado de la actividad de los indigenistas que apoyaron las reivindicaciones campesinas, fue publicada la Resolución Ministerial de 5 de noviembre de 1936, aprobando el arriendo directo de las tierras del monasterio y excluyendo a los intermediarios. El sindicato, utilizando el sistema de producción cooperativo, se adjudicó la responsabilidad técnica y adminis-

254 En septiembre de 1936, en Huacas, Claure organizó una escuela y después un sindicato campesino (*El Diario*, 26 de septiembre de 1936).

trativa ante las autoridades y el propietario. Con la garantía del Gobierno, el sindicato campesino firmó un contrato con el monasterio. De acuerdo con el Decreto de Sindicalización Obligatoria y a partir de la resolución citada, los colonos organizaron la granja sindical agraria de Cliza. Lo específico de aquella disposición consistía en que la tierra no se arrendaba directamente a cada campesino, sino al sindicato, que era el que organizaba la producción. Esa novedad correspondía a los postulados ideológicos y políticos del socialismo de Estado. La creación de la cooperativa de Santa Clara tenía una fuerte orientación antiburguesa y anticapitalista, propia para la primera etapa del socialismo de Estado.

El reglamento interno y las relaciones con el propietario estaban regulados por disposición especial del Ministerio de Trabajo (Antezana y Romero, 1973: 18-22). El mayor alcance de esa disposición gubernamental fue la liquidación del sistema del colonato, es decir, del pongueaje y del mitanaje, trabajos no remunerados por el terrateniente –en este caso, el monasterio y el arrendador intermediario–, lo que significó el fin del atropello a los campesinos por parte de los propietarios de las tierras. En uno de sus discursos, Toro sindicó la reforma de Santa Clara como la base de "toda la política indigenista del Estado socialista" (*La Calle*, 6 de noviembre de 1936). El nuevo sistema de Santa Clara alivió considerablemente la situación de los campesinos y liquidó, de hecho, los resabios precapitalistas de las relaciones con el terrateniente. La izquierda saludó el traspaso de las tierras al sindicato campesino en Santa Clara, considerándolo el comienzo de la socialización del agro. Un medio periodístico impreso interpretó el experimento de Cliza como un modelo de transición hacia la nacionalización de la mayor parte de las tierras (*La Calle*, 27 de octubre de 1937).

La intervención del Ministerio de Trabajo en las relaciones de propiedad en el campo, los experimentos con la socialización de la producción y la creación de las granjas sindicales causaron una tremenda preocupación entre los terratenientes, sobre todo en la influyente sociedad agraria, ya que el experimento de Cliza se llevó a cabo en una región donde no prevalecían las comunidades indígenas, sino las haciendas. Se trataba de un "mal ejemplo" para el agro. Los hacendados de Cochabamba no creyeron las explicaciones del Gobierno, que argumentó que no iría más allá de un experimento y que no sería una política general. Llamaron a una conferencia para protestar contra todo tipo de limitaciones a sus derechos de propietarios sobre las tierras (*La Calle*, 20 de noviembre de 1936). Fue entonces que condenaron con mayor rigor los principios colectivistas de la organización de la "granja sindical", es decir, de la cooperativa agrícola campesina.

Tratando de apacigüar a los terratenientes, que constituían la mayoría de las clases acomodadas de las ciudades, en su mensaje presidencial, Toro

subrayó que el Gobierno no se proponía realizar, de inmediato, la reforma agraria ni inmiscuirse en las relaciones entre los terratenientes y los campesinos. Igualmente, defendiéndose contra las arremetidas reaccionarias de los propietarios de la tierra, prometió limitarse en su política agraria a la reforma de aquella parte de las relaciones con la tierra que estaba, por ley, en la competencia del Estado: podía tratarse solamente del patronato de la propiedad de la Iglesia, en directa relación con el predio de Santa Clara, así como de los terrenos de las municipalidades y del Gobierno central (Toro, 1937: 16).

Desarrollando esas cláusulas, fue aprobado el decreto de 22 de enero de 1937, mediante el cual el Gobierno establecía un nuevo régimen de administración de los fundos pertenecientes a las municipalidades, a los monasterios y a las órdenes religiosas. Todos los propietarios estaban obligados a romper los contratos de arriendo existentes con intermediarios y administradores, y debían arrendar las tierras directamente a los campesinos, quienes regirían sus actividades con sus sindicatos rurales y conforme a las disposiciones del Ministerio de Trabajo (Antezana y Romero, 1973: 30). El régimen que antes se aplicaba solamente a las granjas de Santa Clara y Huacas fue ampliado a todos los casos similares.

Los militares trataban de aliviar la situación de los campesinos, pero sin afectar el régimen agrario existente y sin tocar la propiedad de los terratenientes ni el latifundio. En enero de 1937, el Gobierno declaró que aspiraba a erradicar el pongueaje. Sin embargo, se limitó a una acción propagandística: se enviaron a todas las escuelas encuestas con preguntas sobre "los servicios personales". Tal acción respondía al propósito de tomar una decisión final a partir de los resultados de esa "investigación" (*La Calle*, 26 de enero de 1937). El decreto de 25 de febrero de 1937 prohibía desalojar a los campesinos de las tierras de los hacendados, sin acuerdo previo; se permitía hacerlo solo si los campesinos se negaban a cumplir las faenas agrícolas. En el caso de que el campesino se negara a prestar los así llamados "servicios personales", –pongueaje o mitanaje–, el hacendado no podía exigirle que desocupara su parcela y abandonara el fundo. Además, si el hacendado desahuciaba al campesino, debía pagar una compensación. La supervisión del cumplimiento de ese decreto fue encomendada al Departamento de los Asuntos Indígenas (Bonifaz, 1953: 507-509). De esa manera, aunque indirectamente, el Gobierno pretendía, dejar el pongueaje fuera de la ley. Para disminuir la explotación y la opresión de los campesinos por las élites tradicionales del campo y los habitantes de los pueblos vecinos, el Gobierno emitió el decreto de 2 de mayo de 1937 prohibiendo a los sacerdotes cobrar a los campesinos los registros de matrimonio. Desde ese momento, los matrimonios pasaron a ser registrados solamente por las autoridades civiles y de modo gratuito (*ibid.*: 506-507).

Las iniciativas gubernamentales en el sector agrario causaron una gran discusión en la sociedad. El Ministerio de Educación, entre cuyas competencias tenía las referidas a las cuestiones indígenas, invitó a todas las fuerzas políticas a discutir el tema agrario. Así, cada semana, en radio *Illimani*, hablaban sobre ello los intelectuales de corte socialista e indigenista Enrique Baldivieso, Gabriel Gosálves, Javier Paz Campero, Roberto Prudencio, Rafael Reyeros, Carlos Salinas Aramayo, Rigoberto Villarroel Claure y Augusto Guzmán (*El Diario*, 25 de enero de 1937). El programa radial era escuhado en todas partes; entre tanto, en la prensa se discutían sus pormenores. La polémica instaló el tema de la tierra como una de las prioridades nacionales, en medio de la agenda de las reformas para preparar a la sociedad ante la inminencia del cambio radical en el campo.

El experimento de Cliza y las medidas que le siguieron significaron un gran avance en la política agraria del Estado boliviano. La iniciativa de los militares no solamente alivió la situación de los campesinos de una región determinada, sino que creó un precedente importante para el proceso de liberación de los resabios precapitalistas en el agro; esto es, para la liquidación del pongueaje y del mitanaje, todavía vigentes en cierto tipo de haciendas. La legislación de Toro se constituyó en un paso fundamental hacia la reforma en el campo. La política agraria de los militares-socialistas no salió de los marcos del experimento local, con fondo paternalista y aún conservador.

La política agraria de Toro, en alguna medida, resultaba extravagante, por no realizar siquiera reformas moderadas, dejando sin cambiar el sistema latifundista de explotación y de producción agrícola, sin desplegar esfuerzo alguno para liquidar los resabios precapitalistas. Toro pasó de largo por varias etapas lógicas de la política agraria. Realizó, de hecho, el experimento de socialización de la producción agrícola, pero este fue un episodio local, aislado. En el resto del país, no se planteó llevar adelante ninguna reforma agraria, tan necesaria e inevitable. Así lo entendía la mayor parte de las fuerzas políticas bolivianas. Ahora bien, el enorme mérito de los militares socialistas consistió en pasar las transformaciones agrícolas al plano práctico. El ámbito rural despertaba del largo letargo y la realización de la reforma era solamente cuestión de tiempo.

El periodo gubernamental de Toro se caracterizó por las constantes búsquedas y los experimentos en todas las esferas de la economía y de la política. Es preciso considerar que los militares socialistas llegaron al poder sin un plan de acción determinado. Tampoco la sociedad –su aliada política civil– podía ofrecerles algo elaborado y eficiente. La conciencia acerca de la necesidad de reformas los obligaba a tomar decisiones, aunque a veces no tan bien pensadas, razón por la que en apariencia parecen improvisadas o experimentales.

4

La nueva etapa del socialismo de Estado: el Gobierno de Germán Busch

A mediados de 1937, disminuyó aún más el apoyo social al Gobierno de David Toro. La censura, las detenciones y la deportación de ciudadanos, su terca negativa de volver al régimen constitucional para intensificar las reformas políticas, así como el carácter confuso del programa de transformaciones, junto con las vacilaciones en adoptar las medidas antioligárquicas, privaban del apoyo social al mandatario. El Gobierno terminó por agotar la confianza de los partidos de izquierda y de las organizaciones obreras. La situación económica se hizo desesperante. Los precios subieron un promedio del 200%. Por otra parte, la reducción de las exportaciones mineras influyó negativamente en la situación financiera del país. Si en 1935 la exportación de estaño produjo 7.327.816 de libras esterlinas, en 1936 el metal aportó solamente 4.961.660 (Gallego, 1991: 145-146).

Las carencias financieras se fueron corrigiendo con emisiones de tal volumen que, contrariamente, provocaron la caída del peso boliviano, gestaron la aparición del mercado negro y permitieron el auge especulativo; en definitiva, la desorganización del sistema bancario. Los sindicatos se opusieron a esa política gubernamental con dos huelgas generales realizadas en julio de 1937 (Antezana, 1965: 7). Parecía repetirse la experiencia de mayo de 1936, cuando el presidente José Luis Tejada Sorzano perdió su puesto en el Gobierno. Aumentó, asimismo, la presión de los industriales mineros al Gobierno. Los monopolios del estaño, así como los demás exportadores de materias primas, se opusieron a la aplicación de diversas tasas de cambio. Como los industriales mineros estaban obligados a cambiar los ingresos de sus exportaciones en divisas, a una tasa rebajada, perdían 300 mil libras esterlinas anuales, según sus propios datos.[255] Esa apreciación era, por supuesto, muy exagerada. Pero las razones de fondo de tal reclamo de las compañías iban dirigidas a conseguir el apoyo de la parte conservadora del Ejército, la única fuerza capaz de cambiar la política del presidente Toro o de sacarlo de la presidencia.

A su vez, Toro intuía el peligro que emanaba del generalato vinculado a la rosca, a los barones del estaño. Para contrarrestarlo, maniobraba y co-

255 FRUS, 1937: 263.

queteaba con la vieja cúpula militar, al precio de perder simpatizantes entre los oficiales jóvenes que seguían apoyando las consignas antioligárquicas del socialismo de Estado. En la etapa anterior a la caída de Toro, muchos observadores notaron un descontento en el Ejército, causado por los interminables escándalos de corrupción de altos personeros del régimen.[256] Además, se quedó sin sus principales aliados ideológicos, los socialistas. Esos políticos nacionalistas, sobre todo los de tendencia socialista, al mismo tiempo que reconocían los logros del presidente, particularmente en la expropiación de la Standard Oil y en la sindicalización obligatoria, lo criticaban por sus estrechas relaciones con el magnate Carlos Aramayo y por sus dudas en la ejecución de la reforma política.

Toro se granjeó la enemistad personal de muchos de sus excolaboradores, así como la de influyentes políticos, entre ellos Carlos Montenegro, expulsado de Bolivia bajo el cómodo pretexto de haber participado en la Conferencia de Paz de Buenos Aires. Montenegro se mantenía al tanto de los acontecimientos políticos del país. En sus llamadas y cartas a Germán Busch, instaba al caudillo militar a derrocar definitivamente a Toro, a reavivar los ideales de la revolución llevada a cabo en mayo de 1936 y a fortalecer el régimen del socialismo de Estado (Abecia López, 1986: 9). Busch reaccionaba con benevolencia ante aquellos llamados de parte de los izquierdistas y de los derechistas conservadores. En abril de 1937, prometió a Montenegro un cargo en su futuro Gobierno.

Dos meses después, en junio, se formó alrededor de Busch una alianza política poderosa, conformada por los militares como fuerza motriz y por la Legión de Ex Combatientes (LEC), que postulaba la dimisión de Toro. La oligarquía, por su parte, suponiendo la inocencia política de Busch, planeaba usarlo para derrocar al propio régimen del socialismo de Estado y, luego, pasar el poder a la rosca.

El bien informado encargado en negocios de Estados Unidos en Bolivia, unos días antes del golpe (9 de julio de 1937), escribió lo siguiente al secretario de Estado:

> Me comunicaron sobre el acuerdo que hay entre un grupo de los oficiales jóvenes encabezados por Busch y la Legión de Ex Combatientes sobre el golpe contra la Junta. Se pusieron de acuerdo en entregar el poder a Peñaranda. Es posible que Busch forme el "gabinete provisorio".[257]

En esa misma nota, también comunicaba sobre el apoyo a los conjurados por parte de los monopolios mineros.

---

256 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 8: 66.

257 FRUS, 1937: 249.

Contra Toro confluyeron las fuerzas nacionalistas, que aspiraban a la profundización del proceso de reforma socialista, como también sus adversarios ideológicos, los círculos prooligárquicos y conservadores. Ambas partes apostaban a Busch.

La LEC convocó un mitin numeroso para el 10 de julio de 1937, durante el cual se declaró el liderazgo formal de Busch en la LEC y se lo proclamó el verdadero portador de las ideas de la Revolución de Mayo; fue una seria advertencia al Gobierno. Al mismo tiempo, el movimiento obrero, tal como sucedió en mayo de 1936, se convirtió en la fuerza propulsora del cambio. La huelga de obreros de La Paz adquirió características políticas. Los militares-socialistas podían apoyarse de nuevo en la clase obrera, reclamando los cambios políticos. En esas circunstancias, un grupo de militares –entre los cuales, por su energía, sobresalía Elías Belmonte– instó a Busch, y también a Enrique Peñaranda, a asumir la responsabilidad en el indispensable cambio de Gobierno.

Toro provocó un gran descontento entre los jóvenes oficiales, por su modo de vida aristocrático y bohemio, y por su indiferencia ante los asuntos de Estado que seguían pasando progresivamente a manos de una camarilla de políticos y de funcionarios conservadores. Los ánimos antigubernamentales llegaron a su auge en junio de 1937. Nuevamente –igual que en mayo de 1936–, el movimiento obrero actuó como la fuerza de choque. La huelga de los obreros de la Paz adquirió un carácter político. En cuestión de poder, los militares-socialistas podían apoyarse de nuevo en el movimiento obrero.

El 13 de julio, en el Estado Mayor, tuvo lugar una reunión de los oficiales que ocupaban cargos militares y políticos de la más alta responsabilidad, convocada por el general Peñaranda. En ella, se habló de la conducta de Toro, quien a pesar de las noticias inquietantes provenientes de la línea de separación con las fuerzas paraguayas y la grave situación económica del país, dejó abandonados los asuntos del Estado y, con sus amigos, llevaba varios días de diversión en las termas de Urmiri (La Paz). Se decidió sacar a Toro del Gobierno: arrestarlo en Urmiri y expulsarlo a Arica (Chile). La nueva Junta sería encabezada por Peñaranda (*El Diario*, 14 de julio de 1937).

Sin embargo, los conspiradores debieron corregir su plan de acción. Toro volvió de improviso al Palacio de Gobierno, donde quedó a solas con Peñaranda y Busch. Toro gozaba de una asombrosa capacidad de convencimiento y sabía alcanzar los compromisos necesarios. Supo convencer a sus colaboradores militares sobre su lealtad hacia el Ejército y sobre la necesidad de conservarlo en el cargo presidencial. Para mantener la apariencia de unanimidad en el Ejército, Toro, Busch y Peñaranda acordaron consultar a todas las guarniciones del país sobre su confianza en el Gobierno. Se sabía que ningún oficial de las provincias se pronunciaría en contra del mandato existente sin conocer la posición de la alta jerarquía militar (Belmonte, 1994: 164-175).

Todos los cercanos a Busch y a Peñaranda se rebelaron en contra de esa decisión y los obligaron, bajo amenaza de insubordinación, a exigir a Toro la dimisión. En tales circunstancias, confundido, Peñaranda se negó a aceptar el poder y Busch, entre los gritos de admiración y los aplausos de los oficiales, se vio obligado a encabezar el golpe. De nuevo, Busch y Peñaranda fueron hacia Toro con el voto de la guarnición de la capital: dimitir de la Junta. Toro repitió el intento de revertir las intenciones de sus colegas, pero un grupo, a la cabeza de Belmonte, decidió la situación: los oficiales ocuparon Radio Illimani, la emisora del Gobierno, y anunciaron al país la designación del nuevo jefe de Estado. Irrumpieron luego en el despacho de Toro y pusieron punto final a la historia. Toro quedó bajo arresto domiciliario y Busch ocupó el sillón presidencial (*El Diario*, 14 de julio de 1937).

Busch tenía tan solo 33 años cuando el destino lo llevó al más alto cargo del país. Ahora bien, los cambios en el Palacio presidencial fueron recibidos con entusiasmo por las más amplias capas de la población. Un célebre escritor, contemporáneo y colaborador de Busch, Augusto Céspedes, escribió: "Provenía de la barbarie, fuente espiritual de nuestra América y la Guerra del Chaco le lanzó al río de la Historia, en la parte más fuerte de la corriente, cerca a las espumas y rocas de la cachuela" (1956: 161).

En persona, Busch dictó y entregó a la prensa el texto de renuncia de Toro, que entre otras cosas decía:

> […] Considero, sin embargo, necesaria una consulta al Ejército, para continuar esa obra, siempre que éste me renueve su confianza. Por ello, y a fin de dejar en completa libertad a los señores Jefes y Oficiales, para pronunciarse conforme a su conciencia, he resuelto dimitir el mando y entregar la Presidencia Provisional al Jefe del Estado Mayor General, Tcnl. Germán Busch, por no haber aceptado el cargo el Comandante en Jefe del Ejército, General Enrique Peñaranda. Firmado: David Toro R. (en Díaz Machicao, 1957a: 54).

Ese mismo día, Peñaranda, disconforme con la presión de los oficiales, anunció su renuncia del cargo de comandante en jefe. En su carta, dirigida a Busch, señalaba que con su renuncia no solamente dejaba al nuevo Gobierno con las manos libres, sino también terminaba con las divisiones dentro del Ejército, para que "la institucionalidad del país no sufra y se afiance cada día y porque el Ejército continué su labor en pro de la defensa nacional".[258] El nuevo jefe de Estado aceptó la renuncia de Peñaranda.

258 ABNB-PR, 1937, "Declaración del Gen. [general] Peñaranda a G. Busch de 14 de julio de 1937", caja 13, tomo 166.

El destino del expresidente no fue decidido inmediatamente. Toro se quedó en La Paz, ante la preocupación de los oficiales que obligaron a Busch a derrocar a su compañero mayor. El 15 de julio, Busch fue invitado con todos sus ministros a la comida del Día de la Ciudad, en el Club de La Paz, donde escuchó los vivas en honor al presidente derrotado; indignado, abandonó la reunión de la élite urbana. Belmonte, jefe de la Policía, uno de los participantes más activos de la conspiración en contra de Toro, en venganza por la falta de respeto hacia el presidente Busch, ordenó allanar el lugar. En medio del tiroteo iniciado por Belmonte y sus colaboradores, con el simple propósito de aterrorizar a los presentes, cayó muerto accidentalmente el administrador del club.[259] Al enterarse de los sucesos, Busch ordenó arrestar a todos los sospechosos e inmediatamente expulsar a Toro, rumbo a Chile. Al expresidente le siguieron sus colaboradores de los partidos de izquierda (Céspedes, 1956: 160-161).

En su primer mensaje a la nación, Busch subrayó que había ocupado el puesto presidencial "por la aclamación unánime de mis camaradas del Ejército, con la expresa simpatía general de las masas trabajadoras" (*El Diario*, 15 de julio de 1937). Llamó a su gabinete "provisorio". El nuevo jefe de Estado invitó a participar en el Gobierno a los políticos y a los militares que lo instaron a realizar el golpe. Así, los cargos de importancia en el gabinete fueron ocupados por los nacionalistas radicales Elías Belmonte y César Menacho. El primero, granjeado por su fama de ser el nacionalista más agresivo, fue designado como jefe de la Policía de La Paz.

El gabinete estuvo formalmente encabezado por el ministro de Gobierno, el teniente coronel Félix Tavera, quien fue reemplazado el 19 de julio por el coronel Menacho, conocido por sus ideas profascistas y antidemocráticas. De parte de los civiles, se contó con figuras políticas simbólicas. Una de ellas fue Enrique Baldivieso, quien, al igual que en el primer gobierno militar-socialista de Toro, fue designado a la cartera de Relaciones Exteriores, que tenía gran importancia porque todavía no se había resuelto definitivamente el conflicto con Paraguay; además, era responsable de los temas sobre préstamos externos y relaciones con el Comité del Estaño y también estaba a cargo del transporte del petróleo nacionalizado, debiendo hacer frente a las presiones internacionales organizadas por la Standard Oil. Baldivieso estaba en ese momento de viaje y recibió el cargo sin su consentimiento. Al volver a La Paz, tuvo una conversación con Busch y el cargo le fue entregado a Fabián Vaca Chávez (*El Diario*, 26

259 En sus memorias, Belmonte entregó una versión de los acontecimientos un poco distinta, presentando la reunión del club como una conspiración del Estado Mayor en contra de Busch, aunque reconocía y expresaba su arrepentimiento por asesinar a un inocente, Soria Galvarro, el administrador del club (Belmonte, 1994: 285-289).

y 27 de julio de 1937). Otro puesto clave, el de ministro de Hacienda, lo ocupó Federico Gutiérrez Granier, jefe de la Asociación Minera; este declaró que no preveía grandes cambios en la política económica, pero subrayó que respetaba el derecho y la propiedad privada (*El Diario*, 15 de julio de 1937). Con tales designaciones, Busch demostró su disposición a colaborar con los magnates mineros y con los políticos tradicionales. El cargo del secretario del gabinete, inicialmente prometido a Carlos Montenegro, quedó para Gabriel Gosálvez, líder de la fracción antipersonalista del Partido Republicano Socialista, que tenía la reputación de socialista moderado y de líder de la fracción del partido saavedrista que, a pesar de la oposición intransigente de Bautista Saavedra, colaboraba con los militares-socialistas.

En su discurso inaugural, Busch consiguió repetir los principales postulados del socialismo de Estado y, al mismo tiempo, logró entusiasmar a los partidos tradicionales con sus promesas de reinstaurar en el país un gobierno constitucional (*El Diario*, 15 de julio de 1937). Los partidos de la derecha tradicional expresaron su complacencia con la nueva composición del gabinete. Luego de realizar consultas, esos partidos presentaron una petición de tres puntos: el restablecimiento de la constitución, elecciones libres y política financiera liberal (*El Diario*, 25 de julio de 1937). Los empresarios y los políticos de Cochabamba dirigieron un mensaje al presidente con las mismas demandas; entre los firmantes figuraban dos expresidentes de la República: Eliodoro Villazón y Carlos Blanco Galindo (*El Diario*, 24 de julio de 1937). El 27 de julio, los líderes de los liberales, de los republicanos genuinos y de los saavedristas enviaron a Busch un documento conjunto con un apoyo expreso al Gobierno, a condición de un rápido retorno al régimen constitucional y una pronta convocatoria a elecciones, siguiendo la antigua Carta Magna.

Busch reaccionó casi inmediatamente y les respondió confirmando su deseo de restablecer el régimen constitucional. Al mismo tiempo, subrayó los puntos de divergencia con esos partidos en la manera de entender la situación del país, que eran un obstáculo insuperable para su colaboración con el Gobierno. Escribió que estaba complacido por el deseo de los partidos políticos, pero que esperaba de ellos un paso más: su adhesión a los ideales de justicia social expuestos en el programa mínimo de la revolución del 17 de mayo de 1936 (*El Diario*, 28 de julio de 1937). Busch encargó a Gutiérrez Granier llevar adelante las negociaciones con los líderes de esos tres grupos políticos sobre la formación del gobierno de unidad nacional. En ese momento, pensaba lograr un pacto nacional para la paz social y política en el país, idea que fue apoyada por los partidos tradicionales y a la que luego se adhirieron los partidos y los grupos socialistas progubernamentales: el Partido Revolucionario Socialista de Hugo Ernst, el Partido Obrero

Socialista y la Juventud Socialista, que era un fragmento del antiguo Partido Socialista (*El Diario*, 30 de julio de 1937).

El activismo de los grupos oligárquicos preocupó mucho a los partidarios del socialismo de Estado y del programa proclamado en mayo de 1936. Busch tuvo que tranquilizar a sus partidarios de izquierda, declarando que no estaba previsto el regreso al régimen político de la democracia liberal ni al gobierno oligárquico. El 17 de julio de 1937, Busch consideró necesario aclarar sus posiciones con un manifiesto en el que confirmó su adhesión a los principios del socialismo de Estado y proclamó el inicio de la formación de la nueva Bolivia, instaurando un reino de "armonía de dos factores principales de la vida del pueblo, del trabajo y del capital" (*El Diario*, 20 de julio de 1937). Su promesa era poner fin a la lucha de clases y establecer "la cooperación nacional armónica" (*ibid.*). En su mensaje a los excombatientes, Busch señaló que con la Revolución de Mayo "se permitió reformar los métodos y los torcidos procedimientos políticos, creando nuevas formas de gobierno y orientando al país sobre postulados ideológicos en concordancia con los nuevos tiempos y basado en el mejoramiento social de las clases trabajadoras" (*ibid.*). Habló poco sobre reformas concretas, concentrándose en las ideas de justicia, de armonía y, sobre todo, de renovación moral de la nación. En eso consistía la idea fundamental de la nueva Bolivia. No es de sorprenderse que uno de los primeros decretos de la nueva Junta fuera la prohibición de los juegos de azar, dado que resultaban contrarios tanto a las buenas costumbres como a los principios morales de la sociedad.

La grave situación de la economía nacional, la crisis crónica y el aumento de la tensión social determinaron la urgencia de dedicar la mayor atención a los temas económicos. El mejoramiento concreto de la situación económica de la población, prometido por Busch, requería acciones inmediatas.

4.1. La política económica del Gobierno de Germán Busch

La llegada de Germán Busch al Palacio de Gobierno significó un giro económico de la Junta hacia la derecha. Para su política económica y financiera, confió plenamente en la gente de Simón I. Patiño, que ocupó todos los puestos clave en el gabinete. Las primeras medidas adoptadas por el nuevo ministro de Hacienda, Federico Gutiérrez Granier, para liquidar el déficit presupuestario, fueron reducir el gasto social y terminar con los subsidios a las tiendas de alimentos que ayudaban a frenar el alza de precios, pero, a su vez, eran fuentes de abusos y de especulaciones (*El Diario*, 27 de julio de 1937). Los subsidios significaban un importante apoyo a la población más pobre y a las capas medias empobrecidas durante la crisis. Alcides Arguedas,

célebre escritor y también gran terrateniente, en su diario dejó asentadas sus quejas por la falta de alimentos y la carestía general.[260]

Los gastos en obras públicas se constituyeron en otro punto de crítica de los liberales. El financiamiento regular de la construcción de caminos y los trabajos de ornato urbano dispuestos por el Gobierno eran una mina de oro para los contratistas, muchas veces vinculados con los militares y los altos funcionarios públicos. Arguedas, duro crítico del régimen, escribió indignado una carta a Busch:

> [...] Las fortunas de estos días han surgido como por arte de magia, entre toda clase de gentes, y se ven casos curiosos e inexplicables de civiles y militares, notoriamente pobres ayer y que ganando sueldos corrientes, construyen, sin embargo, casas costosas, compran fincas extensas, ruedan en automóviles de último modelo y derrochan caudales en el juego [...].[261]

Con justicia, los ministros liberales del gabinete se rebelaron por la corrupción y los gastos indiscriminados de los recursos fiscales. El bloque económico del Gobierno quedó bajo el control de las personas más cercanas a Patiño. Sus medidas, correctas desde el punto de vista de la administración racional de la economía, en las condiciones de crisis, arrastraron la situación a nuevas complicaciones: alza de precios y devaluación de la moneda nacional.

El presidente pidió la renuncia de Gutiérrez Granier en noviembre de 1937, a causa de sus medidas económicas drásticas, pero la línea fue mantenida por sus sucesores. Los monopolios mineros, al igual que los exportadores, insistían en la abolición de los tipos diferenciados de cambio. La exigencia de una tasa de cambio única provenía no solamente de los exportadores, sino también de la burguesía comercial de las provincias, que se suponía interesada en apoyar la tasa cambiaria beneficiosa para los importadores. En marzo de 1938, la Cámara de Comercio de Oruro envió un reclamo al Gobierno, señalando que el sistema de tasas de cambio diferenciadas causaba especulaciones desmedidas, corrupción y reexportación de los productos de primera necesidad, llevando, por tanto, a la destrucción del mercado interno de consumo. La burguesía comercial provincial quedó en desventaja respecto a los empresarios paceños, los cuales se aprovechaban de la situación monopolizando todo el sector comercial. Las empresas paceñas eran capaces de reaccionar rápidamente ante los cambios de la coyuntura, a fin de conseguir los permisos de compra de divisas que solo

260 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 7: 178.

261 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 8: 104.

era posible lograr en La Paz.[262] Tal situación estimulaba los ánimos regionalistas en las provincias, socavaba al régimen el apoyo social de la periferia y fortalecía las posiciones de los políticos de oposición. Así lo demostraron las elecciones de 1938, en Oruro.

Habría sido irreal abolir por completo el sistema de tasas de cambio diferenciadas. La tasa única habría socavado los fundamentos de la política social, desatando el alza en los precios de los productos de primera necesidad, como también arruinado inevitablemente el presupuesto y las finanzas estatales. El presupuesto de Bolivia para 1938 incluía un ingreso de 86 millones de bolivianos, por la diferencia entre las tasas de cambio, que significaba el 30% del total (República de Bolivia, 1938a, tomo 1: 82-84). El Gobierno solamente podía proclamar como objetivo una nivelación paulatina de las tasas de cambio, que podría ser real a futuro, con el inicio del auge económico y el correspondiente crecimiento de la producción en los sectores exportadores.

El país llevaba más de dos años al borde del abismo financiero. Las arcas fiscales estaban completamente vacías. Las conversaciones con Estados Unidos sobre un tratado comercial y el pago de la deuda externa, conducidas por Mauricio Hochschild, no dieron resultado. El Gobierno boliviano, entusiasmado con el alza provisional de los precios del estaño en el mercado mundial, no tenía prisa para firmar el acuerdo de compra del mineral boliviano por los norteamericanos, mientras estuvieran vigentes las limitaciones impuestas por el Comité del Estaño.

La situación empeoró en enero de 1938, cuando nuevamente cayó el precio del estaño, causando una depreciación catastrófica de la moneda nacional, que se desvalorizó en el doble, disparando la inflación. El índice general de precios se triplicó entre 1936 y 1939. Se habló de una gran depresión y de la necesidad de tomar medidas extraordinarias. Si bien a principios de aquel enero los exportadores habían conversado con el Gobierno sobre la rebaja del porcentaje de las divisas para la entrega obligatoria, y ya se habían puesto de acuerdo sobre la tasa de cambio única (*El Diario*, 4 y 8 de enero de 1938), la baja posterior de los precios del estaño no dejó a las autoridades otra opción que conservar el viejo esquema financiero: apoyo a la moneda nacional y reducción de la tasa de cambio para los exportadores. También los industriales mineros tuvieron que resignarse, entendiendo que se trataba de la sobrevivencia de la economía y del Estado, de salvarse del caos inevitable.

Con la nueva baja de los precios del estaño, aumentó el peligro de una prolongada depresión; asimismo, se agudizó la lucha entre los monopolios por las cuotas de exportación. Mauricio Hochschild y Carlos Aramayo exi-

262 ABNB-PR, “Llamado de la Cámara de Comercio de Oruro a Germán Busch de 22 de marzo de 1938”, caja 14, tomo 190.

gieron reducir la parte de Patiño y aumentar la propia. La de Patiño representaba el 53,13% de todas las exportaciones de estaño, porque su compañía disponía de mayores capacidades productivas, lo que fundamentaba sus pretensiones monopolistas.[263]

En los años de crisis, Hochschild invirtió grandes sumas en sus minas. Lo hizo considerando que la perspectiva estratégica del desarrollo del sector minero en Bolivia correspondía a los yacimientos con bajo contenido de mineral; invirtió en equipamiento técnico para abaratar los costos de extracción (Gallego, 1992: 115-116). Las innovaciones tecnológicas aumentaron el potencial de sus empresas, en comparación con el periodo anterior a la crisis; por tanto, se exigió cambiar la proporción en la distribución de las cuotas de exportación según la nueva correlación de posibilidades de extracción. La presión de Hochschild al Gobierno apuntaba contra el poderío de Patiño. Además de tener sus propias empresas mineras, Hochschild era un intermediario comercial que también exportaba el producto de las minas pequeñas y medianas. Patiño tuvo que ceder, en parte, a la presión de su "colega" minero. En 1938, la participación de Hochschild aumentó del 19% al 26% y la cuota de Patiño disminuyó en el 4%. Después, bajo la influencia de los ministros patiñistas y también gracias a las simpatías de Busch con Patiño, su cuota de nuevo fue elevada en el 2%, mientras que la de Hochschild se redujo en el 5% (*ibid.*: 115-120).

La disminución de ingresos por la reducción de las exportaciones trajo consigo la falta de divisas para la importación de alimentos y de productos de primera necesidad. El Gobierno recrudeció las medidas que prohibían la importación de los así llamados "artículos de lujo". El Ministerio de Hacienda tuvo que reconocer que no podía entregar a las empresas comerciales las divisas que solicitaban legalmente, pues se había producido el agotamiento total de las reservas (*El Diario*, 9 de febrero de 1938). Los bancos, al llegar a febrero de 1938, reconocieron no contar con divisas en efectivo, lo que causó pánico en el comercio (*El Diario*, 24 de febrero de 1938). El gabinete debió tomar medidas urgentes para estabilizar el mercado, donde reinaban la agitación y la incredulidad. En mayo de ese año, fue creada una comisión especial para distribuir las divisas por intermedio de la Cámara de Comercio. Se devaluó la moneda boliviana y se estableció un nuevo procedimiento de entrega obligatoria de divisas al Estado por parte de los exportadores (*El Diario*, 8 de marzo de 1938).

Las compañías mineras pasaron a ser casi la única fuente de ingreso de las divisas tan necesarias para salvar las finanzas del país. Los nacionalistas propu-

263 ABNB-PR, "Memorando de Patiño Mines a Germán Busch de 27 de abril de 1938r", caja 14, tomo 188.

sieron establecer un régimen de entrega obligatoria de todos los ingresos de divisas al Estado, con una tasa fija rebajada. Tal proposición fue naturalmente resistida por los industriales mineros; el propio Busch no estaba a favor de medidas tan radicales.[264] Luego se llegó a un consenso. El 7 de marzo de 1938, Busch firmó el decreto que establecía una tasa de cambio más cercana a la real y, al mismo tiempo, el decreto sobre la venta obligatoria al Estado, con la tasa oficial –es decir, rebajada– del 45% de todos los ingresos en divisas que las compañías recibían por su exportación. La nueva tasa de cambio era de cien bolivianos por libra esterlina para los exportadores y de 120 bolivianos por libra esterlina para los demás sectores de la economía. En el mercado libre, una libra esterlina era cotizada en 145 bolivianos (*El Diario*, 8 y 10 de marzo de1938). Las empresas pequeñas y medianas debían entregar, con la tasa rebajada, el 50% de sus ingresos y, obligatoriamente, debían vender el resto a los bancos autorizados, con la tasa libre (República de Bolivia, 1938a, tomo 1: 456-460), que seguía siendo menor que la del mercado negro. En condiciones de devaluación permanente de la moneda nacional, esa política afectaba a todos los sectores, incluidos los pequeños y los medianos industriales mineros, cuyos voceros pretendían ser los militares-socialistas.

Inmediatamente después de la promulgación de ese decreto, la Federación de Mineros Medianos expresó su protesta por la política económica del Gobierno. Un memorando firmado por el presidente de la federación señalaba la evidencia de que no hubo un "cálculo exacto para la fijación de obligaciones a la pequeña minería, llegándose a extremos que la imposibilitan continuar sus trabajos".[265] Se incluyeron algunos de los cambios propuestos para el procedimiento de la entrega de divisas. Después, la Junta se vio obligada a rebajar el porcentaje de dicha entrega.[266]

Una fuente de ingresos de divisas en el futuro sería, de acuerdo con los militares-socialistas, el petróleo nacionalizado. Sin embargo, después del derrocamiento de David Toro, la política del Gobierno boliviano respecto a la Standard Oil no sufrió cambios sustanciales. Busch defendía estrictamente los principios de la soberanía del país sobre su subsuelo (*El Diario*, 15 de julio de 1937). En uno de sus mensajes a los excombatientes del Chaco, confirmó la nacionalización del petróleo porque era inaceptable que las riquezas de Bolivia estuvieran en manos del capital extranjero (Mariaca, 1966: 76).

---

264 AHGE-SRE, 1938, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 5 de abril de 1938", 30-3-15.

265 ABNB-PR, 1938, "Memorando de la FAMEM [Federación de Mineros Medianos] de 18 de marzo de 1938", caja 14, tomo 190.

266 ABNB-PR, 1938, "Proyecto del Decreto FAMEM", caja 14, tomo 190.

La Standard Oil no perdía la esperanza de revocar la decisión del Gobierno de Toro. Sus agentes intentaron convencer al embajador de Bolivia en Estados Unidos, Luis Fernando Guachalla, de apoyar la posición de la compañía en su exigencia de revisar su decisión sobre la expropiación. Ante el descontento del Departamento de Estado de Estados Unidos, el embajador insistió en la necesidad de llegar a un acuerdo con la Standard Oil. Su insistencia obligó al ministro Dionisio Fionini a emitir, el 9 de febrero de 1939, un memorando especial que no dejaba duda alguna sobre la firmeza de las autoridades bolivianas en el tema de la expropiación.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aumentó la producción petrolera y abrió la explotación de nuevos yacimientos. A los dos años de aquella expropiación, la producción de petróleo había subido en casi 1,5 veces. Junto con ello, naturalmente, la compañía enfrentó grandes dificultades, como las vinculadas a la explotación misma de los yacimientos o al hecho de encontrar mercados garantizados. Finalmente, el 25 de febrero de 1938, Bolivia logró firmar con Brasil un acuerdo sobre el transporte y la venta de petróleo, con lo cual se solucionaba gran parte del problema de la salida hacia mercados externos (*El Diario*, 6 de marzo de 1938). Ya se dijo que Bolivia pidió ayuda a México. Sin embargo, el principal interesado en recibir el petróleo boliviano resultó ser Alemania.

Los bolivianos llevaron a cabo conversaciones con Alemania por intermedio de Walter Moring, un alemán que vivía en Argentina y representaba desde allí a YPFB, y quien acordó con Berlín la venta de petróleo por 15 millones de dólares, además de la ayuda alemana en la explotación de los yacimientos heredados de la Standard Oil. Los alemanes también se comprometieron a construir un oleoducto de 560 kilómetros desde Bolivia hacia una refinería en Paraguay. Desde allí, se realizaría la exportación por los puertos argentinos hacia Alemania.[267] Los acuerdos logrados por Moring fueron formalizados mediante un decreto especial emitido por Busch.[268] Diversificando sus relaciones económicas, Bolivia aspiraba a mejorar su situación financiera.

La política económica de Busch era, *grosso modo*, una continuación de la de su predecesor. La lógica de aumentar la regulación estatal y la avidez financiera no dejaban al Gobierno ninguna alternativa: debía establecer el control total de los ingresos en divisas y de la exportación del mineral, lo que,

267 RGASPI, fondo 495, 1.22, número 1: 39.

268 Esos acuerdos no tuvieron grandes consecuencias. Los bolivianos pensaban aumentar rápidamente la producción de petróleo para la exportación. Pero, con todo el crecimiento para el año 1940, su extracción permitía satisfacer solamente el 50% de consumo interno.

según los militares-socialistas, representaba la socialización de todo el sector. Evitando el término 'nacionalización', los militares tomaron las medidas de control del Estado sobre la actividad financiera de las compañías exportadoras. Ese esquema de interacción de las autoridades y de las compañías permitía al Estado establecer un control tan riguroso sobre el sector minero que, incluso, la nacionalización resultaba menos efectiva. Mediante el mecanismo de utilizar diferentes tasas de cambio y la entrega obligatoria de divisas, se consiguió un importante instrumento para el manejo del sector. El Estado podía trasladar a otros ámbitos productivos los recursos acumulados desde la minería y, eventualmente, utilizarlos en la industrialización y en la diversificación de la economía.

4.2. La lucha política en el periodo 1937-1938: elecciones a la Constituyente

Con la llegada de Germán Busch al poder, se activaron las fuerzas más radicales de la derecha profascista que gozaban de protección de muchos y destacados personajes del régimen. Al interior del movimiento de los excombatientes se gestó una corriente conservadora nacionalista, cercana por su ideología al franquismo y al nacional-socialismo. En agosto de 1937, en Cochabamba, fue fundado el partido Acción Nacionalista Boliviana, de extrema derecha, encabezado por Puente La Serna, que fue fusionado muy pronto con Falange Socialista Boliviana, a la cabeza del joven político Oscar Unzaga de la Vega. Dicho partido, de camisas negras, fue creado siguiendo el ejemplo de los partidos del mismo nombre en España y en Chile. Su programa repetía muchos postulados del grupo español y declaraba como objetivo hacer una revolución fascista. Desde sus comienzos, despertó la atención y extendió una gran influencia hacia los jóvenes, los estudiantes y las capas medias urbanas. Profesaba, asimismo, los principios corporativistas del socialismo católico conservador. Los socialistas recibieron con preocupación su aparición, aunque algunos grupos izquierdistas, en particular los que representaban al periódico *La Crítica*, expresaron su simpatía porque pasó a ser el competidor ideológico de los socialistas y, por cierto, del régimen del socialismo de Estado.

Roberto Prudencio formó una organización, La Estrella de Hierro, con los excombatientes y los intelectuales ultranacionalistas, de clara inclinación pronazi. Con esa logia simpatizaban muchos de los integrantes del Gobierno, como César Menacho y –desde agosto de 1937– el ministro de Gobierno, Dionisio Fionini, que se consideraba artífice de la expropiación de la Standard Oil. Ambos eran partidarios del establecimiento en Bolivia de un régimen totalitario.[269] Tampoco Busch ocultaba su admiración por la renovación y el

269 RGASPI, fondo 495, 1.22, número 1: 9.

rejuvenecimiento de Alemania y de Italia. El veterano Menacho, que inicialmente ocupó la cartera de ministro de Agricultura y luego la de Gobierno, no escondía sus convicciones antidemocráticas y pronazis. Era un personaje fuerte y temperamental que activamente propagaba sus ideas; supo reunir alrededor de Busch a un grupo de coterráneos con ideas nacional-socialistas, que ejercían gran influencia en la política del Gobierno. El mismo Busch fue atraído por la tesis de la prioridad de los intereses de la nación sobre los intereses del individuo, viendo en el socialismo de Estado un instrumento para la realización de esos principios.

Gabriel Gosálvez, dirigente saavedrista, era un contrapeso a la influencia profascista. Los nacionalistas y los socialistas, la Legión de Ex Combatientes (LEC) e influyentes políticos e ideólogos del socialismo de Estado, como Javier Paz Campero y Vicente Mendoza López, criticaron arduamente a Gosálvez, quien ejercía enorme influencia sobre Busch. Este último se oponía a aquellos que postulaban la instauración de un régimen totalitario de tipo fascista.[270] Apenas asumió el cargo de ministro de Gobierno, Gosálvez cesó los contactos con la misión policial italiana, ante el descontento de los miembros del gabinete de tendencias profascistas. Empero, sus acciones provocaron especial indignación entre aquellos líderes del movimiento de excombatientes que promovían la urgencia de establecer en Bolivia una dictadura totalitaria. Algunos dirigentes de la LEC llegaron a presentar la dimisión a sus cargos, en protesta por la designación de Gosálvez. Busch les dio como respuesta una dura reprimenda personal, señalándoles que no era "cosa de los veteranos, de los que pasaron la escuela de la disciplina y el patriotismo en el Chaco, hacer politiquería"[271] para presionar al Gobierno. A causa de tales intrigas, el Partido Republicano Socialista –partido de Gosálvez– llamó a una conferencia en la cual ratificó su alianza con Busch. La solidez de esa alianza sería probada con la participación obligatoria de Gosálvez en el Gobierno.[272]

A pesar de la influencia de los líderes profascistas de la LEC, presionado por el movimiento obrero de izquierda, el Gobierno tuvo que tomar medidas destinadas a limitar la propaganda radical de derecha. En octubre de 1938, después de las declaraciones decididas de la Confederación de Trabajadores de Bolivia exigiendo la prohibición de la propaganda fascista en el país y el término de

270 AHGE-SRE, 1938, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 31 de enero de 1938", 30-3-15, folios 3-4.

271 ALP-LML, 1938, "Telegrama de Busch a LEC, Oruro, de 20 de enero de 1938", caja 11, número 2.

272 ABNB-PR, 1938, "Carta del Comité Ejecutivo del PRS [Partido Republicano Socialista] a G. Busch de 20 de enero de 1938", caja 14, tomo 190.

las actividades de la "misión policial fascista", Menacho se justificó ante Busch explicándole detalladamente la utilidad de una misión de tal nivel, carente de cualquier objetivo político, pues se trataba exclusivamente de un grupo técnico de ayuda para aplicar la reorganización de la Policía. El ministro, sin embargo, se vio obligado a plantear al jefe de la misión acabar con la campaña propagandística realizada profusamente en la prensa, por los italianos.[273]

En el gabinete, se libraba una lucha permanente por influir en el presidente. La contraposición de las fuerzas profascistas y democráticas era uno de los rasgos característicos del régimen político del socialismo de Estado de esa época. La composición heterogénea de los colaboradores de Busch explica los inesperados virajes de su política. El 31 de julio de 1937, antes de la aprobación de la nueva Carta Magna, Busch puso en vigencia la Constitución de 1880, con las enmiendas de 1920 y las del referéndum de 1931. Se trató de la más democrática de las constituciones bolivianas. El retorno público al régimen democrático y la proclamación de las garantías constitucionales despertaron las esperanzas de la normalización de la vida política. A pesar del restablecimiento de la vieja Constitución, el Gobierno insistía en que la nueva estaría basada en los principios del socialismo de Estado.

Todos los sectores, principalmente los socialistas y las organizaciones de excombatientes, fueron llamados para construir las nuevas estructuras políticas del país. Al mismo tiempo, las autoridades emprendieron medidas que mostraban que no pensaban volver al *statu quo* prerrevolucionario. El Gobierno emitió una resolución sobre la posición del Ejército y de las organizaciones de excombatientes en el sistema político. Según el decreto de fecha 8 de septiembre de 1938, la LEC obtuvo el derecho de enviar a sus delegados, con amplios poderes de control, a los órganos locales del poder estatal (República de Bolivia, 1937a, tomo 3: 231-232).

En la conferencia realizada por la LEC, a finales de octubre de 1937, se aprobó un programa que proclamaba la necesidad de establecer un sistema funcional de la organización del poder estatal, basado en los principios corporativistas, sobre todo a nivel de representaciones. Según la LEC, la Cámara de Diputados debía estar conformada siguiendo el principio de profesión o de función social: cuatro propietarios mineros, tres comerciantes, tres profesionales, cuatro miembros de las universidades, tres maestros, dos periodistas, tres miembros del Ejército, cinco dirigentes de la LEC, cinco sindicalistas obreros, tres propietarios rurales, tres miembros de las organizaciones femeninas y tres dirigentes indígenas. Todos esos diputados serían elegidos de acuerdo con el decreto de sindicalización obligatoria. El Ejército debía estar representado por

273 ABNB-PR, 1937, "Carta de S. B. Menacho a G. Busch de 11 de noviembre de 1937", caja 13, tomo 156.

un diputado del alto mando y por dos de los oficiales; los soldados no votaban. La LEC sería la única representación de los excombatientes, aunque en el país, ciertamente, existían otras organizaciones. Del mismo modo, la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia (CSTB) se convertiría en la única representante de la clase obrera. No quedaba claro quién elegiría a los representantes de los indígenas y del sector femenino, pues se limitó a declarar que ese asunto se determinaría más tarde, tras un minucioso estudio.[274] El 21 de ese mes, el Consejo Nacional de la LEC propuso otorgarse el derecho del control sobre los partidos políticos, los cuales debían actuar en el marco ideológico del socialismo de Estado; asimismo, decía que "además de los representantes nacionales, debían concurrir al Congreso Nacional elementos no políticos, pero técnicamente capacitados para orientar al Poder Legislativo en sus tareas de reconstrucción nacional" (Lorini, 2006: 162).

Simultáneamente, en Oruro, se reunió el congreso obrero de la CSTB, que aprobó resoluciones semejantes a las de la LEC. Declaró, por ejemplo, la necesidad de cambiar la vieja legislación electoral y, además, reclamó una serie de curules en el Parlamento para sus representantes, que serían elegidos por los sindicatos.[275] También propuso regresar al proyecto corporativista del periodo de Toro. Fue una de las pocas propuestas de la CSTB que recibió el apoyo del ministro Menacho, quien respondió que todo dependía de Busch; por tanto, si el presidente lo admitía, la ley electoral sería cambiada.[276]

El 22 de noviembre de 1937, Busch declaró su decisión de realizar elecciones para la Asamblea Constituyente en marzo de 1938, en la cual debía ser elaborada la nueva Constitución Política del Estado, de acuerdo con los principios socialistas y la democracia funcional, y, al mismo tiempo, serían elegidos los nuevos presidente y vicepresidente (Valencia Vega, 1987). A causa de ese anuncio, el Gobierno siguió su avance contra los partidos tradicionales y los políticos prooligárquicos, que eran el reducto de la oposición a los militares-socialistas. Ese mismo mes, inspirado por sus ministros totalitarios y apoyado por los socialistas, Busch expulsó nuevamente del país al activo y peligroso líder paceño Bautista Saavedra, como también al jefe liberal Carlos Calvo. En vísperas de esa acción, en el congreso obrero de Oruro, se había reclamado al Gobierno esas expulsiones, al igual que la de Tomás

274 ALP-LML, 1937, "Proyecto del Decreto de la LEC de 21 de octubre de 1937", caja 11, número 2.

275 ABNB-PR, 1937, "Informe a la Presidencia del Ministerio del Gobierno de 29 de octubre de 1937", caja 13, tomo 158.

276 ABNB-PR, 1937, "Carta de C. B. Menacho a G. Busch de 11 de noviembre de 1937", caja 13, tomo 156.

Manuel Elío, entre otros políticos de la oposición, acusándolos de desestabilizar la situación política y de apoyar las pretensiones de la Standard Oil.[277]

La expulsión de Saavedra, el viejo caudillo, se explicaba no solamente por las necesidades políticas, sino también por sus acciones subversivas. En el Ministerio del Interior y en el Palacio presidencial, permanentemente recibían informaciones confidenciales sobre el contenido de las conversaciones y de los acuerdos de este con conocidos políticos. Saavedra, particularmente, apostaba por el regionalismo, promoviendo desórdenes para provocar la desestabilización política y el derrocamiento del gobierno militar.[278]

Las medidas drásticas y las represiones del Gobierno contra los ciudadanos "honestos" y liberales causaron gran preocupación entre la élite política. Al principio, los partidos tradicionales entraron a la campaña electoral. En enero de 1938, el Partido Republicano Genuino realizó un congreso en el que el punto principal de las discusiones fue el retorno al régimen constitucional. Considerando el rápido cambio de la coyuntura política, en el congreso se entregó al líder del partido, Demetrio Canelas, el derecho a declarar el *boicot* a las elecciones, en caso de violación a las garantías y a las libertades electorales (*El Diario*, 22 de enero de 1938). Al pasar un mes, el partido declaró que no participaría en las elecciones (*El Diario*, 27 de febrero de 1938). En respuesta a su abierta resistencia al Gobierno, Canelas y otros respetables miembros de la sociedad, sus correligionarios del partido de los "genuinos", fueron desterrados a la isla Coati, en el lago Titicaca (La Paz). Esa era una medida que antes se aplicaba a los comunistas, a los anarquistas y a otros elementos subversivos. Tales acciones del Gobierno provocaron el descontento en la alta sociedad.[279] Los liberales y los republicanos declararon su decisión de obstaculizar las elecciones. No obstante, más tarde, algunos de los personajes clave de esos partidos, como el propio Saavedra o Alcides Arguedas, promovieron sus candidaturas; solamente los republicanos genuinos se negaron a participar.

Las represiones contra la "nobleza" de La Paz no podían dejar de causar preocupación en el Ejército, especialmente en las filas de los generales. La oposición militar al régimen se centró en el general Enrique Peñaranda, que gozaba de un gran prestigio entre las tropas, en las organizaciones de excom-

277 ABNB-PR, 1937, "Informe de la administración presidencial al Ministerio del Gobierno de 29 de octubre de 1937", caja 13, tomo 158.

278 ABNB-PR, 1937, "Memoria al Ministerio del Gobierno de 13 de noviembre de 1937", caja 14, tomo 187.

279 AHGE-SRE, 1938, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe del 31 de enero de 1938", 30-3-15.

batientes y con buena parte de los socialistas, que lo consideraban un posible sucesor de Busch, el hombre que realizaría las reformas del socialismo de Estado. Los círculos conservadores prooligárquicos también tenían sus esperanzas puestas en Peñaranda; soñaban con poner fin a los experimentos socialistas. Antes de que la oposición política y el Ejército se agrupasen alrededor del general, Busch decidió despedir a Peñaranda.

El 23 de diciembre de 1937, Peñaranda pidió dejar provisionalmente su cargo, por razones de la salud. A los días, Busch ratificó la dimisión, aconsejando al general cuidarse no solamente durante los tres meses solicitados, sino todo el tiempo que fuera necesario.[280] Los partidarios de Busch acusaron a Peñaranda de intentar un golpe con el propósito de devolver a David Toro el poder.[281] El 17 de enero de 1938, el presidente designó en el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a un derechista, el general Carlos Quintanilla (*El Diario*, 18 de enero de 1937). Con ese nombramiento, puso una bomba de tiempo para un régimen sostenido por el Ejército.

En febrero de 1838, Busch aprobó el estatuto de la LEC, según el cual las decisiones de su líder supremo –es decir él, como presidente del país– no podían ser discutidas por sus miembros. La LEC tuvo que presentar a sus candidatos a cargos políticos al propio presidente, a los ministros y a las autoridades locales; la legión se convertiría luego en una fuente de cuadros de dirigentes del régimen.[282] Esas disposiciones estaban en total contradicción con las promesas oficiales de volver al régimen constitucional y de restablecer las instituciones republicanas previas al golpe militar-socialista.

En la perspectiva electoral, el movimiento obrero tuvo mucha importancia para el Gobierno. Busch continuaba con la política de colaboración estrecha con los sindicatos iniciados por Toro. Al tercer día del golpe contra Toro, el Gobierno confirmó su lealtad al movimiento sindical y reafirmó todas las "conquistas socialistas del proletariado boliviano" (*El Diario*, 15 de julio de 1937). A diferencia de Toro, que creó una central progubernamental, Busch buscó el apoyo de las antiguas federaciones: la Federación Obrera del Trabajo (FOT) y la Federación Obrera Local (FOL). Es preciso reconocer que, aparte del cálculo político, jugó un rol central la permanente desconfianza hacia todo lo que había surgido bajo la presidencia de Toro.

---

280 ABNB-PR, 1937, "Informe al Estado Mayor de 27 de diciembre de 1937", caja 13, tomo 166.

281 AHGE-SRE, 1938, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 31 de enero de 1938", 30-3-15.

282 ALP-LML, 1938, Miscelánea, "Orden de la LEC del 2 de febrero de 1938", caja 11, número 2.

En octubre de 1937, en el Segundo Congreso de la CSTB, boicoteado por la FOL y la FOT, los comunistas Pedro Vaca y Víctor Sanjinés fueron elegidos para dirigir la confederación. El congreso decidió fundar un partido de la clase obrera, creando un comité ejecutivo para ese fin.[283] El Gobierno reaccionó muy negativamente ante esa iniciativa sindicalista. Menacho escribió al presidente que la creación del partido iba en contra de los intereses nacionales:

> […] Ahora bien, otra cosa muy distinta es la labor clasista que se quiere asignar a dicho partido a base de sostener como bandera "el ideal auténticamente socialista" que sustentan las clases trabajadoras; de ser así, casi podría asegurar que dejaríamos al margen un socialismo definitivo como auténticamente boliviano, que defiende y postula tanto la realidad político-social de la nación, como la más avara y permanente defensa de las fronteras patrias, huelga decir que no es la hora precisa aún de ir a la formación de un partido socialista en el país.[284]

Después del congreso obrero, los líderes marxistas fundaron un partido obrero en La Paz, el 27 de noviembre de 1937, cuyo objetivo principal era participar en las elecciones para la Asamblea Constituyente. Ese partido estaba encabezado por Waldo Álvarez, Eduardo Arze Loureiro y José Ordóñez, todos sindicalistas de izquierda. Los militares intentaron neutralizar sus actividades mediante su incorporación al bloque electoral progubernamental, creado en febrero de 1938.

En los sindicatos de corte anarcosindicalista, los militares-socialistas veían a sus aliados estratégicos. Precisamente, bajo el Gobierno de Busch, fueron puestos los cimientos de la alianza entre el nacionalismo y los anarcosindicalistas. Los mineros eran objeto de especial atención de los políticos, por tratarse de un sector de la clase obrera que por sus particularidades geográficas –en cuanto a la ubicación de las empresas del ramo–, así como por su composición y su origen social y racial, se constituía en un actor externo a la sociedad civil tradicional y al sistema político. A diferencia de los reformadores de la década de 1920 y de los silistas, que ignoraban la voz del proletariado minero, prefiriendo la colaboración de los obreros industriales y de los artesanos urbanos, los militares-socialistas –y luego los nacionalistas-revolucionarios– optaron por la alianza estratégica con el proletariado minero, que les garantizó un fuerte apoyo social.

Lo esencial de la nueva política obrera consistía en la designación de los líderes sindicales a cargos públicos, especialmente en las regiones de mayor

---

283 ABNB-PR, 1937, "Informe a la Presidencia del Ministro del Gobierno del 29 de octubre de 1937", caja 13, tomo 158.

284 ABNB-PR, 1937, "Carta de C. Menacho a G. Busch del 11 de noviembre de 1937", caja 13, tomo 156.

concentración del proletariado minero. De hecho, los sindicatos recibían el poder de los centros mineros. Así, desde el poder local, el Estado podía controlar el movimiento obrero. Las autoridades locales, utilizando mecanismos administrativos de presión hacia los propietarios, tenían más éxito en lograr soluciones a los conflictos con los trabajadores. Con todo el prejuicio y la animadversión hacia los marxistas y los comunistas, Busch no rechazó de plano la colaboración con los líderes rojos de la CSTB. Uno de los dirigentes de la confederación, Pedro Vaca, llegó a recibir el cargo de subprefecto de Puerto Acosta (La Paz), a pesar de las fuertes protestas de los habitantes del lugar, conservadores en su mayoría.[285] La autoridad local, encabezada por funcionarios obreros –entre ellos Ricardo Perales en Oruro o Enrique Loza en Pulacayo (Potosí)–, conseguía resolver las cuestiones sociales, incluidos los posibles conflictos laborales (Rodríguez Ostria, 1991: 103). En los centros mineros, los cargos públicos eran entregados a los líderes sindicales o izquierdistas, a fin de garantizar la paz social en las regiones más problemáticas. Ese sistema de administración era más confiable y eficiente que la política de estatización de los sindicatos, manejada por el Gobierno de Toro, ya que esta última requería serios esfuerzos políticos y organizativos, y demandaba mucho más tiempo.

La fidelidad de Busch a la alianza estratégica con el movimiento obrero, combinada con las represiones contra los políticos tradicionales, así como el firme deseo de los militares de traer a la Constituyente una mayoría izquierdista capaz de elaborar una constitución socialista, provocaron los intentos desesperados de los círculos de derecha para derrocar el régimen. Les parecía que el único impedimento para el restablecimiento del gobierno oligárquico lo representaba, personalmente, el presidente Busch. Por ello, intentaron eliminarlo físicamente.

El 4 de febrero de 1938, por la tarde, Busch fue al cine. Durante la proyección de la película, intempestivamente, la cinta fue interrumpida; se había cortado la electricidad en el centro de la ciudad. Saliendo de la sala, Busch se dirigió al Palacio de Gobierno caminando por las calles oscuras. Habitualmente tenía pocos acompañantes. Era un verdadero oficial gallardo que rechazaba utilizar guardaespaldas. Cerca de su destino, unos desconocidos abrieron fuego contra él. Los disparos alejaron a sus acompañantes y Busch quedó solo. Sin embargo, el mandatario no se amilanó y enfrentó a sus atacantes desconocidos disparándoles con su arma personal. El presidente salió vencedor en el tiroteo. Los que atentaron contra su vida desaparecieron en la noche y Busch llegó a su residencia caminando tranquilamente.[286]

285 ABNB-PR, 1937, "Informe del Ministerio del Gobierno de 19 de noviembre de 1937", caja 13, tomo 158.

286 AHGE-SRE, 1938, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 14 de febrero de 1938", 30-3-15.

La Policía nunca logró averiguar quién había atacado al presidente. Busch, sospechando que los conspiradores eran cercanos a Toro, consideró que ya era hora de castigar a los partidarios de su antecesor. Su ira recayó sobre Javier Paz Campero, que no solo fue ministro en el Gobierno de Toro, sino también el hombre de confianza y amigo personal de Aramayo. A él y a otros políticos cercanos a Toro, o vinculados con Aramayo, los enviaron a la isla Coati.[287] Un tiempo después, más tranquilo, Busch ordenó liberar a todos los sospechosos del atentado, arguyendo que su culpabilidad no había sido probada.

A pesar de esos acontecimientos, Busch ratificó su intención de realizar las elecciones el 13 de marzo de 1938, cuando aportaría un elemento nuevo a las elecciones: la participación de los sindicatos junto con los partidos de la LEC. Esperaba que los partidarios del socialismo de Estado obtuvieran la mayoría en la Asamblea Constituyente. Sin embargo, la debilidad y la escasa cantidad de militantes impedían que los partidos y los grupos socialistas existentes, o las organizaciones de excombatientes, pudieran convertirse en una fuerza pro Gobierno única.

Desde la caída de Toro, reinó la confusión entre los partidos y los grupos socialistas. El Partido Socialista de Estado, partido oficial del régimen, perdió el apoyo de las autoridades. El Partido Revolucionario Socialista, encabezado por Hugo Ernst, prefecto de La Paz, y por Antonio Campero Arce, que agrupaba en sus filas a la mayoría de los socialistas, llamó a todas las fuerzas de izquierda a declarar una tregua política.[288] Otro grupo formó el Partido Obrero del Socialismo de Estado, a la cabeza del viejo líder del Partido Socialista, José Sanginés, que representaba el ala obrerista de los socialistas. Aparte de esas agrupaciones, continuaba existiendo el antiguo Partido Socialista.[289] Las divisiones permanentes y las múltiples deserciones paralizaron a los partidos de izquierda, los cuales volverían a unirse en su adhesión al régimen.

El ministro de Gobierno, César Menacho, se propuso crear una formación política oficial que uniera a los dispersos y numerosos grupos y partidos de izquierda nacionalista y socialista antiliberal; es decir, a todos los que apoyaban el régimen del socialismo de Estado. Se inició una labor febril para organizar los efímeros bloques y frentes, encabezados por personajes con pocas

---

287 *Ibid.*

288 ABNB-PR, 1937, "Carta de PSR [Partido Socialista Revolucionario] a G. Busch de 28 de julio de 1937", caja 13, tomo 157.

289 ABNB-PR, 1937, "Llamado de POSE [Partido Obrero del Socialismo de Estado] a Busch de 8 de noviembre de 1937", caja 13, tomo 157.

probabilidades de ser electos. El Ministerio de Gobierno y las autoridades locales hicieron una especie de purga en las comisiones electorales, expulsando de ellas a todos los adversarios del régimen vigente, sobre todo de los partidos tradicionales, sustituyéndolos por los representantes de la LEC.[290] En febrero de 1938, Busch dio a la LEC el derecho de preelegir a los candidatos para miembros de las comisiones electorales y el poder de controlar las listas de los electores,[291] lo que evidentemente creaba condiciones desiguales en la lucha política con otros partidos. Sin embargo, la LEC no logró aprovechar esos privilegios, pues era todavía una organización muy amorfa y débil como para poder ser la base del bloque progubernamental.

La campaña electoral también estaba totalmente controlada por el Ministerio de Gobierno. Menacho sostuvo conversaciones exitosas con los líderes políticos, valiéndose de promesas, amenazas y todo tipo de presión para formar un partido único antioligárquico. En una reunión efectuada el 18 de febrero de 1938 con los líderes de los partidos de izquierda, se declaró la creación del Frente Único Socialista, compuesto por la LEC, la CSTB –con su filial del Partido Obrero–, el comunista Frente Popular de Potosí, la Federación Sindical de Ferroviarios, el Partido Obrero del Socialismo de Estado y la fracción antipersonalista del Partido Republicano Socialista, encabezada por Gabriel Gosálvez.[292]

Busch aprobó las resoluciones de esa reunión y los nombres de sus líderes.[293] El Comité Ejecutivo del Frente Único Socialista estaba integrado por cuatro personas de la LEC, cuatro del Partido Obrero y de la CSTB, cuatro de la Federación Ferroviaria, cuatro del Partido Republicano Socialista, cuatro del Partido Socialista de Estado y dos del Partido Socialista Independiente, de Víctor Paz Estenssoro. El socialista Campero Arce fue elegido como el líder de la agrupación.[294] La participación de los grupos de izquierda en el Frente Único Socialista estaba condicionada a que se llevase adelante una política antiimperialista y antifascista, así como a la exclusión de los partidos tradicionales

290 ABNB-PR, 1937, "Nota de la presidencia al Ministerio del Gobierno de 28 de septiembre de 1937", caja 13, tomo 158.

291 ALP-LML, 1938, "Orden de G. Busch en la LEC de 28 de febrero de 1938", caja 11, número 2.

292 ABNB-PR, 1938, "Carta de la FUS [Frente Único Socialista] a Busch del 19 de febrero de 1938r", caja 14, tomo 190.

293 ABNB-PR, 1938, "Carta de Busch al FUS del 23 de febrero de 1938", caja 14, tomo 190.

294 ABNB-PR, 1938, "Carta del FUS a Busch del 12 de febrero de 1938", caja 14, tomo 190.

del proceso político. Sus integrantes se pusieron de acuerdo para repartirse proporcionalmente los asientos ganados en la Asamblea Constituyente futura.

El congreso del Frente Único Socialista y la lista de candidatos a dicha Asamblea fueron realizados bajo el rígido control del Ministerio de Gobierno y de Menacho, en persona. Los políticos de izquierda no incorporados en la agrupación política se convirtieron en el blanco principal del ministerio, que consideraba que los partidos tradicionales no representaban ninguna amenaza en las elecciones. El ministerio envió a las autoridades locales recomendaciones concretas sobre cómo neutralizar a los antifrentistas de izquierda.[295] Casi toda la prensa estaba puesta al servicio de la propaganda de los candidatos del Frente Único Socialista, atacando al mismo tiempo a la izquierda antinacional. No obstante, muy pronto, en protesta contra el control minucioso del Gobierno y contra la distribución "injusta" de lugares en la lista electoral, según Paz Campero y el socialista José Tamayo, el Partido Socialista de Estado abandonó el bloque en desacuerdo con el programa y la política del Frente Único Socialista, que se desvió de los objetivos revolucionarios de mayo de 1936.[296]

En las listas del Frente Único Socialista, la mayoría de los candidatos representaba a los sindicalistas de la generación de posguerra; de aquellos se puede citar a Fernando Capriles, Rigoberto Villarroel Claure, Waldo Álvarez y los socialistas Alberto Zelada, Víctor Paz Estenssoro, Augusto Guzmán y Héctor Ormachea Zalles, que antes no estuvieron en las filas del Partido Socialista de Estado. Había bastantes candidatos del Partido Republicano Socialista, es el caso de Félix Eguino Zabala y Alfredo Mollinedo, que candidateaban por La Paz. Los excombatientes, los sindicalistas y los republicanos-socialistas gozaban de una influencia predominante, arrinconando a sus aliados hacia los distritos menos ventajosos. En esa lista estaban incluidas muchas personas de izquierda, marxistas y comunistas –inclusive en los distritos de mayor fuerza electoral–, como Ricardo Anaya y Wálter Guevara Arze, en Cochabamba; Alfredo Arratia y Pedro Vaca, en Potosí; Alberto Echazú, en Sucre; y Waldo Álvarez, en La Paz.[297] Carlos Medinaceli, intelectual y filósofo de izquierda, candidateaba para senador en representación del Frente Popular de Potosí.

---

295 ABNB-PR, 1938, "Informe de la dirección general de la Policía al Ministerio de Gobierno de 9 de marzo de 1938", caja 14, tomo 198.

296 AHGE-SRE, 1938, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 5 de abril de 1938", 30-3-15.

297 ABNB-PR, 1938, "Carta del FUS a Busch de 12 de febrero de 1938", caja 14, tomo 190.

El 13 de marzo de 1938, se efectuaron las elecciones para la Convención Constituyente. A pesar de los temores de fraude, la votación se llevó adelante correctamente y con todo el procedimiento democrático, como lo reconocieron los diplomáticos extranjeros.[298] Poco después de los comicios, la situación política se complicó por el intento emprendido por Toro para retornar al poder. Así, el 26 de marzo, Toro regresó en secreto a Bolivia y sorpresivamente apareció en el Oriente del país, en el Chaco, donde las tropas todavía se encontraban apostadas en la línea divisoria con los paraguayos. En Yacuiba (Tarija), el expresidente llamó a los uniformados a levantarse contra Busch, proclamando los ideales de la Revolución de Mayo y el socialismo de Estado (*La Noche*, 4 de abril de 1938). Aunque en La Paz circulaban los rumores sobre los levantamientos militares a favor de Toro en Sucre, Oruro y Cochabamba, en realidad no pasó nada en esas ciudades. La asonada de Toro inquietó seriamente a Busch, por lo que tomó medidas preventivas extraordinarias en La Paz y en las provincias. En Cochabamba, varios oficiales fueron arrestados y enviados a lugares alejados.[299] Mayor inquietud provocó en las autoridades la noticia de que la oligarquía y Aramayo, en primer lugar, habían financiado la compra de las armas para los rebeldes.[300]

Finalmente, la rebelión fue liquidada. El exmandatario pudo escapar. En La Paz, arrestaron y desterraron a la isla Coati a sus partidarios. El proceso posterior demostró que los golpistas efectuaron un activo trabajo propagandístico entre los estudiantes y los obreros.[301] Fernando Campero Álvarez y Federico Gutiérrez Granier, grandes personajes e ideólogos del socialismo de Estado del periodo de Toro, se refugiaron en embajadas extranjeras.[302] El exministro Javier Paz Campero se entregó voluntariamente, sin esperar su arresto. La oposición fue totalmente aplastada por la represión. Como resultado de la aventura de Toro, apareció el decreto de 27 de marzo de 1938 que prohibía las actividades comunista y anarquista (República de Bolivia, 1938a, tomo 1: 666-667). Toro fue declarado

298 AHGE-SRE, 1938, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 5 de abril de 1938", 30-3-15.

299 ABNB-PR, 1938, "Memo del Estado Mayor a G. Busch de 31 de marzo de 1938", caja 14, tomo 187, número 359.

300 ABNB-PR, 1938, "Memo del Estado Mayor a G. Busch de 31 de marzo de 1938", caja 14, tomo 187, número 364.

301 ABNB-PR, 1937, "Memo de E. Guzmán al MININT [Ministerio del Interior] de 13 de noviembre de1937", caja 13, tomo 158, número 404.

302 AHGE-SRE, 1938, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 18 de mayo de 1938", 30-3-15.

comunista y enemigo de la humanidad. Las posiciones políticas de Busch se fortalecieron.

El primer periodo gubernamental de Busch, hasta la convocatoria a la Constituyente, se destacó por la búsqueda del mandatario de una política propia. Los intentos para reunir a su alrededor a los grupos en pugna –juntar lo que no era posible unir– parecían de molde bonapartista. Su objetivo era neutralizar las diversas fuerzas políticas y sociales creando contrapesos mutuos, y lograr, por todos los medios, la unidad política de la nación, superando los intereses de clase y las divergencias políticas. Busch soñaba con crear una sociedad consolidada que reuniera a todas las clases y a los partidos para la construcción de una nueva Bolivia.

Resultaron insuperables, empero, las contradicciones surgidas entre las élites tradicionales y el régimen, que en esencia eran la reacción antiliberal ante la crisis del Estado oligárquico. En ese momento histórico crucial, se planteó a los círculos gobernantes una alternativa: liquidar paulatinamente el régimen militar-socialista y volver a la vida política "normal" –es decir, al *statu quo* de antes de la guerra– o reformar la sociedad desmantelando inevitablemente el sistema político. Busch estaba decidido a seguir el segundo camino, emprendiendo las consecuentes reformas, pero, a la vez, se encontraba dominado por las ilusiones románticas de la unión de todos los bolivianos en el trabajo común: desde los oligarcas hasta el pueblo llano. En lugar del renacimiento nacional, esa utopía destruyó finalmente al propio régimen

4.3. La Convención Constituyente (mayo-octubre de 1938)

Las elecciones a la Constituyente dejaron ver una nueva correlación de fuerzas políticas en Bolivia. El triunfo de los grupos y de los políticos antiliberales demostró la evolución de la sociedad boliviana hacia la izquierda. Como anota la investigadora Rossana Barragán:

> La Convención marcó, también, y sin lugar a dudas, ciertos quiebres: representantes de tendencias denominadas "socialistas" y tal vez de manera más precisa no liberales, representantes de obreros, representantes de los jóvenes, representantes de diferentes sectores económicos urbanos, representantes de Santa Cruz y de Beni (2006: 90).

Gente nueva, ideas nuevas y perspectivas de desarrollo nuevas se vieron reflejadas en los resultados de aquellas elecciones, como también el debut de nuevos personajes. Víctor Paz Estenssoro, futuro presidente del país y líder de nacionalismo revolucionario, fue elegido por Tarija. Por Cochabamba surgió Augusto Céspedes, un brillante escritor y activo político de orienta-

ción nacionalista. El indigenista de izquierda Carlos Medinaceli y los comunistas Alfredo Arratia y Fernando Siñani representaban al Frente Popular de Potosí. Los candidatos del Frente Único Socialista triunfaron en la mayoría de los distritos (*El Diario*, 15 de marzo de 1938). Los resultados de las elecciones parecían constatar la derrota de los partidos tradicionales, como también de sus métodos de lucha política y de movilización social.

El desenlace de las elecciones desanimó un poco a la gente de la capital. La Paz negó su apoyo a los candidatos oficialistas. Aunque a la Convención fue elegido el exministro de Trabajo y líder sindical Waldo Álvarez, por la cantidad de votos solamente alcanzó el tercer lugar.[303] Los primeros sitios fueron ocupados por los sacerdotes Tomás Chávez Lobatón y Luis Alberto Tapia; ninguno estaba vinculado a los partidos tradicionales y tampoco apoyaba abiertamente el régimen del socialismo de Estado. Ambos fueron elegidos a pesar de la reputación de ser comunistas. Chávez Lobatón estaba relacionado con el movimiento obrero, mantenía vínculos con la Federación Obrera del Trabajo y era muy popular en los barrios obreros de La Paz;[304] obtuvo 3.280 votos. Tapia, excombatiente y exprisionero del Chaco, simpatizante del régimen socialista, aunque no militaba en el Frente Único Socialista, fue apoyado por la Legión de Ex Combatientes (LEC); obtuvo 2.060 votos. Por Bautista Saavedra votaron 115 personas y nadie votó por el conocido escritor liberal Alcides Arguedas. El *boicot* a las elecciones, declarado por los partidos tradicionales, impidió la participación de casi el 50% de los electores (*El Diario*, 17 de marzo de 1938). Los comicios demostraron que, tras dos años de régimen militar-socialista, la clase media apoyaba mayoritariamente la evolución política hacia la izquierda.

De los 80 diputados, 24 representaban a los sindicatos: seis provenían de la Federación Ferroviaria y el resto de la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia. Al lado de los sindicalistas estaban los políticos de izquierda y los marxistas del grupo de izquierda de Cochabamba y del Frente Popular de Potosí. El ala izquierda de la Convención se agrupó en el sector obrero, al que también se integraron algunos personajes gobiernistas que hablaban en nombre del socialismo de Estado, como Adolfo Careaga y Renato Riverín. A ese grupo se sumaron los conocidos dirigentes sindicales Waldo Álvarez, Fernando Siñani y Rigoberto Villaroel Claure, y entre los intelectuales estaban el marxista Alfredo Arratia, el indigenista Carlos Medinaceli y el cura Chávez Lovatón, entre otros. Después

303 AHGE-SRE, 1938, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 5 de abril de 1938", 30-3-15.

304 ABNB-PR, 1936, "Informe del Ministerio del Trabajo de 23 de octubre de 1936r", caja 12, tomo 127.

se les unió Wálter Guevara Arze, también futuro presidente de Bolivia e ideólogo del nacionalismo-revolucionario. A su vez, tres diputados del sector obrero pasaron pronto a la fracción de los republicanos socialistas. Asimismo, el trotskista José Antonio Camacho, representante del Partido Obrero Revolucionario, declaró estar en oposición a la mayoría izquierdista, por considerarla reformista y pequeño-burguesa (Álvarez, 1986: 171). El líder de los socialistas, Enrique Baldivieso, igualmente fue elegido como diputado. Los socialistas elegidos a la Convención, agrupados alrededor de Céspedes y de Paz Estenssoro, se unieron al Partido Socialista Independiente, que actuaba en alianza con el sector obrero.

A pesar de ser poco numerosa, en la Convención jugó un importante papel el ala nacionalista de izquierda, en la que predominaban los nacional-reformistas de diferente tipo. Los socialistas y el sector obrero actuaban juntos casi en todos los temas. Los diputados del Frente Único Socialista, que se consideraban representantes del partido de turno, tuvieron desde el comienzo el rol dirigente de la mayoría nacionalista de izquierda; esperaban encontrar el soporte político en el gabinete. El Frente Único Socialista pidió a Busch que coordinara sus decisiones para las designaciones de los cargos en el Gobierno y en el servicio diplomático, que en su opinión correspondía a los profesionales socialistas.[305]

La mayoría socialista y nacionalista se enfrentaba al bloque de centroderecha, representada por la fracción antipersonalista del Partido Republicano Socialista. El núcleo derechista de la Convención lo integraban los diputados de la región del Oriente del país (Santa Cruz y Beni). Sin embargo, entre los diputados del bloque oriental no había unidad de opiniones; una parte simpatizaba con los nacionalistas e incluso se declaró nacional-socialista, actuando en alianza con la mayoría nacionalista de izquierda.[306] Entre los diputados de ese bloque figuraban Adolfo Román, Luis Barbery, Aquilino Ibáñez y Saucedo Barbery (Céspedes, 1956: 166).

El bloque oriental, en su mayoría, estaba integrado por las *creaturas* del poderoso clan Suárez, dueño de Santa Cruz. Los miembros eran coterráneos de Busch y utilizaban su "orientalismo" para presionarlo. El presidente rechazó ingresar al bloque e incluso ordenó prohibirlo, por considerar que la existencia de una organización de posición regionalista amenazaba la unidad del país. Más tarde, en febrero de 1939, los orientalistas crearon el

305 ABNB-PR, 1938, "Carta del Comité Ejecutivo de la FUS a G. Busch de 19 de abril de 1938", caja 14, tomo 190.

306 Uno de los líderes del bloque oriental, Julio Salmón, enarbolaba las tesis federalistas en su programa. El 1 de mayo de 1937, publicó en *El Tiempo* un artículo elogiando la rebelión de Andrés Ibáñez, de tinte federalista e igualitario-socialista (Sanabria, 1977: 44).

Partido Oriental, en un congreso realizado en la ciudad de Cobija (Pando). Busch se convirtió en su adversario irreconciliable, hasta lograr su cierre (*La Calle*, 15 de febrero de 1939). En la Convención, los diputados orientales formaron el núcleo del ala derechista. Además del Partido Oriental, también eran asambleístas otros diputados de derecha, como el patiñista Eduardo Fajardo o el saavedrista Gustavo Auzza. Su influencia en la discusión general no era considerable.

La inauguración de la Convención, el 26 mayo de 1938, culminó con un escándalo. Los diputados del sector obrero se negaron a jurar fidelidad al pueblo y al país ante el crucifijo y la Biblia, declarando que su actividad era guiada solamente por los ideales de la justicia social; sí juraron fidelidad a la revolución social, con el puño en alto. Carlos Medinaceli pronunció un juramento extravagante: “por Cristo, que es el más grande socialista” (Gallego, 1992: 35). El deseo de los diputados de izquierda de demostrar la ruptura simbólica con el viejo régimen dejó impactada a la alta sociedad y provocó las protestas de la prensa conservadora. Las organizaciones católicas de señoras y de niños realizaron manifestaciones y marchas condenando el “aquelarre ateísta y comunista” de la Constituyente.[307]

Ese primer día, Renato Riverín fue elegido presidente de la Convención. Riverín había participado en los Gobiernos de Saavedra y de Siles, y apareció convertido en un ardiente socialista y propagandista del socialismo de Estado. En su discurso grandilocuente, anunció el inicio de la construcción del parlamentarismo socialista y repitió los lugares comunes de la doctrina del socialismo de Estado: colaboración de clases, solidaridad y justicia social. Asimismo, anunció la llegada de una nueva época para el desarrollo constitucional de Bolivia: “de ahí la transformación de las viejas normas individualistas en las otras de solidaridad y cooperación social” (República de Bolivia, 1938b, tomo 1: 81). Además de la confusión, el alboroto y las declaraciones patéticas de los políticos de todos los colores, los diputados escucharon el mensaje de Busch en el que señalaba que era el momento indicado, después de las elecciones, para posibilitar la realización del programa socialista de la Revolución de Mayo.

El primer punto de la agenda, después de las cuestiones de procedimiento, era la elección constitucional del presidente y del vicepresidente del país. Un mes antes, el 28 de abril de 1938, la LEC postuló la candidatura de Busch a la presidencia. Casi la totalidad de los partidos apoyó esa propuesta. La lucha se concentró en la candidatura a vicepresidente. En vísperas de la inauguración de la Convención, el 14 de mayo de 1938, se reunió el Comité Central del Partido Socialista de Estado, que aprobó un llamado a

307 AHGE-SRE, 1938, “Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 14 de junio de 1938”, 30-3-15.

Busch indicando la existencia de un grupo de diputados, principalmente de la región oriental, que deseaban postular para vicepresidente la candidatura de Hugo Montes. Por eso, el Partido Socialista de Estado postuló a Enrique Baldivieso y llamó a todos los diputados socialistas a apoyarlo y a impedir el triunfo del candidato conservador.[308]

En la elección del candidato a presidente no hubo discusión, pues existía un consenso general sobre el éxito del futuro mandato de Busch; también influyó el carácter propio del poder militar, al igual que la manera en la que se había convertido en jefe de Estado. Respecto a la figura del vicepresidente, se consideraba que podría convertirse en un símbolo determinante para la evolución del régimen. Busch era aceptado incluso por sus enemigos como un mal inevitable y la lucha frontal contra él se sabía inútil y peligrosa. Busch, a su vez, asignaba demasiada poca importancia al cargo y a la capacidad del vicepresidente de influir en el proceso de la toma de decisiones. La LEC propuso a Baldivieso y Busch apoyó la candidatura. La elección de la LEC causó descontento en la cúpula militar, pues no deseaba volver a los experimentos del periodo de David Toro, como tampoco quería resucitar los ya olvidados planes de reconstrucción corporativista de la sociedad, cuyo promotor principal era, justamente, Baldivieso, el líder de los socialistas. El generalato insistía en la candidatura del embajador de Bolivia en Estados Unidos, Luis Fernando Guachalla, considerándolo un reformador moderado.

El más activo adversario de Baldivieso era el ministro César Menacho.[309] Ambos compartían una persistente antipatía, agravada por las divergencias políticas en una amplia gama de problemas. De igual modo que Baldivieso, Menacho se manifestaba por las reformas antiliberales y por la creación de un Estado corporativista, pero en su versión más conservadora, similar a la franquista, donde aplastado completamente el movimiento obrero y prohibida la actividad comunista, los militares se adjudicarían el papel de árbitros de la sociedad. Baldivieso y sus partidarios tampoco simpatizaban con el liberalismo ni con la democracia; sin embargo, consideraban que el futuro régimen político debía basarse en la sindicalización total, la estatización de los sindicatos, el fortalecimiento del rol económico del Estado y el aplastamiento de la oligarquía.

Busch resolvió esas disputas a favor de Baldivieso y los militares bajaron sus candidaturas. Montes, sobrino del expresidente liberal, perdidas las esperanzas de ser elegido, luego de comprender que le sería imposible

308 ABNB-PR, 1938, "Carta de PSE [Partido Socialista de Estado] a Busch de 16 de mayo de 1938", caja 14, tomo 188.

309 AHGE-SRE, 1938, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 18 de mayo de 1938", 30-3-15.

competir con éxito contra los candidatos oficialistas, retiró su candidatura. Busch y Baldivieso fueron los únicos candidatos y las elecciones se realizaron sin oponentes.

Tanto los opositores de derecha como los partidarios de izquierda de Busch reconocían que el curso del futuro presidente constitucional sería determinado no por el programa revolucionario de mayo de 1936 o por la nueva constitución, sino por la influencia de sus colaboradores más cercanos. Busch observaba con indiferencia la lucha de los diversos grupos políticos y sus intentos de presionarlo. Seguía indiferente frente a las intrigas, manteniéndose fiel a los acuerdos previos.

El segundo día de funcionamiento (27 de mayo de 1938), la Convención puso en vigencia provisional la Constitución de 1880, hasta la elaboración de una nueva Ley Fundamental. A continuación, Augusto Céspedes, en un discurso brillante, presentó las candidaturas de Busch y de Baldivieso. Como era de esperarse, casi por unanimidad –tres abstenciones fueron registradas–, los diputados eligieron a Busch como presidente constitucional de Bolivia; Baldivieso fue elegido como vicepresidente. Al día siguiente, ambos asumieron el mando en una reunión especial. En su discurso inaugural, Busch caracterizó así los objetivos del Gobierno:

> [...] La misión que me encomendáis en horas excepcionalmente difíciles y graves, no puede ser cumplida por un solo hombre ni por una agrupación o partido, sino por toda la Nación, cuyo concurso pido y reclamo en este momento solemne, para que, deponiendo las divergencias que la dividan, cualquiera que ellas sean, me coopere en esta trascendental etapa de la vida nacional [...] me propongo realizar la magna tarea de reconstruir la nacionalidad [...]. Paz política y justicia social inspiradas en un solo bolivianismo acrisolado, es lo que ante todo y, sobre todo, necesita la Patria [...]. Hacer desaparecer los antagonismos profesionales y de clase es consolidar la nacionalidad. Soldados y ciudadanos capitalistas y obreros son servidores solidarios y mancomunados de la Nación (República de Bolivia, 1938b, tomo 1: 83).

Para Busch, la tarea del nuevo Gobierno era lograr la unidad nacional superando todas las contradicciones sociales y de clase, subordinando los intereses de cada individuo a un solo objetivo: el restablecimiento de la grandeza del país.

La sesión terminó con un gran discurso programático de Baldivieso. En nombre del gobierno socialista, trazó las líneas y los objetivos del trabajo de la Convención. El líder de los socialistas subrayó la diferencia fundamental de la actual composición: “Es la primera vez que en el Parlamento de Bolivia se presenta un selecto bloque de representantes auténticos de la clase traba-

jadora. Han dejado la fábrica y la mina para compartir las labores gubernamentales" (*ibid*.: 85).

Baldivieso declaró como tarea prioritaria de los diputados solucionar los asuntos sociales. Destacó que en el programa del socialismo de Estado y de la Revolución de Mayo (1936) estaban señaladas las tareas para realizar profundas reformas socioeconómicas. Como problemas candentes, sin cuya solución no era posible el progreso económico, social y cultural de la nación, mencionó la cuestión agraria, la industrialización y la defensa del capital nacional ante el imperialismo. La solución de esos problemas fundamentales permitiría crear las bases de la construcción de una sociedad de justicia y de armonía social. En sus palabras:

> [Nuestra realidad] es única: país inmenso con población pequeña, riquísimas regiones de variada producción, sin vinculación alguna con los centros de consumo; régimen agrario primitivo, en el que coexisten el latifundio improductivo, con la comunidad indígena de matiz colectivista; en las ciudades un artesanado de tipo medieval; un industrialismo incipiente; pequeña minería desarrollándose penosamente ante la gran empresa de capital extranjero; un capitalismo nacional débil y raquítico; y sobre todo este panorama, la constante amenaza del imperialismo económico (*ibid*.: 85-86).

Partiendo de ese análisis de la realidad y de los objetivos señalados, de acuerdo con Baldivieso, los diputados debían emprender la reforma constitucional "sin tomar modelos prestados ni recetas político-sociales, ni dogmas que desfiguren la realidad viviente" (*ibid*.). Todas las fuerzas políticas, empezando por los nacionalistas, los socialistas y los líderes obreros y sindicales, estaban invitadas a participar en la construcción de una nueva Bolivia.

Ratificadas sus facultades constitucionales, Busch envió a su gabinete al retiro. El ministro de Gobierno, Menacho, que se pronunció muy acaloradamente contra Baldivieso y, por tanto, contra la voluntad del presidente, perdió su cargo. Su lugar fue ocupado por el capitán Elías Belmonte, que integraba la logia secreta Razón de Patria. Como la mayoría de los miembros de la logia, Belmonte se consideraba partidario de la ideología nacional-socialista. Los ejemplos a seguir eran Alemania e Italia. Belmonte, habiendo sido en 1937 jefe de Policía de La Paz, propuso crear organismos policiales siguiendo el modelo de la Alemania nazi. Con su participación, se acordó enviar a Italia a 134 personas para realizar estudios militares y policiales.[310] Fue una delegación numerosa considerando la cantidad total del cuerpo policial.

---

310 AHGE-SRE, 1938, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 5 de abril de 1938", 30-3-15.

Belmonte y sus correligionarios se llamaban simplemente socialistas. Analizando la ideología del nacionalismo boliviano de entonces, es muy difícil trazar una línea divisoria entre el nazismo y las ideas seudosocialistas. Sus postulados principales se manifestaban por la prevalencia de los intereses de la nación ante el capitalismo liberal y hacia la obtención de la armonía social mediante la superación de la lucha de clases. Con la izquierda marxista coincidían en considerar la alianza de la oligarquía local y el imperialismo norteamericano como el obstáculo para el avance y el desarrollo del país. Los éxitos del Tercer Reich y de la Italia de Benito Mussolini hicieron atractivas las ideas nazis y los métodos políticos del fascismo. Ante los ojos de los socialistas, la similitud principal entre los regímenes fascista y comunista era la negación de los valores de la democracia liberal y del libre mercado. En su opinión, la democracia liberal en Bolivia terminó desacreditándose por completo ante la imposibilidad de gobernar eficientemente el país durante el periodo catastrófico de la crisis mundial y la guerra con Paraguay.

Si para muchos nacionalistas de esa época la afición al fascismo era superficial y un tributo a la moda, no sucedía así para Belmonte, quien había asimilado con mucha simpatía esas ideas ya en la década de 1920. Como muchos oficiales bolivianos, fue influido por los asesores alemanes que trabajaban en Bolivia; volvemos a mencionar a Ernst Rehm –el creador de los grupos de asalto de Hitler–, a quien Belmonte conoció personalmente, y de quien nació su admiración por el nacional-socialismo. Sin embargo, el embajador de México, Alfonso Rozenzweig Díaz, lo consideraba un hombre con ideología marxista y lo caracterizaba como un socialista, aunque simpatizante de los regímenes fascistas.[311] En realidad, Belmonte profesaba ideas cercanas a las de los socialistas de izquierda y a los comunistas, especialmente en el área económica. El diputado derechista de la Constituyente, Julio Salmón, conversando con Arguedas, le contó que Belmonte estaba decidido a cumplir con su programa mínimo de dos puntos básicos: nacionalización de la minería y mejoramiento de la situación de la clase obrera.[312] Belmonte fue una de las figuras más destacadas y contradictorias del Gobierno de Busch.[313] En su actividad se reflejaban las contradicciones internas del régimen de socialismo de Estado: la tendencia

311 AHGE-SRE, 1938, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 14 de junio de 1938, 30-3-15.

312 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 8: 200.

313 El nombre de Elías Belmonte estuvo vinculado por la Inteligencia Británica, en 1942, con la fabricación del "caso de la conspiración nazi" en Bolivia, supuestamente encabezado por Belmonte, utilizado por Gran Bretaña y por Estados Unidos para presionar al Gobierno de Bolivia, que se vio obligado a romper relaciones con los países del eje (Blasier, 1976: 46-47).

hacia el totalitarismo, con un cierto tinte antiburgués y antisistémico que se combinaba con las medidas prácticas moderadas, con el miedo a una alianza más estrecha con el movimiento obrero y los partidos de la izquierda radical.

No menos escandaloso fue el nombramiento del joven socialista Carlos Salinas Aramayo al cargo de prefecto de La Paz. En manos de ese político temperamental, muy amigo de Busch, se concentraron todas las fuerzas represivas de la capital. La designación de Belmonte y de Salinas Aramayo fue interpretada por los círculos conservadores de la capital como la antesala de la catástrofe. Además, el presidente designó nuevos ministros, ambos socialistas, Vicente Leyton al Ministerio del Comercio y Bernardo Navajas Trigo al Ministerio de Educación. Uno de los gestores de la expropiación de la Standard Oil, Dionisio Fionini, ocupó el cargo clave del Ministerio de Minería e Industria Petrolera.

Según las apariencias, Busch contaba con un potente equipo preparado para aplicar las medidas necesarias y reformar la sociedad. Sin embargo, queriendo crear en el gabinete una alianza de todas las fuerzas políticas, en su modelo sui géneris de unidad nacional, Busch puso, al contrario, los cargos decisivos del sector económico en manos de los representantes de los círculos derechistas oligárquicos vinculados principalmente con Simón I. Patiño. Así, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue encomendado a una persona de confianza del así llamado "rey del estaño", Eduardo Diez de Medina, caracterizado incluso por el liberal Arguedas como "el cínico trapalón, el servidor incondicional de todos los Gobiernos desde hace más de 30 años".[314] El conservador Alberto Palacios ocupó la cartera de ministro de Hacienda. El diputado de derecha, uno de los líderes del Partido Oriental, Julio Salmón, ocupó el Ministerio de Agricultura. El cargo de ministro de Economía recayó en Gabriel Gosálvez, antes secretario de Gobierno.

Las ideas de Gosálvez representaban una suerte de ejemplo práctico de convivencia de los polos opuestos en el propio Gobierno, lo que permitía el funcionamiento en el gabinete de un nacionalista radical como Belmonte al lado de un conservador como Palacios.

El nuevo gabinete debía abocarse a la reforma constitucional, para lo cual había sido convocada la Convención. En esa ocasión, no tuvieron éxito los intentos del ala derecha de centrar la discusión solamente en algunas de las modificaciones a la Constitución de 1880. La mayoría se manifestaba decididamente por la elaboración de una Ley Fundamental totalmente nueva. Los diputados estudiaron los proyectos de Ley Fundamental, incluidos aquellos en los que se proclamaba el establecimiento de la democracia socialista. Se propuso establecer un parlamento de cámara única y revisar radicalmente algunas doctrinas del derecho, incluidas aquellas relativas a la propiedad

314 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 8: 191.

privada (República de Bolivia, 1938b, tomo 1: 332-340). En opinión de los diputados radicales del sector obrero, la nueva Constitución debía ser puramente socialista. Según Rigoberto Villarroel Claure:

> La Convención de 1938 es revolucionaria, como consecuencia necesaria de la evolución constante social y política, que ha venido operándose en el espíritu de la nación, y la convicción de los ciudadanos […]. En la nueva Constitución predominará la doctrina universal socialista, que es una convicción profundamente arraigada en la conciencia del pueblo obrero en todas partes del mundo (*ibid.*: 129).

El proyecto de un parlamento unicamaral fue rechazado junto a otras propuestas catalogadas de extremistas. Los proyectos más radicales emanaron del ala izquierdista de la Constituyente, en primer lugar de los diputados del sector obrero, Félix Eguino Zabala, Eduardo Rodríguez Vásquez, Rigoberto Villarroel Claure y Wálter Guevara Arze. La confrontación entre el sector obrero, postulando nuevos principios, y los diputados de derecha, defendiendo desesperadamente la Constitución de 1880, demostró la superioridad numérica, intelectual y, lo más importante, psicológica y moral de la nueva generación surgida de la Guerra del Chaco, que no deseaba volver al viejo sistema que era, según su convicción, la causa principal de la derrota. Aunque los izquierdistas llevaban la voz cantante, la ausencia de unidad de criterio en la mayor parte de los temas constitucionales debilitaba su potencial reformista.

La mayoría de los proyectos más extremos fueron rechazados por las autoridades y recibieron el apoyo de una minoría de los diputados. El Gobierno presentó un proyecto que rescataba la parte de la Constitución de 1880 relativa a los derechos y a las libertades ciudadanas, principios que eran reconocidos prácticamente por todos los integrantes de la Asamblea, tanto de derecha como de izquierda. En cambio, estalló la discusión acalorada sobre las prerrogativas del Estado y los derechos de propiedad. En esos temas, el proyecto de Ley Fundamental se apoyaba en los principios del constitucionalismo social, que consistía en limitar los derechos a la propiedad privada frente a los intereses del bien común. Después de una larga discusión, ganó el punto de vista de la mayoría moderada, la cual respaldó el proyecto del Gobierno. Sus fundamentos fueron formulados por Julián Montellano, diputado del Partido Republicano Socialista, el principal informante de los temas constitucionales:

> […] que se mantenga la Constitución del 80 [1880], con reformas que deben referirse principalmente a los siguientes puntos: 1º Régimen económico y de la

propiedad, 2º Régimen del trabajo o sea la cuestión social y 3º Régimen campesino y agrario. Con esto, habremos cumplido nuestra obra histórica (República de Bolivia, 1938b, tomo 2: 398).

El constitucionalismo social consistía en entregar al Estado la responsabilidad social del bienestar del individuo. Villarroel Claure, diputado de izquierda, citando a los teóricos austriacos del Estado social, Otto Bauer y Max Adler, dijo: "la democracia funcional corrige la democracia parlamentaria" (*ibid*.: 428). Ese concepto suponía una nueva fórmula para garantizar el derecho a la propiedad, tesis que fue formulada por Paz Estenssoro y, principalmente, por Guevara Arze, y según la cual se garantizaba el derecho a la propiedad y su inviolabilidad, siempre y cuando cumpliera su función social; en otras palabras, cuando sirviera no solamente a los intereses individuales o de clases determinadas, sino a toda la sociedad. La propiedad ya no era considerada, entonces, como un derecho natural, existente independientemente del Estado o de los intereses de la nación; se convertía en un derecho que el ciudadano recibía del Estado y que, a su vez, se garantizaba solamente en la medida en que la propiedad cumpliera su función social". Así explicó Paz Estenssoro el sentido del nuevo concepto:

> Estamos reconociendo el derecho de propiedad, proclamando el principio de la inviolabilidad; no se persigue absolutamente el propósito de hacer desaparecer la propiedad privada, no vamos a colectivizarla, pero sí la condicionamos a que llene una función social, es decir, que el dueño de una riqueza realice necesariamente actos que él solo puede efectuar, beneficiándose a sí mismo, pero beneficiando también a la colectividad (*ibid*.: 525).

El proyecto señalaba que la propiedad es un derecho fundamental y un deber que emana de su función social. Paz Estenssoro insistió en cambiar ese texto incluyendo el término 'inviolabilidad' de la propiedad. Su posición fue apoyada por la mayoría y se convirtió en la versión definitiva del Artículo 17: "La propiedad es inviolable, siempre que llene una función social; la expropiación podrá imponerse por causa de utilidad pública, calificada conforme a ley y previa indemnización justa" (República de Bolivia, 1938b, tomo 3: 1448). En contra del derecho del Estado a la expropiación se pronunciaron no solamente los conservadores, sino también los socialistas moderados, entre ellos los diputados Humberto Montaño, Facundo Flores Jiménez, José Antonio Zegada, José Chávez Suárez y José Serrate.

Contra esa nueva concepción del derecho de propiedad se rebelaron todos los partidos tradicionales, en primer lugar, los liberales. En sus artículos publicados en *El Diario*, Arguedas comparaba la limitación de la

propiedad con un atentado contra el principio mismo de la vida, tal como la conocemos.[315] Fuera del Parlamento, la prensa liberal realizó una campaña en contra tales novedades constitucionales. En su nota editorial del 26 de julio de 1938, el periódico *El Diario* sostenía que el concepto de 'función social de la propiedad' tal vez era muy útil desde el punto de vista del socialismo, pero contradecía a las bases nacionales y a los intereses el país. Políticos de tendencia derechista, como Pablo Guillén, divulgaron opiniones que sembraban el pánico, entre ellas que la reforma constitucional significaba la abolición y la socialización de la propiedad (*El Diario*, 27 de julio de 1938).

A pesar de la resistencia de los partidos derechistas y de los periódicos liberales, la Convención adoptó formulaciones revolucionarias sobre el derecho de propiedad. De hecho, fue la piedra angular de la formación del nuevo edificio de la sociedad boliviana: se crearon las premisas legales y constitucionales para la reforma radical de la economía y de las relaciones sociales, donde el Estado jugaba el papel decisivo. La reforma conducía al fortalecimiento paulatino del Estado para garantizar la seguridad social, la salud y la educación.

De acuerdo con la consigna programática, ampliamente difundida, sobre un Estado de justicia social, el Proyecto de Constitución declaraba el derecho al trabajo, la responsabilidad del Gobierno por el sueldo mínimo y el nivel de vida digno de la población. El artículo 106 establecía: "El régimen económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar para todos los habitantes una existencia digna del ser humano" (República de Bolivia, 1938b, tomo 3: 1470). Según los reformadores, esos párrafos constitucionales creaban la base de una economía social en la que el papel dirigente era estatal y no privado. Guevara Arze formuló así el rol del Estado en el desarrollo económico: "Allí donde faltan capitales e iniciativas, el Estado debe intervenir, dejando a un lado la doctrina liberal que lo convierte en simple cuidador de la fortuna privada y en contemplador de sus iniciativas" (República de Bolivia, 1938b, tomo 2: 264).

La nueva Constitución, en su artículo 108, consagró del siguiente modo el principio del dirigismo y el intervencionismo estatal en la economía: "El Estado podrá regular, mediante ley, el ejercicio del comercio y de la industria, cuando así lo requieran, con carácter imperioso, la seguridad o necesidad públicas. […] Esta intervención se ejercerá en forma de control, de estímulo o de gestión directa" (República de Bolivia, 1938b, tomo 3: 1471). El estatismo económico puesto en la base de la Constitución fue el componente central del programa nacionalista reformista.

315 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 8: 207.

El artículo 107 estipulaba el derecho exclusivo del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales (*ibid*.: 1470). Dada la importancia del tema del petróleo en ese periodo, la Constitución incluía un artículo especial sobre la extracción de petróleo: "La exportación del petróleo de propiedad fiscal o particular, sólo se hará por intermedio del Estado o de una entidad que lo represente" (*ibid*.: 1471). Paz Estenssoro fue más allá de esa declaración sobre los derechos de los recursos naturales, señalando que de esa cláusula emanaba el derecho del Estado a ejercer el monopolio sobre todas las exportaciones, lo que debía convertirse en la base financiera de acumulación de recursos para la diversificación y la industrialización de la economía boliviana. En su opinión, tal medida se constituía en el único medio para realizar las transformaciones radicales de la estructura socioeconómica de Bolivia (Klein, 1971: 285).

Los autores de esa nueva concepción del régimen económico proponían encontrar la fórmula que les permitiera eludir los defectos y los errores del modelo de desarrollo liberal-capitalista de la economía. Pensaban que la panacea para impedir los efectos de la crisis y de la inestabilidad del mercado capitalista sería por medio de un Estado superpotente, construido sobre los marcos de determinada estructura política y, por tanto, capaz de abarcar la economía en su totalidad. La lógica de sus reformas los llevaba hacia el capitalismo de Estado. Los proyectos reformistas de los militares-socialistas de la década de 1930 fueron mucho más radicales que los de sus seguidores nacionalistas-revolucionarios de las dos décadas siguientes (1940 y 1950). De hecho, los socialistas proponían el monopolio estatal de toda actividad económica, lo cual iba totalmente en contra de la propiedad privada, fundamento de la economía de mercado, socavando las bases del capitalismo. Más adelante, ese programa radical se moderó, por lo que desaparecieron los planes del monopolio estatal sobre sectores completos de la economía nacional. Los reformadores bolivianos consideraban las ideas del constitucionalismo social como los peldaños de ascenso hacia un Estado corporativo y una economía estatizada.

Por una aplastante mayoría de votos, el 30 de octubre de 1938, la Asamblea Constituyente aprobó la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia. Las fórmulas fundamentales adoptadas representaron las bases de las futuras reformas socioeconómicas. Las ideas del constitucionalismo social, que incluían la limitación del derecho a la propiedad privada y suponían la responsabilidad social del Estado por el bienestar de sus ciudadanos, se convirtieron en el centro de la reforma futura. Inevitablemente, surgieron temas como la reforma agraria, las restricciones del gran capital oligárquico y las garantías sociales para los trabajadores. La Constitución, aunque no era un programa de tales reformas, suponía, imperativamente, su futura realización.

Como antecedente, lo ocurrido en Cliza (Cochabamba) en el Gobierno de David Toro quedó como experimento local.[316] Los militares-socialistas no se atrevían a ser los iniciadores de un problema tan complicado como la propiedad de la tierra. Busch no quiso tomar la iniciativa y no quedaba claro lo que proponía el Gobierno para el agro. Antes de la inauguración de la Asamblea Constituyente, ya se habían discutido activamente en el país los temas agrario e indígena. Gran actividad al respecto fue la de los maestros indigenistas agrupados en un movimiento cuyo centro era la escuela *ayllu*, creada por Elizardo Pérez en Warisata (La Paz). Asimismo, en octubre de 1937, en La Paz, fue celebrado el Congreso Indigenista que aprobó los Estatutos de las Escuelas Rurales. Dicho Congreso llamó al Gobierno a prestar especial atención no solo al estado de la educación campesina indígena, sino al conjunto de los problemas agrarios. A ese llamado, también respondieron los líderes del movimiento indigenista de México[317] y de las organizaciones de la izquierda boliviana.

La posición de los maestros indigenistas obtuvo la respuesta de muchos miembros del Gobierno, incluidos algunos militares. La temática de la población indígena era de competencia del Ministerio de Educación, desde el 17 de mayo de 1937 a la cabeza del coronel Alfredo Peñaranda, quien mantuvo su cargo con posterioridad al derrocamiento de Toro. Antes de integrarse al Gobierno, Peñaranda fue lugarteniente de Busch en el Estado Mayor. Al convertirse en ministro, y gozar de la confianza del presidente, prestó su apoyo a Warisata y a todo el movimiento indigenista. En su condición de hombre de ideas progresistas, respaldó a los organizadores del Congreso Indigenista. También estableció buenas relaciones con la embajada mexicana, que en el marco de la preparación de esa reunión construyó el Pabellón de México en Warisata.[318] Más todavía, el 27 de julio de 1937, con un decreto especial, el Gobierno obligó a todos los terratenientes a que pagaran a las escuelas un boliviano al mes, por cada alumno (República de Bolivia, 1938b, tomo 3: 68-69), lo que los convirtió en enemigos acérrimos de la fundación de las nuevas escuelas.

Esa alianza de los indigenistas de izquierda con el Gobierno asustó no solo a los partidos políticos tradicionales. La prensa reaccionaria desarrolló una campaña histérica contra el "experimento comunista totalitario" de

---

316 Véase el punto 3.8. del tercer capítulo.

317 AHGE-SRE, 1938, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Suplementarios. Carta de E. Pérez-G. Sánchez de 25 de febrero de 1938", 30-3-16.

318 AHGE-SRE, 1938, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Suplementarios", 30-3-16.

Warisata. El diario *La Razón* lideró esa persecución con la publicación de los artículos de Vicente Fernández, talentoso escritor indígena, firme defensor de los principios integracionistas liberales de los campesinos indígenas en la sociedad blanca y mestiza de Bolivia; es decir, en la perspectiva de una asimilación completa y de la hispanización de los pueblos indígenas.[319]

La intensa ofensiva contra Warisata chocó con la resistencia firme de los diputados izquierdistas y nacionalistas de la Constituyente. En julio de 1938, Eguino Zabala envió en su nombre una interpelación sobre "los hechos ocurridos en la Escuela Indigenal de Warisata, con relación al desahucio de colonos de las tierras próximas a dicho núcleo escolar indigenal".[320] El Gobierno reaccionó rápidamente y señaló a los terratenientes locales que esa escuela seguiría existiendo, pasara lo que pasara, y que los intentos de impedir su trabajo serían duramente reprimidos.

El tema indígena continuaba en las páginas de la prensa nacionalista y de izquierda. El diario oficialista *La Calle* publicó una serie de materiales sobre la cuestión agraria. La influencia del indigenismo cambió la percepción de la comunidad indígena para los nacionalistas de izquierda. Si en 1937 los artículos de *La Calle*, *La Noche* y otros medios de prensa, además de lo referido a la educación indígena, trataban el tema agrario solamente como un problema de atraso técnico en la agricultura y el dominio del gamonalismo, en 1938 se difundían con mayor frecuencia las ideas –antes heréticas– sobre la necesidad de conservar la comunidad como base de la estructura social futura en el agro (*La Calle*, 30 de agosto de 1938). Cuando la comunidad, a los ojos de los políticos liberales y posliberales –por ejemplo, marxistas–, seguía siendo la culpable principal del atraso y del estancamiento de la agricultura boliviana, la actividad de los indigenistas promovió cambios profundos en los enfoques que formulaban los partidos de izquierda, entre ellos los socialistas, respecto a la comunidad y a los planes de reforma en el campo boliviano. Se discutían las ideas sobre las reformas partiendo de los principios colectivistas de la comunidad *ayllu* (*ibid*.). La reforma de la agricultura en función de la comunidad se compatibilizaba con la estrategia común de construcción de una economía estatista en la que el papel del individuo correspondiera a un empresario privado o a un granjero, supeditados a las instituciones sociales y al Estado. La comunidad se integraba idealmente a ese sistema como un elemento de la administración estatal de la agricultura.

---

319 AHGE-SRE, 1938, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 26 de agosto de 1938", 30-3-15.

320 ABNB-PR, 1938, "Requerimiento al MININT de 27 de junio de 1938", caja 14, tomo 200.

La discusión activa del tema agrario y campesino en la sociedad boliviana instó a la Asamblea Constituyente a considerarlo también. Entre los diputados del ala izquierda, Guevara Arze –del Partido Socialista Independiente– y Arratia,[321] los más activos, defendieron apasionadamente las soluciones radicales. Hablando en la Asamblea, Guevara Arze, por ejemplo, subrayaba que la solución de las cuestiones agraria e indígena eran, en primer lugar, tareas hacia la conquista de la independencia económica de Bolivia (*El Diario*, 20 de octubre de 1938). Exigía, desde luego, el reconocimiento de los derechos civiles de la población indígena. Durante la discusión sobre la libertad de palabra, Guevara Arze fue el único en recordar que nueve décimas partes de la población boliviana permanecían privadas no solamente de la libertad de palabra, sino de los derechos civiles elementales: "La Convención Nacional consta de 125 miembros, de los cuales cien debían representar a los indios y mestizos y 24, a los blancos, puesto que la democracia es el gobierno del pueblo" (República de Bolivia, 1938b, tomo2: 153-154).

Guevara Arze era partidario de liquidar el latifundio para transformarlo en granja colectiva y convertir a la comunidad indígena en la célula principal de su funcionamiento. Consideraba que la liquidación de las grandes haciendas y la parcelización de la tierra significarían dar marcha atrás en el desarrollo, porque se retrocedería hasta la fase primitiva del capitalismo liberal. La comunidad, entonces, debía cambiar la hacienda, mutarla hasta constituirla en un organismo productivo único (*ibid.*: 535). Sus ideas no encontraron respuesta entre los liberales y los republicanos socialistas, lo que era de esperar, como tampoco entre los izquierdistas que se consideraban marxistas y comunistas. El marxista Arratia trató de convencer a su colega que la socialización de los medios de producción y la tierra no era oportuna, ya que en Bolivia no se planteaban objetivos de cambio socialistas, sino solamente reformas liberales democráticas (*ibid.*: 562-563).

Resultó que la mayoría de los representantes en la Asamblea, incapaces de acciones tan revolucionarias, rechazaron el proyecto radical de Guevara Arze. Sus correligionarios y compañeros, entre ellos Paz Estenssoro, tampoco apoyaron el radicalismo de su programa. Los nacionalistas-reformistas, hablando

321 Alfredo Arratia representaba en la Asamblea el Frente Popular de Potosí, organización que, de hecho, controlaba completamente el poder en esa ciudad. Arratia fue uno de los fundadores y dirigentes del marxista Partido de Izquierda Revolucionaria, creado en 1940. Luego participó en los inicios del Partido Comunista, creado en 1950. En la década de 1960, fue uno de los líderes del Partido Comunista maoísta, separado del Partido Comunista de Bolivia pro-moscovit, en 1964.

sobre la necesidad de realizar reformas en el sector rural, sí aprobaban la idea de expropiar la tierra únicamente en la medida en que correspondiera a la concepción constitucional sobre la función social de la propiedad; es decir, solamente se permitiría la expropiación de los latifundios improductivos, con previa indemnización. Más todavía, los nacionalistas-reformistas proponían resolver lo agrario colonizando las tierras desiertas del Oriente del país (*ibid.*: 540-541). Los diputados izquierdistas Eguino Zabala y Siñani insistían en el principio de la indemnización previa a los terratenientes (*ibid.*: 555). El resultado de la discusión fue ingrato para los diputados partidarios de las reformas radicales en el agro: sus propuestas no encontraron el apoyo de la mayoría.

No obstante, Guevara Arze y sus partidarios supieron introducir parte de sus ideas a la Constitución. El último día de trabajo, la Asamblea Constituyente aprobó el artículo 165 propuesto por Trifonio Delgado, en el que por primera vez la comunidad indígena era reconocida como sujeto de derecho con personería jurídica (*La Calle*, 30 de octubre de 1938). Significaba el fin de la legislación agraria liberal, la cual negaba los derechos corporativos a la tierra de la comunidad. El reconocimiento de la comunidad representaba borrar toda la política agraria liberal, cuyos inicios estaban en los decretos de Bolívar de 1825. Aquel fue solo un primer paso hacia la reforma agraria, aunque muy importante.

Los diputados de izquierda, incluidos los integrantes del Frente Único Socialista, carecían de criterio único en el tema agrario. Algunos rechazaban la necesidad de cualquier cambio en el agro, lo que no era de extrañar, pues muchos de ellos defendían los intereses de la clase media, vinculada estrechamente a los pequeños y a los medianos hacendados. El diputado socialista Enrique Liendo llegó a negar que en Bolivia existiera el pongueaje, es decir, el trabajo gratuito de los indígenas para el hacendado. Esa declaración causó escándalo y distrajo a los diputados y a la sociedad de la esencia del tema agrario, al punto que después nadie quiso volver a discutirlo.

Respondiendo a la afirmación cínica de Liendo, su colega Antonio Carvajal, diputado saavedrista de Oruro, representante del ala sindical, dijo abiertamente desde la tribuna parlamentaria que los indios pongos prestaban servicios personales a los hacendados, tanto en el campo como en la ciudad, y que incluso prestaban servicio a las esposas de sus patrones. La explosión de indignación culminó en una gresca. Fueron movilizadas la Sociedad Católica Femenina y otras organizaciones conservadoras de derecha, que salieron a las calles llamando a sacar de la Convención “a los comunistas y a los patanes”. El sector obrero, con muchas dificultades, pudo librar a Carvajal de ser expulsado del Parlamento, limitándose a privarle provisionalmente del derecho de intervenir en las reuniones. Durante varios días, se dedicaron a la discusión de los detalles de ese escándalo, por lo que el tema agrario fue exitosamente olvidado.

Mientras tanto, en la prensa, en los círculos intelectuales y especialmente entre los políticos de izquierda, sí se discutía ampliamente acerca de la propiedad de la tierra. La sociedad todavía no estaba preparada para entender la necesidad de reformar las relaciones vinculadas con la tierra. Una parte importante de la clase media, constituida por la mayoría de los ciudadanos con derecho a voto, defendía sus intereses en el campo y, por estar estrechamente ligada a la gran propiedad agraria, buscaba conservar el *statu quo*. Incluso el propio movimiento campesino partidario de la reforma agraria, que se convirtió en una poderosa fuerza política diez años después, a fines de la década de 1930 era todavía muy débil. Los sindicatos campesinos creados por los excombatientes de la Guerra del Chaco eran escasos, débiles y estaban divididos. Mientras la sociedad política urbana no se topó con la rebelión general de los campesinos indígenas, la reforma agraria se debatía solamente como una perspectiva bastante lejana.

Junto con los temas constitucionales, la Constituyente dedicó gran parte de su tiempo a la discusión de los proyectos para las reformas económicas y políticas. La mayoría nacionalista de izquierda y socialista trataba de formular los postulados generales de la política económica y social que se convertirían después en los principios fundamentales del nacionalismo revolucionario. En general, los proyectos no encontraron apoyo ni de los aliados ni de sus correligionarios socialistas.

Un interesante proyecto localista, pero de carácter socializante alternativo, fue el de los *kajchas*,[322] propuesto por Arratia, que preveía garantías de empleo a muchísimos obreros temporarios en las minas y disminuir el desempleo en los centros mineros. Sin embargo, la mayoría de los representantes lo vio como una iniciativa localista opuesta a un verdadero programa socialista transformador de toda la sociedad (Barragán, 2006: 158).

Víctor Paz Estenssoro, político joven y promisorio, futuro líder de los nacionalistas-revolucionarios, propuso a la Convención nuevos principios de estrategia económica. Se refería a la diversificación y a la industrialización del país. Subrayaba que entendía muy bien la imposibilidad de competir en el mercado mundial con los países más desarrollados, en todas las áreas de la producción, y opinaba que era más importante satisfacer la demanda interna con la producción agrícola e industrial local. Ilustró su propuesta con la experiencia de los Estados fascistas, en primer lugar Italia, donde la teoría de la autarquía económica actuaba en contraposición al modelo liberal de la economía abierta al mercado mundial:

322 Mineros indígenas que roban metales, principalmente los fines de semana y los días de fiesta.

> Hoy existe en el mundo la teoría de la autarquía o sea bastarse a sí mismo; con este criterio debemos acometer esos problemas, primero, para ahorrar disponibilidades en oro –refiriéndose a las reservas del Estado–, al satisfacer nuestras necesidades, y segundo, para el caso de una movilización económica frente a la posibilidad de una guerra, dentro de la cual, el país debe abastecerse sin recurrir al extranjero (República de Bolivia, 1938b, tomo 2: 271).

El proyecto más radical y más peligroso para los monopolios del estaño también fue planteado por Paz Estenssoro: promulgar la ley de control estatal sobre todos los ingresos en moneda extranjera, que fue rotundamente rechazado por los monopolios mineros (Klein, 1965: 172). Después de debates muy reñidos y de la negativa de los ministros derechistas del bloque económico del Gobierno, esa propuesta fue rechazada por ser extremista. La mayoría de las iniciativas del ala izquierdista no fue aceptada por la Convención. En los temas fundamentales, muchos socialistas actuaban frecuentemente en bloque con los moderados y los liberales. El peso de la inercia y la confianza en los principios universales de la economía de mercado aún eran demasiado fuertes.

Si las reformas económicas propuestas por la izquierda quedaron muy débilmente reflejadas en el texto de la Constitución, en el tema de las garantías sociales se logró un progreso importante. La temática social fue tratada en términos de la cooperación entre el trabajo y el capital, con el rol controlador del Estado (República de Bolivia, 1938b, tomo 3: 1472). El desarrollo prioritario de las formas cooperativistas de la economía en los sectores agrario e industrial fue declarado como la alternativa a la explotación del hombre por el hombre. La cooperativa y las formas sociales de propiedad y de organización de la producción resultaron ser los modos óptimos para resolver los problemas sociales. Esos principios fueron tomados prestados tanto de las teorías anarcosindicalistas y marxistas como de la experiencia de las reformas mexicanas durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Tales reformas contenían un gran potencial revolucionario. Si hubiera existido la voluntad política de los militares-socialistas, se habría llevado al país a una realidad social totalmente diferente.

La nueva Constitución consagró el principio de responsabilidad social del Estado por todos los miembros de la sociedad. El Estado se responsabilizaba así de garantizar un nivel de vida mínimo para todos y aceptaba y garantizaba el derecho a la salud y al apoyo social; de hecho, la seguridad social fue declarada como una de las funciones más importantes del Estado (*ibid.*: 1474). Asimismo, se estableció como su responsabilidad garantizar la educación primaria general para todas las capas de la población. También fijaron amplias garantías sociales y derechos para los trabajadores, incluidos los derechos al trabajo y a los subsidios de cesantía, de enfermedad,

etcétera. Los artículos 125 y 126 del texto constitucional reconocían el derecho a organizar sindicatos y el derecho a la huelga (*ibid.*: 1473).

La aprobación de la Constitución Política del Estado de 1938 fue un logro enorme del régimen militar-socialista. La Carta Magna trazó las vías para la reforma de la sociedad boliviana. Por primera vez, se inscribió el derecho del Estado a intervenir en la economía. También fueron determinadas las condiciones bajo las cuales el Estado podía transgredir el derecho de la propiedad por el bien común, fue abolido el pongueaje –servicios personales de los campesinos– y se reconoció la personería jurídica de la comunidad indígena. La nueva Constitución fue un manifiesto de los derechos y de las libertades democráticas nunca visto en Bolivia, hasta nuestros días.

4.4. La lucha política (mayo-noviembre de 1938)

Mientras se resolvían los asuntos constitucionales, los ministros manejaban la política cotidiana. El Gobierno no había recibido aún sus facultades de parte del presidente. El nuevo gabinete no era homogéneo; los nacionalistas radicales y socialistas se contraponían a los conservadores. Las divergencias internas estaban destrozando la estructura gubernamental y tanto las intrigas como la lucha por influir en el primer mandatario se constituían en la única política real.

Los ministros nacionalistas y antioligárquicos, liderados por Elías Belmonte, aprovecharon la predominancia de la izquierda en la Asamblea Constituyente y apoyados por los diputados socialistas organizaron una serie de acciones radicales. Germán Busch se ocupó primero de la prensa que, en su opinión, servía a los intereses particulares de la oligarquía en vez de servir al Estado y a toda la nación. Exigió el control estatal sobre todos los periódicos oligárquicos. En junio de 1938, envió a la Convención el proyecto de la Ley de Prensa, cuya idea más importante era la lucha contra el extremismo de derecha y la influencia oligárquica en los medios. Concretamente, esa ley estaba dirigida en contra el baluarte del liberalismo, *El Diario*, un periódico altamente profesional y masivo.

Durante dos meses, de junio a julio de 1938, los diputados discutieron varias veces el contenido de las publicaciones difundidas en *El Diario*. El proyecto de ley limitaba seriamente la independencia de la prensa, dirigiendo el golpe principal hacia la democracia y sus instituciones. Según Belmonte, la prensa libre era la única fortaleza de la oposición liberal que no había sido destruida. En la Constituyente, durante la discusión sobre ese medio escrito, Belmonte dijo:

> Soy partidario de la libertad de prensa, pero no de la libertad absoluta. Considero que en las circunstancias angustiosas que vive el País, es necesario que por

> un momento no piensen todos sobre lo que conviene hacer, sino que haya un pensamiento conductor, para que esta pobre Patria [se] salve del peligro y llegue a tiempos de bonanza y que ofrezcan mejores horizontes (República de Bolivia, 1938b, tomo 2: 151-152).

La ideología –la idea nacional– más adecuada para aquel momento era, de acuerdo con Belmonte, el nacional-socialismo. Belmonte llamó a la Convención a adoptar, como ejemplo a seguir, las leyes semejantes a las de la prensa de la Alemania nazi, donde, en su opinión, los periódicos servían a los intereses nacionales, desempeñándose como guardianes de los principios morales (*ibid.*).

Los diputados apoyaron las drásticas medidas contra los periódicos liberales, en primer lugar contra *El Diario*, que se permitió dudar de la competencia de la Convención. Los izquierdistas declararon que el periódico estaba "conspirando contra la estabilidad del Estado socialista, poniéndose en pugna contra la moral y la razón" (República de Bolivia, 1938b, tomo 1: 385). Algunos diputados izquierdistas, inclusive, propusieron realizar la socialización de toda la prensa, supeditándola a los intereses de la nación, sacando a los periodistas de la influencia del capital (República de Bolivia, 1938b, tomo 2: 136). Los diputados consideraban que ellos mismos eran los verdaderos voceros de los intereses de toda la sociedad.

El 13 de junio de 1938, la Asamblea aprobó la ley referida a la prensa, dándole plena libertad al Poder Ejecutivo para prohibir la inconveniente prensa oligárquica de derecha. Los únicos defensores del principio de libertad de palabra fueron el liberal Eduardo Fajardo y el saavedrista José Romero Loza, que protestaron decididamente contra los argumentos de la mayoría socialista (*ibid.*: 145-148). Fuera de la reunión, además de los partidos tradicionales, resistió el avance contra la libertad de prensa la Federación Universitaria de Bolivia, la cual habitualmente apoyaba a la mayoría nacionalista de izquierda (*El Diario*, 13 de julio de 1938).

Dicha ley provocó una crisis de gabinete. Los ministros derechistas Alberto Palacios, de Hacienda, Julio Salmón, de Agricultura y Alfredo Barrios, de Salud Pública, presentaron sus renuncias en protesta contra la persecución a la prensa (*El Diario*, 15 de julio de 1938). Busch no admitió sus dimisiones y trató de calmar la situación declarando que la ley tendría un carácter temporal, por lo que pronto sería sustituida por otra más leve. La derecha estaba asustada por el comportamiento de Belmonte, así como por su radicalismo. Por una parte, les convenía el anticomunismo del ministro y, por otra, temían la implantación de un régimen antidemocrático, de orientación nacionalista.[323]

---

323 AHGE-SRE, 1938, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 10 de agosto de 1938", 30-3-15.

Sobre Busch comenzaron a presionar diferentes fuerzas políticas, inquietas por la actividad de Belmonte. Los ministros del ala oligárquica exigieron directamente su renuncia. A fines de junio de 1938, al coro de descontentos por la actitud de Belmonte se unió la voz del recién designado comandante en jefe del Ejército, el general Carlos Quintanilla, conservador y hombre afín a Simón I. Patiño.

Busch no era una persona que cediera fácilmente a las presiones y a las peticiones, más aún cuando estaba convencido de la sinceridad de la postura patriótica y antioligárquica de Belmonte. Sin embargo, influyeron las insistentes peticiones de todas partes. Uno de los argumentos para la dimisión de Belmonte fue su participación en el allanamiento en el Club de La Paz, en 1937, hecho que lo convirtió en enemigo personal de toda la élite paceña. Los ánimos regionalistas se constituían en una gran fuerza opositora en La Paz. Como las actividades de enemistad de Belmonte hacia las élites de La Paz eran generalmente imprudentes, activaron en su contra a la población de la capital; en primer lugar a los saavedristas, que incitaban a la cholada peligrosamente explosiva. El presidente porfió en el tiempo hasta alcanzar ese límite en el que la oposición fue unánime en contra el ministro, y ello lo llevó a la renuncia.[324]

El último y más contundente argumento en contra de Belmonte fue el escándalo relacionado con un tal Otto Berg. Las circunstancias de ese asunto desagradable para el ministro merecen atención, puesto que demuestran el nivel político cultural de los gobernantes de entonces, además de la fe ciega y del entusiasmo desmedido de Belmonte hacia los regímenes totalitarios, especialmente el de la Alemania nacional-socialista.

Ese personaje, Berg, apareció en Bolivia en 1937, presentándose como pariente de Hermann Göring. Dondequiera que estuvo, ese señor insinuaba que había llegado al país con una misión secreta del Gobierno alemán. Algunos políticos sospecharon. El general Enrique Peñaranda, a quien Berg se había dirigido con las supuestas proposiciones confidenciales de aquel Gobierno, pidió información a la embajada boliviana en Berlín.[325] Mientras se realizaban las comprobaciones y se esperaba la respuesta, el tiempo fue pasando y Berg se ganó la simpatía de los admiradores locales de nazismo, incluido Belmonte. El alemán fue recibido por las más altas autoridades bolivianas, incluso por el presidente. Belmonte lo presentó como candidato al cargo de asesor de la Policía. Cuando Berg dejó Bolivia, apareció en Berlín un tal Otto Hessman, quien se presentó como agente del servicio secreto y coronel del Ejército boliviano, afirmando que se le

324 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 8: 200.

325 AMIN-RREE-Alemania, 1937-1938, 1-R-15: 16.

habían encomendado varias misiones secretas dirigidas al Gobierno alemán. La respuesta de La Paz fue categórica: "Hessman es un impostor".[326] Más tarde, se supo que Berg y Hessman eran una misma persona: un aventurero delincuente juzgado en Alemania en la década de 1920.[327]

Belmonte, víctima de su propia pasión por el hitlerismo, estuvo involucrado en el escándalo y posterior descubrimiento del aventurero. El ruidoso caso de Berg dañó gravemente su reputación. Sus relaciones con el presidente Busch fueron empeorando paulatinamente. En agosto de 1938, fue destituido y enviado a Alemania con cargo diplomático (*El Diario*, 22 de julio de 1938).

Busch hizo coincidir la reorganización del gabinete de ministros con la ratificación del Tratado de Paz con Paraguay por la Asamblea Constituyente, en agosto de 1938. A pesar de la firma de armisticio y de la conciencia de ambos países de lo absurdo que era continuar la guerra, las conversaciones de Buenos Aires seguían con dificultad y crecía la tensión en la línea de separación de las fuerzas. Paraguay exigía la cesión de las regiones petrolíferas, planteamiento inaceptable para Bolivia. En 1937 y a comienzos de 1938, la hostilidad se hizo tan grande que parecía que las acciones bélicas serían reanudadas en cualquier momento. Esa situación obligaba a los bolivianos a tener a mano un fuerte Ejército ya no disminuir los gastos militares. Con la firma de la paz, el 21 de julio de 1938, se puso punto final al sangriento conflicto con Paraguay.

Bolivia ingresó definitivamente a la vida pacífica. Aprovechando ese pretexto, Busch emprendió la reorganización del gabinete de ministros y sacó a Belmonte. La oposición cantó victoria, dado que la intriga en contra del hombre fuerte de Busch resultó exitosa. Sin embargo, según su costumbre, Busch equilibró el retiro del nacionalista "ardiente", Belmonte, con la designación a ministro de Agricultura de Carlos Salinas Aramayo, el 28 de septiembre. Salinas Aramayo tenía la reputación de ser un socialista extremo y amigo de Tristán Marof. También el político más joven, Alberto Zelada, conocido intelectual de corriente socialista, recibió el 12 de agosto la cartera de Trabajo.

Días después, el 1 de agosto, el presidente mandó a retiro al derechista ministro de Hacienda, Palacios, el mismo a quien un mes antes trató de retener en el Gobierno. Inesperadamente, Busch designó en su lugar a un reformista moderado, Vicente Mendoza López, líder del Partido del Socialismo de Estado creado durante el Gobierno de David Toro. Parecía que finalmente Busch había superado la desconfianza en todos los políti-

326 AMIN-RREE-Alemania, 1937-1938, 1-R-15: 15.

327 AMIN-RREE-Alemania, 1937-1938, 1-R-15: 9, 12, 17 y 18.

cos que se destacaron bajo el mandato de su antecesor (*El Diario*, 13 de agosto de 1938).

Con las nuevas designaciones, el presidente subrayó su intención de fortalecer el ala antioligárquica del gabinete. No desistió de su animadversión hacia el Partido Socialista de Estado, por sus estrechos vínculos pasados con Toro. Aunque se hizo menos radical, el Gobierno conservó su color político predominante: el socialista. La formación definitiva del gabinete transcurrió en línea paralela a las complicaciones y al escándalo político relacionado con el célebre político, historiador y escritor crítico y mordaz Alcides Arguedas, quien publicó una serie de artículos desfavorables para el Gobierno. En el primero, eligió como blanco al ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Diez de Medina, denostándolo por el Tratado de Paz con Paraguay y por su participación en un gobierno socialista. A sus invectivas respondió el hijo del ministro, el joven y conocido filósofo Fernando Diez de Medina, con el artículo "El mestizo resentido", publicado en el pasquín izquierdista *La Noche*. Sin seleccionar el vocabulario, trató de tal manera al ofensor de su padre que provocó una avalancha de publicaciones en respuesta, incluso del propio Alcides Arguedas.[328] El alboroto de una pelea pública entre los dos representantes de la élite intelectual boliviana atrajo la atención de toda la sociedad.

En uno de sus artículos en *El Diario*, del 2 de agosto, Arguedas apuntó a todo el gobierno socialista. Con enorme desprecio, escribió sobre los socialistas caseros. Hablando del presidente y de su alabada franqueza y honradez, que en su opinión no era tal, citó una conocida frase de Daniel Salamanca: "¿Qué tiene este edificio maldito [Palacio de Gobierno] que tanto cambia a los hombres?".[329] Y seguía:

> Estos señores que se instalen en palacio por la fuerza, la intriga o excepcionalmente por la papeleta del sufragio, reparten empleos, conceden favores, y necesariamente viven en una atmósfera infecta y pobre de adulación, de sumisión y de acato y sus oídos solo están acostumbrados a oír alabanzas, sus ojos a ver gestos comedidos, insinuantes, serviles.[330]

Llamó al presidente Busch "bárbaro" y le advirtió de la vergüenza y de la condena que dejaba para la historia y las generaciones futuras.[331] La reacción

---

328 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 8: 197-198.

329 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 8: 209.

330 *Ibid.*

331 *Ibid.*

del Gobierno fue predecible: Arguedas fue acusado de participar en una conspiración a favor de los barones del estaño, pero el asunto solamente quedó en acusaciones verbales.[332]

El 4 de agosto de 1938, *El Diario* publicó un artículo más sarcástico y "fatal" para su autor. Arguedas acusó al Gobierno del robo colectivo del dinero público. Tenía que ver con la decisión de la Junta, todavía en tiempos de Toro, de entregar a cada ministro 50 mil bolivianos como finiquito, lo cual, según el autor, era una forma encubierta de soborno y un fraude al fisco. El escritor tenía toda la razón en su indignación, pero no atacaba a los autores de tal medida, sino al Gobierno de turno y a todo el régimen del socialismo de Estado. Arguedas sacó conclusiones muy exageradas respecto al Gobierno y se dirigió en modo especialmente ofensivo al presidente. Lo trató, nada menos, de "jovencito" y de "señor coronel" (*El Diario*, 4 de agosto de 1938). Con su artículo, Arguedas tocó a Busch donde más le dolía. Ofendió a los excombatientes del Chaco al escribir:

> La guerra aquí ha engendrado una nueva casta desconocida por algunos aspectos de otros sitios del globo. Aquí en Bolivia, tenemos la casta de los ex-combatientes, la única privilegiada después de la militar. La guerra aquí, en vez de retardar la cultura de los combatientes o de esterilizar en muchos su espíritu, ha creado su cultura, ha ensanchado y enriquecido el horizonte de su saber y los ha hecho aptos para muchas cosas que antes ignoraban, y, sobre todo, para dirigir los negocios públicos, sentarse en el parlamento, representar al país en la diplomacia. Basta ser ex-combatiente hoy día para estar dotado de saber y entender el manejo de la copa pública; basta haber estado en el Chaco, aún sin combatir, para que el gesto de héroe luzca en todas las frentes. Yo siento como nadie quizás y por esa mi chirladura de la cultura, la pérdida de nuestro Chaco, porque –lo estamos viendo– el clima, el cielo, las aguas y los vientos de esta región habían tenido la facultad de producir el milagro nunca visto de dar a los hombres sabiduría, experiencia y de especializarlos muy particularmente en el desempeño de cargos públicos y representativos (*ibid*.).

Además, se refirió al momento más sensible de los escándalos políticos: el caso Otto Berg y Elías Belmonte. Otra parte delicada del artículo fue, asimismo, la acusación de violación de las libertades democráticas por el régimen socialista y la desaprobación de sus experimentos políticos. Arguedas concluyó diciendo:

332 AHGE-SRE, 1938, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 10 de agosto de 1938", 30-3-15.

> En esta labor de resurgimiento nacional puede hacer mucho el gobierno, si está bien inspirado y sus intenciones son elevadas con solo cumplir su deber de no atentar contra las libertades públicas, velar por el correcto empleo de los fondos comunes, exigir orden y pulcritud en los empleados de administración, castigar a los delincuentes, depurar los cuadros, hacer economías, gobernar bien en fin (*ibid.*).

Arguedas preguntó si el Gobierno de Busch era capaz de hacerlo y del contenido emanó una respuesta negativa. El artículo causó la ira de Busch, ofendido por las acusaciones de corrupción y por el tono despectivo de ese escritor ya convertido por entonces en una celebridad mundial. Arguedas decía la verdad y no seguía con admiración ciega y fe la genialidad de Busch, que deslumbraba a todos.

El presidente ordenó inmediatamente a su edecán que buscara a Arguedas para llevarlo al Palacio. Previamente, había ordenado abrir contra el escritor una investigación criminal con la acusación de difamador. Los agentes de la Policía irrumpieron en su domicilio para arrestarlo, pero el edecán se les adelantó y lo llevó ante Busch. En el trayecto, Arguedas iba seguro de que lo llamaban impresionados por su artículo para pedir algún consejo y conversar. Al llegar, ya frente al gallardo coronel, sucedió una escena que sin duda cubrió de vergüenza a Busch por todo el resto de su periodo presidencial. En su discusión verbal, el oficial no podía competir con el famoso escritor de lengua venenosa. De la cortesía castrense, Busch pasó a las palabras de grueso calibre contra una persona respetable, un hombre de edad. Arguedas tampoco se mantuvo en silencio. Siempre desequilibrado y propenso a las acciones bruscas e imprudentes, Busch golpeó al hombre –aunque soberbio y antipático– hasta hacerlo sangrar, olvidando su alto rango y sus obligaciones.[333] Con su actitud, Busch ofendió no solo a Arguedas, sino al mismo Estado boliviano, a las instituciones republicanas; manchó su uniforme de oficial del Ejército. Una marca de oprobio cayó sobre él, como presidente y oficial, cuyas acciones humillaron al país y de cuya resurrección moral le gustaba tanto pregonar. El escándalo se agravó porque ocurrió dos días antes de las fiestas patrias, en el aniversario independentista de Bolivia.

Por disposición especial, fue categóricamente prohibido a los diarios emitir cualquier comentario sobre lo sucedido, mas la noticia sobre la bárbara actuación del primer mandatario se difundió a tal punto que oscureció seriamente los festejos del 6 de agosto, aniversario de la independencia. En

333 Véanse: Céspedes, 1956: 190-192; Díaz Machicao, 1957: 84-85; AHGE-SRE, 1938, “Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 10 de agosto de 1938”, 30-3-15; y el diario del escritor en ABNB-PR, “Diario de Alcides Arguedas”, tomo 8: 218-219.

señal de protesta, no se presentaron a la reunión solemne los diputados derechistas ni el cuerpo diplomático. El escándalo adquirió dimensiones internacionales y los embajadores de los países latinoamericanos se solidarizaron con Arguedas. Los estudiantes y los intelectuales, incluso los de izquierda, unánimemente condenaron la acción de Busch, a quien apodaron como "nuevo Melgarejo".[334]

El círculo del mandatario desvió el conflicto por el cauce de la oposición política entre la vieja y la nueva Bolivia. De partida, la Asamblea Constituyente se negó a discutir el requerimiento del liberal Eduardo Fajardo, declarando que el incidente era un tema personal entre Busch y Arguedas (República de Bolivia, 1938b, tomo 3: 150-151). Cuando los estudiantes y los líderes obreros saavedristas, como Hugo Sevillano, salieron a manifestar su protesta, grupos izquierdistas y nacionalistas organizaron contramanifestaciones: el conflicto adquirió ribetes políticos, como si se tratara de un episodio en la lucha del pueblo contra la oligarquía. Los sindicatos obreros de la capital realizaron asambleas de apoyo a Busch e incluso ofrecieron crear brigadas armadas para resistir un eventual golpe de la derecha.

Tres días después, Busch contestó a las acusaciones en su contra. No se justificó en la conferencia de prensa del 24 de agosto; solamente manifestó que se trató de la reacción de un hombre ofendido y no, por cierto, en su calidad de presidente.[335] Busch no se sentía incómodo por lo ocurrido. Tampoco trató de suavizar el conflicto, por lo que siguió amenazando, aunque no a Arguedas personalmente, sino a toda la oligarquía y a la intelectualidad liberal.

En su conflicto con la derecha, Busch fue más lejos con ese choque general "a la gente bien". En esos días, y con el permiso del Gobierno, llegó a La Paz Tristán Marof, que en julio de 1937 había retornado a Bolivia después de cumplir un exilio de 11 años. Fue acogido con entusiasmo por los grupos izquierdistas y nacionalistas. Los diarios *La Calle* y *La Noche* dedicaron grandes artículos a ese indiscutible líder de la izquierda radical. Para horror de las fuerzas oligárquicas, fue recibido por Busch, con quien sostuvo una charla amistosa; ambos quedaron muy contentos.[336] En medio de la indignación general por parte de la intelectualidad, que apreciaba el escándalo con Arguedas como un reto a la opinión pública, Marof subrayó la importancia

334 Mariano Melgarejo, presidente de Bolivia de 1864 a 1871, fue un dictador que quedó en la historia marcado por sus locuras, su despotismo, su ignorancia y su barbarie.

335 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 8: 234.

336 AHGE-SRE, 1938, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 26 de agosto de 1938", 30-3-15.

de esa reunión. Naturalmente, era ilógico e ingenuo esperar otra reacción suya, pues despreciaba y odiaba con toda el alma a Arguedas y había dedicado muchos años a atacarlo en la prensa y en los espacios de la crítica literaria. Marof apoyó a Busch.[337]

Seriamente preocupado por la oposición de los partidos tradicionales y los círculos conservadores de derecha, Busch se dirigió a las organizaciones obreras de izquierda y recibió el apoyo de todas ellas. Por otra parte, el grado de preocupación de Busch hacia la oposición social creciente quedó demostrado con su orden a Elías Belmonte de volver inmediatamente de Buenos Aires a La Paz. Eso sí asustó mucho a los conservadores. Belmonte ya se preparaba para partir a un honorable exilio diplomático en Italia y Alemania, e inesperadamente lo llamaron para regresar a Bolivia.[338] Aunque esa disposición fue posteriormente revocada, Busch demostró su decisión de llegar hasta las últimas consecuencias en el eventual conflicto con las altas clases.

La incapacidad del presidente para encontrar una solución política a los conflictos, aplicando soluciones de compromiso con los opositores políticos o emprendiendo el trabajo democrático de cada día para lograr acuerdos, causó su descontento al no entender lo que pasaba en la Asamblea Constituyente. Busch se interesaba poco por los temas constitucionales, los debates políticos y las encendidas discusiones de congregación, a las que consideraba como sesiones para la expresión de politiquería y demagogia; su punto de vista lo ponía en contra de la política pública y el gobierno democrático como tales. La prensa de derecha atacaba el constitucionalismo social, amenazando con el desplazamiento del país hacia el comunismo. Busch perdió el interés por los debates parlamentarios y no quiso colaborar con la Convención, esperando solamente la aprobación de la nueva Constitución.

Al finalizar octubre de 1938, el Gobierno discutió la suerte de la Convención, una vez aprobada la Constitución Política del Estado. Para apurar ese proceso, Gabriel Gosálvez propuso poner término voluntario a las actividades de la Asamblea. En la prensa, y también entre la opinión pública, empezaron a circular rumores sobre los preparativos para la disolución de la Convención y el establecimiento de una dictadura fascista (*La Razón*, 25 de octubre de 1938). El Gobierno rechazó tales habladurías, al mismo tiempo que Busch propuso una solución drástica: establecer una dictadura totalitaria. En el Gobierno y entre los cercanos a Busch, existían tanto partidarios como opositores a esa solución.

Por su parte, Carlos Salinas Aramayo, considerado como un socialista de izquierda que ejercía gran influencia personal sobre el presidente, evoluciona-

337 *Ibid.*

338 *Ibid.*

ba hacia las ideas nacional-socialistas o, más bien, le entusiasmaban aquellas teorías. Le deslumbraba el fascismo, en tanto ejemplo para llevar a cabo una revolución nacional, antiliberal, antidemocrática y eficiente. El ministro entusiasmaba a Busch con el establecimiento de "un régimen fascista del tipo brasileño".[339] Se trataba de una variante autoritaria del nacional-reformismo, de carácter nacionalista y antioligárquico. El mandatario se inclinó a acceder a los consejos de los partidarios del régimen totalitario.

Busch debatía permanentemente con sus colaboradores sobre las perspectivas de disolver la Asamblea Constituyente y establecer, de una vez, el nuevo sistema de gobierno. Gosálvez era el principal opositor a la dictadura; encabezaba el Partido Republicano Socialista y estaba genéticamente ligado al sistema tradicional y al Estado oligárquico. Junto a otros políticos moderados, lograban a ratos disuadir a Busch de su idea de una dictadura fascista. El embajador mexicano proporcionó apuntes muy curiosos sobre la conversación de Busch con el líder del bloque oriental de la Convención, su exministro Julio Salmón. Según el diplomático, la información provenía de fuentes confidenciales pero seguras. Durante esas conversaciones se dio lugar el siguiente diálogo:

> Busch: Voy a disolver la Convención y [a] establecer un régimen militar totalitario, pues está muy claro que todas las democracias quebraron. Vea el ejemplo de Brasil, Italia y Alemania que han demostrado la eficiencia de los regímenes totalitarios.
>
> Salmón: ¿Con quiénes, con qué partido desea establecer dicho régimen? No hay quién apoye tal régimen […].
>
> Busch: Voy a disolver la Convención y [a] convocar nuevas elecciones.
>
> Salmón: Pero, ¿quiénes van a estar presentes en la nueva Convención? Serán los mismos que la componen hoy.[340]

Muchos, incluyendo sus más ardientes partidarios, estaban en contra de la dictadura totalitaria. Exhortado por unos y disuadido por otros, Busch no se atrevió a establecer un régimen fascista. El Gobierno anunció oficialmente su decisión de disolver la Convención inmediatamente después de que se aprobara la nueva Constitución y, para dentro de un año, convocar a los mismos diputados a una habitual sesión del parlamento.[341]

---

339 AHGE-SRE, 1938, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 26 de octubre de 1938", 30-3-15.

340 *Ibid.*

341 *Ibid.*

El 30 de octubre, después de las discusiones que duraron varios meses, la Asamblea Constituyente aprobó finalmente la nueva Constitución. Así culminaban sus facultades. Restaba que el presidente, el Poder Ejecutivo, pasara a la siguiente etapa de construir un Estado dentro de los márgenes establecidos por la nueva Ley Fundamental. Aunque Busch se inclinaba a establecer una dictadura, al no encontrar apoyo, ni siquiera dentro de su gabinete, debió aclamar el paso al nuevo régimen constitucional y demostrar así, su disposición de avanzar por la senda de los procedimientos democráticos.

Busch y el vicepresidente Enrique Baldivieso juraron su fidelidad a la nueva Ley Fundamental. En la ceremonia de cierre de la Asamblea Constituyente, Baldivieso pronunció un largo discurso exponiendo su visión de la revolución nacional –es decir, del socialismo de Estado– y rechazando la democracia tradicional que estaba al servicio de las clases privilegiadas y de los opresores extranjeros. La nueva ideología debía ser una combinación de socialismo y de nacionalismo. Hablando sobre los resultados del trabajo de la Convención, mencionó especialmente las conquistas económicas: un control más severo sobre la exportación de los minerales, el fortalecimiento de la soberanía sobre el petróleo y la abolición del pongueaje (*El Diario*, 1 de noviembre de1938).

Tratando de alejar al Gobierno de las sospechas ampliamente difundidas de querer establecer una dictadura fascista, Baldivieso subrayó especialmente que el objetivo del régimen era culminar la conquista moderada y democrática del socialismo. Asimismo, señaló que quienes se resistían activamente al desplazamiento del régimen hacia la dictadura eran el propio Busch y, aunque sonaba extraño, el enemigo personal del orador, el ministro Gosálvez (*ibid*.). Al parecer, durante la discusión previa al cierre de la Convención, Baldivieso hizo referencia a las opiniones de la mayoría nacionalista de izquierda de la Asamblea, que buscaba aliados en los representantes de centroderecha, liderados por Gosálvez, para resistir las tendencias totalitarias y juntos triunfar en la lucha contra los totalitaristas, que gozaban de la simpatía del presidente.

No menos curioso fue el final del discurso, en el cual Baldivieso manifestó su alegría y su solidaridad por el triunfo del Frente Popular en Chile. Al final dijo: "Surge pues en el Nuevo Mundo, una conciencia unánime que anhela conquistar para nuestros pueblos mayor bienestar y mayor solidaridad humana" (*ibid.*). Esos pasajes inesperados demostraban la firmeza de la posición antioligárquica de los líderes del socialismo de Estado. Veían en el nuevo régimen boliviano un sistema económico nacionalista que acabaría con el saqueo del país, llevado a cabo por la oligarquía y el imperialismo, moderando y luego exterminando la lucha de clases y la división de la sociedad en grupos económicos contrarios. Los militares-socialistas proponían una política nacionalista fortaleciendo el rol del Estado en la economía y en

la esfera social. Los líderes del socialismo de Estado seguían manteniendo como piedra angular de sus opiniones políticas el rechazo absoluto de la democracia liberal, la cual había hecho posible el dominio de la oligarquía. Comparado con el periodo anterior, el del socialismo de Estado, además de dejar de lado la política de los experimentos sociales característicos de la administración de Toro, se produjo una evolución patente hacia un nacionalismo más radical.

5
La dictadura de Busch y el fin del régimen de los socialistas de Estado

5.1. El callejón sin salida

La preeminencia de los socialistas en la Convención Nacional y los conflictos de Germán Busch y Elías Belmonte con la élite de la derecha conservadora ayudaron a reforzar la influencia de las fuerzas de izquierda. La extrema izquierda estaba representada por el Partido Obrero Revolucionario, fundado por José Aguirre Gainsborg y Tristán Marof. En los planes de este último estaba convertir ese partido en un partido abierto, amplio, popular, de masas. Contra esos planes estaba Aguirre Gainsborg, quien promovía la idea de un partido de clase, del proletariado.

En 1938, Aguirre Gainsborg y Marof se enfrentaron en una discusión sobre los principios acerca de los caminos de la revolución en Bolivia. Inicialmente expusieron sus puntos de vista por escrito y los divulgaron entre sus correligionarios, luego se juntaron en una reunión en la casa de Eduardo Arze Loureiro, uno de los futuros dirigentes del Partido de Izquierda Revolucionaria y acérrimo enemigo del Partido Obrero Revolucionario. En esa reunión, proclamada como la Segunda Conferencia Nacional del Partido Obrero Revolucionario, se produjo una ruptura definitiva entre los marofistas y ese partido. Con la mayoría de los miembros desertores del Partido Obrero Revolucionario, Marof creó el Partido Socialista Obrero Boliviano, constituido también por el ya citado Arze Loureiro, como también por Alipio Valencia Vega y Alberto Méndez López. Después de la muerte tan inesperada y trágica de Aguirre Gainsborg, ocurrida en esos días, el Partido Obrero Revolucionario pudo regenerarse recién en 1939, bajo el liderazgo de nueva gente, como Guillermo Lora y Tomás Warki (seudónimo de Oscar Barrientos).

El Partido Socialista Obrero Boliviano de Marof era un partido policlasista. Su creación estuvo políticamente preparada antes de las discusiones ideológicas al interior del Partido Obrero Revolucionario; nació como un partido de apoyo a los militares desde la izquierda. Lo saludaron los partidos nacionalistas y reformistas, e inclusive el periódico *La Calle*, que subrayó el éxito de la creación de un partido moderado por un líder que confirmó, por su larga vida y lucha, su dedicación a los principios

nacionalistas y de justicia social, de acuerdo con la realidad boliviana (Knudson, 1986: 62).

Arribando a Bolivia, Marof se dirigió a Sucre, donde vivía su madre. Se alojó en la quinta de su hermana, con la guardia policial a la puerta; no se le permitía salir de la ciudad. Esa medida provocó protestas por parte de las organizaciones sindicales y de los estudiantiles, que llamaron al presidente Busch para poner fin a las persecuciones del más conocido revolucionario boliviano.[342] Lo visitó en casa Jaime Mendoza, expresando su solidaridad. El presidente se manifestó a favor de Marof y la Policía tuvo que excusarse, explicando que nunca quiso arrestarlo ni limitar su libertad.[343] Mientras tanto, el Estado Mayor, por orden de Busch, envió a la ciudad de Sucre como su representante al coronel Garrón, para entablar conversaciones confidenciales con Marof, a fin de aclarar sus planes y sus intenciones, tratando de ganar su apoyo para el Gobierno. El líder aseveró su lealtad al régimen y expresó su deseo de colaborar con los militares, "con toda la cordialidad y espíritu de armonía".[344] También declaró que todos sus escritos, libros e intervenciones estaban nutridos del más "profundo y sincero nacionalismo" (*ibid.*). Para evitar malentendidos con el Gobierno, pidió una audiencia personal con Busch o con otro alto dirigente del Estado, para convencerlos de "su sincero afán de colaborar con el régimen socialista" (*ibid.*).

El manifiesto del nuevo partido declaraba que la única posibilidad de salvación para Bolivia era establecer la economía socialista y defender las riquezas naturales, apoyándose en la unión del pueblo con el Ejército. El texto decía: "El 95% de los bolivianos quieren un Gobierno eminentemente socialista que saque al país de su marasmo, de su inercia y de su espectacular pobreza" (Justo, 1967: 103). Los marofistas apoyaron decididamente a los militares-socialistas y al Gobierno en funciones, tal como fue el acuerdo entre Marof y el coronel Garrón. Según la investigadora Irma Lorini, "lo que buscaba Marof era corregir el aislamiento en que habían caído algunos intelectuales de izquierda, encerrados en discusiones teóricas y doctrinarias, sin advertir el proceso histórico que vivía Bolivia en la etapa de la posguerra" (1994: 229).

El Partido Socialista Obrero Boliviano declaró su pluralismo político como principio de formación del nuevo partido. Se buscaba constituir una confede-

342 ABNB-PR, 1937, "Carta del Ministerio del Gobierno a Germán Busch de 11 de noviembre de 1937", caja 13, tomo 156.

343 ABNB-PR, 1937, "Carta del Ministerio del Gobierno a Germán Busch de 24 de noviembre de 1937", caja 13, tomo 158.

344 ABNB-PR, 1937, "El informe del coronel Garrón al Estado Mayor de 22 de noviembre de 1937", caja 13, tomo 166.

ración de los partidos y los grupos socialistas que luego debían unírsele. Su creación fue apoyada no solamente por los marxistas como Valencia Vega o Arze Loureiro, sino también por muchos intelectuales de izquierda, indigenistas y nacionalistas. Entre sus militantes estaban el pintor Cecilio Guzmán de Rojas, el poeta Guillermo Viscarra Fabre y el escritor Carlos Salazar. Entre los firmantes del manifiesto de creación figuraban Wálter Guevara Arze, futuro líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario y autor del documento pragmático de dicho partido, como también del "Manifiesto de Ayopaya"; Alberto Mendoza López, uno de los líderes de la Confederación Socialista y dirigente activo del Partido de la Unión Nacional en la década de 1920; y Rigoberto Villarroel Claure, líder obrero, escritor y diputado de la Convención de 1938 (*La Calle*, 6 de noviembre de 1938). Se adhirió también el famoso indigenista y fundador de la escuela *ayllu* en Warisata, Elizardo Pérez.

El marofismo evolucionaba hacia un nacionalismo y un indigenismo de izquierda, alejándose del marxismo. Inicialmente, el Partido Socialista Obrero Boliviano tuvo mucho éxito. Según las observaciones del embajador mexicano, ese partido superaba en número de afiliados a todos los partidos llamados de izquierda, incluyendo los influyentes republicanos socialistas (exsaavedristas) de Gosálvez,[345] y tenía su propio periódico, *La Batalla*. Marof fue electo al Congreso de la nación, representando a Sucre.

Marof trató de apartarse de su pasado marxista. Declaró que nunca había formado parte de ninguna organización internacional comunista (*La Calle*, 13 de noviembre de 1938). Escribía artículos en los periódicos y hablaba en las conferencias explicando el contenido de sus nuevas ideas sobre las peculiaridades del socialismo boliviano, que era, según él, el fruto de la unión de los esfuerzos de la clase obrera, de los campesinos indígenas y del capital nacional, bajo la tutela y la dirección del Estado boliviano (*La Calle*, 16 de noviembre de 1938). Ese socialismo era una copia del socialismo de los militares, camuflado en frases comunes que enmascaraban el olvido de las tesis sobre la nacionalización de las minas y la reforma agraria. Marof se refería al perfeccionamiento moral como único camino de las transformaciones sociales.

En 1938, Marof publicó el libro *La verdad socialista de Bolivia*, en el que abandonó completamente sus posiciones anteriores. Su obra fue editada por Fernando Siñani, declarado estalinista y enemigo de Marof en el futuro del Partido de Izquierda Revolucionaria. En ese libro, su autor repetía la tesis sobre la inevitable llegada del socialismo a Bolivia, pero el socialismo nacional, siendo una fase más amplia que la del socialismo obrerista (Lorini, 1994: 245). Asimismo, se mostraba en contra de la nacionalización de la minería y apoya la estrategia económica y social del socialismo-militar; dos

345 AHGE-SRE, 30-3-16.

años después, lo criticaría fuertemente. También subrayaba que lo más importante en el socialismo boliviano era el Estado antiimperialista y, por eso, la tarea de la izquierda consistiría en dar apoyo incondicional a ese Estado, al gobierno militar-socialista (*La Calle*, 11 de noviembre de 1938). Las masas obreras apoyaron la alianza concordada entre Marof y Busch, esperando del régimen socialista las reformas radicales. El apoyo a Marof se concretó en la recaudación de dinero por los obreros paceños para financiar la publicación de dicho libro.[346]

La unión con el régimen de Busch era de corto plazo. El pretexto para romper esa unión fue llamado "*putsch*[347] marofista". El 23 de noviembre de 1938, en La Paz, hubo una recepción en la Casa de España. Jorge Saavedra Suárez llamó a unos amigos suyos, inclusive al capitán Enrique Roca, para dirigirse a los cuarteles y sublevarlos contra el régimen de Busch. Roca, de antemano, informó a las autoridades militares sobre la "conjura". Después de la recepción, se dirigieron a los cuarteles del Regimiento Calama, donde al pronunciar un corto discurso en contra de Busch fueron arrestados. Lo sorprendente fue que la Policía, inmediatamente, llegó para hacer los arrestos de la gente de la izquierda, incluyendo a Marof (*La Calle*, 26 de noviembre de 1938). No sería muy sorprendente ese hecho si no supiéramos que el propio Marof, quien siempre afirmaba su absoluta inocencia, ya sabía del peligro y estaba en la Embajada de España pidiendo asilo político.

Todos esos acontecimientos se produjeron simultáneamente y sincronizados. Si Marof declaraba su inocencia, la Policía hubiera estado convencida de que estaba mezclado en el acontecimiento.[348] Aunque toda esa historia tiene aspecto de haber sido una provocación policial, todavía quedan muchas cuestiones oscuras.[349] Parece ser que se trataba de una tentativa de enfrentar a Marof y a Busch, y de obtener así un buen motivo para reprimir al Partido Socialista Obrero Boliviano, cuya influencia política estaba en ascenso.

---

346 Marof reunió la suma considerable de tres mil bolivianos (Álvarez, 1986: 172).

347 Golpe de Estado o levantamiento armado para hacerse del poder.

348 Siempre impreciso, Marof recordaba ese hecho de una manera muy confusa. Sostenía que tuvo lugar el día del suicidio de Busch, en 1939, y que su sucesor, el general Carlos Quintanilla, lo hizo perseguir debido a lo ocurrido (Baciu, 1987: 50).

349 Es un dato curioso el hecho de que el informante de la Internacional Comunista, que tenía acceso a la información procedente de las fuentes confidenciales, inclusive del Gobierno y de los grupos clandestinos, comunicara a Moscú noticias sobre la directa participación de Marof en la "conspiración provocadora" (RGASPI, fondo 495, legajo 122, número 1, H. 45).

Pasada la noche, Busch asombró a todo el mundo por su indiferencia y su desacuerdo con las acciones de la Policía. Sin embargo, su entorno, los círculos de derecha del Ejército, encabezados por el general Quintanilla, comenzaron fuertes presiones sobre él para conseguir que expulsara del país a Marof o, por lo menos, lo mandara al interior. Inicialmente, Busch cedió a los reclamos y decidió enviarlo a Sucre, pero luego, bajo la presión de los personeros de la izquierda, dejó a Marof en paz. La condición de Busch para tal "perdón" fue el abandono de parte de Marof de la jefatura del Partido Socialista Obrero Boliviano, lo cual aspiraban sus competidores, otros partidos de la izquierda, temerosos del auge significativo del marofismo (*La Calle*, 30 de noviembre de 1938). En fin, el resultado del *putsch* marofista fueron las represiones a otros periodistas progresistas y políticos izquierdistas confinados al Beni.[350]

Inclusive después de tales acontecimientos, el Partido Socialista Obrero Boliviano siguió siendo el partido más grande de la izquierda. Los marofistas lo demostraron en el Segundo Congreso Obrero,[351] que tuvo lugar del 22 al 30 de enero de 1939. En ese encuentro, todas las discusiones se realizaron bajo la hegemonía intelectual de Valencia Vega y de Marof, cuyo lenguaje entonces era mucho más moderado que en años anteriores. Formalmente, fue un congreso de la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia contra el que se pronunciaron la Federación Obrera Local y la Federación Obrera del Trabajo, anarcosindicalistas, que lo declararon como fruto del trabajo burocrático del Gobierno (*La Calle*, 22 de enero de 1938). Las federaciones provinciales, influidas por los marofistas y por los llamados comunistas, es decir los militantes del Partido Obrero Revolucionario y del Partido Socialista Obrero Boliviano, así como los círculos marxistas, enviaron a ese congreso delegaciones representativas de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, al igual que de las zonas mineras de Corocoro en La Paz y de Pulacayo y Uncía en Potosí, entre otros.

Dicho congreso, realizado en el Colegio Ayacucho, contó con la participación de grandes federaciones, entre ellas la de ferroviarios y la de estudiantes (Federación Universitaria de Bolivia). En él fue aprobado un programa muy radical. Su gran repercusión demostró el interés del Gobierno en conservar las relaciones de alianza con las organizaciones obreras. Lo que se pretendía era neutralizar la influencia de los sindicatos en el desarrollo de la situación política, manteniendo una alianza con ellos. Busch, además de considerarse el portavoz legítimo de los intereses del proletariado, necesitaba

350 AHGE-SRE, 30-3-16.

351 Ese congreso, realizado en octubre de 1937, en Oruro, donde predominaron los comunistas, no fue reconocido por la mayoría de los sindicatos, razón por la que el congreso de 1939 también fue considerado como el segundo de carácter nacional.

al movimiento obrero como una potente arma de presión contra la oligarquía. Empero, el movimiento obrero y los partidos de izquierda tenían cada día menos influencia en la toma de decisiones políticas porque estaban cada vez más lejos del primer mandatario y de su Gobierno. Los intentos de las fuerzas de centro-izquierda por formar una organización política importante no encontraron apoyo del Gobierno que, al parecer, no estaba muy interesado en formar ese pilar sociopolítico de soporte a su régimen.

En mayo de 1938, se vislumbraban las esperadas elecciones del nuevo Congreso Nacional. Todos los partidos políticos se preparaban para iniciar la campaña electoral. A fines de agosto, un grupo de diputados del sector de izquierda de la Asamblea Constituyente, encabezado por Víctor Paz Estenssoro, Wálter Guevara Arze y Augusto Céspedes, apoyados por el periódico *La Calle*, anunciaron la creación del Partido Socialista Independiente (Klein, 1971: 302). A diferencia del variopinto partido de Enrique Baldivieso, la nueva agrupación política, convertida en el núcleo de la corriente nacionalista, tenía orientaciones ideológicas y políticas bastante claras. Con la experiencia de las transformaciones revolucionarias del régimen militar-socialista, los llevaron a constituir el nacionalismo revolucionario, versión boliviana de nacional-reformismo. Aunque en ese periodo los nacional-reformistas todavía no formulaban claramente su programa, es posible afirmar que con el diario *La Calle* se formó un núcleo alrededor del cual comenzó la definición del futuro Movimiento Nacionalista Revolucionario. El Partido Socialista Independiente fue formado por personajes cuyas ideas políticas eran definidas como nacionalistas-revolucionarias, tipo indoamericanismo aprista.

Después de la clausura de la Asamblea Constituyente, los partidos de izquierda y de centro-izquierda gobiernistas, más algunos políticos, hicieron otro intento de formar un frente único, o más exactamente una segunda edición del Partido del Socialismo de Estado de 1937. En diciembre de 1938, el expresidente de la Asamblea Constituyente, Renato Reverín, inició las consultas entre las agrupaciones partidarias sobre la unificación de los grupos y de los partidos socialistas oficialistas (*La Calle*, 13 de diciembre de 1938). Durante dos meses, tuvieron lugar intensas conversaciones sobre la unión del Partido Socialista Independiente –liderado por Paz Estenssoro–, de los socialistas de José Tamayo, de los excombatientes de la Legión de Ex Combatientes y de los republicanos socialistas de Gabriel Gosálvez. Esos tres grupos acordaron formar la Unión Socialista Democrática, a la cabeza de Reverín y de Gosálvez (*La Calle*, 8 de marzo de 1939). Este último pensaba en crear un respaldo político de un gran partido de centro-izquierda para Busch, quien con ese apoyo podría enfrentar tranquilamente las nuevas elecciones parlamentarias. La idea de la unidad duró el tiempo exacto en que Gosálvez permaneció en el cargo de ministro. Al abandonar el gabinete, en

marzo de 1939, se deshizo de la alianza recién nacida. Busch se interesaba poco en las construcciones políticas que seguían la perspectiva de la evolución democrática del régimen; al parecer, ya se inclinaba hacia soluciones más radicales.

Mientras tanto, más y más grupos de izquierda pasaban a la oposición. El influyente Frente Popular de Potosí, en abril de 1939, expresó su desencanto con la política de Busch y negó su apoyo político a las autoridades centrales. Tamayo, uno de los líderes fundadores del partido silista y, después, del Partido Socialista, intentó con poco éxito rehacer este último, al ver que la Unión Socialista Democrática no tenía mucha expectativa. El nuevo partido de corte socialista se distanció del Gobierno. Apareció así una tendencia clara en los partidos de izquierda, abandonar el régimen, que se enfrentaría al aislamiento político.

La salida de Gosálvez del Gobierno y su partida de Bolivia significaron la ruptura de los republicanos socialistas con el socialismo de Estado y con Busch, personalmente. Por otra parte, la muerte de Bautista Saavedra, el 1 de marzo de 1939, eliminó el problema personal de las relaciones entre los partidos tradicionales: liberales, republicanos genuinos y republicanos socialistas. Se unieron en su oposición a los militares-socialistas. Los partidos tradicionales hicieron el esfuerzo de restablecer sus organizaciones. El 22 de marzo, esos partidos, después de dos semanas de discusión sobre el programa conjunto, se unieron en el Bloque Concordancia. La nueva alianza publicó su manifiesto, escrito por Demetrio Canelas, exigiendo la vuelta de los militares a los cuarteles y el traspaso del poder a los partidos tradicionales (*La Calle*, 14 de marzo de 1939).

En la esfera económica, los partidos oligárquicos llamaron a poner fin a la práctica de las tasas de cambio diferenciadas, que perjudicaban a los exportadores. Además, rindiendo tributo al ultrapatriotismo demagógico, el Bloque Concordancia se negó a reconocer el Tratado de Paz de 1938, considerando necesario empezar la compra de armamento a gran escala para una guerra revanchista con Paraguay. El manifiesto fue firmado por los enemigos acérrimos del régimen militar-socialista: Canelas, Arguedas y sus antiguos aliados Enrique Herzog y Jorge Rodas Eguino.

La reactivación de la oposición liberal-conservadora y el alejamiento de la izquierda causaron la furia de Busch, quien negaba a los partidos tradicionales su derecho a participar en la vida política del país. Los consideraba como un agolpamiento de politiqueros en bancarrota, responsables de la crisis boliviana. Por ello, refrescó los ya olvidados postulados ideológicos del socialismo de Estado. En enero de 1939, utilizó su mensaje de Año Nuevo dirigido a los bolivianos en el extranjero para emprender la respuesta político-ideológica al liberalismo y a los partidos tradicionales. En ese discurso, subrayó que el ca-

mino escogido de su Gobierno era del socialismo moderado, de la liquidación de todos los privilegios y de la armonía de los intereses del capital y del trabajo dentro de la justicia social (*La Calle*, 11 de enero de 1939).

Su disputa con los partidos tradicionales se compensaba con las relaciones "cordiales" con Patiño y su séquito. Los patiñistas cercanos al presidente habían logrado sacar al reformista Vicente Mendoza López del cargo de ministro de Hacienda. Demostrando su habilidad y su inventiva, el *lobby* oligárquico utilizaba la retórica nacionalista de izquierda en la lucha contra los propios reformadores. La sincera fe religiosa de Mendoza López fue presentada a Busch como testimonio de su supuesta posición proclerical y prooligárquica. En su lugar, fue propuesto e inmediatamente aceptado por Busch un representante de los barones del estaño y de los banqueros, Santiago Schulze (*El Diario*, 1 de abril de 1939). El cargo económico clave, de nuevo, quedó en manos del partido patiñista.

Aunque los oligarcas pudieron ubicar a un hombre de sus filas en un puesto central del gabinete, el presidente seguía orientándose hacia la solución radical de los problemas socioeconómicos del país: establecer un régimen totalitario. Busch intentó hallar ayuda desde el exterior. El 9 de abril de 1939, se reunió con el embajador alemán Ernst Wendler para discutir sobre las posibilidades de recibir apoyo moral y material por parte de Alemania, en caso de establecer un régimen anticomunista totalitario. Al mismo tiempo, en Berlín, se analizaba la creación de un bloque de Estados profascistas en América del Sur, compuesto por Perú, Argentina y Bolivia. Indudablemente, el embajador alemán apoyaba las intenciones de Busch. Sin embargo, Berlín respondió que no era recomendable vincular la transición hacia formas totalitarias de Gobierno con el apoyo de Alemania (Blasier, 1972: 28). Ofrecieron, en cambio, nada más que la colaboración de sus asesores políticos, causando el desencanto en Busch.

La segunda mitad de la década de 1930 se caracterizó en América Latina por la formación de dos bloques de Estados contrarios. Uno orientado hacia las potencias del eje y el otro a los países democráticos. Las simpatías ideológicas y políticas de los países latinoamericanos solían contradecir, a veces, sus intereses económicos directos.

Mientras tanto, la política exterior de los militares-socialistas se manifestaba en extremo contradictoria. La cuestión de la guerra civil española se convirtió en un examen sui géneris de política interior y exterior del socialismo de Estado. Aunque la posición oficial de Bolivia era la no injerencia y la neutralidad en dicha guerra, diferentes partidos políticos ocuparon posiciones en ambas partes en conflicto, evidenciando la correlación de fuerzas en la sociedad. Los políticos conservadores y los periódicos *El Diario*, *La Razón* y *Última Hora* apoyaban a los franquistas. Las organizaciones obreras e iz-

quierdistas se solidarizaron incondicionalmente con la causa republicana y con el Frente Popular.

El Partido Socialista y el diario *La Calle* se pronunciaron categóricamente en contra de la rebelión franquista, sin olvidar que muchos militantes del partido y partidarios de ese medio simpatizaban con los fascistas italianos y con el nazismo alemán. Considerando que Benito Mussolini y Adolf Hitler participaban en la guerra al lado de Francisco Franco, habría sido lógico esperar el mismo comportamiento de sus adeptos en América Latina. Empero, para los socialistas bolivianos, a pesar de su simpatía, el nacional-socialismo y el fascismo fueron, en muchos aspectos, fenómenos ideológicos y políticos muy particulares. Ellos no siempre imitaban a sus ídolos. En la ideología de los nacional-reformistas bolivianos –los socialistas de *La Calle*–, se mezclaban el antiliberalismo, el nacionalismo, la xenofobia y el antisemitismo con las ideas antioligárquicas, antiimperialistas y socialistas.

Según el periódico *La Calle*, el franquismo, el conservadurismo y el clericalismo boliviano eran fenómenos de la misma naturaleza. Al comienzo de la Guerra Civil, los publicistas franquistas en España pusieron un signo de igualdad entre la cruzada de 1936 y la conquista de América, haciendo énfasis en la misión de España de consolidar el catolicismo y sus valores tradicionales. Aunque el franquismo se concentraba en criticar al liberalismo, sus ideas hegemónicas respecto a América Latina provocarían la oposición incluso al interior de los partidos y de los grupos conservadores de derecha (Pardo, 1995: 39-40). La consigna de los franquistas –"evangelización contra el comunismo"– y la idea de un nuevo imperio repelían a los partidos políticos antiliberales y nacionalistas que pudieron haber sido sus aliados bajo otros postulados ideológicos. Las consignas tradicionalistas de Franco no pudieron despertar la simpatía de los radicales bolivianos que, decididamente, habían ocupado posiciones al lado de los republicanos españoles y del Frente Popular.

La declaración de apoyo incondicional a los republicanos españoles hecha por el Gobierno mexicano tuvo un enorme significado para los socialistas bolivianos y para el régimen mismo. *La Calle* publicó esa declaración –con posterioridad dedicó páginas enteras al seguimiento de la guerra en España–, expresando su solidaridad con los republicanos (*La Calle*, 13 de agosto y 12 de octubre de 1936). Las posiciones de ese periódico y de los socialistas ejercieron una influencia decisiva sobre la política de los militares-socialistas respecto a la guerra. El Gobierno franquista pidió a Bolivia su reconocimiento y el establecimiento de relaciones cordiales entre ambos. El Gobierno boliviano nunca respondió a esa invocación.

En octubre de 1936, fue asesinado en Madrid el embajador boliviano. El encargado de negocios de Italia en Bolivia, aferrándose a ese incidente,

utilizó su influencia, principalmente con militares bolivianos y miembros del gabinete, fervientes admiradores de Mussolini, con el objetivo de que el Gobierno de Toro rompiera relaciones con los republicanos españoles y reconociera a Franco. Sin embargo, incluso en esas condiciones, los italianos no pudieron lograr sus propósitos. Toro no deseaba complicaciones internacionales por una cuestión cuyo desenlace aún no estaba claro.[352]

El Gobierno de Busch seguía la línea de Toro. En julio de 1937, el Gobierno chileno pidió la opinión de Bolivia sobre el reconocimiento preliminar de Franco. La respuesta del ministro Enrique Finot fue inequívoca al señalar que Bolivia seguía con la política de no injerencia y consideraba inoportuno el planteamiento chileno de reconocer a Franco.[353] Los militares-socialistas no apoyaron el motín de Franco, a pesar de la simpatía de figuras del Gobierno y del mismo Busch hacia el nazismo alemán y el fascismo italiano, ambos aliados de Franco. Si el nacional-socialismo y el fascismo aparecían ante sus ojos como movimientos revolucionarios antiliberales cercanos a los propios militares-socialistas, Franco estaba asociado con el "viejo régimen" y la oligarquía. El portavoz ideológico del régimen, el diario *La Calle*, con todo su antiinternacionalismo y su anticomunismo, apoyó activamente a los republicanos españoles hasta el final de la guerra (Knudson, 1986: 60-61). Incluso a finales de 1938, el Gobierno continuó haciendo gestos prorrepublicanos. De tal manera, el jefe del gabinete, Gosálvez ordenó la prohibición de todas las banderas franquistas durante la celebración del Día de la Raza, ya que Bolivia no reconocía a Franco.[354]

El Gobierno boliviano reconoció a Franco en febrero de 1939, uniéndose a la mayoría de los países latinoamericanos, cuando ya se conocía el resultado de la Guerra Civil. Inicialmente, Bolivia había pedido la opinión de México sobre la posición que ocuparía ese país. Al conocer el rechazo categórico de México al régimen franquista, Bolivia expresó su comprensión sobre su postura y terminó uniéndose al coro de los Estados latinoamericanos.[355]

Las acciones pronazi demostrativas del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la prensa progubernamental se constituyeron en el reverso de la política

352 AHGE-SRE, 1936, "Legación en Bolivia. Rebelión en España. Informe de 19 de agosto 1936", III-767-2, folio 1.

353 AHGE-SRE, 1937, "Legación en Bolivia. Guerra en España. Cable de 05 de julio de 1937", III-767-2.

354 AMIN-RREE-MIN IN, 1938, "Carta de G. Gosálvez al Jefe de la Policía de La Paz del 11 de octubre de 1938", 1-109 (0112).

355 AHGE-SRE, 1939, "Legación en Bolivia. Guerra en España. Informe de 24 de febrero de 1939", III-767-2.

exterior del régimen. Los gestos profascistas de los miembros del gabinete y de los conocidos activistas políticos se convirtieron en hechos habituales. La simpatía pronazi estaba muy difundida entre los militares y los políticos. Al llegar los militares-socialistas al poder, intensificaron los lazos multifacéticos con los Estados fascistas. Durante el Gobierno anterior, en octubre de 1936, había arribado a Bolivia una misión italiana para capacitar a la Policía. La delegación fue solemnemente despedida en Roma por el mismo Gian Galeazzo Ciano –también conocido como el conde Ciano–, que los llamó mensajeros de las revelaciones del fascismo al Nuevo Mundo. En la cresta de la ola del entusiasmo profascista, apareció en Bolivia la Legión Nacional Socialista de los Excombatientes del Chaco, con claras simpatías hacia el nazismo.[356]

En ese periodo, las relaciones entre Bolivia y la Alemania nazi tenían un carácter cordial. Tiempo atrás, el coronel Jorge Sanjinés, designado por Toro como embajador en Alemania, durante la ceremonia de entrega de las cartas credenciales a Hitler, el 12 de noviembre de 1936, expresó:

> En Bolivia admiramos la Alemania nacional-socialista por lo mismo de que el gobierno actual de mi Patria está empeñado en realizar obra de socialismo nacional cumpliendo el programa de reconstrucción que necesita el país después de la larga Guerra del Chaco. Admiramos particularmente la grandiosa concepción del régimen político hitleriano frente a la tendencia disociadora y anarquista del comunismo soviético.[357]

En su discurso de respuesta, Hitler subrayó lo siguiente: “El hecho de que Bolivia vea en el comunismo a su enemigo de su acción constructiva, no puede ser sino un motivo auspicioso para el recíproco entendimiento de nuestros pueblos”.[358] En su informe sobre la conversación con Hitler, el embajador Sanjinés, con asombro, señaló lo bien informado que estaba el *führer* (líder) sobre el desarrollo político de Bolivia y la construcción del nacional-socialismo por el Gobierno de Toro. De tales evidencias, Sanjinés dedujo que la Embajada de Alemania en La Paz estaba realizando un intenso trabajo de información a Berlín sobre todo lo que ocurría en el país. Además, Hitler recordaba sobre los tradicionales vínculos y las buenas relaciones existentes entre los militares bolivianos y alemanes.[359]

---

356 AHGE-SRE, 1936, “Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Revista política. Octubre. 1936”, 27-29-13, folios 29-30.

357 AMIN-RREE-Alemania, 1936-1937, 1-R-14, folio 128.

358 AMIN-RREE-Alemania, 1936-1937, 1-R-14, folio 129.

359 AMIN-RREE-Alemania, 1936-1937, 1-R-14, folios 131-132.

Ya en el mandato de Busch, las relaciones de los militares-socialistas con Alemania continuaron siendo cordiales, pese a determinadas fricciones, como por la posición de Bolivia respecto a la guerra civil española o a la cuestión de la inmigración judía. Los alemanes ofrecían su ayuda en la reorganización del Ejército boliviano y en la educación de la juventud. El Gobierno alemán anunció su disposición a recibir cualquier cantidad de oficiales para su instrucción. También las juventudes hitlerianas (*hitlerjugend*) invitaron a numerosas delegaciones juveniles bolivianas a descansar y a estudiar en el imperio nazi.[360]

La influencia nazi en los militares-socialistas fue enorme. Imitando a los fascistas europeos, los militares bolivianos promulgaron leyes y actas que causaron una justa indignación en el país y en el extranjero; llegaron hasta vergonzosas acciones por parte del Gobierno boliviano. En enero de 1937, el coronel Wálter Méndez, un furioso antisemita y autodenominado nacional-socialista, ocupó el cargo de ministro de Agricultura. Su ministerio, que antes ocupaba un segundo plano, empezó a tratar temas puramente políticos, incluso de política exterior. Méndez preparó una escandalosa ley de inmigración antijudía que, en algunos párrafos, repetía exactamente las Leyes de Nürenberg contra los hebreos. Las nuevas reglamentaciones establecían la inscripción obligatoria de los hebreos en la Policía y el control de la actividad económica de los inmigrados judíos, autorizados a trabajar en la agricultura solamente en las regiones tropicales del país, en proceso de colonización (*El Diario*, 19 de marzo de 1938). Busch firmó inmediatamente el Proyecto de Ley, que después derogaría bajo la presión social y el cuerpo diplomático, cediendo a los ruegos de los miembros prudentes del gabinete.[361] En 1938, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una disposición que prohibía la inmigración hebrea hacia territorio boliviano. En un país multiétnico como lo es Bolivia, las acciones pronazis del Gobierno no solo causaban ira e indignación, sino que parecían absurdas. Pasado un día, la Junta Militar anuló dicha disposición y, más tarde, declaró sus intenciones de estimular la inmigración judía para la colonización del Oriente del país.[362]

El 14 de marzo de ese año, fue publicada otra disposición regulatoria de la inmigración hebrea. Con ella, se ordenaba a todas las instituciones consulares en el extranjero a enviar al Ministerio de Agricultura las solicitudes de ingreso al país de los hebreos. Se permitía entregar visas tan solo a aquellas personas

---

360 AMIN-RREE-Alemania, 1936-1937, 1-R-15, folio 34.

361 AHGE-SRE, 1938, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Suplementarios. Informe de 3 de marzo de 1938", 30-3-16.

362 AHGE-SRE, 1938, "Legación en Bolivia. Informes Políticos Reglamentarios. Informe de 18 mayo de 1938", 30-3-15.

que, por su profesión, motivos y estado de sus bienes, fuesen capaces de participar en la colonización de las regiones agrícolas orientales de Bolivia. Es más, para los hebreos que salían del país provisionalmente, se establecía un régimen especial bajo el cual podían retornar solamente en el caso de que hubieran obtenido con antelación un permiso de esa cartera de Estado (República de Bolivia, 1938a, tomo 1: 542-543). La prensa nacionalista anunció cínicamente que tal régimen era una política totalmente libre de todo antisemitismo.

La protesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia contra el otorgamiento de visas de residencia en el territorio del Chaco por parte de Paraguay a 15 mil judíos austriacos fue un acto antisemítico. El problema no radicaba en la política pronazi de Bolivia, sino en la inadmisibilidad de disponer de un territorio cuya pertenencia a Paraguay había sido reconocida por los acuerdos internacionales. En esencia, Bolivia tuvo la razón en su protesta, pero la actuación fue poco hábil por parte del Gobierno, así como la acentuación de la cuestión judía que terminó perjudicando la imagen del país. Además, Bolivia solicitó a Alemania que obstaculizara la emigración hebrea de Austria a Paraguay. La solicitud se hizo al puro estilo pronazi y fue interpretada como un acto de solidaridad con la política antisemita de Alemania.[363] Muchos países, incluyendo Estados Unidos, intercedieron por los emigrantes judíos de Europa, viéndose Bolivia obligada a justificarse (Brienen, 1996: 89). Solo la apertura del país para una ilimitada inmigración judía disminuyó la tensión alrededor de Bolivia, sospechosa, no sin fundamento, de realizar una política exterior e ideológica proalemanes. En junio de 1939, el Ministerio de Migraciones limitó otra vez la entrada de judíos, estableciendo una cuota de 250 personas al mes (*La Calle*, 27 de junio de 1939).

El antisemitismo se introdujo en el movimiento nacionalista boliviano encarnado en el periódico *La Calle* y en los socialistas. Ese fenómeno fue una evidente mercancía política de importación. En ese diario, con artículos antisemíticos, intervenía Carlos Montenegro, para quien el símbolo de la penetración hebrea en Bolivia era uno de los barones del estaño, Mauricio Hochschild. Los ánimos antisemitas aumentaron a fines de la década de 1930, cuando empezaron a aparecer los refugiados judíos de Europa, que huían de las persecuciones nazis. *La Calle* afirmaba en sus editoriales que los hebreos no se dedicaban a la producción, sino al comercio y a la especulación, culpando a los inmigrantes por explotar al pueblo boliviano (*La Calle*, 10 de diciembre de 1938).

El antisemitismo intelectual recibió el apoyo inesperado de amplios grupos de población. Esto porque los inmigrantes compraban activamente los terrenos agrarios cerca de las ciudades y en los pueblos, y se convertían en

363 AMIN-RREE-Alemania, 1936-1937, 1-R-15, folios 31-32.

los propietarios de comercios, talleres y otras pequeñas empresas. Así surgió una capa de bolivianos que vendía sus negocios o sus talleres y que perdió en el periodo de la inflación lo percibido por sus ventas, culpando a los judíos recién llegados. Esos elementos alimentaban los ánimos antisemitas de los partidos políticos y de los movimientos de tipo nacionalista. Los periódicos comentaban las peleas cotidianas de los bolivianos y de los judíos europeos en la repartición del mercado minorista, así como sobre los conflictos con los negocios hebreos y los puestos de venta en el mercado (*La Calle*, 18 de enero de 1938). Aunque no corresponde exagerar la magnitud del fenómeno, la retórica antisemita se convirtió, por largo tiempo, en parte del discurso de los políticos nacionalistas.

En febrero de 1939, el problema judío se discutió al más alto nivel sociopolítico. En la Sociedad Amigos de la Ciudad de La Paz, el conocido filósofo Roberto Prudencio dictó una charla de agudísimo tono pronazi. Como opositor intervino el político liberal Tomás Manuel Elío, quien subrayó el vínculo indisoluble de la democracia con la tolerancia racial, religiosa y social. Elío se pronunció por la victoria de las democracias ante la ofensiva de los regímenes totalitarios en Europa. En la conferencia estaban presentes los ministros Carlos Salinas Aramayo y Eduardo Diez de Medina, quienes no condenaron el extremismo de Prudencio; solamente insistieron en la necesidad de conducir una política migratoria selectiva que estimulara la colonización de las regiones remotas del llano boliviano (*La Calle*, 4 de febrero de 1939). De esa manera, se solidarizaron en las exigencias de limitar la inmigración. El antisemitismo entró sólidamente al ideario nacional reformista boliviano entre las décadas de 1930 y 1940. Después, ese fenómeno se reflejó en el programa de principios del Movimiento Nacionalista Revolucionario, en el que se desenmascaraban "las artimañas antinacionales del judaísmo internacional" y, más adelante, se exigía "la prohibición absoluta de la inmigración judía" que no tenga eficacia productiva (Lora, 1987a: 48-49).

Irónicamente, el *affaire* de las visas judías aceleró la crisis del régimen del socialismo de Estado. Como ya se dijo, el 9 de junio de 1938, el Gobierno anunció las facilidades para la migración hebrea con fines de colonización de la región oriental del país (*El Diario*, 10 de junio de 1938). Siguiendo el ejemplo de los argentinos, se quería insertar grupos hebreos en el Chaco para poblar los lugares desérticos del país. En enero del siguiente año, el Gobierno boliviano dio a la Policía la indicación de comprobar la ocupación de los hebreos recién llegados. Si estos no se dedicaban al trabajo agrícola en las regiones de colonización, la disposición era expulsarlos del país (*La Calle*, 15 de enero de 1939).

Con todas las limitaciones discriminatorias, Bolivia era el único país en el mundo que permitió, en aquella época, una inmigración judía ilimitada,

aunque esa medida causó el descontento de una parte de la oficialidad y de los nacionalistas. En un año, ingresaron a Bolivia diez mil judíos europeos (Klein,1965: 177). Un gran escándalo se desencadenó cuando se supo que el cónsul boliviano en París otorgaba las visas de entrada recibiendo una "recompensa" de 20 mil francos por caso. Los diarios exigieron una investigación y la dimisión de los funcionarios involucrados en el negociado. La primera víctima fue el canciller Diez de Medina.

El escándalo provocó confusión en la dirección de los partidos socialistas, entre los ministros y los militares. Busch se convenció definitivamente de la decadencia moral y de la corrupción de las autoridades estatales. Entre marzo y abril de 1939, Busch vivió una grave crisis sicológica y moral; se encontraba enormemente descontento con los resultados de su Gobierno. Durante varios meses, se venían discutiendo vías de cambio radical mediante el establecimiento de un régimen totalitario que acabaría con la politiquería destructiva y la corrupción. El presidente estaba convencido de que la renovación de la nación y su rejuvenecimiento podrían provenir solamente de la fuerza y de la energía del gobernante. Ello lo incitaba a la idea de liquidar el gobierno democrático, suprimir las elecciones al Congreso Nacional de mayo de ese año e implantar la dictadura.

En marzo de 1939, murió Alberto Zelada, uno de los compañeros de Busch, el ministro más joven, filósofo y destacado político. La muerte de los amigos personales, las derrotas políticas y los errores en la economía deprimieron al presidente. En abril, surgieron graves problemas de abastecimiento de alimento en las ciudades. Cesó casi por completo la venta de carne (*La Calle*, 4 de abril de 1939). El Gobierno resultó incapaz de manejar la situación. Fue entonces que Busch tomó la firme decisión de imponer la dictadura, emprender un esfuerzo personal enérgico y cambiar radicalmente la situación, empezando a construir una nueva Bolivia.

Con esa acción, ese abril, terminó el periodo democrático de Busch. Desde su llegada al poder, en julio de 1937, no había modificado el curso general de las reformas políticas que se realizaban bajo la bandera del socialismo de Estado. La fuerza del régimen consistía en su apoyo a un frente amplio de partidos y de movimientos políticos, de sindicatos y el Ejército. Sus intentos de lograr la unidad nacional, juntando mecánicamente en su gabinete a los representantes de las más variadas corrientes políticas, desde los nacionalistas, los fascistas y los socialistas de izquierda hasta personeros prooligárquicos, conservadores de derecha que realizaban cambios de rumbo político permanente, solamente marcó el paso lento en medio de la creciente crisis socioeconómica.

La lentitud del proceso de reformas, cuyo instrumento principal debió ser la Asamblea Constituyente, enredado en la confusión de la política eco-

nómica, indignaba tanto al presidente como a sus partidarios y aliados. La autoridad no se atrevió a tocar los puntos más críticos: los monopolios mineros y la reforma agraria. Los militares-socialistas no pudieron –al parecer no sabían cómo– emprender las reformas cardinales.

La ausencia de cambios reales decepcionó a los aliados de izquierda de Busch. Las fuerzas izquierdistas antioligárquicas, los principales asociados al régimen, exigían acciones decisivas y reformas verdaderas. La modificación de la política, en la que cifraban grandes esperanzas los socialistas, se frustró, en particular por la actitud pasiva del presidente. Los planes corporativistas quedaron en programas y en manifiestos de los partidos más radicales, al no encontrar con el apoyo de la sociedad y de las autoridades. Las reformas económicas no fueron iniciadas y los reformadores aún no determinaban los métodos y las formas de su realización. A veces, parecía que incluso los claros objetivos declarados por el régimen eran solamente consignas vanas que no tenían relación alguna con la práctica real del Gobierno.

La sociedad no entendía qué querían los militares-socialistas en realidad. La ausencia de éxitos económicos causó el fin de las reformas políticas y fortaleció a los partidos tradicionales, que representaban los intereses de la oligarquía. Lo único que logró el gobierno militar-socialista fue el convencimiento general de la necesidad y de la inminencia de las reformas radicales. Para Busch, el fracaso de los intentos de crear un partido oficialista bajo el rótulo nacionalista o socialista fue una prueba de la debilidad de los políticos antioligárquicos y de su incapacidad para crear un bloque reformista hegemónico. El experimento del gobierno democrático de los militares-socialistas resultó ineficiente. La conclusión sacada por Busch de los fracasos de las reformas fue la idea de establecer una dictadura personal, como la única salida del empate político.

5.2. La dictadura: el ocaso del héroe

La ausencia de resultados concretos de su Gobierno, la falta de avances, la situación crítica de la economía, el cansancio y la irritación de la lucha política, como también las intrigas palaciegas, fueron los motivos que Germán Busch tuvo para instaurar su dictadura. En tanto, causaban gran impresión los "éxitos" del fascismo en Europa. Por todas partes los comentaban. Los regímenes totalitarios atraían, por su imagen romántica de la unidad nacional, la armonía de las clases y la paz social, presentadas por la propaganda nazi: hablaban de la unidad política del pueblo, así como de los éxitos económicos, la superación de la cesantía y de la inflación. A Busch le interesaban poco los detalles de las reformas económicas y el funcionamiento del sistema político nazi; le atraía,

en cambio, la forma del gobierno que impedía la democracia formal, convertida ante sus ojos en sinónimo de corrupción y de politiquería.

Sus asesores y amigos, en primer lugar Carlos Salinas Aramayo, hombre de biografía extraordinaria y trágica,[364] que en esos años se agitaba entre las ideas socialistas y los entusiasmos profascistas, instaba a Busch a manejar una dictadura de tipo reformista de izquierda. El político hizo muchos esfuerzos para preparar al presidente para un cambio drástico de rumbo y establecer la dictadura. El ministro del Interior, Vicente Leytón, que tenía la reputación de ser un político de izquierda, también fue partidario de la dictadura. Muchos observadores del momento pensaban que se trataría de una dictadura tipo fascista.

Para el asombro de todos, el 24 de abril de 1939, Busch anunció la instauración de la dictadura. Se dirigió a la nación con un manifiesto en el que relató detalladamente su biografía y su servicio por el bien del país, subrayando su decepción por la ineficiencia de la autoridad sumida en la corrupción y acusando a los círculos gobernantes, a los funcionarios públicos, a la prensa y a los partidos políticos de conducta inmoral. El presidente constató que tres años del socialismo de Estado no llevaron al país a ninguna parte, puesto que no se logró ninguno de los objetivos planteado por el proceso revolucionario de mayo de 1936. Recordó que la derecha exigía que los militares volviesen a sus cuarteles. En esos llamados, Busch veía el peligro del surgimiento de una enemistad entre el Ejército y el pueblo, situación que pudo llevar al país a una guerra civil. También señaló la amenaza de la división del Ejército que trataban de lograr los partidos de derecha, instando a la cúpula conservadora a sacar de sus mandos a los reformistas y preparando el retorno de la oligarquía al poder. Busch llamó al país al "rejuvenecimiento", a construir una nueva sociedad libre de la reacción oligárquica y del extremismo de izquierda:

> El proceso actual de la nación oscila entre el privilegio financiero que intenta hoy, como ayer, absorber todo el poder del Estado y las tendencias extremistas que aspiran al trastorno radical de las instituciones […]. Por encima de las tendencias extremistas, con Bolivia […] he medido la magnitud de la obra que realizo y asumo, decididamente, la responsabilidad de mis actos (Díaz Machicao, 1957a).[365]

Las garantías políticas constitucionales y las instituciones republicanas del poder fueron suprimidas. El congreso fue oficialmente disuelto y las elec-

364 Fue fusilado en el Gobierno de Gualberto Villarroel, en 1944, como representante de la oligarquía "vendida" a los norteamericanos.

365 Nota editorial: Página de la cita no especificada por el autor.

ciones futuras fueron aplazadas por tiempo indefinido. El decreto firmado por todo el gabinete de ministros anuló los mandatos de los diputados, pero prometía elecciones parlamentarias generales en el futuro. Aunque se proclamaba la vigencia de la Constitución de 1938 en aquellos límites que no contrariaban el decreto de la dictadura, el mecanismo democrático del poder estaba liquidado (*La Calle*, 25 de abril de 1939). Busch empezó a gobernar por decreto. El ministro de Gobierno, Vicente Leytón, dijo a los periodistas que lo asediaban:

> Ahora se trata de una Dictadura que no tiene otro fin que el de preparar al país para que llegue a ejercitar la verdadera Democracia [...] En lo que se refiere a la cancelación del mandato de los convencionales, no hemos hecho otra cosa que responder al pedido unánime del país (Díaz Machicao, 1957: 95).

El golpe aparecía el típico cuartelazo caudillista latinoamericano. Un gran sector del pueblo sentía todavía simpatía por Busch y aprobó sus acciones. Algunos izquierdistas, entre ellos Tristán Marof, apoyaron de entrada la acción (Valencia Vega, 1987), pero la mayoría condenó el golpe. Aquel 26 de abril, en el periódico *La Calle* apareció un violento artículo antipresidencial escrito por Augusto Céspedes, reprobando las acciones de Busch, pues las consideraba un intento de restauración oligárquica en el poder. No lo asustaba la dictadura, todo lo contrario:

> [...] si hubiéramos hablado sobre el régimen totalitario que pone el Estado por encima de todos los intereses privados y lo libere de la influencia imperialista, entonces sería un sistema mucho más eficaz que cualquier democracia; no obstante, este régimen debe surgir de la revolución social, pero ahora el país se enfrenta con la dictadura que conserve toda la arcaica estructura democrática (*La Calle*, 26 de abril de 1939).

Céspedes acusó a la oligarquía de querer dominar al presidente entregándole facultades dictatoriales.

Entre los opositores a la dictadura figuraban los aliados más fieles del régimen de los militares-socialistas: el periódico *La Calle* y los socialistas. El 1 de mayo de 1939, Augusto Céspedes, Félix Eguino Zabala, Víctor Paz Estenssoro, Wálter Guevara Arze, Carlos Medinaceli y otros emitieron un manifiesto en el que protestaban contra la dictadura y dejaban abierta la puerta para colaborar con Busch. El documento sostenía que ante el dilema de apoyar o de oponerse a la dictadura habría que analizar si esta era capaz de liberar al país del yugo oligárquico e imperialista, y si con el gobierno *de facto* serían adoptadas las medidas radicales como la nacionalización del Banco

Minero, el control sobre las exportaciones, la limitación de los latifundios, etcétera. Al finalizar, el escrito decía: "si la dictadura es capaz de resolver los problemas fundamentales del país, entonces, la sociedad en su conjunto la va a apoyar sin vacilar" (Antezana, 1965: 26).

Después de la publicación de este manifiesto, el periódico *La Calle* fue temporalmente cerrado por orden de Busch. Reapareció 20 días después, el 17 de mayo, con motivo del aniversario de la Revolución de Mayo, analizando de la siguiente manera la evolución del socialismo de Estado: el fracaso del socialismo era culpa de los intelectuales y de los partidos de izquierda que no consiguieron crear una estructura eficiente para la consolidación del socialismo (*La Calle*, 17 de mayo de 1939). Pero pronto los ánimos derrotistas de los socialistas desaparecieron y ellos volvieron a colaborar con Busch. En *La Calle*, sin embargo, fue establecida la censura política. Por ironía, el censor designado fue el director del periódico conservador *Última Hora*, Jorge Canedo Reyes (Céspedes, 1956: 197). Incluso en tal momento Busch se mantuvo fiel a su costumbre de juntar, tal como lo hiciera en su mandato, a los enemigos irreconciliables.

Muchos temían que la dictadura tomara un curso profascista. Pronto se demostró que los temores eran vanos. El Gobierno se inclinó con mayor intensidad hacia los reformadores de izquierda. Además, con el objeto de tranquilizar a la opinión pública y a los Gobiernos extranjeros, el embajador de Bolivia en Estados Unidos declaró que su país se convertiría, desde ese momento, en su aliado contra el bloque de los Estados fascistas. El embajador subrayó que la dictadura había puesto fin a la penetración del fascismo en Bolivia, asestando a la vez un golpe demoledor al comunismo y al anarquismo. Para terminar con los rumores ampliamente divulgados sobre la intención de Bolivia de aliarse con las potencias del Eje, la Cancillería expuso que en el país no se había establecido una dictadura totalitaria, sino un régimen provisional extraordinario y que Bolivia estaba del lado de la democracia y del continente americano en general (*La Calle*, 18 de mayo de 1939).

Para corroborarlo, con el decreto de fecha 27 de abril de 1939, Busch prohibió la "propaganda de doctrinas políticas extranjeras, [el] uso de insignias, banderas, uniformes ligados con esas teorías".[366] La lucha contra las "ideologías extranjerizantes", planteada por los nacionalistas Montenegro y Céspedes, se plasmó en ese decreto que bien pudo ser utilizado por igual contra el comunismo que contra el fascismo. Los fundamentos ideológicos propios de la dictadura consistían en la purificación moral y en el rejuvenecimiento de la nación. Según René Zavaleta Mercado (1990: 61), Busch intentó llevar a la práctica las ideas de Franz Tamayo. Se trataba de la con-

366 RCHIDNI, fondo 495, legajo 122, número 1: 40.

traposición voluntarista al destino y era un intento de aceleración histórica mediante el sacrificio personal en nombre de la nación.

La idea principal de la dictadura podía ser formulada de la siguiente manera: *la nueva Bolivia es un país libre del egoísmo personal y de la corrupción*. La dictadura hablaba de la revolución moral. La instrucción y la educación del pueblo ocupaban el papel principal en la purificación ideológico-moral. Una de las primeras acciones de la dictadura fue la promulgación del nuevo Código de la Educación. La Constitución de 1938 proclamaba que la responsabilidad fundamental del Estado era garantizar la educación primaria general. En la presidencia de Busch, los recursos presupuestarios destinados a educación llegaron a ocupar, por su volumen, el segundo lugar después de los gastos militares, cantidad casi similar a la destinada en su totalidad a los demás ministerios.[367]

Junto con la reforma de la educación fue finalizada la elaboración de la legislación laboral y social, ambas destinadas a convertirse en los pilares para lograr la paz social.[368] El 24 de mayo de 1939, con 122 artículos, fue publicado el Código de Trabajo, que empezó a ser elaborado en el Gobierno de David Toro, por Waldo Álvarez, su ministro de Trabajo y líder del sindicato de obreros gráficos. Posteriormente, en febrero de 1938, fue perfeccionado por la Comisión Conjunta de los sindicatos y del Gobierno, a la cabeza de Roberto Jordán y Remberto Capriles, quienes conservaron la base propuesta por sus antecesores izquierdistas.

El conjunto de leyes sociales recibió el nombre del Código Busch, aunque con pleno derecho pudo haberse llamado "Código de Álvarez", por su verdadero promotor. Esas leyes estaban basadas en el principio de sindicalización total, por lo que declaraban el derecho a formar sindicatos, garantizaban fueros a los dirigentes sindicales o prohibían su despido o su traslado a otros lugares de trabajo, lo que se constituía en un gran triunfo político de los trabajadores (Ponce, Stanley y Cisneros, 1968: 23).

El Código declaraba como objetivo del movimiento sindical la defensa de los intereses de los trabajadores, de ahí que introducía lo referido al contrato colectivo, las vacaciones anuales pagadas, la compensación por invalidez laboral y el abastecimiento de productos alimenticios bajo precios especiales por medio de las pulperías y de los comercios a costa de la empresa, entre otros puntos.

---

367 Estos datos, basados en los archivos del Ministerio de Hacienda, se encuentran en Marten Brienen (1996: 85).

368 Antes de proclamar la dictadura, Busch complementó la legislación social vigente con sus decretos. Así, en agosto de 1937, se modificaron las leyes de 1924, estableciendo la indemnización por invalidez laboral, enfermedad y muerte por accidente en el lugar de trabajo (República de Bolivia, 1937a, tomo 3: 132-133).

La actividad oficialista en el área de legislación social intentaba compensar las opiniones negativas de los obreros hacia la política económica del régimen militar-socialista, puesto que su salario real disminuía permanentemente, especialmente en la minería, donde tradicionalmente habían sido más altos que en las ciudades. Los ingresos de los obreros bolivianos nunca llegaron al nivel de las remuneraciones en vísperas de la Guerra del Chaco.[369]

La promulgación del Código Busch fue un gran avance en la solución de la cuestión obrera, aunque la mayoría de las normas quedó en papel. Incluso a los cinco años de su promulgación, en 1943, las autoridades gubernamentales reconocían que la seguridad social, la manutención obligatoria de los hospitales por los empresarios, los subsidios de cesantía y otros temas seguían siendo proyectos a futuro. El Código también prohibía el sistema de enganche de los obreros, práctica de contratación bárbara que generaba protestas de los sindicatos y de los partidos de izquierda. Al respecto, el artículo 31 establecía oficialmente la prohibición de tal práctica, así como el derecho exclusivo del Estado para intermediar en la contratación. Sin embargo, no fue creado el mecanismo de control que corrigiera esa situación en el ámbito laboral.

Por primera vez durante el mandato de Busch, su gabinete inició las reformas económicas. El país seguía en una prolongada crisis y los cambios positivos mediante las transformaciones dependían de la correlación de fuerzas durante el gobierno dictatorial. De un lado, en el círculo cercano a Busch, estaba su ministro de Hacienda, Santiago Schultze, defensor de los intereses de los barones del estaño. Los representantes prooligárquicos trataban de inculcar en Busch la idea de que la única posibilidad para sacar la economía nacional del callejón sin salida en el que se encontraba estaba asentada en la confianza y en el apoyo pleno a Patiño y a los demás barones, que se pintaban como los mecenas desinteresados que sacrificaban su patrimonio y sus capacidades administrando la economía en bien de la patria.

Por otro lado, Busch insistía ante sus ministros en que la culminación de las reformas fortalecería la economía del país y, una vez controlada la crisis financiera, pasarían a la industrialización. Empero, el agujero del presupuesto era tan grande que el 15 de mayo de 1939 Busch promulgó el decreto para incrementar los impuestos sobre las exportaciones, que alcanzaba al 25% de las utilidades en divisas de las compañías. El aumento del impuesto iba acompañado de la abolición de la entrega obligatoria de las divisas, exigencia planteada hacía mucho por las compañías mineras (*La Calle*, 20 de mayo de 1939). A pesar de la abolición de la entrega obligatoria de divisas al Estado, el volumen del impuesto fue tan alto en comparación con los años pasados

369 Véase el reporte "Labour Problems in Bolivia" (The Joint Bolivian-United States Labor Commission, 1943: 8).

que los decretos causaron el descontento de los exportadores; mientras tanto, la tasa única de cambio amenazaba con un salto inflacionario.

Carlos Montenegro, Víctor Paz Estenssoro, Fernando Pou Mont y otros nacionalistas de izquierda trataron de convencer a Busch de que la política trazada por sus asesores era dañina para el país y no resolvía los problemas vitales. El propio Schultze reconoció públicamente que el decreto de su autoría no solamente estaba acordado en todas sus letras con los monopolios, sino que fue elaborado para favorecer los intereses de los barones del estaño. Esa revelación hizo explotar la furia de Busch, quien inmediatamente envió a su ministro al retiro. El cambio principal del gabinete fue la designación como ministro de Hacienda al reformista Pou Mont. El mandatario, a lo militar, cambió drásticamente el rumbo de su política, encargándole la elaboración del nuevo decreto de reforma tributaria (Céspedes, 1956: 201-203). El 25 de mayo derogó los decretos anteriores, explicando esa acción con la necesidad de preparar las reformas fundamentales de la economía boliviana.

En su primera entrevista a la prensa, el nuevo ministro de Hacienda subrayó que era necesaria y urgente una reforma fiscal, haciendo mayor la imposición a los ingresos de los ricos y, de ninguna manera, reduciendo los gastos de las obras públicas, de la defensa nacional y de los salarios de los empleados. Los decretos preparados por Schultze fueron caracterizados como perjudiciales para el Estado (*La Calle*, 26 de mayo de 1938). Después, se restableció el régimen anterior de entrega obligatoria de divisas de exportación al Estado.

La Asociación de los Industriales Mineros, como respuesta al Gobierno, propuso crear un grupo especial de asesores técnicos que elaborara los principios de la política estatal en el sector. Busch acogió esa propuesta y dispuso la formación del Comité Minero Permanente, el cual debía integrar a los representantes de los monopolios y a los dueños de las minas, tanto pequeñas como medianas. Por primera vez desde la década de 1920, todos los empresarios del sector –pequeños y grandes– estaban dispuestos a unirse en torno a objetivos comunes. El alza de los precios del estaño en el mercado mundial eliminaba muchas de las contradicciones entre los productores, razón por la que sus disputas en torno a las cuotas de exportación perdían actualidad. El Gobierno no podía aprovecharlas para hacer pelear a los competidores. El Comité exigió a las autoridades abolir el sistema de tasas de cambio diferenciadas y bajar los impuestos para el sector. Esa acción de los industriales mineros no tuvo éxito.

Las exigencias de los mineros iban en contra de los planes del Gobierno. Busch aspiraba a la independencia económica del país, cuyo inicio podría ser la industrialización y la diversificación de la economía, apoyándose en la minería, que era prácticamente la única fuente de acumulación del capital

nacional. Además, el presidente era preso de sus ilusiones sobre la buena voluntad y el patriotismo de Patiño y de Aramayo. Los nacionalistas lo convencieron de lo contrario, incitándolo a establecer un drástico control del Estado sobre los monopolios mineros.

El ministro Pou Mont preparó varios decretos que dieron el inicio a las profundas reformas en el principal sector de la economía boliviana: el minero. El 7 de junio de 1939, Busch firmó tres decretos históricos pero, al mismo tiempo, fatales para su destino. El principal de ellos establecía la entrega al Estado del 100% de las divisas obtenidas por la exportación de minerales, lo cual significaba el control absoluto por parte del Estado, conservando la tasa diferenciada de cambio de la moneda nacional favorable al fisco. El artículo 38 de esa normativa señalaba la pena por la infracción al decreto por cualquier tipo de resistencia pasiva, sabotaje, baja producción o cualquier infracción en el funcionamiento de las minas (*La Calle*, 10 de junio de1939). Los infractores merecían, ni más ni menos, la pena capital. Las medidas drásticas debían garantizar el cumplimiento del decreto, el cual amenazaba con privar a los monopolios mineros de una parte de sus ganancias.

Comentando sus nuevas decisiones, Busch declaró a la prensa que su pretensión era hacer al Estado independiente de las fuerzas negativas y que su tarea era devolver al país sus riquezas. Pou Mont formuló con más precisión los objetivos de la reforma: los decretos estaban dirigidos a fortalecer la economía nacional con los ingresos de la exportación, cortando la fuga del capital (*ibid.*). Los nacional-reformistas veían en el decreto la herramienta principal de la nueva política de diversificación y de industrialización del país, mediante la cual el Estado, recibiendo una importante fuente de ahorro de los sectores exportadores, sería el actor principal.

Ese decreto produjo pánico entre los magnates y los círculos oligárquicos. Hochschild retornó urgentemente de Santiago de Chile. El 9 de junio de 1939, una numerosa delegación de empresarios mineros trató en vano de ser recibida en el Palacio de Gobierno; no pasaron más allá de la recepción, pues Busch se negó a reunirse con los representantes de los monopolios. Un día después, por radio, Busch se dirigió a la nación explicando que el Estado, en tanto regulador de la economía nacional, tendría la coordinación de los intereses económicos de la industria, el comercio y la minería con los "superiores de la colectividad". Igualmente, aseguró que el Estado prestaría su apoyo y su colaboración a la mediana y a la pequeña industria minera, y que fomentaría las cooperativas de producción, para fortalecer el capital nacional.

Busch también citó el decreto de nacionalización del Banco Minero –creado durante el mandato de Toro en 1936–, que establecía como su tarea principal la concesión de créditos y el apoyo a los pequeños y a los medianos mineros, lo que, según sus creadores, debía ayudar a la des-

monopolización del sector. Víctor Paz Estenssoro fue designado como presidente de esa entidad bancaria y como director lo acompañó Wálter Guevara Arze. El presidente explicó el establecimiento del nuevo sistema económico desde la necesidad de defender el bienestar de las clases desposeídas. Aclaró sus acciones remitiéndose al artículo 17 de la nueva Constitución, referido a la justicia social como principio de formación del modelo económico.

Para justificar su intervención en los negocios privados ante sus opositores liberales, Busch mencionó los exitosos ejemplos de control estatal de la economía en Alemania, Italia, Rumania y Suecia. De las experiencias en países latinoamericanos nombró a Argentina, Brasil y Chile, que establecieron ese control sobre el capital extranjero y las exportaciones. Como ejemplo del manejo económico estadista se refirió a la política intervencionista de Franklin Roosevelt, conocida como *New Deal* (nuevo trato). La política, según Busch, evitaba la fuga de capitales y el mayor empobrecimiento del país. De hecho, repitió todos los argumentos de la izquierda en la Asamblea Constituyente durante la discusión sobre la propiedad. En su lógica, la promulgación de la normativa respetaba la propiedad privada que cumpliera una función social (*La Calle*, 11 de junio de 1939). Los decretos eran la muestra más decisiva del nacionalismo económico.

Busch llamó al pueblo a respaldar sus reformas: "Se dirá que mi gobierno es revolucionario; sí conciudadanos, aspiro a una revolución cuyos resultados sean estos: que Bolivia aproveche sus propias riquezas" (Valencia Vega, 1987: 1785). Sus acciones fueron apoyadas por todas las fuerzas izquierdistas y nacionalistas. El hasta hacía poco díscolo periódico *La Calle* se convirtió de nuevo en el principal defensor del Gobierno. El decreto creó un estallido masivo del patriotismo y del entusiasmo popular. El 15 de junio de 1939, en La Paz, se realizó una inusitada –por su magnitud– manifestación de apoyo al presidente, que transcurrió ya entrada la noche, cuando el mandatario salió al balcón del Palacio de Gobierno para dirigirse al pueblo. En ese momento, debido a una falla eléctrica, la plaza se sumió en la oscuridad. El mitin siguió a la luz de las velas, por lo que el discurso, que sonaba especialmente solemne y romántico, declaró el restablecimiento de la soberanía del país sobre sus riquezas. Busch instó a toda la nación, a los capitalistas y a los trabajadores, a unirse en un esfuerzo común por la construcción de la nueva Bolivia, "porque ya ha llegado la hora de sacrificio en nombre de la Patria" (*La Calle*, 16 de junio de 1939).

Las circunstancias del mitin despertaron fuertes sentimientos en el propio Busch. En el banquete que se realizó después, Busch pronunció un discurso que impresionó por su profundidad y sinceridad, en el cual se notaba un fuerte dolor y tristeza por las derrotas y las humillaciones nacionales:

> Yo no he llegado a la Presidencia para servir a los capitalistas. Ellos deben servir al país y si no lo hacen por su voluntad, lo harán por la fuerza. Les juro a ustedes, camaradas, que yo, Germán Busch, demostraré a esos Patiños, Aramayos, Hochschildes, a todos los explotadores de Bolivia, que aquí hay un presidente que hará respetar a su país (Céspedes, 1956, 204).

Con esas palabras, Busch despertó las más radiantes esperanzas respecto a las nuevas reformas y a la realización de una política antioligárquica que, en los últimos años, solamente había sido objeto de discursos vacíos. Los ánimos antioligárquicos del presidente se expresaron en sus acciones ulteriores. Reorganizó su gabinete reforzando su ala nacionalista; al cargo de canciller, en vez del moderado Alberto Ostria Gutiérrez, fue designado Carlos Salinas Aramayo. En el clima de integración de bloques de Estados, en vísperas de una guerra mundial, el tema de la orientación internacional del país influía en algún grado en la elección de los rumbos del desarrollo interno. La designación del nuevo canciller suponía reforzar las tendencias nacionalistas y antiimperialistas, dejando de lado el curso profascista del Gobierno de Bolivia.

Además de Salinas Aramayo, integraron el gabinete otros jóvenes políticos de izquierda cercanos a Busch. El Ministerio de Agricultura pasó a cargo de Jorge Mercado Rosales, un nacionalista radical, estrechamente vinculado a la Legión de Ex Combatientes. Por primera vez, se formó el Ministerio de Propaganda y Turismo, encabezado por Mario Flores, director del periódico nacionalista *La Noche*, cercano al presidente que vivió la caída en desgracia después del falso motín marofista de noviembre de 1938. El objetivo del nuevo ministerio era imponer la censura a la prensa opositora y llevar a cabo la política de apoyo informativo a las medidas antioligárquicas de la dictadura. Para reforzar la vigilancia policial y el control sobre la oposición, fue designado como nuevo prefecto de La Paz Jorge Sáenz García, un hombre leal a Busch.

Reaccionando a las novedades, el 14 de junio de 1939, los industriales mineros enviaron a Busch un memorando comentando los decretos y las disposiciones promulgadas. Los industriales subrayaban que no eran contrarios al Gobierno y que solamente exigían acordar con ellos toda la política económica. A Busch le alegró recibir ese memorando, ya que buscaba la manera de incluir a los monopolios en el proceso de transformación. Sin embargo, las pasiones estaban demasiado encendidas y el decreto sobre la entrega del 100% de las divisas fue para Busch como un símbolo de fe y un signo de su propio destino. Días después, el 20 de junio, respondió que no habría ninguna modificación al decreto, ni en su totalidad ni en los detalles. Para subrayar la firmeza de su decisión, ordenó publicar en la prensa su respuesta al llamado de los industriales mineros (*La Calle*, 30 de junio de 1939).

La decisión del presidente no duró mucho. Volvió a su método favorito de conciliación con los adversarios. El destituido ministro de Hacienda, Federico Gutiérrez Granier[370] fue designado como gerente del Banco Minero, mientras que sus dirigentes oficiosos, el presidente Paz Estenssoro y el director Guevara Arze, quedaron sin atribuciones reales. Pronto, Busch volvió a designar para la dirección de esa entidad al también exministro Palacios, a quien puso como jefe de los directores del Banco Minero, dejando sin efecto las designaciones anteriores (Klein, 1965: 181).

Busch todavía tenía esperanzas de atraer a los monopolios hacia la causa patriótica del engrandecimiento de Bolivia. Sin tener ideas propias sobre el sistema económico futuro y considerando que los problemas de crecimiento y de desarrollo de la economía nacional debían ser resueltos con el apoyo de los "capitanes de la industria", es decir, bolivianos legendarios que se convirtieron en magnates mundialmente famosos –Patiño y Aramayo–, Busch se dirigió a ellos directamente con un llamado extraordinariamente inocente y romántico, pidiéndoles dedicarse al "renacimiento de Bolivia". El 27 de junio de aquel año, Busch envió una carta a Patiño en la que evocaba los sentimientos patrióticos del boliviano más famoso y lo invitaba a participar en el crecimiento de la economía, su diversificación y su industrialización. Gabriel Gosálvez entregó ese mensaje a Patiño en París.

Busch creía en el patriotismo de Patiño. Le causaron buena impresión y quedaron para siempre en su memoria sus palabras durante la crisis de las conversaciones de paz con Paraguay en 1938, cuando reapareció el peligro de reinicio de las hostilidades. Entonces, en una entrevista a la Associated Press, Patiño declaró estruendosamente a todo el mundo que en caso de volver a estallar la guerra pondría todos sus recursos financieros y económicos a disposición del Gobierno y colaboraría hasta las últimas consecuencias con el régimen de Busch (*El Diario*, 1 de julio de 1938). Esas palabras impresionaron a Busch y le crearon ilusiones acerca de los verdaderos sentimientos y del patriotismo del magnate.

En su carta a Patiño, el presidente le pedía apoyar la reconstrucción del país, caído en un profundo abismo. Lamentó que la politiquería, la demagogia y la lucha de los partidos hubiesen destruido los cimentos morales de la sociedad. Recurrió al patriotismo de Patiño, insistiendo en que el país necesitaba escuelas, hospitales, caminos e industria moderna para impulsar el desarrollo. Además, invitó al magnate a encabezar, con su experiencia y

370 En ese periodo, Gutiérrez Granier formaba parte del círculo de políticos cercanos a los barones del estaño y defendía firmemente sus intereses. La experiencia de trabajo en el Gobierno de Busch y la historia posterior del país lo llevaron al lado de la revolución antioligárquica nacionalista (Almaraz, 1967: 85).

sus capitales, la reconstrucción de Bolivia (Sandoval, 1970: 169-170). Llamó a Patiño a ponerse a su lado en la realización de los ambiciosos planes de construcción de una nueva y próspera Bolivia. Patiño, en su contestación, se quejó de su difícil situación financiera y de la falta de recursos. Aquello desilusionó al mandatario, pues lo consideraba un aliado y el boliviano más grande; se sumió en el desencanto y quedó indignado y deprimido. En el caso del otro barón del estaño, Hochschild, la situación le produjo inicialmente furia y luego depresión sicológica.

En respuesta al decreto, y a pesar de las advertencias de las autoridades, Hochschild cerró sus minas. Hacía mucho tiempo que su empresa recibía una avalancha de ataques por parte de las organizaciones nacionalistas. Hochschild personificaba todos los males y los pecados habidos y por haber. Estaba su origen judío y su especialidad de comerciante intermediario con la que se granjeó su fama de saqueador de los pequeños y de los medianos productores; asimismo, constaban en su contra acusaciones de sobornos a los funcionarios y de uso del dinero del Estado en bien de su empresa. Todavía en 1937, la Legión de Ex Combatientes instó a Busch a romper todos los contratos y a anular las concesiones de Hochschild, ya que su actividad causaba perjuicios al Estado.[371] No se podía haber inventado un mejor blanco para los nacionalistas.

Después de la publicación del decreto, Hochschild realizó una encuesta entre los pequeños y los medianos empresarios mineros con la siguiente pregunta principal: "¿A quién prefiere vender su producto: a la empresa de Hochschild o al Banco Minero?". Las respuestas asestaron un duro golpe al Gobierno, que se presentaba como defensor de ambos grupos empresariales. Apoyándose en esa información y en el ardor de la polémica, Hochschild envió a Busch una mordaz carta en la que decía:

> Los pequeños mineros estaban muy contentos con las empresas rescatadoras y el control vigilante del Banco Minero [...]. Con el decreto se destruye no sólo el crédito de la industria principal, sino el crédito general del país. [...] Éste es un nuevo desconocimiento de la realidad minera. Las empresas vienen mejorando constantemente el nivel de vida de sus trabajadores con mejor alimentación, mejor vivienda y mejor existencia. Casi todos ellos son indígenas. Comparemos la triste choza de paja del indio en los campos con su vivienda en los asientos mineros. Comparemos su alimentación de coca y maíz, con la carne, legumbres y pan en las minas [...] (en Crespo, 1981: 325).

371 ABNB-PR, 1937, "Carta de la LEC a G. Busch del 23 de septiembre de 1937", caja 13, tomo 157.

La carta causó la ira del dictador. Más tarde, se descubrió el fraude en los documentos que Hochschild había presentado al organismo tributario. Estaba clara su infracción al decreto, lo cual era castigado con la pena de muerte. El 3 de julio de 1939, Busch llamó al magnate y después de una conversación muy accidentada ordenó que se lo arrestara, como también a algunos otros empresarios mineros acusados igualmente de violar el decreto (Brienen, 1996: 91). El 5 de julio, Busch reunió a su gabinete de ministros para analizar el caso de Hochschild. En presencia del acusado, planteó una única pregunta:

> ¡Señores ministros! Mi aspiración máxima es liberar al País de su postración social, política y económica. Quiero que Bolivia se deje sentir como un país libre y soberano. Pido la pena de muerte para Mauricio Hochschild, autor principal de la resistencia pasiva [...]. Nada de paños tibios. Dicto mis decretos para que se cumplan (Díaz Machicao, 1957a: 105).

Los ministros presentes, incluido Dionisio Fionini, amigo de Hochschild, ratificaron el veredicto para todos los acusados. La ejecución se fijó para la mañana siguiente. Los ministros pidieron a Busch que indultara a los acusados. Su principal defensor fue Enrique Baldivieso, que entendía el absurdo de las acciones del presidente y el horror de la pena de muerte.[372] Otros ministros, entre ellos Carlos Salinas Aramayo –habitualmente inclinado hacia soluciones radicales–, también trataron de convencerlo de la inutilidad y de la desventaja de ese acto barbárico. Empezaron a recurrir a las embajadas pidiendo a los diplomáticos extranjeros pronunciarse en favor de Hochschild. Amenazaron con posibles acusaciones de antisemitismo y nazismo, con las complicaciones que desembocarían con Argentina, pues Hochschild tenía esa ciudadanía. Llegaron a proponer comprar la vida del magnate en 25 millones de bolivianos (Céspedes, 1956, 206). También los militares, en particular los generales Felipe Rivera y Wálter Méndez, intercedieron por Hochschild. Bajo la presión general, Busch retiró su orden de fusilamiento.

Los acontecimientos dramáticos de ese día terminaron en tragicomedia. Se decidió publicar la orden de pena de muerte para Hochschild y, luego de un día, el decreto de indulto. Hochschild salió en libertad. Fue llamado a conversar con Busch, que en presencia de Baldivieso llamó la atención al magnate “por su conducta impropia” (*ibid.*). Así terminó todo

El fracaso de las conversaciones con Patiño y el ataque forzoso pero fallido contra los monopolios fueron la causa de la profunda crisis anímica de Busch. Empezó a perder interés por los acontecimientos políticos. Su último

372 ABNB-PR, “Diario de Alcides Arguedas”, tomo 9: 31.

acto significativo fue la promulgación, el 3 de agosto de 1939, del decreto preparado por los ministros reformadores sobre la nacionalización del Banco Central, que antes era un banco mixto, es decir, de doble función: comercial y emisor. Después de ese decreto, el Estado se convirtió en su único propietario y se responsabilizó de devolver a sus dueños el valor de las acciones en oro o en divisas (Íñiguez, 1982: 95). El Estado recibió una herramienta eficaz de control sobre el sistema bancario. La reforma del Banco Central fue parte integrante de los esfuerzos de los reformadores para crear en el país un sistema económico independiente.

Fue ese agosto que se hizo patente el estado crítico de la dictadura. Las reformas no mostraban resultados; los objetivos y los medios eran poco claros. El presidente seguía indiferente; estaba decepcionado y bajo una profunda crisis existencial. Dejó de lado los asuntos diarios de la administración del país. Había perdido todo el interés sobre los acontecimientos. Moisés Alcázar describió así esos días del presidente Busch: "Es el 22 de agosto. Hace una semana que el presidente no asiste a su despacho porque sufre el hastío y de una afección dentaria que lo tiene molesto" (en Díaz Machicao, 1957a: 108-109). Busch pasaba todo el tiempo en su casa, con la familia. Vivía muy modestamente en una vivienda propia en el barrio Miraflores. Sus parientes eran sus vecinos, además de ser sus edecanes. Los acontecimientos trágicos de la noche del 23 de agosto transcurrieron entre los más cercanos, sin contar al centinela apostado al lado de la casa. Esa noche, en circunstancias muy confusas, Busch terminó con su vida.[373]

La historia de su suicidio es muy desconcertante. Muchos acusaron a la oligarquía de eliminar a Busch, señalando como principal involucrado al general Carlos Quintanilla. Las sospechas tenían fundamento, pues la rapidez

373 Aquella tarde, en su casa, Busch leyó los informes de los ministros que amenazaban con la catástrofe económica por la guerra próxima en Europa, pues, según decían, Inglaterra podía dejar de comprar el estaño boliviano por la interrupción de las comunicaciones y Estados Unidos podía confiscar los depósitos de oro boliviano que se guardaban en ese país. El mandatario estaba muy deprimido. Su pariente, el coronel Eliodoro Carmona empezó a contar al presidente sobre la deslealtad de los militares y la preparación del golpe. Busch, enervado, sacó la pistola y dijo: "Ya que no se puede confiar en nadie mejor es…". Se disparó y falló. Los edecanes lo tomaron de los brazos. El segundo disparo salió por la ventana. Por esas circunstancias y porque en su casa se escuchaba el tiroteo, muchos sacaron la conclusión sobre un ataque y asesinato a Busch a mano de los conspiradores. Después, Busch se calmó y se sentó en un sillón. Momentos más tarde, sacó la pistola y se disparó en la cabeza. No murió al instante. Todo sucedió entre las cuatro y las cinco de la madrugada. Al empezar el día, falleció (Céspedes, 1956: 207; ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 9: 36).

con la que Quintanilla, a las seis de la mañana, realizó la reunión de gabinete para anunciar su decisión de ocupar el cargo de presidente suscitó desconfianza. El vicepresidente, Baldivieso, fue separado del poder. Lo apoyaron solamente el grupo pronazi Estrella de Hierro y la Federación Estudiantil.[374]

Sin éxito, los izquierdistas trataron de rehacer la alianza de los socialistas y de los militares, apoyando al general Peñaranda. El poder real lo tenía Quintanilla. Baldivieso se vio obligado a conformarse con perderlo, dado que detrás de Quintanilla estaba el Ejército. La izquierda expresó su apoyo a los generales Bernardo Bilbao Rioja y Peñaranda, héroes de la Guerra del Chaco y pretendientes reales de seguir la causa de Toro y de Busch. Quintanilla supo destruir esa alianza, peligrosa para él, expulsando del país a Bilbao Rioja, en octubre de 1939.

Precisamente, Quintanilla fue el que menos podía reclamar el título de heredero de la causa de Busch, ni siquiera de ser su colaborador. Unos días antes de los acontecimientos trágicos, Busch pensaba expulsarlo del país; le repugnaba que el Ejército estuviera encabezado por su adversario (*The Hemisphere*, 9 de febrero de 1940: 3-4). Los oficiales de izquierda y los nacionalistas lanzaron inmediatamente la versión de que Busch había sido asesinado por los agentes de la oligarquía. La acusación no fue probada y, por tanto, se convirtió con el tiempo en uno de los mitos nacionalistas. Es difícil determinar si fue un suicidio o un golpe palaciego. No se puede quitar la razón al historiador boliviano René Zavaleta Mercado: "si se suicidó fue porque, en efecto, su dictadura no podía llegar más allá de donde llegó; si se le asesinó es porque todavía tenían sus enemigos la fuerza como para asesinarlo" (1982: 87).

El callejón sin salida de la dictadura donde quedó el régimen militar-socialista tuvo un desenlace trágico para su protagonista principal, el presidente Busch, y para todo el país, porque volvió el gobierno ilimitado de la rosca. Al llegar al poder, Quintanilla y los partidos tradicionales sacaron de la administración a todos los izquierdistas y los nacionalistas. Prometieron realizar elecciones generales, según la Constitución de 1938, volviendo al gobierno "normal" de los partidos tradicionales. Un día después de la muerte de Busch, el nuevo jefe del Estado recibió a Arguedas, Herzog y Montes –que representaban a los partidos tradicionales– y aseveró que pronto se volvería a "la vida normal".[375] Los decretos de 7 de junio de 1939 fueron abolidos. Allí se marcaba el fin del régimen del socialismo de Estado y el término de todas las reformas de tipo nacionalista.

---

374 La izquierda y los nacionalistas propusieron la fórmula de traspaso del poder a Baldivieso y al general Peñaranda, considerado correligionario y colaborador de Busch (ALP-LML, Miscelánea, caja 11, legajo 1).

375 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 9: 39.

El funeral de Busch fue la expresión sincera de pena y de desesperación popular. Busch se convirtió en un verdadero héroe nacional, cuya imagen inmediatamente fue monopolizada por los nacionalistas y tanto por los partidos como por los movimientos de izquierda. Confusas condolencias de parte de los políticos de la oligarquía, junto con su sincera alegría por el fin de las reformas y de los experimentos socialistas, aumentaron las sospechas de la participación de las fuerzas de derecha en la eliminación de Busch:

> Germán Busch es, sin duda, la figura más rica, en fuerza histórica, de todos los hombres bolivianos de este siglo [XX]. Es el héroe de un ejército que se sintió vencido [...]. Busch es el héroe puro: hasta sus confusiones son las confusiones de la propia Nación [...]. Busch era lo que era Bolivia y cuando todos le decían que no y le señalaban el camino de vivir peor [...], salta al vacío y elige la máxima expansión de la vida que es la muerte propia (Zavaleta Mercado, 1990: 59-61).

Para la izquierda, Busch se convirtió en un mártir de la idea nacional. Hasta la extrema izquierda, incluidos los marxistas, por quienes Busch no sentía simpatía alguna, lo elevaron al rango de ídolo. Los políticos de las corrientes contrarias estaban de acuerdo en la apreciación de la personalidad de Busch y de su régimen. Su enemigo y opositor, Arguedas, escribió:

> Era patriota a su manera y su patriotismo era infantil, ingenuo y de puro aparato. Le conmovían la bandera, una marcha militar, un desfile de soldados. Creía que el único servicio a la Patria era el defenderla en los campos de combate y él se creía más patriota que nadie porque había sido un guerrero [...].[376]

Otro severo crítico, el conocido Gustavo Adolfo Otero, describió a Busch del siguiente modo:

> Este presidente era nada más que una pantera eléctrica, una fiera encadenada. Hombre todo instinto, sin cultura, pero que a base de su biología simplista podía afrontarlo todo. Temerario ante la muerte, desaforado ante la sociedad, audaz entre los hombres, irrespetuosos en todo [...] (Otero, 1977: 212).

La muerte del dictador significó el fin del régimen que durante tres años no pudo crear una estructura orgánica consistente de apoyo sociopolítico para las reformas. Ni David Toro ni Germán Busch supieron crear una base social sólida para apoyarse en la realización de las reformas, lo que condicio-

376 ABNB-PR, "Diario de Alcides Arguedas", tomo 9: 36.

nó la debilidad y las vacilaciones del régimen. El Ejército, algunos partidos y grupos de izquierda, y tanto los nacionalistas como los sindicatos, con diferente grado de participación en la política y el poder, apoyaron al Gobierno. Los intentos de construir un partido oficialista dieron un resultado tan insignificante que no fue posible influir en el desarrollo de los acontecimientos. La muerte política del régimen, después de que Busch dejara esta vida, fue natural y lógica. La falta de un programa claro de reformas que pudiera reclamar el apoyo de la sociedad y unificarla alrededor de objetivos de significado nacional, como los constantes experimentos con inevitables retrocesos y cambios de rumbo e inconsecuencia en su cumplimiento, debilitaron al régimen llevándolo al fracaso.

Conclusiones

La década de 1930 fue, quizá, el periodo más violento de la historia boliviana. La gran depresión, la Guerra del Chaco y el advenimiento del régimen del socialismo de Estado, con su práctica política y social poco común, hicieron de ese decenio uno excepcionalmente importante para entender en profundidad los procesos y los acontecimientos de todo el siglo XX boliviano.

Los cambios ocurridos en la economía nacional en las décadas de 1920 y de 1930 hicieron surgir nuevas clases sociales: las capas medias ligadas al desarrollo urbano, a la infraestructura y a los sectores modernos de la economía, y la clase obrera, relativamente numerosa. Ambos nuevos grupos fueron una parte fuerte de la sociedad que formuló la protesta contra la vieja democracia liberal y aristocrática, la cual limitaba la participación de la clase media en la vida política. El Estado de tipo oligárquico dejó de contentar no solo a las masas populares, sino también a los privilegiados que consideraban las limitaciones de casta del sistema político como un obstáculo principal tanto para el progreso económico como para la formación del Estado nacional que caía, cada vez más, en la dependencia del capital extranjero y de la oligarquía.

En la década de 1920, se produjeron las primeras reformas en la economía y en la vida política de Bolivia. La legislación social del presidente Bautista Saavedra y, luego, los intentos reformistas de Hernando Siles fueron el último embate de la reforma liberal. Antes de la crisis económica de la década de 1930, la sociedad aún no había tomado consciencia de la necesidad de cambios esenciales en el sistema económico. Empero, en la década anterior, aparecieron las primeras señales de la crisis política y moral del Estado liberal. La búsqueda intelectual y los cambios en la estructura social condujeron a la crisis ideológica y destruyeron la hegemonía de la clase dominante. La lucha de las ideas provocó una crisis de mentalidad que aceleraba la búsqueda intelectual. Fue reconsiderado, de modo radical, el problema de la intervención estatal en la economía. Los principios básicos del sistema estatal fueron puestos en tela de juicio, lo que condujo a la corrosión del *establishment* político.

El *leitmotiv* de la revolución ideológica fue una búsqueda de la identidad nacional; una crítica liberal antirracionalista del optimismo positivista

histórico, del eurocentrismo, de la democracia como tal. El indigenismo y el nacionalismo, diferentes matices y tendencias del socialismo antiliberal, desplazaron por completo de la esfera ideológica al liberalismo, que era la base de los partidos tradicionales. La revolución ideológica expresó un deseo enteramente consciente de la élite patriótica intelectual y política de superar el racionalismo positivista, el sentido común del liberalismo preconizado por las leyes objetivas del desarrollo, que no abrían perspectivas para romper el círculo vicioso de atraso y de dependencia del país con la metrópoli mundial capitalista. Solo el irracionalismo, el salto voluntarista, abría una perspectiva ilusoria –o tal vez no– de liberación política y socioeconómica de Bolivia. Los procesos ideológicos prepararon el terreno para una nueva práctica política y social orientada a los valores nacionalistas: la cosmovisión voluntarista e irracionalista. La revolución ideológica fue una víspera del socialismo de Estado, de los regímenes reformistas de la década de 1940 e incluso de la Revolución Nacional de 1952.

La catástrofe de la crisis mundial que destruyó la mayoría de los vínculos económicos y comerciales entre los países y la quiebra de todo el sistema de relaciones financieras internacionales pusieron fin a la época del capitalismo liberal. El Estado liberal, en el periodo de crisis y durante la Guerra del Chaco, mostró su incapacidad completa de llevar adelante una acción socialmente válida, lo que confirmó la pérdida del viejo sistema, que no estaba preparado para la autorreforma. La revolución ideológica y, después, la Guerra del Chaco condujeron a una crisis política y moral del Estado oligárquico. El conflicto bélico llegó a ser un límite a partir del cual tomó su inicio una nueva época en la historia boliviana. La guerra despertó el sentimiento nacional en amplias capas sociales. La derrota de Bolivia dio evidencia del detrimento de su sistema político y económico. De la guerra salió la denominada "generación del Chaco", que se dedicó, con decisión, a reorganizar su propio país. Surgieron, en efecto, nuevos partidos y movimientos antioligárquicos, nacionalistas y socialistas que negaban los principios de funcionamiento de la democracia liberal.

La urbanización intensa, el crecimiento de una nueva clase media y el aumento de su influencia en la sociedad modificaron la correlación de fuerzas políticas, empujando hacia posiciones dominantes a los partidos y a los movimientos que representaban los intereses de los nuevos grupos sociales. La exigencia principal de la sociedad civil, que en ese periodo estaba constituyéndose, fue la construcción de una verdadera democracia en la que viejos y formales principios liberales de libertad individual iban a completarse con la justicia social. La derrota en la Guerra del Chaco y la crisis de la sociedad civil de corte liberal destruyeron las bases del Estado oligárquico, construido bajo el consenso de las capas medias tradicionales y de la élite dominante, de la oligarquía minera y de los terratenientes.

La revolución de los militares-socialistas, en mayo de 1936, denotó la aspiración de cambiar el sistema entero, porque la democracia liberal del viejo tipo aristocrático de casta llegó a ser disfuncional, no permitiendo a las amplias masas populares aprovechar los avances del progreso, la educación y la vida social; y apartando de la participación política a una gran parte de la población, incluyendo a las capas medias. Las ideas de justicia social y de supremacía de los intereses de la nación sobre los derechos y las libertades del individuo penetraron profundamente en la conciencia de los intelectuales y de la nueva generación de hombres políticos. El éxito del comunismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, del fascismo en Italia y del nacional-socialismo en Alemania, al lado del resto del mundo democrático –que se encontraba en una crisis económica más profunda–, hicieron muy atractivas las ideas del Estado antiliberal y antidemocrático. Los militares y sus aliados declararon la construcción de un régimen político-social absolutamente nuevo: el socialismo de Estado. Los proyectos corporativistas de David Toro y su radicalismo en reformar la estructura política del Estado fueron luego reemplazados por el curso más moderado de acciones de Germán Busch.

Los militares-socialistas fueron pioneros: no tenían programa claro y determinado ni doctrina de acción. Lo característico del régimen surgido como resultado de la Revolución de Mayo fue ser prematuro y adelantar los estados de ánimo de la sociedad, su conciencia de la necesidad de cambios y el nivel de radicalismo de las reformas. Realmente, la sociedad aún no estaba preparada para la reforma agraria ni para la nacionalización de los monopolios mineros, menos para un cambio total del sistema político. Realizando la revolución desde arriba, los militares no se apoyaron en la base social orgánica necesaria. Sin el sustento de un movimiento político serio y estructurado, con un programa de acción social y política bien definido, los militares-socialistas emprendieron un experimento lejos de una idea clara sobre el contenido, la forma y el ritmo de las reformas deseadas, lo que predeterminó su limitación, la corrosión y la caída del régimen.

La política económica del socialismo de Estado manifestó una ruptura completa con la tradición liberal de no intervención del Estado en la economía. Esa política, en general, se caracterizó por el estatismo, la estricta regulación estatal y el nacionalismo económico. Entre los logros de los militares corresponde destacar la expropiación de la compañía petrolera norteamericana Standard Oil y la creación de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la nacionalización del Banco Central de Bolivia y las medidas para reforzar el control del Estado en la minería, hasta el decreto histórico de 7 de julio de 1939 sobre la entrega de divisas por los exportadores. Todas esas medidas perseguían

un fin, del cual había clara conciencia: lograr la independencia económica del país. Sin embargo, faltó una consecuencia y conjunción de los pasos realizados, lo que debilitó, en gran medida, y a veces hasta redujo a cero, su eficacia. Los militares-socialistas y los nacionalistas que los inspiraban emprendían todas esas acciones para crear, bajo el control estatal, grandes fuentes de acumulación para diversificar la economía monoexportadora e iniciar la industrialización, lo cual daría como resultado las premisas para el desarrollo del capitalismo nacional.

Los militares-socialistas dieron un impulso poderoso al movimiento de alfabetización de los indios. El trabajo de los maestros indigenistas, que empezó con la creación de las escuelas *ayllu* en Warisata, Vacas y Cliza –la primera en La Paz y las otras dos en Cochabamba–, preparó el terreno para un acercamiento del movimiento reformista de la ciudad con la protesta social de las masas indias, para la futura alianza del nacional-reformismo y el movimiento campesino. Por primera vez en muchos años, el problema agrario llegó a ser uno de los puntos clave del programa de transformaciones de la sociedad.

Como parte de las iniciativas socioeconómicas de los militares-socialistas para transformar el país estaban los experimentos agrarios en Cochabamba y la prohibición legislativa de las formas odiosas de dependencia y de explotación del campesinado. Sería injusto reprocharles por haber sido indecisos en cuanto al problema agrario, dado que las mismas fuerzas sociales, los partidos y los movimientos no elaboraron una clara estrategia de transformaciones en la agricultura. De hecho, Bolivia vivió una amplia discusión sobre las vías de reformarla, con propuestas de lo más variadas, desde la parcelación de la tierra hasta su socialización, tomando como base la comunidad. La razón principal de la inconsecuencia de los reformadores en lo agrario consistió en la dependencia del *establishment* boliviano de las capas medias tradicionales, cuya influencia era importante, a pesar de estar disminuyendo paulatinamente. Las capas medias tradicionales, en su mayoría, estaban directamente relacionadas con el sistema latifundista.

El contenido de la reforma política de los militares-socialistas en Bolivia consistió en crear un Estado fuerte y consolidado, en el que los intereses del individuo, de las clases y de los grupos estuvieran subordinados a las tareas de la construcción nacional. Toro proponía formar un sistema corporativo liquidando por completo a los viejos partidos políticos, al igual que todas las formas liberales y democráticas de la vida social. De lo que se trataba era de estatizar los sindicatos, los partidos, los movimientos sociales, la prensa, etcétera, por medio de una sindicalización total y poniendo en práctica los principios de la democracia funcional, que no fue otra cosa que una forma de Estado totalitario. Busch hizo menos duro ese programa, pero a cambio

propuso una variante autoritaria de gobierno antidemocrático, que lógicamente terminó con el establecimiento de la dictadura. Tanto Toro como Busch no pudieron crear un sistema político orgánico capaz de reemplazar la democracia liberal, lo que condujo a la caída rápida y sin dolor del socialismo de Estado. No obstante las diferencias de visión en lo referido a la reforma, lo común entre Toro y Busch era su aspiración de estatizar la sociedad, burocratizarla, subordinar totalmente al Estado todas las esferas de la vida de la nación y reducir al mínimo la sociedad civil. La inconsecuencia de Busch en la reforma de la estructura estatal condujo al compromiso con las fuerzas liberales democráticas. Como resultado de ese compromiso, fue aprobada la Constitución de 1938.

El socialismo de Estado trazó las direcciones principales de ideología y de política del nacional reformismo boliviano. El mismo partido nacional-reformista, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, surgió en 1940 como producto singular del gobierno militar-socialista, siendo incluso su heredero. Los compañeros de lucha de Toro y de Busch formaron su núcleo. Precisamente, en el periodo del socialismo de Estado, se determinaron la estrategia económica y el programa de las reformas del nacional-reformismo, marcando como su finalidad la industrialización y la diversificación de la economía por medio del reforzamiento del control y del papel administrativo del Estado, lo que desembocaría en el restablecimiento de la soberanía nacional sobre los recursos naturales, centralmente el petróleo y los minerales. El Estado manifestó su decisión de poner al servicio del país las compañías mineras, sin excluir la nacionalización de algunos sectores. El nacionalismo económico y el estatismo se convirtieron en los postulados principales del nacional-reformismo boliviano.

El socialismo de Estado, primero, y el nacional-reformismo, después, aspiraron a crear un sistema sociopolítico nuevo. Con ello, la clase obrera jugaría un papel importante en el futuro sistema social del país. La mayor preocupación de las capas gobernantes era integrar a la clase obrera en la sociedad y en el Estado reformado. Los militares-socialistas y nacional-reformistas proponían un modelo de integración sin incluir a las organizaciones obreras en la sociedad civil, pero estatizando los sindicatos, mientras que la burocracia sindical se convertiría en una parte del bloque dominante y del aparato estatal. Si los militares-socialistas intentaron copiar los métodos corporativistas de los Estados fascistas, los nacional-reformistas llevaron hasta su fin lógico la estatización del partido gobernante y de los sindicatos.

Lo cierto es que el socialismo de Estado puso las bases para constituir en Bolivia un modelo de Estado y de sociedad civil opuesto a los principios del modelo liberal democrático. Ese sistema estatista, a veces parecido al totalitario, se apoyaba en nuevos métodos de movilización social y de administración

de la economía, asignando al Estado un papel muy diferente de aquel que tuvo en el periodo de dominación de los principios liberales-democráticos. Ese nuevo Estado vino a reemplazar a la moribunda democracia excluyente y de casta que se encontraba en una crisis profunda. Al mismo tiempo, junto con un cambio objetivo de las etapas de evolución histórica de la sociedad boliviana, ese nuevo modelo permitió concluir el proceso de consolidación nacional de Bolivia, lo que fue una premisa para formar los mecanismos de modernización permanente, sin la cual sería imposible imaginar la soberanía de la nación, el desarrollo eficaz y la defensa de la cultura nacional.

Hablando acerca del lugar histórico del socialismo de Estado, es notorio que se trató de un punto de quiebre de la época liberal, de una fase estructural del capitalismo mundial en condiciones propias. Surgido de la crisis orgánica nacional, el régimen militar-socialista fue una etapa transitoria en el desarrollo de los procesos sociopolíticos que llevaron hacia la Revolución Nacional de 1952.

El socialismo de Estado, con todas sus extravagancias políticas e ideológicas, fue una forma de búsqueda de consenso entre la burguesía nacional y las nuevas capas medias, por un lado, y la élite tradicional y la rosca, por el otro. El nuevo equilibrio sociopolítico que buscaban los militares-socialistas se fue formando en la redistribución del poder a favor de los nuevos grupos sociales, garantizando una evolución no violenta por vía de la reforma económica y política. El fracaso de la tentativa de lograr cambios paulatinos estuvo condicionado tanto por la resistencia dura de la oligarquía como por la flaqueza de las fuerzas reformistas, que no pudieron formar un bloque orgánico, incluyendo al movimiento obrero y al campesinado indígena. La derrota de los reformistas significó un viraje hacia la confrontación y el conflicto social, hacia la violencia como forma de sociabilidad.

Bibliografía

Abecia Baldivieso, Valentín
1979 *Las relaciones internacionales en la historia de Bolivia.* Tomo 2. La Paz: Los Amigos del Libro y Academia Nacional de Ciencias de Bolivia.

Abecia López, Valentín
1986 *7 políticos bolivianos.* La Paz: Librería Editorial Juventud.

Abadie-Aicardi, Raúl Federico
1966 *Economía y sociedad de Bolivia en el siglo XX. El antiguo régimen.* Montevideo: Ediciones del Río de la Plata.

Alba, Víctor
1967 *Historia del Movimiento Obrero en América Latina.* México: Roble.

Albarracín, Juan
1982 *Sociología indigenal y antropología telurista.* Volumen IV. La Paz: Ediciones Réplica.
1972 *El poder minero en la administración liberal.* La Paz: Akapana.

Albó, Xavier
1979 *Achacachi: medio siglo de lucha campesina.* La Paz: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado.

Alcázar, Moisés
1946 *Crónicas parlamentarias.* La Paz: Fundación Universitaria Simón I. Patiño

Alexander, Robert
1967 *El Movimiento Obrero en América Latina.* México: Roble.
1958 *The Bolivian National Revolution*. Nuevo Brunswick, Nueva Jersey, Estados Unidos de América: Rutgers University Press.

Almaraz Paz, Sergio
1980 *El poder y la caída: El estaño en la historia de Bolivia.* La Paz: Los Amigos del Libro.

1969 *Réquiem para una república.* La Paz: Universidad Mayor de San Andrés.
1967 *El poder y la caída: El estaño en la historia de Bolivia.* Cochabamba: Los Amigos del Libro.

Almaraz Paz, Sergio *et al.*
1958 *Petróleo: soberanía o dependencia.* Cochabamba: Mercurio.

Álvarez, Waldo
1986 *Memorias del primer ministro obrero: historia del movimiento sindical y político boliviano, 1916-1952.* La Paz: Renovación.

Anaya, Ricardo
1952 *Nacionalización de las minas de Bolivia.* Cochabamba: Imprenta Universitaria.

Antezana, Luis
1973 *Historia de los sindicatos campesinos: Un proceso de integración en Bolivia.* La Paz: Consejo Nacional de Reforma Agraria.
1965 *Busch a las FF. AA. de Bolivia.* La Paz: Ediciones distribuidora Cultura.

Antezana, Luis y Hugo Romero
1973 *Historia de los sindicatos campesinos*. La Paz: Departamento de Investigaciones Sociales.

Arcos, Juan
1964 *El sindicalismo en América Latina.* Madrid: Centro de Investigaciones y Acción Social / FERES.

Arguedas, Alcides
1992 *Pueblo enfermo*. La Paz: Librería Editorial Juventud.
1979 *Raza de bronce*. La Paz: Los Amigos del Libro.
1975 *Historia general de Bolivia*. La Paz: Gisbert.

Arriola, Enrique
1994 *Sobre rusos y Rusia. Antología documental.* México, D. F.: Lotería Nacional para la Asistencia Pública / Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Arze, José Antonio
1981 *Escritos literarios. (Comentarios y semblanzas).* La Paz: Roalve. Disponible en: http://www.andesacd.org/wp-content/uploads/2011/03/Escritos-Literarios-José-Antonio-Arze-1091kb.pdf (fecha de consulta: 19 de octubre de 2018).

1980 *Polémica sobre el marxismo y otros ensayos afines. Ensayos filosóficos.* José Roberto Arze (prólogo y notas). La Paz: Roalve.
1978 *Bosquejo socio dialéctico de la historia de Bolivia.* La Paz: Camarlinghi.
1963 *Sociología marxista.* Oruro: Universidad Técnica de Oruro.

Arze, José Roberto
1968 *Ensayo de una bibliografía del doctor José Antonio Arze.* Cochabamba: Universitaria.

Arze Aguirre, René
1995 *Carlos Salinas Aramayo: un destino inconcluso, 1901-1944.* La Paz: Talleres de Artes Gráficas Latina.
1988 *Guerra y conflictos sociales. El caso rural boliviano durante el conflicto del Chaco.* La Paz: CERES.

Arze Quiroga, Eduardo
1952 *Documentos para una historia de la guerra del Chaco, seleccionados del Archivo de Daniel Salamanca.* Volúmenes 1-3. La Paz: Don Bosco.

Baciu, Stefan
1987 *Tristán Marof de cuerpo entero.* La Paz: Ediciones Isla.

Ballivián Calderón, René
1930 *Spengler: algunas de sus ideas aplicadas a la realidad política de América Hispana*. Santiago de Chile: Imprenta Sudamericana.

Baptista Gumucio, Mariano
1984 *Atrevámonos a ser bolivianos. Vida y epistolario de Carlos Medinaceli.* La Paz: Los Amigos del Libro.
1983 *Yo fui el orgullo. Vida y pensamiento de Franz Tamayo.* La Paz: Los Amigos del Libro.
1978 *Historia contemporánea de Bolivia. 1930-1978.* La Paz: Gisbert.

Barcelli, Agustín
1957 *Medio siglo de luchas sindicales revolucionarias en Bolivia.* La Paz: Editorial del Estado.

Barragán, Rossana
2006 *Asambleas Constituyentes. Ciudadanía y elecciones, convenciones y debate (1825-1971).* La Paz: Muela del Diablo.

Belmonte, Elías
1994 *RADEPA: sombras y refulgencias del pasado*. La Paz: Ale [impresor].

Benavides, Julio
1955 *Historia bancaria de Bolivia.* La Paz: Arrieta.

Blasier, Cole
1976 *The Hovering Giant. U.S. Responses to Revolutionary Change in Latin America (1910-1985).* Pensilvania, Estados Unidos de América: Pittsburgh University Press.
1972 "The United States, Germany and the Bolivian revolutionaries (1941-1946)". En: *Hispanic American Historical Review*, volumen 52, número 1, febrero.

Bonifaz, Miguel
1953 *Legislación agrario-indigenal.* Cochabamba: Imprenta Universitaria.

Boullón Barreto, Gustavo
1936 *Bolivia República Socialista.* La Paz: Librería Editorial Juventud.

Brienen, Marten
1996 *The Liberal* Crisis *and Military Socialism in Bolivia. Bolivian History from 1930 to 1939.* Leiden, Holanda.

Dunkerley, James; Victor Bulmer-Thomas y David Rockefeller Center for Latin American Studies (eds.)
1999 "United States and Latin America: the new agenda". Londres: Institute of Latin American Studies / University of London and David Rockefeller Center for Latin American Studies / Harvard University.

Caballero, Manuel
1986 *Latin America and the Komintern. 1919-1943.* Cambridge, Reino Unido: University Cambridge Press.

Campero, Fernando
1999 *Bolivia en el siglo XX. La formación de la Bolivia contemporánea.* La Paz: Harvard Club de Bolivia.

Canelas, Amado
1966 *Mito y realidad de la reforma agraria en Bolivia.* La Paz: Los Amigos del Libro.

Carmagnani, Marcello
1984 *Estado y sociedad en América Latina. 1850-1930.* México: Grijalbo.

Carter, William
1965 *Aymara Communities and the Bolivian Agrarian Reform*. Gainesville, Estados Unidos de América: University of Florida Press.

Carrasco, Benigno
1961 *Hernando Siles.* La Paz: Editorial del Estado.

Céspedes, Augusto
1956 *El dictador suicida. 40 años de historia de Bolivia.* Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

Chen Charpentier, Jorge
1972 "El reformismo militar boliviano entre 1935 y 1952 y su interrelación con el MNR, 1942-1952". Tesis de licenciatura en Relaciones Internacionales, Colegio de México.

Chirinos Soto, Enrique
1965 *Drama, riesgo y futuro de Bolivia.* Lima: Ediciones Perú.

Choque, Roberto
1986 *La masacre de Jesús de Machaca.* Bolivia: Ediciones Chitakolla.

Codovilla, Vittorio
1970 *Obras escogidas*. [En ruso.] Moscú, Rusia: Politizdat.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
1958 *Desarrollo económico de Bolivia. Análisis y proyecciones del desarrollo económico*. Volumen 4. México D. F.: CEPAL.

Condarco Morales, Ramiro
1989 *Franz Tamayo. El Pensador.* La Paz: Editorial e imprenta San José.

Cornejo, Alberto
1949 *Programas políticos de Bolivia.* Cochabamba: Imprenta Universitaria.

Crespo Rodas, Alberto
1985 *Hernando Siles. El poder y su angustia.* La Paz: Siglo.

Crespo, Alfonso
1981 *Los Aramayo de Chichas. Tres generaciones de mineros bolivianos.* Barcelona: Edición Blume.

Dandler, Jorge
1983 *Sindicalismo campesino en Bolivia. Cambios estructurales en Ucureña. 1935-1952.* México: Instituto Indigenista Interamericano.

De la Cueva, José María
1983 *Bolivia: imperialismo y oligarquía*. La Paz: Roalva.

Delgado, Trifonio
1984 *100 años de lucha obrera en Bolivia.* La Paz: Ediciones Isla.

Demelás, Marie-Danielle
1980 *Nationalisme sans nation ? La Bolivie aux XIXe-XXe siècles*. Colección "Amérique latine, paysibériques". París, Francia: Editions du C.N.R.S.

Di Natale, Remo
1953 *Revolución agraria en Bolivia.* Cochabamba: Imprenta Universitaria.

Díaz Machicao, Porfirio
1958 *Historia de Bolivia. Peñaranda, 1940-1943.* La Paz: Librería Editorial Juventud.
1957a *Historia de Bolivia. Toro, Busch, Quintanilla, 1936-1940.* La Paz: Librería Editorial Juventud.
1957b *Historia de Bolivia. Guzmán, Siles, Blanco Galindo. 1925-1931.* La Paz: Librería Editorial Juventud.
1955 *Historia de Bolivia. Salamanca, la guerra del Chaco, Tejada Sorzano, 1931-1936.* La Paz: Librería Editorial Juventud.

Diez de Medina, Fernando
1948 *Pachakuti y otras páginas polémicas.* La Paz: s. e.

Drake, Paul
1989 *The Money Doctor in the Andes.* Durham, Estados Unidos de América / Londres, Inglaterra: Duke University Press.

Dunkerley, James
1984 *Rebelion in the Veins: Political struggle in Bolivia. 1952-1982.* Londres, Inglaterra: Verso.

Economic Commission for Latin America (ECLA)
1951 *Development of agriculture in Bolivia. 4th session, Mexico, 28 may.* Nueva York, Estados Unidos de América: ECLA.

Elío, Tomás Guilermo
1988 *La paz del Chaco: una decisión política.* La Paz: Los Amigos del Libro.

Elío, Tomás Manuel
1970 "*La guerra y la paz del Chaco": artículos en El Diario (noviembre y diciembre de 1959), Carta del excanciller interno Doctor Manuel Carrasco a Manuel Elío.* La Paz: Talleres Gráficos bolivianos.

Escobari Cusicanqui, Jorge
1975 *Historia diplomática de Bolivia: política internacional*. La Paz: Casa Municipal de la Cultura Franz Tamayo.

Fals Borda, Orlando
1968 *Las revoluciones inconclusas de América Latina. 1809-1968.* México: Siglo XXI.

Ferrufino Llach, Clara
1987 *Tamayo y el hombre boliviano.* La Paz: Papiro.

Finot, Enrique
1946 *Nueva historia de Bolivia.* Buenos Aires: Ayacucho.
1943 *Historia de la literatura boliviana.* México D. F.: Librería de Porrúa Hermanos y Compañía.

Fionini Banzer, Dionisio
1991 *Misión cumplida.* Santa Cruz de la Sierra: Sirena.

Francovich, Guillermo
1988 *Variedad.* La Paz: Librería Editorial Juventud.
1985 *El pensamiento boliviano en el siglo XX.* La Paz: Los Amigos del Libro.

Frontaura, Manuel
1974 *La revolución boliviana.* La Paz: Los Amigos del Libro.

Gallego, Ferran
1992 *Ejército, nacionalismo y reformismo en América Latina: la gestión de Germán Busch en Bolivia.* Barcelona: Promociones Publicaciones Universitarias.
1991 *Los orígenes del reformismo militar en América Latina: la gestión de David Toro en Bolivia.* Barcelona: Promociones Publicaciones Universitarias.
1988 "Un caso del populismo militar latinoamericano: la gestión de David Toro en Bolivia (1936-1937)". En: *Ibero-Amerikanisches Archivos.* Volumen 14, número 4.

Gallo, Carmenza
1991 *Taxes and State Power: Political Instability in Bolivia. 1900-1950.* Filadelfia, Estados Unidos de América: Temple University Press.

Geddes, Charles
1972 *Patiño the Tin King*. Londres, Inglaterra: R. Hale.

Godio, Julio
1983 *Historia del Movimiento Obrero Latinoamericano.* Tomo 2: Nacionalismo y comunismo. 1918-1930. Caracas, Venezuela: Nueva Sociedad.
1980 *Historia del Movimiento Obrero Latinoamericano.* Tomo 1: "Anarquistas y socialistas. 1850-1918". Texas, Estados Unidos de América: Nueva Sociedad.

Gómez, Alfredo
1980 *Anarquismo y anarcosindicalismo en América Latina: Colombia, Brasil, Argentina, México.* Barcelona: Ibérica de Ediciones y Publicaciones.

Gómez D'Angelo, Walter
1978 *La minería en el desarrollo económico de Bolivia, 1900-1920.* La Paz: Los Amigos del Libro.

Gómez, Eugenio
1975 *Bautista Saavedra.* La Paz: Biblioteca del Sesquicentenario de la República.

González Casanova, Pablo (coord.)
1982 *América Latina: historia de medio siglo.* Volumen 1: "América del Sur". México: Siglo XXI / Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.

Gueorgii, Sinani (comp.)
1934 *Problemi Yuzhnoi y Karaibskoi Ameriki* [Los problemas de América del Sur y del Caribe]. Moscú, Rusia: Komakademia.

Heath, Dwight; Erasmus Charles y Hans Beuchler
1969 *Land Reform and Social Revolution in Bolivia.* Nueva York: Frederick A. Praeger.

Heydt-Coca, Magda
1982 *Die Bolivianische Revolution von 1952. Eine Analyse unter besonderer Berücksichtigung des Agrarsektors*. Colonia, Alemania: Pahl-Rugenstein.

Hillman, John
1990 "Bolivia and British Tin Policy". En: *Journal of Latin American Studies*, volumen 22/2. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.
1988 "Bolivia and the International Tin Cartel, 1931-1941". En: *Journal of Latin American Studies,* volumen 20/1. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.
1984 "The Emergence of the Tin Industry in Bolivia". En: *Journal of Latin American Studies*, volumen 16. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press

Hinojosa, Roberto
1984 *Historia del Movimiento Obrero en América Latina.* México: Ediciones Era.
1944 *La revolución de Villazón.* La Paz: Universal.

Hobson, Asher
1931 *Economic conditions in Bolivia.* Londres, Inglaterra: Department of Overseas Trade.

Íñiguez, Elizabeth
1980 *Apuntes históricos del Banco Central de Bolivia e instituciones conexas.* La Paz: Don Bosco.

Irurozqui, Marta
2000 *"A bala, piedra y palo". La construcción de la ciudadanía política en Bolivia. 1826-1952.* Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla.
1994 *La armonía de las desigualdades. Élites y conflictos de poder en Bolivia, 1880-1920.* Cusco: Centro Bartolomé de las Casas.

Jeffs, Leonardo
2005 *Encuentros y desencuentros: Chile y Bolivia, 1928-1935*. Santiago de Chile: Ediciones Peña Andina.

The Joint Bolivian-United States Labor Commission
1943 "Labour Problems in Bolivia". Reporte. Montreal.

Justo, Liborio
1967 *Bolivia: la revolución derrotada.* Cochabamba: s. e.

Kaluzhskaya, Tamara
1979 *Bolivia. Las tendencias del desarrollo económico y social.* [En ruso.] Moscú, Rusia: Nauka.

Katz, Friedrich
1968 *Hitler sobre América Latina. El fascismo alemán en Latinoamérica. 1933-1943. Investigaciones históricas.* México: Fondo de Cultura.

Kindleberger, Charles
1986 *The World in Depression.1929-39.* Berkeley, California, Estados Unidos de América: Berkeley University Press.

Klein, Herbert
1993 *Haciendas and Ayllus, Rural Society in the Bolivian Andes in the Eighteenth and Nineteenth Centuries.* Stanford, California, Estados Unidos de América: Stanford University Press.
1988 *Historia general de Bolivia.* La Paz: Librería Editorial Juventud.
1982 *Bolivia: The Evolution of a Multi-Ethnic Society.* Nueva York, Estados Unidos de América: Oxford University Press.
1972 "David Toro and the establishment of 'Military Socialist' in Bolivia". En: *Hispanic American Historical Review*, volumen 14, número 1.

1971 *Parties and Political Change in Bolivia, 1880-1952.* Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.
1968 *Orígenes de la Revolución Nacional Boliviana, la crisis de la generación del Chaco.* La Paz: Librería Editorial Juventud.
1965 "Germán Busch and the Era of 'Military Socialist' in Bolivia". En: *Hispanic American Historical Review*, volumen 47, número 2.

Klein, Herbert y José Alejandro Peres-Cajías
2004 "Bolivian Oil and Natural Gas Under State and Private Control, 1920-2000". En: *Bolivian Studies Journal*, número 20. 141-164.

Knudson, Jerry
1986 *Bolivia: Press and Revolution, 1932-1964.* Lanham Maryland, Estados Unidos de América: University Press of America.
1982 "'La Calle': Un precursor de la Revolución nacional Boliviana". En: *Historia boliviana*, número 1/2. Cochabamba. 111-120.

Korableva, Liudmila
2009 "La Liga de las Naciones y la Guerra del Chaco: 1932-1935". En: *Estudios avanzados*, número II. 29-48. Disponible en: https://es.scribd.com/document/220700402/Estudios-Avanzados-11-03-Korableva (fecha de consulta: 30 de octubre de 2018).

Lehman, Kenneth
1999 *Bolivia and the United States: a Limited Partnership.* Athens, Georgia, Estados Unidos de América: University of Georgia Press.

Lofstrom, William
1968 "Attitudes of an Industrial Pressure Group in Latin America: The 'Asociación de Industriales Mineros de Bolivia' 1925-1935". En: *Latin American Studies Program.* Dessertation Series, número 9. Ithaca, Nueva York, Estados Unidos de América: Cornell University.

López Rivas, Eduardo
1955 *Esquema de historia económica de Bolivia.* Oruro: Universidad Técnica de Oruro, Departamento de Extensión Cultural.

Lora, Guillermo
1987a *Historia de los partidos políticos de Bolivia.* La Paz: La Colmena.
1987b ¿Fue revolucionario Carlos Montenegro? La Paz: Futuro.
1978 *Historia del P.O.R. Contribución a la historia política de Bolivia.* Colección histórica y documentos. Tomo 1. La Paz: Ediciones Isla.
1970 *Documentos políticos de Bolivia.* La Paz: Los Amigos del Libro.

1969 *Historia del movimiento obrero boliviano (1933-1952).* Volumen 2. La Paz: Los Amigos del Libro.

Lorini, Irma
2006 *El nacionalismo en Bolivia de la pre y postguerra del Chaco (1910-1945).* La Paz: Plural editores.
1994 *El movimiento socialista "embrionario" en Bolivia, 1920-1939: entre nuevas ideas y residuos de la sociedad tradicional.* La Paz: Los Amigos del Libro.

Malloy, James (editor)
1977 *Authoritarianism and Corporatism in Latin America.* Pittsburg, Estados Unidos de América: University of Pittsburg Press.
1970 *Bolivia: the uncompleted revolution. Pitt Latin American studies*. Pittsburgh, Estados Unidos de América: University of Pittsburg Press.

Mamani Condori, Carlos
1991 *Taraqu. 1866-1835. Masacre, guerra y "Renovación" de la biografía de Eduardo L. Nina Qhispi.* La Paz: Ediciones Aruwiyri.

Mariaca, Enrique
1966 *Mito y realidad del petróleo boliviano.* La Paz: Los Amigos del Libro.

Marof, Tristán (seud.)
1961 *Ensayos y crítica. Revoluciones bolivianas. Guerras internacionales y escritos.* La Paz: Librería Editorial Juventud.
1934 *La tragedia del Altiplano.* Buenos Aires: Editorial Claridad.
1926 *La justicia del Inca.* Bruselas, Bélgica: Edición Latino Americana.
1922 *El ingenuo continente americano.* Barcelona: Maucci.

Marsh, Margaret
1928 *The bankers in Bolivia. A study in American foreign investment.* Nueva York, Estados Unidos de América: Vanguard Press.

Mazacotte, Alejandro
1984 *Ensayo sobre la Guerra del Chaco.* Tomo II. Serie "Historia", número 3. Asunción, Paraguay: Ediciones Mediterráneo.

McBridge, George
1921 *The agrarian Indian communities of highland of Bolivia.* Nueva York, Estados Unidos de América: Oxford University Press.

McEwen, Williams
1975 *Changing rural society. A study of communities in Bolivia.* Nueva York, Estados Unidos de América: Oxford University Press.

Medinaceli, Carlos
1969 *Estudios críticos.* La Paz: Los Amigos del Libro.

Medinaceli, Ximena
1989 *Alterando la rutina: mujeres en las ciudades de Bolivia. 1920-1930.* La Paz: CIDEM.

Melgar Bao, Ricardo
1988 *El Movimiento obrero latinoamericano.* Madrid: Alianza.

Mendoza, Jaime*
1978 *El Macizo Boliviano.* La Paz: Puerta del Sol. [1935]
1941 "El advenimiento de la nacionalidad boliviana". En: *Revista del Instituto de Sociología Boliviana*, número 1. Sucre.

Mesa, Carlos; José Mesa y Teresa Gisbert
1998 *Historia de Bolivia.* La Paz: Gisbert.

Mitchell, Christopher
1977 *The Legacy of Populism in Bolivia. From the MNR to Military Rule.* Nueva York, Estado Unidos de América: Praeger.

Mitre, Antonio
2002 *El dilema del Centauro. Ensayos de teoría de la historia y pensamiento latinoamericano.* Santiago de Chile: LOM ediciones / Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
1993 *Bajo el cielo de estaño: fulgor y ocaso del metal en Bolivia.* La Paz: ILDIS.

Montes, Fernando
1984 *Máscara de piedra. Simbolismo y personalidad aymara en la historia.* La Paz: Quipus / Comisión Episcopal de Educación.

Montenegro, Carlos
1979a *Nacionalismo y coloniaje.* La Paz: Librería Editorial Juventud.
1979b *El desconocido.* Colección Clásicos Bolivianos Contemporáneos. La Paz: *Última Hora*.
1938. *Frente al derecho de Estado el oro de la Standard Oil.* La Paz: Trabajo.

* Ambas obras de Jaime Mendoza también aparecen en la obra número 37 de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia (BBB), "Historias y geografías" (La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2016).

Navarro, Gustavo
1918 *Los cívicos. Novela de lucha y de dolor.* La Paz: Arnó Hermanos.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
1958 *Desarrollo Económico de Bolivia. Análisis y proyecciones del desarrollo económico.* Volumen 4. México: CEPAL.

Nunn, Frederick
1983 *Yesterday's soldiers. European military professionalism in South America, 1890-1940.* Nebraska, Estados Unidos de América: University of Nebraska Press.

Otero, Gustavo Adolfo
1992 *Figuras de la cultura boliviana.* Tomo III. La Paz: Librería Editorial Juventud.
1977 *Memorias de Gustavo Adolfo Otero (Nolo Beaz)*. La Paz: Litografías e Imprentas Unidas.

Pacheco, Diego
1992 *El indianismo y los indios contemporáneos en Bolivia.* La Paz: Hisbol / MUSEF.

Palenque, Jorge
1933 "Análisis numérico del presupuesto nacional". En: *Estadística Boliviana. Primera parte. Años 1911-1931*. La Paz: Talleres Gráficos Renacimiento.

Pardo, Rosa
1995 *¡Con Franco hacia el Imperio! La política exterior española en América Latina. 1939-1945*. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Peñaloza, Luis
1987 *Nueva historia económica de Bolivia. Bolivia en el siglo XX.* Volumen 3. La Paz: Los Amigos del Libro
1963 *Historia del Movimiento Nacionalista Revolucionario, 1941-1952.* La Paz: Librería Editorial Juventud.

Platt, Tristán
1982 *Estado boliviano y ayllu andino: tierra y tributo en el norte de Potosí.* Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos. [Obra número 43 de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia (BBB), "Historia y geografías". La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Pérez, Elizardo
1962 *Warisata. La escuela-ayllu.* La Paz: Burillo.

Ponce, Jaime; Thomas Shanley y Antonio Cisneros

1968 *Breve historia del sindicalismo boliviano.* La Paz: Instituto Boliviano de Estudios y Acción Social.

Prudencio Bustillo, Ignacio

1923 *Ensayo de una Filosofía Jurídica.* Sucre.

Puhle, Hans Jürgen

1972 *Tradición y política de reformas en Bolivia: economía, sociedad y política en un país sudamericano en desarrollo.* Santiago de Chile: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales.

Querejazu Calvo, Roberto

1975 *Masamaclay: historia política, diplomática y militar de la guerra del Chaco.* Cochabamba-La Paz: Los Amigos del Libro.

Ramos, Pablo

1979 *Democracia boliviana: sus defensores y sus enemigos.* La Paz: Librería Editorial Juventud.

Ravines, Eudocio

1952 *La gran estafa. La penetración del Kremlin en Iberoamérica*. México D. F.: Libros y Revistas S. A.

Reinaga, Fausto

1990 *Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes, siglos XVIII al XX.* Lima: IEP.

1956 *Franz Tamayo y la revolución boliviana.* La Paz: Casegural.

Rivera Cusicanqui, Silvia

1984 *"Oprimidos pero no vencidos". Luchas del campesinado aymara-qhechwa, 1900-1980.* La Paz. HISBOL / CSUTCB.

Rodríguez García, Huascar

2010 *La choledad antiestatal. El anarcosindicalismo en el movimiento obrero boliviano, 1912-1965.* Buenos Aires: Anarres.

2000 *Los perdedores de la historia. Un estado del arte acerca del anarquismo en Bolivia durante la primera mitad del siglo XIX.* Cochabamba: Ediciones Ex Nihilo.

Rodríguez Ostria, Gustavo

1991 *El Socavón y el sindicato. Ensayos históricos sobre los trabajadores mineros. Siglo XIX-XX.* La Paz: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales.

Saavedra, Bautista
1971 *El Ayllu. Estudios sociológicos.* La Paz: Librería Editorial Juventud.

Saavedra, Bautista y Edmundo Vásquez
1936 *Manifiesto y programa: dónde estamos y a dónde debemos ir.* La Paz: s. e.

Salamanca, Daniel
1976 *Mensajes y memorias póstumas*. Volumen 3. Cochabamba: Canelas.

1951-1974 *Documentos para una historia de la Guerra del Chaco*. Volúmenes 1-4. La Paz: Don Bosco.

Salamanca La Fuente, Rodolfo
1947 "Vigencia del Arguedismo en Bolivia". En: *Kollasuyo*, año IX, número 65, enero-marzo. 42-51.

Salazar Mostajo, Carlos
1988 "El socialismo olvidado: el otro trotskismo en Bolivia". Entrevista a Carlos Salazar Mostajo. En: *Autodeterminación. Análisis histórico-político y teoría social*, número 5, mayo-junio. La Paz. 143-160.

Sanabria, Hernando
1977 *Fuentes para la historia de Andrés Ibáñez.* Santa Cruz de la Sierra: UBGRM.

Sandor, Steven
2009 *Bolivia's Radical Tradition, Permanent Revolution in The Andes*. Tucson, Estados Unidos de América: The University of Arizona Press.

Sandoval, Isaac
1970 *Nacionalismo en Bolivia: ensayo histórico-político.* La Paz: Burillo.

Saracho Calderón, Julio
1980 *Una ráfaga en la historia de la Guerra del Chaco*. Potosí: Empresa Editora Urquizo.

Schelchkov, Andrey
1996 "Comentarios a la historia de la fundación del Partido Comunista de Bolivia". En: *América Latina*, número 5. 39-55.

Schelchkov, Andrey y Pablo Stefanoni (coords.)
2016 *Historia de las izquierdas bolivianas. Archivos y documentos (1920-1940).* La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, Centro de Investigaciones Sociales (CIS).

Schoop, Wolfgang
1981 *Ciudades bolivianas.* La Paz-Cochabamba: Los Amigos del Libro.

Schurz William Lytle
1921 *Bolivia, a commercial and industrial handbook*. Washington, Estados Unidos de América: Goverment Printing Office.

Setaro, Ricardo
1936 *Secretos de Estado Mayor.* Buenos Aires: Editorial Claridad.

Sinani, Gueorgii (comp.)
1934 *Los problemas de América del Sur y del Caribe*. [En ruso.] Moscú, Rusia: Komakadem.

Stefanoni, Pablo
2015 *Los inconformistas del Centenario. Intelectuales, socialismo y nación en una Bolivia en crisis (1925-1939).* La Paz: Plural editores.

Taborga, Alberto
1956 *Boquerón. Diario de compaña.* La Paz: Canata.

Tamayo, Franz
1991 *Creación de la pedagogía nacional.* La Paz: Librería Editorial Juventud.

Thorp, Rosemary
1988 *América Latina en los años treinta. El papel de la periferia en la crisis mundial.* México: Fondo de Cultura Económica.

Toro, David
1941 *Mi actuación en la Guerra del Chaco.* La Paz: Renacimiento.

Ulianova, Olga
2008 "Develando un mito: emisarios de la Internacional Comunista en Chile". En: *Historia*, número 41, volumen 1. Santiago de Chile. 99-164

Urquidi, Arturo
1966 *Federalismo en América y la reforma agraria boliviana.* Cochabamba: Los Amigos del Libro.

Vaca Díez, Hernando
1998 *Pensamiento constitucional boliviano. 1826-1995.* La Paz: Fondo Editorial de los Diputados.

Valencia Vega, Alipio
1987a *Historia política de Bolivia.* Volumen 6. La Paz: Librería Editorial Juventud.

1987b *Historia política de Bolivia.* Volumen 4. La Paz: Librería Editorial Juventud.
1987c *Historia política de Bolivia.* Volumen 7. La Paz: Librería Editorial Juventud.
1973 *El pensamiento político en Bolivia.* La Paz: Librería Editorial Juventud.

Whitehead, Neil
1981 "Miners as Voters: The Electoral Process in Bolivia's Mining Camps". En: *Journal of Latin American Studies*, volumen 13, número 2. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.

Zavaleta Mercado, René
1990 *La formación de la conciencia nacional.* La Paz: Los Amigos del Libro.
1986 *Lo nacional-popular en Bolivia.* México D. F.: Siglo Veintiuno Editores.
1983 *Bolivia, hoy*. René Zabaleta Mercado, comp. México D. F.: Siglo Ventiuno Editores.
1978 "El proletariado minero en Bolivia". En: *Revista Mexicana de Sociología*, volumen 40, número 2, abril-junio. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Zook David
1962 *La conducción de la Guerra del Chaco.* Buenos Aires: Lito.

Documentos oficiales

República de Bolivia
1973 *Censo demográfico 1950*. La Paz: Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda y Estadística.
1952 *Libro blanco de la independencia económica de Bolivia*. La Paz: Subsecretaría de Prensa, Informaciones y Cultura, Departamento de Publicaciones.
1949 *Comercio exterior. Anuario*. La Paz.
1941 *Legislación boliviana del trabajo y de la previsión social.* La Paz.
1938a *Anuario administrativo de 1938*. La Paz.
1938b *Redactor de la Convención Nacional de 1938*. Tomos 1-3. La Paz.
1937a *Anuario administrativo de 1937*. Volúmenes 1-3. La Paz.
1937b *Anuario administrativo de 1936*. Volumen 1. La Paz.
1903 *Sinopsis estadística y geográfica de la República de Bolivia*. Volumen 2. La Paz: Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica de Bolivia.

Medios impresos

Crítica, La Paz, 1927.
El Debate, La Paz, 1937.
El Diario, La Paz, 1935-1939.
El Socialista, Sucre. 1927.
Kollasuyo, La Paz, 1946.
La Calle, La Paz, 1936-1939.
La Crónica, La Paz, 1937-1938.
La Jornada, La Paz, 1937.
La Noche, La Paz, 1938-1939.
La Razón. La Paz, 1936-1938.
The Hemisphere, Nueva York, 1940-1941.
Última Hora, La Paz, 1935-1939.

Archivos

Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia
1936-1939 Documentos.

Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia - Alemania
1937-1941 Documentos.

Archivo Nacional de Bolivia - Presidencia de Gobierno
1936-1938 Cajas 12-17 (Sucre Archivo del Ministerio de Relaciones exteriores y Culto de Bolivia. Ministerio del Interior.

Archivo Nacional - Presidencia de Bolivia (Sucre)
1936-1938 Cajas 12-17.

Archivo de La Paz
1936-1939 Miscelánea. Gavetas 25-27.

Archivo de La Paz - Fondo León M. Loza
1937-1939 Miscelánea. Cajas 2-11. Gavetas 25-32.

Archivo de la Internacional Comunista (Komintern), en Archivo Estatal Ruso de Historia Político-Social (Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv sotsial'no-politicheskoi istorii - RGASPI)
Varios años Fondos 495-534.

Archivo Histórico Genaro Estrada-Secretariado de Relaciones Exteriores de México
1927-1939

Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) (Sucre)
1936-1939 "Diario de Alcides Arguedas". Tomos 6, 7 y 8. Documentos. Cajas 12-17.

Foreign Relations of United States (FRUS)
1935-1942 *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1920*. Volumen I. Washington: United States Government Printing Office. Disponible en: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1920v01/ (fecha de consulta: 5 de octubre de 2018).

Sobre el autor

Andrey Schelchkov estudió en la Universidad de Moscú (Lomonosov) y obtuvo su doctorado en la Academia de Ciencias de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es investigador titular del Instituto Universal de la Academia de Ciencias de Rusia. Sus líneas de investigación son la historia boliviana de los siglos XIX y XX, la Internacional Comunista y América Latina. Es especialista en historia de Bolivia y de Chile.

Desde 1999, se desempeña como editor de la revista *Almanaque histórico latinoamericano*, publicación científica de la Academia de Ciencias de Rusia. En *Revista de Indias* ha publicado "'Todos somos iguales'. La Revolución de la Igualdad en Santa Cruz, Bolivia. 1876-1877" (2016). Sus libros han sido editados en Rusia y en Latinoamérica. Entre sus obras se destacan *La utopía social conservadora en Bolivia. El gobierno de Manuel Isidoro Belzu. 1848-1855* (2011); *Mundos posibles. El primer socialismo en Europa y América Latina* (2014, en coautoría); y *La utopía social en América Latina* (2016). Con el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia ha trabajado los libros *La palabra "socialismo" en Bolivia, siglo XIX* (2016) e *Historia de las izquierdas bolivianas. Archivos y documentos (1920-1940)* (2017), este último en coordinación con Pablo Stefanoni.



Este libro se terminó de imprimir
en diciembre de 2018, en los
talleres de Editora Presencia
en La Paz (Bolivia).

Socialistas-militares: el laberinto boliviano de la experimentación social (1936-1939) presenta el curso de la lucha política e ideológica en Bolivia después de la Guerra del Chaco. Se concentra en la exposición y en el análisis de los acontecimientos y de los procesos sociales durante el régimen militar-socialista, poniendo mayor énfasis en la formación de nuevos partidos y movimientos políticos, en esa época, en el país. En ese marco, cobran mayor relieve la búsqueda de nuevas formas de organización del Estado y de la sociedad civil, como las reformas económicas, los experimentos en los sectores agrario y educativo, y los cambios tanto en el aparato estatal como en la estructura hegemónica de la sociedad boliviana. El análisis de esos procesos, en conjunto, revela el significado histórico del socialismo de Estado en la historia de Bolivia y, también, de Latinoamérica.

En este volumen, el investigador Andrey Schelchkov, basándose en una amplia revisión de fuentes documentales primarias y en estudios de otros historiadores, analiza el desarrollo social y político de la época liberal en Bolivia, así como las consecuencias de la crisis mundial de la década de 1930 en la estructura socioeconómica del país, su impacto en el Estado oligárquico e incluso los cambios en la esfera ideológica.






ISBN: 978-99974-77-51-4